-TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA-

-SALA LABORAL-

Magistrado Ponente: DR LUIS ALFREDO BARON CORREDOR

Bogotá D.C. diecisiete (17) de mayo de dos mil veintidós (2022).

El apoderado de la **parte demandante,** dentro del término legal, interpuso recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia el treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), notificado por edicto de fecha seis (6) de diciembre de la misma anualidad, dado su resultado adverso.

A efectos de resolver lo pertinente se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, son susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda los 120 salarios mínimos, que a la fecha del fallo de segunda instancia asciende a la suma de **$109.023.120.**

Es criterio reiterado de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, tratándose del **demandante**, corresponde al monto de las pretensiones que hubiesen sido

negadas por la sentencia que se intenta impugnar, y respecto del **demandado**, se traduce en la cuantía de las condenas impuestas.[1]

En el presente caso, el fallo de primera instancia condenó a la reliquidación pensional, decisión que apelada, fue revocada por esta Sala.

En consecuencia, el interés jurídico para recurrir en casación de la parte **demandante** recae sobre las pretensiones que, reconocidas, fueron revocadas en la alzada, de ellas, la reliquidación pensional, que causa un retroactivo entre la mesada otorgada por vía judicial y la reconocida inicialmente por vía administrativa, presentando incidencias a futuro que la Sala procede a estimar, para efectos de este recurso, sin indexar o actualizar, por 14 mesadas anuales, acogiendo la tabla de mortalidad rentistas hombres[2] , de acuerdo a los siguientes cálculos:

INCIDENCIAS FUTURAS	
Fecha de nacimiento (fl.17)	18 de abril de 1951
Edad fecha de fallo (años)	70
Valor de la mesada inicial	$ 1.111.923, 86
Valor de la mesada revocada	$ 1.779.469,00
diferencia	$667.545,14
Mesadas año	14
Índice	15.3
Total	**$ 142.988.169**

Lo anterior permite un estimado de **$ 142.988.169**, monto que supera ampliamente los 120 salarios mínimos establecidos en el artículo 43 de la Ley 712 de 2001, sin que resulte necesario cuantificar las demás obligaciones reclamadas. En consecuencia se concederá el recurso extraordinario de casación a la parte demandante.

[1] *AL1514-2016 Radicación n.° 73011, del 16 de marzo de 2016, M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.*
[2] SUPERINTENDENCIA FINANCIARA DE COLOMBIA . RESOLUCION No 1555 de 2010

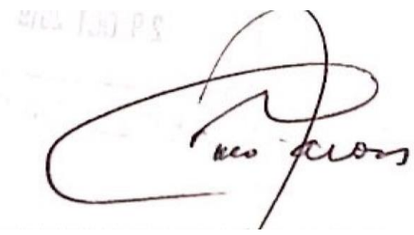
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala de Decisión Laboral,

RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER el recurso extraordinario de casación impetrado por el apoderado de la parte demandante.

SEGUNDO: En firme el proveído, continúese con el tramite pertinente, digitalizando el proceso para surtir el recurso.

Notifíquese y Cúmplase,



LUIS ALFREDO BARON CORREDOR

Magistrado



DIANA MARCELA CAMACHO FERNANDEZ

Magistrada



EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS

Magistrado

Alberson

H. MAGISTRADO DR. LUIS ALFREDO BARON CORREDOR

Me permito pasar a su despacho el expediente de la referencia, informado que los apoderados de la **parte demandante** interpuso, recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia el treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno(2021).

Lo anterior para lo pertinente.

Bogotá D.C. diecisiete (17) de mayo de dos mil veintidós (2022).

ALBERSON DIAZ BERNAL
Oficial Mayor

-TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA-

-SALA LABORAL-

Magistrado Ponente: DR LUIS ALFREDO BARON CORREDOR

Bogotá D.C. dieciocho (18) de mayo de dos mil veintidós (2022).

El apoderado de la **parte demandante,** dentro del término legal, interpuso recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia el veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiuno (2021), notificado por edicto de fecha ocho (8) de noviembre de la misma anualidad, dado su resultado adverso.

A efectos de resolver lo pertinente se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, son susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda los 120 salarios mínimos, que a la fecha del fallo de segunda instancia asciende a la suma de **$109.023.120.**

Es criterio reiterado de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, tratándose del **demandante**, corresponde al monto de las pretensiones que hubiesen sido negadas por la

sentencia que se intenta impugnar, y respecto del **demandado**, se traduce en la cuantía de las condenas impuestas.[1]

En el presente caso, el fallo de primera instancia negó las pretensiones de la demanda, decisión que apelada, fue confirmada por esta Sala.

En consecuencia, el interés jurídico para recurrir en casación de la parte **demandante** recae sobre las demandas negadas en las instancias, de ellas, la reliquidación pensional y el pago de las diferencias causadas entre la pensión otorgada y la reclamada, pretensiones que fueron estimadas por la parte actora en la suma de **$400.000.000**, (fl-15), monto que supera ampliamente los 120 salarios mínimos establecidos en el artículo 43 de la Ley 712 de 2001, sin que resulte necesario cuantificar las demás obligaciones reclamadas. En consecuencia se concederá el recurso extraordinario de casación a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.,

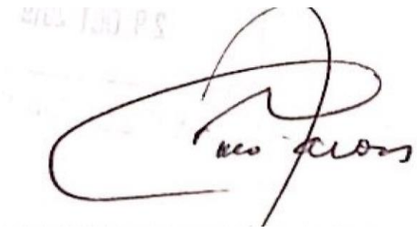
RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandante, conforme a lo expresado en la parte motiva de este auto.

SEGUNDO: En firme el proveído, continúese con el tramite pertinente, digitalizando el proceso para surtir el recurso.

[1] *AL1514-2016 Radicación n.° 73011, del 16 de marzo de 2016, M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.*

Notifíquese y Cúmplase,



LUIS ALFREDO BARON CORREDOR

Magistrado



DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ

Magistrada



EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS

Magistrado

Alberson

H. MAGISTRADO DR. LUIS ALFREDO BARON CORREDOR

Me permito pasar a su despacho el expediente de la referencia, informado que los apoderados de la **parte demandante** interpuso, recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiuno(2021).

Lo anterior para lo pertinente.

Bogotá D.C dieciocho (18) de mayo de dos mil veintidós (2022).

ALBERSON DIAZ BERNAL
Oficial Mayor

-TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA-

-SALA LABORAL-

Magistrado Ponente: DR LUIS ALFREDO BARON CORREDOR

Bogotá D.C. diecisiete (17) de mayo de dos mil veintidós (2022).

El apoderado de la **parte demandante,** dentro del término legal, interpuso recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia el treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), notificado por edicto de fecha seis (6) de diciembre de la misma anualidad, dado su resultado adverso.

A efectos de resolver lo pertinente se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, son susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda los 120 salarios mínimos, que a la fecha del fallo de segunda instancia asciende a la suma de **$109.023.120.**

Es criterio reiterado de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, tratándose del **demandante**, corresponde al monto de las pretensiones que hubiesen sido negadas por la

sentencia que se intenta impugnar, y respecto del **demandado**, se traduce en la cuantía de las condenas impuestas.[1]

En el presente caso, el fallo de primera instancia negó las pretensiones de la demanda, decisión que apelada, fue confirmada por esta Sala.

En consecuencia, el interés jurídico para recurrir en casación de la parte **demandante** recae sobre las pretensiones negadas en las instancias, de ellas, el pago de la pensión de vejez a partir del 18 de octubre de 2016, presentando incidencias a futuro que la Sala procede a estimar, para efectos de este recurso, sobre el valor del salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de fallo de segunda instancia, por 13 mesadas anuales, acogiendo la tabla de mortalidad rentistas hombres2 , de acuerdo a los siguientes cálculos:

INCIDENCIAS FUTURAS	
Fecha de nacimiento (fl.17)	16 de junio de 1950
Edad fecha de fallo (años)	71
Valor de la mesada inicial	$908.526
Mesadas año	13
Índice	14.6
Total	**$ 172.438.235**

Lo anterior permite un estimado de **$ 172.438.235**, monto que supera ampliamente los 120 salarios mínimos establecidos en el artículo 43 de la Ley 712 de 2001, sin que resulte necesario cuantificar las demás obligaciones reclamadas. En consecuencia se concederá el recurso extraordinario de casación a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala de Decisión Laboral,

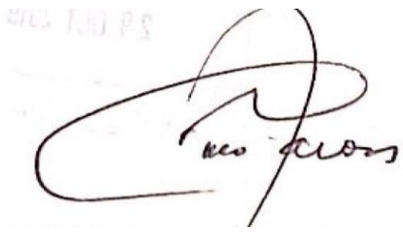
[1] *AL1514-2016 Radicación n.° 73011, del 16 de marzo de 2016, M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.*
[2] SUPERINTENDENCIA FINANCIARA DE COLOMBIA . RESOLUCION No 1555 de 2010

RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER el recurso extraordinario de casación impetrado por el apoderado de la parte demandante.

SEGUNDO: En firme el proveído, continúese con el tramite pertinente, digitalizando el proceso para surtir el recurso.

Notifíquese y Cúmplase,



LUIS ALFREDO BARON CORREDOR

Magistrado



DIANA MARCELA CAMACHO FERNANDEZ

Magistrada



EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS

Magistrado

Alberson

H. MAGISTRADO DR. LUIS ALFREDO BARON CORREDOR

Me permito pasar a su despacho el expediente de la referencia, informado que los apoderados de la **parte demandante** interpuso, recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia el treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno(2021).

Lo anterior para lo pertinente.

Bogotá D.C. diecisiete (17) de mayo de dos mil veintidós (2022).

ALBERSON DIAZ BERNAL
Oficial Mayor

-TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA-

-SALA LABORAL-

Magistrado Ponente: DR LUIS ALFREDO BARON CORREDOR

Bogotá D.C. diecisiete (17) de mayo de dos mil veintidós (2022).

Los apoderados, de la **parte demandante** y la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS**,** dentro del término legal, interpusieron recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia el veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiuno (2021), notificado por edicto de fecha ocho (8) de noviembre de la misma anualidad, dado su resultado adverso.

A efectos de resolver lo pertinente se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, son susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda los 120 salarios mínimos, que a la fecha del fallo de segunda instancia asciende a la suma de **$109.023.120.**

Es criterio reiterado de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, tratándose del **demandante**, corresponde al monto de las pretensiones que hubiesen sido negadas por la

sentencia que se intenta impugnar, y respecto del **demandado**, se traduce en la cuantía de las condenas impuestas.[1]

En el presente caso, el fallo de primera instancia condenó al pago de algunas pretensiones de la demanda, decisión que fue modificada en la segunda instancia.

En consecuencia, el interés jurídico para recurrir en casación de la FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS recae sobre el monto de las condenas impuestas en las instancias, no obstante se advierte que, si bien el falló de la primera instancia le impuso el pago solidario por las obligaciones a cargo de FIDUPREVISORA, esta última, en la alzada, fue absuelta de la totalidad de las pretensiones en su contra, bajo esta circunstancia, la entidad cafetera ya no tiene que avalar condena y por lo tanto carece de interés jurídico para recurrir. En consecuencia, al no cumplir con los requisitos establecidos en el artículo 43 de la Ley 712 de 200, se negará el recurso de casación.

De otro lado, el interés jurídico para recurrir en casación de la parte **demandante** recae sobre las pretensiones que apeladas, fueron negadas en las instancias, de ellas, el pago de la pensión de sobrevivientes a partir del 20 de septiembre de 2013, que presenta incidencias a futuro que la Sala procede a estimar, para efectos de este recurso, con base en el salario mínimo legal mensual vigente a la fecha de fallo, por 13 mesadas anuales, acogiendo la tabla de mortalidad rentistas mujeres 2 , de acuerdo a los siguientes cálculos:

---

[1] *AL1514-2016 Radicación n.° 73011, del 16 de marzo de 2016, M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.*
[2] SUPERINTENDENCIA FINANCIARA DE COLOMBIA . RESOLUCION No 1555 de 2010

INCIDENCIAS FUTURAS	
Fecha de nacimiento (fl.571)	20 de noviembre de 1955
Edad fecha de fallo (años)	66
Valor de la mesada	$ 908.526
Mesadas año	13
Índice	21.8
Total	**$ 257.476.268**

Lo anterior permite un estimado de **$257.476.268**, monto que supera ampliamente los 120 salarios mínimos establecidos en el artículo 43 de la Ley 712 de 2001, sin que resulte necesario cuantificar las demás obligaciones reclamadas. En consecuencia se concederá el recurso extraordinario de casación a la parte demandante.

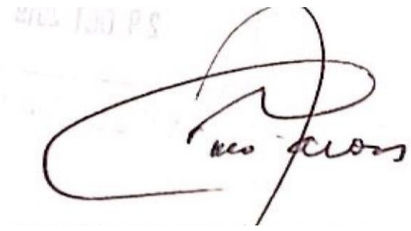
En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.,

RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandante y NEGARLO a la demandada FEDERACIÓN NACIONAL DE CAFETEROS, conforme a lo expresado en la parte motiva de este auto.

SEGUNDO: En firme el proveído, continúese con el tramite pertinente, digitalizando el proceso para surtir el recurso.

Notifíquese y Cúmplase,



LUIS ALFREDO BARON CORREDOR

Magistrado



DIANA MARCELA CAMACHO FERNANDEZ

Magistrada



EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS

Magistrado

Alberson

H. MAGISTRADO DR. LUIS ALFREDO BARON CORREDOR

Me permito pasar a su despacho el expediente de la referencia, informado que los apoderados de la **parte demandante y la demandada FEDECAFE** interpusieron, recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiuno(2021).

Lo anterior para lo pertinente.

Bogotá D.C. diecisiete (17) de mayo de dos mil veintidós (2022).

ALBERSON DIAZ BERNAL
Oficial Mayor

-TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA-

-SALA LABORAL-

Magistrado Ponente: DR LUIS ALFREDO BARON CORREDOR

Bogotá D.C. diecisiete (17) de mayo de dos mil veintidós (2022).

El apoderado de la **parte demandante,** dentro del término legal, interpuso recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia el veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiuno (2021), notificado por edicto de fecha ocho (8) de noviembre de la misma anualidad, dado su resultado adverso.

A efectos de resolver lo pertinente se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

De acuerdo con el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, son susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda los 120 salarios mínimos, que a la fecha del fallo de segunda instancia asciende a la suma de **$109.023.120.**

Es criterio reiterado de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, tratándose del **demandante**, corresponde al monto de las pretensiones que hubiesen sido negadas por la

sentencia que se intenta impugnar, y respecto del **demandado**, se traduce en la cuantía de las condenas impuestas.[1]

En el presente caso, el fallo de primera instancia absolvió de las pretensiones de la demanda, decisión que fue confirmada por esta Sala.

En consecuencia, el interés jurídico para recurrir en casación de la parte **demandante** recae sobre las pretensiones que, apeladas, fueron negadas en las instancias, de ellas, el pago de las diferencias pensionales, que, para efectos de este recurso, se liquida sumando los valores reclamados por diferencias, estimados por la parte actora, entre los años 2012 a 2019, por 14 mesadas al año, sin indexar o actualizar (fl.18), lo que permite un acumulado por este interregno temporal, en la suma de $ 116.996.696,00, monto que supera ampliamente los 120 salarios mínimos establecidos en el artículo 43 de la Ley 712 de 2001, sin que resulte necesario cuantificar las demás obligaciones reclamadas. En consecuencia se concederá el recurso extraordinario de casación a la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.,

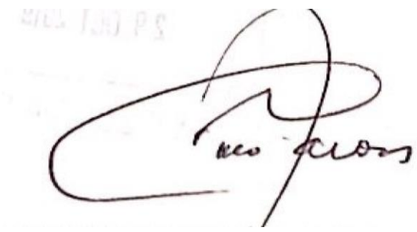
RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandante, conforme a lo expresado en la parte motiva de este auto.

[1] *AL1514-2016 Radicación n.° 73011, del 16 de marzo de 2016, M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.*

SEGUNDO: En firme el proveído, continúese con el tramite pertinente, digitalizando el proceso para su trámite ante la Corte.

Notifíquese y Cúmplase,



LUIS ALFREDO BARON CORREDOR

Magistrado



DIANA MARCELA CAMACHO FERNANDEZ

Magistrada



EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS

Magistrado

Alberson

H. MAGISTRADO DR. LUIS ALFREDO BARON CORREDOR

Me permito pasar a su despacho el expediente de la referencia, informado que el apoderado de la **parte demandante** interpuso, recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiuno(2021).

Lo anterior para lo pertinente.

Bogotá D.C. diecisiete (7) de mayo de dos mil veintidós (2022).

ALBERSON DIAZ BERNAL
Oficial Mayor

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA LABORAL

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintidós (2022)

El apoderado de la **parte demandada** dentro del término de ejecutoria interpuso recurso extraordinario de casación, contra el fallo proferido en esta instancia el treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), dado el resultado desfavorable.

Para resolver la viabilidad del recurso de casación interpuesto se considera

El Artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establece que: "*sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente*."

Tal cuantía se determina bajo el concepto de "*interés jurídico para recurrir*", que de forma clara la H. Corte Suprema de Justicia lo ha interpretado como el perjuicio que sufre la parte afectada con la sentencia impugnada[1], definiéndose para el demandante, las pretensiones que no hubieran sido acogidas en segunda instancia y para la demandada las condenas impuestas, en ambos casos teniendo en cuenta los recursos de apelación que hubieran sido interpuestos.

En el presente asunto la sentencia de primera instancia declaró que entre las partes existió un contrato de trabajo desde el 7 de noviembre de 2015 hasta el 15 de abril de 2016 con un ingreso mensual de $2.160.000 para el año 2015 y para el año 2016 de $2.538.331 y como consecuencia de ello condenó a la demandada al pago de salarios, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, prima de servicios, aportes a pensión, aportes a salud, aportes a ARL, indemnización moratoria del articulo 65 del CST y los intereses moratorios a partir del mes 25 con la tasa máxima de créditos de lire asignación certificados por la superintendencia financiera a partir del 16 de abril de 2018 hasta cuando se verificara el pago del mismo; decisión que fue apelada por las parte demandada y confirmada en segunda instancia por esta Corporación.

Ahora bien, para cuantificar el interés jurídico para acudir en casación por parte de la demandada, debemos decir que estas recaen sobre las condenas que le fueron impuestas con la sentencia de segunda instancia, esto es las siguientes sumas de dinero:

[1] Al respecto de tiempo atrás la Corte Suprema de Justicia ha manifestado y reiterado: "*el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, que tratándose del demandado como el caso en estudio, se traduce en la cuantía de las resoluciones que económicamente lo perjudiquen y, respecto del demandante, el monto de las pretensiones que Radicación n.° 73011 4 hubiesen sido negadas por la sentencia que se intenta impugnar, teniendo en cuenta la conformidad o inconformidad del interesado respecto del fallo de primer grado"* Auto AL1514-2016 del 16 de marzo de 2016, Sala de Casación Laboral. M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.

Condenas Impuestas	**Valor**
Salario desde el 1 y el 15 de abril de 2016	$ 1.269.165,00
Cesantías	$ 1.121.096,00
Intereses a las Cesantias	$ 134.531,00
Vacaciones	$ 560.548,00
Prima de Servicios	$ 1.121.096,00
Aportes a Pension	$ 992.200,00
Aportes a Salud	$ 775.200,00
Aportes ARL	$ 149.400,00
Indemnizacion Moratoria Art 65 CST	$ 60.919.920,00
Sacion por no consignacion de cesantias	$ 2.622.942,00
Intereses moratorios indemnizacion moratoria Art 65 CST	$ 53.796.925,00
Total Condenas	**$ 123.463.023,00**

Por lo anterior, una vez realizadas las operaciones aritméticas correspondientes, se observa que la condena impuesta asciende a la suma de **$ 123.463.023,00** valor que supera los 120 salarios mínimos exigidos para recurrir en casación.

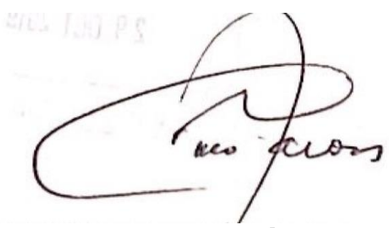
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala de Decisión Laboral,

RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandada.

SEGUNDO: En firme el presente proveído, previa digitalización del expediente por parte de la Secretaria de esta Sala, remítase el expediente a la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral para lo pertinente.

Notifíquese y Cúmplase,



LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR
Magistrado



DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ
Magistrada



EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS
Magistrado

LPJR

H. MAGISTRADO DR. **LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR**

Me permito pasar a su despacho el expediente No. **11001310502820170072801,** informándole que el apoderado de la parte demandada dentro del término de ejecutoria interpuso recurso extraordinario de casación contra la sentencia proferida por esta Corporación el treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).

Lo anterior para lo pertinente.

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintidós (2022)

LINA PAOLA JIMÉNEZ ROMERO
Oficial Mayor

LPJR

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA LABORAL

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintidós (2022)

El apoderado de la **parte demandante** interpuso, dentro del término de ejecutoria recurso extraordinario de casación, contra el fallo proferido en esta instancia el treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), dado su resultado desfavorable.

Para resolver la viabilidad del recurso de casación interpuesto se considera

El Artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establece que: "*sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente*."

Tal cuantía se determina bajo el concepto de "*interés jurídico para recurrir*", que de forma clara la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia lo ha interpretado como el perjuicio que sufre la parte afectada con la sentencia impugnada[1], definiéndose para el demandante, las pretensiones que no hubieran sido acogidas en segunda instancia y para la demandada las condenas impuestas; en ambos casos, atendiendo los recursos de apelación que hubieran sido interpuestos.

En el presente asunto la sentencia de primera instancia declaró probadas las excepciones de inexistencia de la obligación y cobro de lo no debido formulado por la UGPP y la inexistencia de requisitos para la reliquidación o pensión reclamada, inexistencia de la obligación y pago formuladas por el PAR y absolvió a las demandadas de las pretensiones incoadas en su contra; decisión que fue apelada por la parte demandante y confirmada en segunda instancia por esta Corporación.

Por otra parte, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha señalado que cuando alguna de las partes esté conformada por varias personas como en este caso, el interés jurídico para recurrir en casación se limita al de cada uno de éstos individualmente considerados, sin que sea válido acumular o sumar las diferentes condenas impuestas a favor de todos los demandantes, para llegar al límite establecido en la legislación procesal del trabajo[2].

Así las cosas y efectuadas las operaciones aritméticas correspondientes se establece que el interés jurídico individual de cada uno de los demandantes es:

Miguel Humberto Melo Báez	
Reliquidación de Mesadas causadas desde el 30 de marzo de 2006 hasta la fecha del fallo de 2da instancia	$ 475.370.085,65
Total	**$ 475.370.085,65**

[1] Al respecto de tiempo atrás la Corte Suprema de Justicia ha manifestado y reiterado: "*el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, que tratándose del demandado como el caso en estudio, se traduce en la cuantía de las resoluciones que económicamente lo perjudiquen y, respecto del demandante, el monto de las pretensiones que Radicación n.° 73011 4 hubiesen sido negadas por la sentencia que se intenta impugnar, teniendo en cuenta la conformidad o inconformidad del interesado respecto del fallo de primer grado"* Auto AL1514-2016 del 16 de marzo de 2016, Sala de Casación Laboral. M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.
[2] Auto 50269 del 10 de mayo de 2011 y 52209 del 13 de marzo de 2012.

Luis Alberto Sánchez Alvear	
Reliquidación de Mesadas causadas desde el 24 de diciembre de 2006 hasta la fecha del fallo de 2da instancia	$ 349.615.762,66
Total	**$ 349.615.762,66**

Teniendo en cuenta el cálculo anterior se observa que, las pretensiones de la demanda de cada uno de los demandantes supera el interés mínimo requerido para conceder el recurso extraordinario de casación, dado que dicha suma en caso de una eventual condena a la demandada si supera los 120 salarios mínimos exigidos para recurrir en casación.

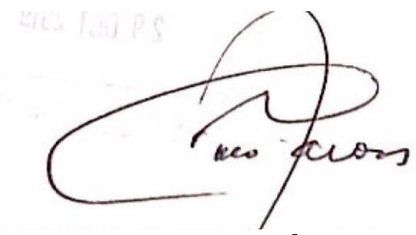
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala de Decisión Laboral,

RESUELVE

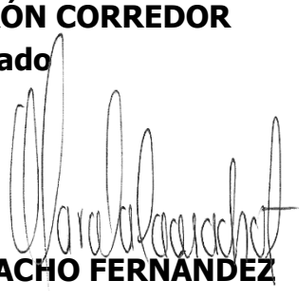
PRIMERO: CONCEDER el recurso extraordinario de casación interpuesto por los demandantes **Miguel Humberto Melo Báez y Luis Alberto Sánchez Alvear.**

SEGUNDO: En firme el presente proveído, previa digitalización del expediente por parte de la Secretaria de esta Sala, remítase el expediente a la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral para lo pertinente.

Notifíquese y Cúmplase,



LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR
Magistrado



DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ
Magistrada



EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS
Magistrado

LPJR

H. MAGISTRADO DR. **LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR**

Me permito pasar a su despacho el expediente No. **11001310503220190035401,** informándole que el apoderado la parte demandante dentro del término de ejecutoria interpuso recurso extraordinario de casación contra la sentencia proferida por esta Corporación el treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).

Lo anterior para lo pertinente.

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintidós (2022)

LINA PAOLA JIMÉNEZ ROMERO
Oficial Mayor

LPJR

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior de
Distrito Judicial
Bogotá D. C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE DR. LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR

PROCESO ORDINARIO LABORAL MARGOTH GÚZMAN MUNAR CONTRA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES Y OTRO

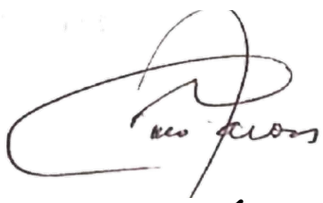
Bogotá D.C., 27 de mayo de 2022

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se **ADMITE la presente Apelación de Sentencia** por las demandas.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de **COLPENSIONES** conforme lo establece el artículo 69 del C.P. del T. y de la S.S., modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden crónologico de llegada, por lo que una vez le **corresponda su turno**, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR
MAGISTRADO

C.1/ Fls. 403/ CD. 2

Notificado en estado del 2 de junio de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior de
Distrito Judicial
Bogotá D. C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE DR. LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR

PROCESO ORDINARIO LABORAL ÁLVARO MORALES LÓPEZ CONTRA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES Y OTRO

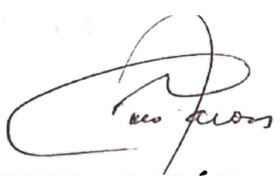
Bogotá D.C., 27 de mayo de 2022

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se **ADMITE la presente Apelación de Sentencia** por las demandadas.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de **COLPENSIONES** conforme lo establece el artículo 69 del C.P. del T. y de la S.S., modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden crónologico de llegada, por lo que una vez le **corresponda su turno**, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR
MAGISTRADO

C.1/ Fls. 310/ CD. 5

Notificado en estado del 2 de junio de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior de
Distrito Judicial
Bogotá D. C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE DR. LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR

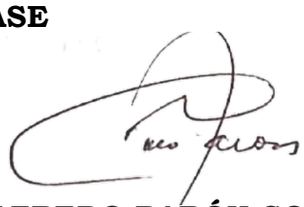
PROCESO ORDINARIO LABORAL DE GEORGE RAIS MANDELBAM CONTRA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES

Bogotá D.C., 27 de mayo de 2022

Sería el momento de admitir la apelación con relación a la sentencia emitida dentro del proceso de la referencia, no obstante el proceso digital allegado mediante correo de fecha 26 de noviembre de 2022, **no cumple** con lo señalado en la Circular PCSJC21-6, Circular PCSJC20-27 y el Acuerdo PCSJA-11567 de 2020, expedidas por el Consejo Superior de la Judicatura en relación a los lineamientos funcionales del protocolo para la gestión de documentos electrónicos, digitalización y conformación de expediente, puesto que no se encuentran los archivos contentivos de las audiencias que trata el articulo 77 y 80 del Código Procesal del Trabajo y de Seguridad, razón por la cual no permite dar continuidad al trámite correspondiente.

Por lo anterior, se **ORDENA** al juzgado de cumplimiento a lo estipulado en precedencia, o en su defecto, remita el expediente físico verificando previa remisión, se encuentren la totalidad de los documentos y audiencias pertenecientes al proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR
MAGISTRADO

C.1/ Fls. 1

Notificado en estado del 2 de junio de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior de
Distrito Judicial
Bogotá D. C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE DR. LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR

PROCESO ORDINARIO LABORAL DE HUMBERTO ORTÍZ DUARTE CONTRA CORPORACIÓN DE LA INDUSTRIA aeronautica COLOMBIANA S.A

Bogotá D.C., 27 de mayo de 2022

Sería el momento de admitir la apelación con relación a la sentencia emitida dentro del proceso de la referencia, no obstante el proceso digital allegado mediante correo de fecha 26 de noviembre de 2021, **no permite su apertura,** razón por la cual no se puede dar continuidad al trámite correspondiente. Así las cosas, se **CONMINA** al juzgado que remita el expediente digital conforme a lo señalado en la Circular PCSJC21-6, Circular PCSJC20-27 y el Acuerdo PCSJA-11567 de 2020, expedidas por el Consejo Superior de la Judicatura en relación a los lineamientos funcionales del protocolo para la gestión de documentos electrónicos, digitalización y conformación de expediente.

Por lo anterior, se **ORDENA** al juzgado de cumplimiento a lo estipulado en precedencia, verificando previa remisión, se encuentren la totalidad de los documentos y audiencias pertenecientes al proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR
MAGISTRADO

C.1/ Fls. 1

Notificado en estado del 2 de junio de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior de
Distrito Judicial
Bogotá D. C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE DR. LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR

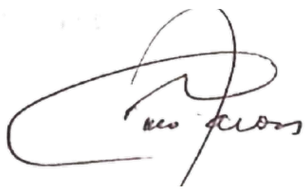
PROCESO ORDINARIO LABORAL LUZ VIVIAN FANDIÑO FANDIÑO CONTRA GOLD RH SAS

Bogotá D.C., 27 de mayo de 2022

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se **ADMITE la presente Apelación de Sentencia** por las demandadas GOLD RH SAS y SALUD TOTAL EPS.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden crónologico de llegada, por lo que una vez le **corresponda su turno**, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR
MAGISTRADO

C.2/ Fls. 660 / CD. 4

Notificado en estado del 2 de junio de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior de
Distrito Judicial
Bogotá D. C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE DR. LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR

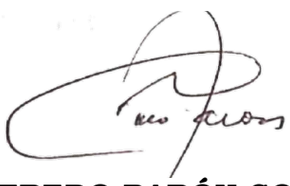
PROCESO ORDINARIO LABORAL ADALIA GARCÍA GIRALDO CONTRA PROTECCIÓN S.A

Bogotá D.C., 27 de mayo de 2022

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se **ADMITE la presente Apelación de Sentencia** por la demandada AFP PROTECCION S.A y la demandante ADALIA GARCIA GIRALDO.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden crónologico de llegada, por lo que una vez le **corresponda su turno**, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR
MAGISTRADO

C.1/ Fls. 298/ CD. 3

Notificado en estado del 2 de junio de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior de
Distrito Judicial
Bogotá D. C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE DR. LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR

PROCESO ORDINARIO LABORAL ROBINSON ALFREDO GARCÍA CORREA CONTRA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES Y OTRO

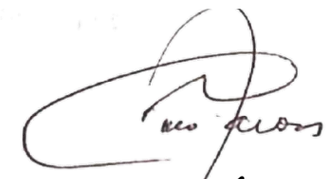
Bogotá D.C., 27 de mayo de 2022

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se **ADMITE la presente Apelación de Sentencia** por las demandas

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de **COLPENSIONES** conforme lo establece el artículo 69 del C.P. del T. y de la S.S., modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden crónologico de llegada, por lo que una vez le **corresponda su turno**, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR
MAGISTRADO

C.1/ Fls. 180/ CD. 3

Notificado en estado del 2 de junio de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior de
Distrito Judicial
Bogotá D. C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE DR. LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR

PROCESO ORDINARIO LABORAL MARÍA MYRIAM MORENO RODRÍGUEZ CONTRA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES Y OTRO

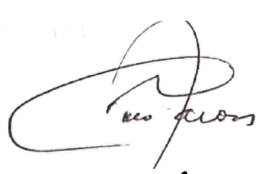
Bogotá D.C., 27 de mayo de 2022

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se **ADMITE la presente Apelación de Sentencia** por la demandada COLPENSIONES y AFP PORVENIR.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de **COLPENSIONES** conforme lo establece el artículo 69 del C.P. del T. y de la S.S., modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden crónologico de llegada, por lo que una vez le **corresponda su turno**, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR
MAGISTRADO

C.1/ Fls. 83/ CD.2

Notificado en estado del 2 de junio de 2022

Notificado en estado del 2 de junio de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior de
Distrito Judicial
Bogotá D. C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE DR. LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR

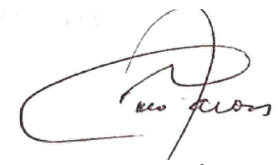
PROCESO ORDINARIO LABORAL DE MIRIAM GOMEZ CADENA CONTRA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES.

Bogotá D.C., 27 de mayo de 2022

Sería el momento de admitir la apelación con relación a la sentencia emitida dentro del proceso de la referencia, no obstante el proceso digital allegado mediante correo de fecha 04 abril de 2021, **no cumple** con lo señalado en la Circular PCSJC21-6, Circular PCSJC20-27 y el Acuerdo PCSJA-11567 de 2020, expedidas por el Consejo Superior de la Judicatura en relación a los lineamientos funcionales del protocolo para la gestión de documentos electrónicos, digitalización y conformación de expediente, razón por la cual no permite dar continuidad al trámite correspondiente.

Por lo anterior, se **ORDENA** al juzgado de cumplimiento a lo estipulado en precedencia, o en su defecto, remita el expediente físico verificando previa remisión, se encuentren la totalidad de los documentos y audiencias pertenecientes al proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR
MAGISTRADO

C.1/ Fls. 1

Notificado en estado del 2 de junio de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior de
Distrito Judicial
Bogotá D. C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE DR. LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR

PROCESO ORDINARIO LABORAL GLORIA AMANDA PAZOS MERA CONTRA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES

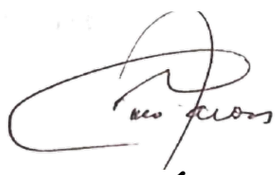
Bogotá D.C., 27 de mayo de 2022

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se **ADMITE la presente Apelación de Sentencia** por la demandada.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de **COLPENSIONES** conforme lo establece el artículo 69 del C.P. del T. y de la S.S., modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden crónologico de llegada, por lo que una vez le **corresponda su turno**, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR
MAGISTRADO

C.1/ Fls. 1

Notificado en estado del 2 de junio de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior de
Distrito Judicial
Bogotá D. C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE DR. LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR

PROCESO ORDINARIO LABORAL DE CARLOS ARTURO BARRERO VARGAS CONTRA CENTRO INTERACTIVO DE CRM S.A

Bogotá D.C., 27 de mayo de 2022

Sería el momento de admitir la apelación con relación a la sentencia emitida dentro del proceso de la referencia, no obstante el proceso digital allegado mediante correo de fecha 25 mayo de 2022, **no cumple** con lo señalado en la Circular PCSJC21-6, Circular PCSJC20-27 y el Acuerdo PCSJA-11567 de 2020, expedidas por el Consejo Superior de la Judicatura en relación a los lineamientos funcionales del protocolo para la gestión de documentos electrónicos, digitalización y conformación de expediente, razón por la cual no permite dar continuidad al trámite correspondiente.

Por lo anterior, se **ORDENA** al juzgado de cumplimiento a lo estipulado en precedencia verificando previa remisión, se encuentren la totalidad de los documentos y audiencias pertenecientes al proceso de forma organizada, numerada y completa.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR
MAGISTRADO

C.1/ Fls. 1

Notificado en estado del 2 de junio de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior de
Distrito Judicial
Bogotá D. C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE DR. LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR

PROCESO ORDINARIO LABORAL HÉCTOR HUGO BERMUDEZ ALVARADO CONTRA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES Y OTRO

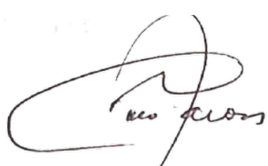
Bogotá D.C., 27 de mayo de 2022

Al tenor de lo dispuesto en los artículos 16 y 17 de la ley 1149 de 2007 y el Acuerdo PSSA11-8172 de junio 9 de 2011, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, por tratarse de un proceso que inició con posterioridad al 1° de julio de 2011, y cuyo trámite corresponde al consagrado en la ley 1149 de 2007, se **ADMITE la presente Apelación de Sentencia** por las demandas.

Así mismo, es necesario señalar que el presente proceso se conocerá también en grado jurisdiccional de consulta a favor de **COLPENSIONES** conforme lo establece el artículo 69 del C.P. del T. y de la S.S., modificado por el artículo 14 de la ley 1149 de 2007, por ser garante la Nación.

Igualmente, se advierte a las partes que los procesos que ingresan al Despacho por reparto se evacuan por orden crónologico de llegada, por lo que una vez le **corresponda su turno**, se señalará fecha para proferir la decisión que en derecho corresponda y en el mismo auto de señalamiento, se correrá traslado para alegar.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR
MAGISTRADO

C.1/ Fls. 1

Notificado en estado del 2 de junio de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA

Libertad y Orden

Rama Judicial
Tribunal Superior de
Distrito Judicial
Bogotá D. C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE DR. LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR

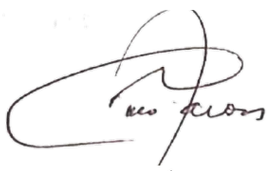
PROCESO ORDINARIO LABORAL DE IVÁN CAMILO GUERRERO HIGUERA CONTRA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES

Bogotá D.C., 27 de mayo de 2022

Sería el momento de admitir la apelación con relación a la sentencia emitida dentro del proceso de la referencia, no obstante el proceso digital allegado mediante correo de fecha 26 de noviembre de 2021, **no permite su apertura,** razón por la cual no se puede dar continuidad al trámite correspondiente. Así las cosas, se **CONMINA** al juzgado que remita el expediente digital conforme a lo señalado en la Circular PCSJC21-6, Circular PCSJC20-27 y el Acuerdo PCSJA-11567 de 2020, expedidas por el Consejo Superior de la Judicatura en relación a los lineamientos funcionales del protocolo para la gestión de documentos electrónicos, digitalización y conformación de expediente.

Por lo anterior, se **ORDENA** al juzgado de cumplimiento a lo estipulado en precedencia, verificando previa remisión, se encuentren la totalidad de los documentos y audiencias pertenecientes al proceso.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR
MAGISTRADO

C.1/ Fls. 1

Notificado en estado del 2 de junio de 2022

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
SALA LABORAL

MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado Sustanciador
COMCEL S.A. VS JOSE ORLANDO PERALTA Y OTROS
RADICADO: 020-2018-00396-03

Bogotá D.C., primero (01) de junio de dos mil veintidós (2022)

AUTO

De conformidad con lo previsto el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, y previo a adelantar la audiencia de que trata el artículo 82 del CPT y SS, el suscrito Magistrado,

RESUELVE:

PRIMERO: ADMITIR el recurso de APELACIÓN formulado contra la sentencia proferida en primera instancia.

SEGUNDO: CORRER TRASLADO, a las partes por el término de CINCO (5) DÍAS A CADA UNA, contados a partir de la notificación por estado de esta decisión, para que presenten sus alegaciones por escrito, si a bien lo tienen, iniciando por el(los) apelante(s), y una vez vencido el término anterior siguiendo por los no apelantes.

TERCERO: Los escritos deberán ser remitidos **ÚNICAMENTE** al correo electrónico de la Secretaria de esta Sala: **secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co**. Radicados los respectivos escritos, manténgase en Secretaría a disposición de las partes.

CUARTO: Cumplido lo ordenado, regresen las diligencias al Despacho para fijar fecha y hora para emitir por escrito la decisión de segunda instancia.

QUINTO: Prevéngase a las partes, que las alegaciones se entenderán recibidas oportunamente al correo de la Secretaría de la Sala, en día y hora hábil, esto es, de lunes a viernes de 08:00 am a 05:00 pm únicamente.

SEXTO: Finalmente, se advierte que de conformidad con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, se dictara providencia exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
SALA LABORAL

MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado Sustanciador
FERNANDO VEGA SALAMANCA VS COLPENSIONES Y OTROS
RADICADO: 033-2018-00411-01

Bogotá D.C., primero (01) de junio de dos mil veintidós (2022)

AUTO

De conformidad con lo previsto el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, y previo a adelantar la audiencia de que trata el artículo 82 del CPT y SS, el suscrito Magistrado,

RESUELVE:

PRIMERO: ADMITIR el recurso de APELACIÓN formulado contra la sentencia proferida en primera instancia, así como el GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA a favor de COLPENSIONES.

SEGUNDO: CORRER TRASLADO, a las partes por el término de CINCO (5) DÍAS A CADA UNA, contados a partir de la notificación por estado de esta decisión, para que presenten sus alegaciones por escrito, si a bien lo tienen, iniciando por el(los) apelante(s), y una vez vencido el término anterior siguiendo por los no apelantes.

TERCERO: Los escritos deberán ser remitidos **ÚNICAMENTE** al correo electrónico de la Secretaria de esta Sala: **secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co**. Radicados los respectivos escritos, manténgase en Secretaría a disposición de las partes.

CUARTO: Cumplido lo ordenado, regresen las diligencias al Despacho para fijar fecha y hora para emitir por escrito la decisión de segunda instancia.

QUINTO: Prevéngase a las partes, que las alegaciones se entenderán recibidas oportunamente al correo de la Secretaría de la Sala, en día y hora hábil, esto es, de lunes a viernes de 08:00 am a 05:00 pm únicamente.

SEXTO: Finalmente, se advierte que de conformidad con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, se dictara providencia exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
SALA LABORAL

MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado Sustanciador
JOSE MANUEL SANCHEZ BERNAL VS COLPENSIONES
RADICADO: 029-2021-00153-01

Bogotá D.C., primero (01) de junio de dos mil veintidós (2022)

AUTO

De conformidad con lo previsto el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, y previo a adelantar la audiencia de que trata el artículo 82 del CPT y SS, el suscrito Magistrado,

RESUELVE:

PRIMERO: ADMITIR el recurso de APELACIÓN formulado contra la sentencia proferida en primera instancia.

SEGUNDO: CORRER TRASLADO, a las partes por el término de CINCO (5) DÍAS A CADA UNA, contados a partir de la notificación por estado de esta decisión, para que presenten sus alegaciones por escrito, si a bien lo tienen, iniciando por el(los) apelante(s), y una vez vencido el término anterior siguiendo por los no apelantes.

TERCERO: Los escritos deberán ser remitidos **ÚNICAMENTE** al correo electrónico de la Secretaria de esta Sala: **secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co**. Radicados los respectivos escritos, manténgase en Secretaría a disposición de las partes.

CUARTO: Cumplido lo ordenado, regresen las diligencias al Despacho para fijar fecha y hora para emitir por escrito la decisión de segunda instancia.

QUINTO: Prevéngase a las partes, que las alegaciones se entenderán recibidas oportunamente al correo de la Secretaría de la Sala, en día y hora hábil, esto es, de lunes a viernes de 08:00 am a 05:00 pm únicamente.

SEXTO: Finalmente, se advierte que de conformidad con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, se dictara providencia exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
SALA LABORAL

MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado Sustanciador
MARÍA INES RUBIO VS UGPP
RADICADO: 001-2009-00170-02

Bogotá D.C., primero (01) de junio de dos mil veintidós (2022)

AUTO

De conformidad con lo previsto el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, y previo a adelantar la audiencia de que trata el artículo 82 del CPT y SS, el suscrito Magistrado,

RESUELVE:

PRIMERO: ADMITIR el recurso de APELACIÓN formulado contra el auto proferido en primera instancia.

SEGUNDO: CORRER TRASLADO, a las partes por el término COMÚN de CINCO (5) DÍAS, contados a partir de la notificación por estado de esta decisión, para que presenten sus alegaciones por escrito, si a bien lo tienen.

TERCERO: Los escritos deberán ser remitidos **ÚNICAMENTE** al correo electrónico de la Secretaria de esta Sala: **secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co**. Radicados los respectivos escritos, manténgase en Secretaría a disposición de las partes.

CUARTO: Cumplido lo ordenado, regresen las diligencias al Despacho para fijar fecha y hora para emitir por escrito la decisión de segunda instancia.

QUINTO: Prevéngase a las partes, que las alegaciones se entenderán recibidas oportunamente al correo de la Secretaría de la Sala, en día y hora hábil, esto es, de lunes a viernes de 08:00 am a 05:00 pm únicamente.

SEXTO: Finalmente, se advierte que de conformidad con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, se dictara providencia exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
SALA LABORAL

MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado Sustanciador
JUAN CARLOS MENENDEZ BARRETO VS COLPENSIONES Y OTROS
RADICADO: 020-2021-00163-01

Bogotá D.C., primero (01) de junio de dos mil veintidós (2022)

AUTO

Apoderada de la parte demandada PORVENIR S.A., presentó desistimiento frente al recurso interpuesto contra la sentencia de primera instancia, teniendo la abogada la facultada para ello, según da cuenta el poder anexo al plenario (cuaderno 4).

De conformidad con lo anterior y con lo previsto el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, y previo a adelantar la audiencia de que trata el artículo 82 del CPT y SS, el suscrito Magistrado,

RESUELVE:

PRIMERO: **ACEPTAR el DESISTIMIENTO** presentado por el apoderado de PORVENIR S.A., en la medida que cumple con los presupuestos exigidos por el artículo 316 del Código General del Proceso, norma a la cual se acude por remisión expresa del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

SEGUNDO: **ADMITIR** el recurso de APELACIÓN formulado contra la sentencia proferida en primera instancia, así como el GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA a favor de COLPENSIONES.

SEGUNDO: CORRER TRASLADO, a las partes por el término de CINCO (5) DÍAS A CADA UNA, contados a partir de la notificación por estado de esta decisión, para que presenten sus alegaciones por escrito, si a bien lo tienen, iniciando por el(los) apelante(s), y una vez vencido el término anterior siguiendo por los no apelantes.

TERCERO: Los escritos deberán ser remitidos **ÚNICAMENTE** al correo electrónico de la Secretaria de esta Sala: **secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co**. Radicados los respectivos escritos, manténgase en Secretaría a disposición de las partes.

CUARTO: Cumplido lo ordenado, regresen las diligencias al Despacho para fijar fecha y hora para emitir por escrito la decisión de segunda instancia.

QUINTO: Prevéngase a las partes, que las alegaciones se entenderán recibidas oportunamente al correo de la Secretaría de la Sala, en día y hora hábil, esto es, de lunes a viernes de 08:00 am a 05:00 pm únicamente.

SEXTO: Finalmente, se advierte que de conformidad con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, se dictara providencia exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
SALA LABORAL

MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado Sustanciador
SANTIAGO MORENO OTERO VS FONDO PASIVO SOCIAL DE FERROCARRILES NACIONALES DE COLOMBIA
RADICADO: 029-2021-00247-01

Bogotá D.C., primero (01) de junio de dos mil veintidós (2022)

AUTO

De conformidad con lo previsto el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, y previo a adelantar la audiencia de que trata el artículo 82 del CPT y SS, el suscrito Magistrado,

RESUELVE:

PRIMERO: ADMITIR el recurso de APELACIÓN formulado contra la sentencia proferida en primera instancia, así como el GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA a favor de COLPENSIONES.

SEGUNDO: CORRER TRASLADO, a las partes por el término de CINCO (5) DÍAS A CADA UNA, contados a partir de la notificación por estado de esta decisión, para que presenten sus alegaciones por escrito, si a bien lo tienen, iniciando por el(los) apelante(s), y una vez vencido el término anterior siguiendo por los no apelantes.

TERCERO: Los escritos deberán ser remitidos **ÚNICAMENTE** al correo electrónico de la Secretaria de esta Sala: **secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co**. Radicados los respectivos escritos, manténgase en Secretaría a disposición de las partes.

CUARTO: Cumplido lo ordenado, regresen las diligencias al Despacho para fijar fecha y hora para emitir por escrito la decisión de segunda instancia.

QUINTO: Prevéngase a las partes, que las alegaciones se entenderán recibidas oportunamente al correo de la Secretaría de la Sala, en día y hora hábil, esto es, de lunes a viernes de 08:00 am a 05:00 pm únicamente.

SEXTO: Finalmente, se advierte que de conformidad con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, se dictara providencia exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
SALA LABORAL

MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado Sustanciador
LUIS FERNANDO RAMOS ROJAS VS MAQUINAS AMARILLA SAS
RADICADO: 035-2020-00391-01

Bogotá D.C., primero (01) de junio de dos mil veintidós (2022)

AUTO

De conformidad con lo previsto el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, y previo a adelantar la audiencia de que trata el artículo 82 del CPT y SS, el suscrito Magistrado,

RESUELVE:

PRIMERO: ADMITIR el recurso de APELACIÓN formulado contra la sentencia proferida en primera instancia.

SEGUNDO: CORRER TRASLADO, a las partes por el término de CINCO (5) DÍAS A CADA UNA, contados a partir de la notificación por estado de esta decisión, para que presenten sus alegaciones por escrito, si a bien lo tienen, iniciando por el(los) apelante(s), y una vez vencido el término anterior siguiendo por los no apelantes.

TERCERO: Los escritos deberán ser remitidos **ÚNICAMENTE** al correo electrónico de la Secretaria de esta Sala: **secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co**. Radicados los respectivos escritos, manténgase en Secretaría a disposición de las partes.

CUARTO: Cumplido lo ordenado, regresen las diligencias al Despacho para fijar fecha y hora para emitir por escrito la decisión de segunda instancia.

QUINTO: Prevéngase a las partes, que las alegaciones se entenderán recibidas oportunamente al correo de la Secretaría de la Sala, en día y hora hábil, esto es, de lunes a viernes de 08:00 am a 05:00 pm únicamente.

SEXTO: Finalmente, se advierte que de conformidad con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, se dictara providencia exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
SALA LABORAL

MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado Sustanciador
PEDRO ARSENIO CHACON ORTIZ VS INSTITUTO DE FOMENTO INDUSTRIAL IFI EN LIQUIDACION
RADICADO: 006-2001-00076-09

Bogotá D.C., primero (01) de junio de dos mil veintidós (2022)

AUTO

De conformidad con lo previsto el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, y previo a adelantar la audiencia de que trata el artículo 82 del CPT y SS, el suscrito Magistrado,

RESUELVE:

PRIMERO: ADMITIR el recurso de APELACIÓN formulado contra el auto proferido en primera instancia.

SEGUNDO: CORRER TRASLADO, a las partes por el término COMÚN de CINCO (5) DÍAS, contados a partir de la notificación por estado de esta decisión, para que presenten sus alegaciones por escrito, si a bien lo tienen.

TERCERO: Los escritos deberán ser remitidos **ÚNICAMENTE** al correo electrónico de la Secretaria de esta Sala: **secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co**. Radicados los respectivos escritos, manténgase en Secretaría a disposición de las partes.

CUARTO: Cumplido lo ordenado, regresen las diligencias al Despacho para fijar fecha y hora para emitir por escrito la decisión de segunda instancia.

QUINTO: Prevéngase a las partes, que las alegaciones se entenderán recibidas oportunamente al correo de la Secretaría de la Sala, en día y hora hábil, esto es, de lunes a viernes de 08:00 am a 05:00 pm únicamente.

SEXTO: Finalmente, se advierte que de conformidad con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, se dictara providencia exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
SALA LABORAL

MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado Sustanciador
MARIO GERMAN ESPARZA SINSAJOA VS COMPAÑÍA DE LA FLOTA MERCANTE S.A.
EN LIQUIDACION Y OTROS
RADICADO: 036-2017-00381-01

Bogotá D.C., primero (01) de junio de dos mil veintidós (2022)

AUTO

De conformidad con lo previsto el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, y previo a adelantar la audiencia de que trata el artículo 82 del CPT y SS, el suscrito Magistrado,

RESUELVE:

PRIMERO: ADMITIR el recurso de APELACIÓN formulado contra la sentencia proferida en primera instancia, así como el GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA a favor de COLPENSIONES, FEDERACION NACIONAL DE CAFETEROS, en su calidad de administradora del FONDO NACIONAL DEL CAFÉ y FIDUPREVISORA, como vocera y administradora del patrimonio Autónomo Panflota.

SEGUNDO: CORRER TRASLADO, a las partes por el término de CINCO (5) DÍAS A CADA UNA, contados a partir de la notificación por estado de esta decisión, para que presenten sus alegaciones por escrito, si a bien lo tienen, iniciando por el(los) apelante(s), y una vez vencido el término anterior siguiendo por los no apelantes.

TERCERO: Los escritos deberán ser remitidos **ÚNICAMENTE** al correo electrónico de la Secretaria de esta Sala: **secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co**. Radicados los respectivos escritos, manténgase en Secretaría a disposición de las partes.

CUARTO: Cumplido lo ordenado, regresen las diligencias al Despacho para fijar fecha y hora para emitir por escrito la decisión de segunda instancia.

QUINTO: Prevéngase a las partes, que las alegaciones se entenderán recibidas oportunamente al correo de la Secretaría de la Sala, en día y hora hábil, esto es, de lunes a viernes de 08:00 am a 05:00 pm únicamente.

SEXTO: Finalmente, se advierte que de conformidad con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, se dictara providencia exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
SALA LABORAL

MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado Sustanciador
GERMAN CAICEDO SAAVEDRA VS LABORATORIOS REMO S.A.S
RADICADO: 009-2020-00239-01

Bogotá D.C., primero (01) de junio de dos mil veintidós (2022)

AUTO

De conformidad con lo previsto el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, y previo a adelantar la audiencia de que trata el artículo 82 del CPT y SS, el suscrito Magistrado,

RESUELVE:

PRIMERO: ADMITIR el recurso de APELACIÓN formulado contra la sentencia proferida en primera instancia.

SEGUNDO: CORRER TRASLADO, a las partes por el término de CINCO (5) DÍAS A CADA UNA, contados a partir de la notificación por estado de esta decisión, para que presenten sus alegaciones por escrito, si a bien lo tienen, iniciando por el(los) apelante(s), y una vez vencido el término anterior siguiendo por los no apelantes.

TERCERO: Los escritos deberán ser remitidos **ÚNICAMENTE** al correo electrónico de la Secretaria de esta Sala: **secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co**. Radicados los respectivos escritos, manténgase en Secretaría a disposición de las partes.

CUARTO: Cumplido lo ordenado, regresen las diligencias al Despacho para fijar fecha y hora para emitir por escrito la decisión de segunda instancia.

QUINTO: Prevéngase a las partes, que las alegaciones se entenderán recibidas oportunamente al correo de la Secretaría de la Sala, en día y hora hábil, esto es, de lunes a viernes de 08:00 am a 05:00 pm únicamente.

SEXTO: Finalmente, se advierte que de conformidad con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, se dictara providencia exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
SALA LABORAL

MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado Sustanciador
GLORIA INES GONZALEZ URREGO VS NUEVA EPS Y OTRO
RADICADO: 011-2018-00592-01

Bogotá D.C., primero (01) de junio de dos mil veintidós (2022)

AUTO

De conformidad con lo previsto el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, y previo a adelantar la audiencia de que trata el artículo 82 del CPT y SS, el suscrito Magistrado,

RESUELVE:

PRIMERO: ADMITIR el recurso de APELACIÓN formulado contra la sentencia proferida en primera instancia.

SEGUNDO: CORRER TRASLADO, a las partes por el término de CINCO (5) DÍAS A CADA UNA, contados a partir de la notificación por estado de esta decisión, para que presenten sus alegaciones por escrito, si a bien lo tienen, iniciando por el(los) apelante(s), y una vez vencido el término anterior siguiendo por los no apelantes.

TERCERO: Los escritos deberán ser remitidos **ÚNICAMENTE** al correo electrónico de la Secretaria de esta Sala: **secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co**. Radicados los respectivos escritos, manténgase en Secretaría a disposición de las partes.

CUARTO: Cumplido lo ordenado, regresen las diligencias al Despacho para fijar fecha y hora para emitir por escrito la decisión de segunda instancia.

QUINTO: Prevéngase a las partes, que las alegaciones se entenderán recibidas oportunamente al correo de la Secretaría de la Sala, en día y hora hábil, esto es, de lunes a viernes de 08:00 am a 05:00 pm únicamente.

SEXTO: Finalmente, se advierte que de conformidad con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, se dictara providencia exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
SALA LABORAL

MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado Sustanciador
YOLANDA AVENDAÑO DE CONTRERAS VS COLPENSIONES
RADICADO: 024-2020-00200-01

Bogotá D.C., primero (01) de junio de dos mil veintidós (2022)

AUTO

De conformidad con lo previsto el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, y previo a adelantar la audiencia de que trata el artículo 82 del CPT y SS, el suscrito Magistrado,

RESUELVE:

PRIMERO: ADMITIR el Grado Jurisdiccional de Consulta a favor de la parte DEMANDANTE.

SEGUNDO: CORRER TRASLADO, a las partes por el término COMÚN de CINCO (5) DÍAS, contados a partir de la notificación por estado de esta decisión, para que presenten sus alegaciones por escrito, si a bien lo tienen.

TERCERO: Los escritos deberán ser remitidos **ÚNICAMENTE** al correo electrónico de la Secretaria de esta Sala: **secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co**. Radicados los respectivos escritos, manténgase en Secretaría a disposición de las partes.

CUARTO: Cumplido lo ordenado, regresen las diligencias al Despacho para fijar fecha y hora para emitir por escrito la decisión de segunda instancia.

QUINTO: Prevéngase a las partes, que las alegaciones se entenderán recibidas oportunamente al correo de la Secretaría de la Sala, en día y hora hábil, esto es, de lunes a viernes de 08:00 am a 05:00 pm únicamente.

SEXTO: Finalmente, se advierte que de conformidad con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, se dictara providencia exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
SALA LABORAL

MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado Sustanciador
MARIA NELLY FLOREZ CELIS VS COLPENSIONES
RADICADO: 014-2020-00021-01

Bogotá D.C., primero (01) de junio de dos mil veintidós (2022)

AUTO

De conformidad con lo previsto el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, y previo a adelantar la audiencia de que trata el artículo 82 del CPT y SS, el suscrito Magistrado,

RESUELVE:

PRIMERO: ADMITIR el recurso de APELACIÓN formulado contra la sentencia proferida en primera instancia, así como el GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA a favor de COLPENSIONES.

SEGUNDO: CORRER TRASLADO, a las partes por el término de CINCO (5) DÍAS A CADA UNA, contados a partir de la notificación por estado de esta decisión, para que presenten sus alegaciones por escrito, si a bien lo tienen, iniciando por el(los) apelante(s), y una vez vencido el término anterior siguiendo por los no apelantes.

TERCERO: Los escritos deberán ser remitidos **ÚNICAMENTE** al correo electrónico de la Secretaria de esta Sala: **secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co**. Radicados los respectivos escritos, manténgase en Secretaría a disposición de las partes.

CUARTO: Cumplido lo ordenado, regresen las diligencias al Despacho para fijar fecha y hora para emitir por escrito la decisión de segunda instancia.

QUINTO: Prevéngase a las partes, que las alegaciones se entenderán recibidas oportunamente al correo de la Secretaría de la Sala, en día y hora hábil, esto es, de lunes a viernes de 08:00 am a 05:00 pm únicamente.

SEXTO: Finalmente, se advierte que de conformidad con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, se dictara providencia exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
SALA LABORAL

MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado Sustanciador
MARÍA TERESA TOVAR ROJAS VS COLPENSIONES
RADICADO: 017-2019-00676-01

Bogotá D.C., primero (01) de junio de dos mil veintidós (2022)

AUTO

De conformidad con lo previsto el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, y previo a adelantar la audiencia de que trata el artículo 82 del CPT y SS, el suscrito Magistrado,

RESUELVE:

PRIMERO: ADMITIR el Grado Jurisdiccional de Consulta a favor de la parte DEMANDADA.

SEGUNDO: CORRER TRASLADO, a las partes por el término COMÚN de CINCO (5) DÍAS, contados a partir de la notificación por estado de esta decisión, para que presenten sus alegaciones por escrito, si a bien lo tienen.

TERCERO: Los escritos deberán ser remitidos **ÚNICAMENTE** al correo electrónico de la Secretaria de esta Sala: **secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co**. Radicados los respectivos escritos, manténgase en Secretaría a disposición de las partes.

CUARTO: Cumplido lo ordenado, regresen las diligencias al Despacho para fijar fecha y hora para emitir por escrito la decisión de segunda instancia.

QUINTO: Prevéngase a las partes, que las alegaciones se entenderán recibidas oportunamente al correo de la Secretaría de la Sala, en día y hora hábil, esto es, de lunes a viernes de 08:00 am a 05:00 pm únicamente.

SEXTO: Finalmente, se advierte que de conformidad con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, se dictara providencia exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
SALA LABORAL

MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado Sustanciador
HILDA MARÍA CONSUELO JIMENEZ REYES VS COLPENSIONES Y OTRO
RADICADO: 033-2020-00489-01

Bogotá D.C., primero (01) de junio de dos mil veintidós (2022)

AUTO

De conformidad con lo previsto el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, y previo a adelantar la audiencia de que trata el artículo 82 del CPT y SS, el suscrito Magistrado,

RESUELVE:

PRIMERO: ADMITIR el recurso de APELACIÓN formulado contra la sentencia proferida en primera instancia, así como el GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA a favor de COLPENSIONES.

SEGUNDO: CORRER TRASLADO, a las partes por el término de CINCO (5) DÍAS A CADA UNA, contados a partir de la notificación por estado de esta decisión, para que presenten sus alegaciones por escrito, si a bien lo tienen, iniciando por el(los) apelante(s), y una vez vencido el término anterior siguiendo por los no apelantes.

TERCERO: Los escritos deberán ser remitidos **ÚNICAMENTE** al correo electrónico de la Secretaria de esta Sala: **secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co**. Radicados los respectivos escritos, manténgase en Secretaría a disposición de las partes.

CUARTO: Cumplido lo ordenado, regresen las diligencias al Despacho para fijar fecha y hora para emitir por escrito la decisión de segunda instancia.

QUINTO: Prevéngase a las partes, que las alegaciones se entenderán recibidas oportunamente al correo de la Secretaría de la Sala, en día y hora hábil, esto es, de lunes a viernes de 08:00 am a 05:00 pm únicamente.

SEXTO: Finalmente, se advierte que de conformidad con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, se dictara providencia exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
SALA LABORAL

MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado Sustanciador
CALROS ESTEBAN ORTEGA SANTAMARIA VS COLPENSIONES Y OTROS
RADICADO: 031-2021-00306-01

Bogotá D.C., primero (01) de junio de dos mil veintidós (2022)

AUTO

De conformidad con lo previsto el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, y previo a adelantar la audiencia de que trata el artículo 82 del CPT y SS, el suscrito Magistrado,

RESUELVE:

PRIMERO: ADMITIR el recurso de APELACIÓN formulado contra la sentencia proferida en primera instancia, así como el GRADO JURISDICCIONAL DE CONSULTA a favor de COLPENSIONES.

SEGUNDO: CORRER TRASLADO, a las partes por el término de CINCO (5) DÍAS A CADA UNA, contados a partir de la notificación por estado de esta decisión, para que presenten sus alegaciones por escrito, si a bien lo tienen, iniciando por el(los) apelante(s), y una vez vencido el término anterior siguiendo por los no apelantes.

TERCERO: Los escritos deberán ser remitidos **ÚNICAMENTE** al correo electrónico de la Secretaria de esta Sala: **secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co**. Radicados los respectivos escritos, manténgase en Secretaría a disposición de las partes.

CUARTO: Cumplido lo ordenado, regresen las diligencias al Despacho para fijar fecha y hora para emitir por escrito la decisión de segunda instancia.

QUINTO: Prevéngase a las partes, que las alegaciones se entenderán recibidas oportunamente al correo de la Secretaría de la Sala, en día y hora hábil, esto es, de lunes a viernes de 08:00 am a 05:00 pm únicamente.

SEXTO: Finalmente, se advierte que de conformidad con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, se dictara providencia exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
SALA LABORAL

MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado Sustanciador
WALTER TAUTA SANDOVAL VS ALVARO STIVEN GUERRERO LÓPEZ Y OTROS
RADICADO: 007-2019-00060-01

Bogotá D.C., primero (01) de junio de dos mil veintidós (2022)

AUTO

De conformidad con lo previsto el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, y previo a adelantar la audiencia de que trata el artículo 82 del CPT y SS, el suscrito Magistrado,

RESUELVE:

PRIMERO: ADMITIR el recurso de APELACIÓN formulado contra la sentencia proferida en primera instancia.

SEGUNDO: CORRER TRASLADO, a las partes por el término de CINCO (5) DÍAS A CADA UNA, contados a partir de la notificación por estado de esta decisión, para que presenten sus alegaciones por escrito, si a bien lo tienen, iniciando por el(los) apelante(s), y una vez vencido el término anterior siguiendo por los no apelantes.

TERCERO: Los escritos deberán ser remitidos **ÚNICAMENTE** al correo electrónico de la Secretaria de esta Sala: **secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co**. Radicados los respectivos escritos, manténgase en Secretaría a disposición de las partes.

CUARTO: Cumplido lo ordenado, regresen las diligencias al Despacho para fijar fecha y hora para emitir por escrito la decisión de segunda instancia.

QUINTO: Prevéngase a las partes, que las alegaciones se entenderán recibidas oportunamente al correo de la Secretaría de la Sala, en día y hora hábil, esto es, de lunes a viernes de 08:00 am a 05:00 pm únicamente.

SEXTO: Finalmente, se advierte que de conformidad con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, se dictara providencia exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado

REPÚBLICA DE COLOMBIA
TRIBUNAL SUPERIOR DE BOGOTÁ
SALA LABORAL

MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado Sustanciador
JAVIER ERNESTO MATTA IBARRA VS COLPENSIONES Y OTROS
RADICADO: 039-2019-00064-02

Bogotá D.C., primero (01) de junio de dos mil veintidós (2022)

AUTO

De conformidad con lo previsto el artículo 15 del Decreto 806 de 2020, y previo a adelantar la audiencia de que trata el artículo 82 del CPT y SS, el suscrito Magistrado,

RESUELVE:

PRIMERO: ADMITIR el recurso de APELACIÓN formulado contra el auto proferido en primera instancia.

SEGUNDO: CORRER TRASLADO, a las partes por el término COMÚN de CINCO (5) DÍAS, contados a partir de la notificación por estado de esta decisión, para que presenten sus alegaciones por escrito, si a bien lo tienen.

TERCERO: Los escritos deberán ser remitidos **ÚNICAMENTE** al correo electrónico de la Secretaria de esta Sala: **secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co**. Radicados los respectivos escritos, manténgase en Secretaría a disposición de las partes.

CUARTO: Cumplido lo ordenado, regresen las diligencias al Despacho para fijar fecha y hora para emitir por escrito la decisión de segunda instancia.

QUINTO: Prevéngase a las partes, que las alegaciones se entenderán recibidas oportunamente al correo de la Secretaría de la Sala, en día y hora hábil, esto es, de lunes a viernes de 08:00 am a 05:00 pm únicamente.

SEXTO: Finalmente, se advierte que de conformidad con el artículo 18 de la Ley 446 de 1998, se dictara providencia exactamente en el mismo orden en que hayan pasado los expedientes al despacho.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA
Magistrado

Exp. No. 000 2022 00536 01

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D. C.

SALA LABORAL

Magistrado Sustanciador: MILLER ESQUIVEL GAITÁN

CONFLICTO DE COMPETENCIA ENTRE EL JUZGADO SEGUNDO LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ Y LA SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD DELEGADA PARA LA FUNCIÓN JURISDICCIONAL

Bogotá D. C., veintisiete (27) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Procede la Corporación a decidir el conflicto de competencia, negativo, surgido entre el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá y la Superintendencia Nacional de Salud Delegada para la Función Jurisdiccional para conocer de la demanda ordinaria laboral promovida por la Fundación Hospital Infantil Universitario de San José contra La Nación - Ministerio de Salud y Protección Social-.

A N T E C E D E N T E S

La Fundación Hospital Infantil Universitario de San José, por intermedio de apoderada judicial, promovió demanda ordinaria laboral en contra de La Nación - Ministerio de Salud y Protección Social, para obtener el reintegro de $12.571.495,57, descontados por el Consorcio Fidufosyga 2005 en el giro de recursos realizado a la Fundación según lo dispuesto en la Resolución 2675 del 6 de julio de 2011. Como fundamento de su pretensión manifestó que dicha suma no corresponde a pagos dobles y que los servicios de salud fueron efectivamente prestados a pacientes víctimas de accidentes de tránsito debidamente identificadas mediante la comunicación ECT-5211-11, radicada ante el Fosyga.

Por reparto inicialmente le correspondió el asunto al Juzgado Décimo Municipal de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá, quien por auto del 16 de junio de 2017 (fls. 165y 266) declaró su falta de competencia para conocerlo, con fundamento en el artículo 7 del CPT y SS, de manera que ordenó el envío del expediente a los juzgados laborales del circuito de esta ciudad.

Seguidamente, el proceso fue repartido al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá, quien mediante proveído del 25 de noviembre de 2019, declaró su falta de competencia y remitió el expediente a la Superintendencia Nacional de Salud, con fundamento en el auto del 12 de abril de 2018 proferido por la Sala Plena de la Corte Suprema de Justicia; decisión en que se manifestó que las demandas relativas a los actos de "glosar, devolver o rechazar las solicitudes de recobro por servicios, medicamentos o tratamientos no incluidos en el Plan Obligatorio de Salud – NO POS, (…) constituye acto administrativo, particular y concreto, cuya controversia ha de zanjarse en el marco de la competencia general de la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo prevista en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011" y el literal f del artículo 41 de la Ley 1122 de 20078, modificado por el artículo 6 de la Ley 1949 de 2019 , en el que se dispuso que la "Superintendencia Nacional de Salud puede conocer, a prevención, como juez administrativo, de los litigios atinentes a los recobros referidos".

Recibido el proceso por la Superintendencia Nacional de Salud, a través de auto del 16 de diciembre de 2019 declaró su falta de competencia para conocer del presente asunto y suscitó un conflicto negativo de jurisdicciones (fls. 355 y 356), por lo que procedió a remitir el expediente al Consejo Superior de la Judicatura, argumentando que la competencia asignada a la Supersalud para conocer en sede jurisdiccional de los asuntos descritos en los artículos 41 de la Ley 1122 de 2007 y 126 de la Ley 1438 de 2011, no excluye a las autoridades de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social, ya que la competencia "es de carácter preventivo y no privativa o exclusiva".

El 2 de febrero de 2021, la Comisión Nacional de Disciplina Judicial envió el expediente a la Honorable Corte Constitucional, quien, por auto 006 del 19 de enero de 2022 se declaró inhibida para decidir el conflicto planteado y ordenó remitir las diligencias a esta Corporación para que se pronuncie del mismo, con fundamento en que "[…] la Ley 1122 de 2007 establece que la autoridad que conoce de los recursos de apelación interpuestos contra las decisiones de la Supersalud es la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial y, en todo caso, la jurisprudencia constitucional ha sostenido que cuando la Supersalud ejerce funciones jurisdiccionales "desplaza, a prevención, a los jueces laborales del circuito (o civiles del circuito en los lugares en que no existen los primeros), cuya segunda instancia está asignada a la Sala Laboral de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. En ese orden de ideas, las decisiones judiciales de la Superintendencia Nacional de Salud serán apelables ante las Salas Laborales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, como superiores jerárquicos de los jueces que fueron desplazados por la referida entidad administrativa de su función de decidir en primera instancia" En consecuencia, la norma aplicable para dirimir este tipo de controversias es el inciso 5° del artículo 139 del Código General del Proceso, según el cual: "cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempeñen funciones jurisdiccionales, o entre una de estas y un juez, deberá resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada".

Así, determinó la Corte Constitucional que los conflictos entre la Superintendencia Nacional de Salud y los Jueces Laborales son controversias al interior de la jurisdicción ordinaria, razón por la cual en el sub examine se configura un conflicto de competencia, mas no uno de jurisdicción.

C O N S I D E R A C I O N E S

De conformidad con lo estipulado en el numeral 5°, literal B, del artículo 15 del CPT y SS, y atendiendo lo dispuesto por el Tribunal Constitucional en providencia del 19 de enero de 2022, corresponde a este Colegiado resolver el conflicto negativo de competencia suscitado entre el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá y la Superintendencia Nacional de Salud Delegada para la Función Jurisdiccional.

Así, lo primero sea indicar que el conflicto que debe resolver la Sala se circunscribe en definir a qué autoridad le compete decidir el litigio en el que

la IPS accionante reclama la devolución de $12.571.495,57 descontados por La Nación - Ministerio de Salud y Protección Social- aduciendo pagos dobles.

Al respecto, cumple señalar que la Superintendencia Nacional de Salud Delegada para la Función Jurisdiccional en manera alguna desconoce que el literal f) del artículo 126 de la Ley 1438 de 2011[1] *le asigna competencia para conocer de "Conflictos derivados de las devoluciones o glosas a las facturas entre entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud", supuesto en el que encuadran los pedimentos de la demanda formulada por la Fundación Hospital Infantil Universitario de San José contra de La Nación - Ministerio de Salud y Protección Social-. El reparo de la Supersalud se centra en que, la asignación de dicha competencia, no excluye de su conocimiento a los jueces ordinarios laborales, ya que "la competencia es de carácter concurrente con la justicia ordinaria laboral y no privativa, y su conocimiento compete, tanto al juez laboral, como a la Superintendencia Nacional de Salud, a prevención".*

La Sala recuerda que la expresión "a prevención" significa "que un juez conoce de una causa con exclusión de otros que eran igualmente competentes, por habérseles anticipado en el conocimiento de ella"[2]*. Esto significa que, ante la concurrencia de autoridades judiciales competentes para conocer de un determinado asunto, al haberse radicado ante una de ellas la competencia para conocer, excluye a las demás en la definición del asunto.*

Empero, debe precisar la Sala que en el caso bajo estudio no nos encontramos ante dos autoridades competentes para conocer de un mismo asunto; por el contrario, la competencia para conocer del litigio aquí planteado es del resorte exclusivo de la Superintendencia Nacional de Salud Delegada para la Función Jurisdiccional, como a continuación pasa a explicarse.

Conforme al numeral 4º del artículo 2º del CPT y SS, la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y de seguridad social conoce de "las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten

---

[1] *Norma vigente al momento de radicarse la demanda.*
[2] *Corte Constitucional, Auto No. 044 de 1995.*

entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos".

Sobre el particular, debe señalarse que los recobros judiciales contra el Estado son litigios originados en un servicio prestado, y no en uno pendiente de ser cubierto por el sistema general de seguridad social, sin que tampoco pueda considerarse que La Nación - Ministerio de Salud y Protección Social- sea una entidad prestadora de servicios en salud como las EPS o las IPS, toda vez que dentro de las funciones enlistadas en el artículo 2º del Decreto 4107 del 2 de noviembre de 2011 no se le adjudicó ninguna en ese sentido.

De lo anterior, emerge con claridad que el numeral 4º del artículo 2 del CPT y SS (en la forma como fue modificado por el artículo 622 del CGP) no es aplicable a las controversias relacionadas con recobros, devoluciones o glosas a las facturas, que se susciten entre las IPS y La Nación - Ministerio de Salud y Protección Social-, en la medida en que, como ya se indicó, no corresponden a litigios que, en estricto sentido, giren en torno a la prestación de servicios de la seguridad social. Además, porque se trata de controversias presentadas únicamente entre entidades administradoras, relativas a la financiación de un servicio que ya fue cubierto. Por ello el legislador confirió a la Superintendencia Nacional de Salud funciones jurisdiccionales para conocer y fallar en derecho, conforme a las facultades propias de un juez, en determinados asuntos de seguridad social en salud, entre los que se encuentran aquellos derivados de las devoluciones o glosas a las facturas.

Nótese que la reclamación de la IPS accionante se encamina a la devolución de una suma descontada por el Consorcio Fidufosyga 2005 aduciendo un doble pago; luego, el litigio se circunscribe a la financiación de un servicio que ya se prestó.

En consideración a lo anterior y sin lugar a más disquisiciones, se concluye que la presente controversia debe ser conocida por la Superintendencia Nacional de Salud Delegada para la Función Jurisdiccional, por lo que se

dispondrá la remisión de las diligencias a esa autoridad y comunicar de lo decidido al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de esta ciudad.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., Sala Tercera de Decisión de la Sala Laboral,

R E SU E L V E

Primero.- *Dirimir el conflicto de competencia negativo, surgido entre el Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá y la Superintendencia Nacional de Salud Delegada para la Función Jurisdiccional para conocer de la demanda promovida por la Fundación Hospital Infantil Universitario de San José contra La Nación - Ministerio de Salud y Protección Social- a fin de obtener el reintegro de $12.571.495,57, en el sentido de atribuir el conocimiento del mismo a la Superintendencia Nacional de Salud Delegada para la Función Jurisdiccional.*

Segundo.- *Por secretaría, remítanse las diligencias a la autoridad que debe conocer del proceso, y comuníquese lo aquí decidido al Juzgado Segundo Laboral del Circuito de Bogotá.*

Notifíquese y Cúmplase.







JOSÉ WILLIAM GONZÁLEZ ZULUAGA
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA LABORAL

Bogotá D.C., primero (1º) de junio de dos mil veintidós (2022).

Los apoderados de las **partes demandada y el demandante DORA INES GÓMEZ** interpusieron recursos extraordinarios de casación dentro del término establecido, contra el fallo proferido en ésta instancia el nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), dado su resultado desfavorable.

Para resolver la viabilidad del recurso de casación interpuesto se considera:

El Artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establece que: "*sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente*."

Tal cuantía se determina bajo el concepto de "*interés jurídico para recurrir*", que de forma clara la H. Corte Suprema de Justicia lo ha interpretado como el perjuicio que sufre la parte afectada con la sentencia impugnada[1], definiéndose para el demandante, las pretensiones que no hubieran sido acogidas en segunda instancia y para la demandada las condenas impuestas, en ambos casos teniendo en cuenta los recursos de apelación que hubieran sido interpuestos.

En el presente asunto la sentencia de primera instancia condenó a la demandada a reconocer y pagar pensión de sobrevivientes a favor de la señora Flora Esther Ramírez en un 74,87% de la mesada pensional que venía percibiendo el señor Luis Felipe Silva Barreto (QEPD) y a la señora Dora Inés Gómez en un 25,13% a partir del 18 de marzo de 2016, valores a los que deberán hacerse los reajustes legales correspondientes, asimismo, autorizó a la demandada a realizar los respectivos descuentos en favor del Sistema General en Salud y declaró no probados los hechos sustento de las excepciones propuestas por la demandada; decisión que fue apelada por las partes y revocada en segunda instancia por esta Corporación.

Ahora, para cuantificar el interés jurídico para acudir en casación por parte de la demandada debemos decir que estas recaen sobre las condenas que le fueron impuestas con la sentencia de segunda instancia, tales como:

[1] Al respecto de tiempo atrás la Corte Suprema de Justicia ha manifestado y reiterado: "*el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, que tratándose del demandado como el caso en estudio, se traduce en la cuantía de las resoluciones que económicamente lo perjudiquen y, respecto del demandante, el monto de las pretensiones que Radicación n.° 73011 4 hubiesen sido negadas por la sentencia que se intenta impugnar, teniendo en cuenta la conformidad o inconformidad del interesado respecto del fallo de primer grado"* Auto AL1514-2016 del 16 de marzo de 2016, Sala de Casación Laboral. M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.

Tabla Retroactivo Pensional					
Fecha inicial	**Fecha final**	**Incr. %**	**Valor mesada calculada**	**N°. Mesada**	**Subtotal**
18/03/16	31/12/16	6,77%	$ 2.959.099,00	11	$ 33.832.365,2
01/01/17	31/12/17	5,75%	$ 3.129.247,00	14	$ 43.809.458,0
01/01/18	31/12/18	4,09%	$ 3.257.233,20	14	$ 45.601.264,8
01/01/19	31/12/19	3,18%	$ 3.360.813,22	14	$ 47.051.385,1
01/01/20	31/12/20	3,80%	$ 3.488.524,12	14	$ 48.839.337,7
01/01/21	**09/12/21**	1,60%	$ 3.544.340,51	13,30	$ 47.139.728,7
		Total retroactivo pensional			**$ 266.273.540**

Por lo anterior, una vez realizadas las operaciones aritméticas correspondientes, se observa que la condena impuesta asciende a la suma de **$ 266.273.540** valor que supera los 120 salarios mínimos exigidos para recurrir en casación.

Por otra parte, en lo que respecta al recurso extraordinario de casación interpuesto por el apoderado de la parte demandante DORA INES GÓMEZ debemos decir que este recae sobre el porcentaje de la pensión de sobrevivientes reconocido y apelado en la sentencia de primera instancia y revocado en su integridad en segunda instancia, es decir, el 50% de la pensión de sobreviviente, suma que arrojaría $**133.136.770,** valor que supera los 120 salarios mínimos exigidos para recurrir en casación.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala de Decisión Laboral,

RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER los recursos extraordinarios de casación impetrados por las partes demandada y la demandante DORA INES GÓMEZ.

SEGUNDO: En firme el presente proveído, prosígase con el trámite correspondiente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado

ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

H. MAGISTRADO DR. **DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Me permito pasar a su despacho el expediente No. **11001310502420160056402,** informándole que los apoderados de las **partes demandada y demandante DORA INES GÓMEZ,** dentro del término de ejecutoria interpusieron recursos extraordinarios de casación en contra del fallo de segunda instancia dictado por esta Corporación el nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).

Lo anterior para lo pertinente.

Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintidós (2022).

LINA PAOLA JIMÉNEZ ROMERO
Oficial Mayor

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA LABORAL

Bogotá D.C., primero (1º) de junio de dos mil veintidós (2022).

El apoderado de la **parte demandante** interpuso recurso extraordinario de casación dentro del término de ejecutoria, contra el fallo proferido en esta instancia el treinta y uno (31) de enero de dos mil veintidós (2022), dado el resultado desfavorable.

Para resolver la viabilidad del recurso de casación interpuesto se considera

El Artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establece que: "*sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente*."

Tal cuantía se determina bajo el concepto de "*interés jurídico para recurrir*", que de forma clara la H. Corte Suprema de Justicia lo ha interpretado como el perjuicio que sufre la parte afectada con la sentencia impugnada[1], definiéndose para el demandante, las pretensiones que no hubieran sido acogidas en segunda instancia y para la demandada las condenas impuestas, en ambos casos teniendo en cuenta los recursos de apelación que hubieran sido interpuestos.

En el presente asunto la sentencia de primera instancia declaró que Servicios Postales Nacionales S.A. era el verdadero empleador del demandante, asimismo, declaró que el 7 de mayo de 2015 el demandante era sujeto de estabilidad laboral reforzada y declaró ineficaz la terminación del contrato de trabajo realizada el mismo día y que la pasiva no logró probar una causa de terminación diferente a las limitaciones de salud del demandante.

Por otra parte, ordenó a Servicios Postales Nacionales S.A. a reintegrar al demandnate a un cargo de igual o mejor categoría del que venia desempeñando para el 7 de mayo de 2015, acorde con sus condiciones de salud, para lo cual debía de ser capacitado sin desmejorar sus condiciones laborales y condenó a Servicios Postales Nacionales S.A. al pago de todos los salarios y prestaciones sociales adeudados desde el despido, teniendo en cuenta las tablas de ajuste salarial para casa año y el pago de 180 días de salario por concepto de indemnización dadas las condiciones expuestas de la terminación del contrato de trabajo.

[1] Al respecto de tiempo atrás la Corte Suprema de Justicia ha manifestado y reiterado: "*el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, que tratándose del demandado como el caso en estudio, se traduce en la cuantía de las resoluciones que económicamente lo perjudiquen y, respecto del demandante, el monto de las pretensiones que Radicación n.° 73011 4 hubiesen sido negadas por la sentencia que se intenta impugnar, teniendo en cuenta la conformidad o inconformidad del interesado respecto del fallo de primer grado"* Auto AL1514-2016 del 16 de marzo de 2016, Sala de Casación Laboral. M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.

Adicionalmente, declaró solidariamente responsable a Optimizar Servicios Temporales S.A. En Liquidación de todas y cada una de las condenas impuestas a Servicios Postales Nacionales S.A. y declaró no probadas las excepciones de prescripción, cobro de lo no debido, inexistencia de la obligación y falta de legitimación en la causa por pasiva propuesta por las demandadas; decisión que fue apelada por las partes demandadas y revocada en segunda instancia por esta Corporación.

Para cuantificar el interés jurídico del recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandante, debemos decir que estas recaen sobre las pretensiones de la demanda que no le fueron reconocidas o en su defecto reconocidas en menores proporciones a las solicitadas, es decir las siguientes sumas de dinero:

Concepto	**Valor**
Salarios dejados de percibir desde el despido	$167.500.000,00
Cesantías dejadas de percibir	$14.152.777,78
Intereses Cesantías dejadas de percibir	$1.698.333,33
Vacaciones dejadas de percibir	$7.076.388,89
Primas de servicio	$14.152.777,78
Indemnización de 180 días	$15.000.000,00
Total	**$219.580.277,78**

Teniendo en cuenta el cálculo anterior lo que debió pagársele al demandante en caso de una eventual condena a la demandada asciende a la suma de **$219.580.277,78** suma que supera los 120 salarios mínimos exigidos para recurrir en casación.

A folio 218 obra poder conferido a la Doctora GABRIELA MORALES OROZCO para actuar como apoderada judicial de la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala de Decisión Laboral,

RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandante.

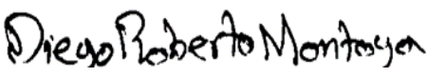
SEGUNDO: Reconózcase personería a la doctora **GABRIELA MORALES OROZCO**, identificada con la cédula de ciudadanía número 1.032.443.041 y tarjeta profesional número 233.311 del C. S de la J, para representar judicialmente a la **parte demandante** en los términos y para los efectos del poder obrante a folio 218.

TERCERO: En firme el presente proveído, prosígase con el trámite correspondiente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

H. MAGISTRADO DR. **DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Me permito pasar a su despacho el expediente No. **11001310503320180027001,** informándole que la apoderada de la parte demandante interpuso recurso extraordinario de casación, dentro del término de ejecutoria contra la sentencia proferida por esta Corporación el treinta y uno (31) de enero de dos mil veintidós (2022).

Asimismo, le informo que a folio 218 obra poder conferido a la Doctora GABRIELA MORALES OROZCO para actuar como apoderada judicial de la parte demandante.

Lo anterior para lo pertinente.

Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintidós (2022).

LINA PAOLA JIMÉNEZ ROMERO
Oficial Mayor

LPJR

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA LABORAL

Bogotá D.C., primero (1º) de junio de dos mil veintidós (2022).

El apoderado de la **parte demandante** interpuso, recurso extraordinario de casación dentro del término de ejecutoria, contra el fallo proferido en esta instancia el nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), dado el resultado desfavorable.

Para resolver la viabilidad del recurso de casación interpuesto se considera

El Artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establece que: "*sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente*."

Tal cuantía se determina bajo el concepto de "*interés jurídico para recurrir*", que de forma clara la H. Corte Suprema de Justicia lo ha interpretado como el perjuicio que sufre la parte afectada con la sentencia impugnada[1], definiéndose para el demandante, las pretensiones que no hubieran sido acogidas en segunda instancia y para la demandada las condenas impuestas, en ambos casos teniendo en cuenta los recursos de apelación que hubieran sido interpuestos.

En el presente asunto la sentencia de primera instancia condenó a la demandada a reconocer y pagar a favor de la demandante pensión de vejez como beneficiaria del régimen de transición previsto en el articulo 36 de la Ley 100 de 1993 en concordancia con las previsiones de edad y monto del acuerdo 049 de 1990 en cuantía equivalente al 90% del ingreso base de liquidación a partir del 1 de agosto de 2020 en cuantía inicial de $1.018.348 mensuales, asimismo, autorizó a Colpensiones a descontar del retroactivo los aportes al sistema de seguridad social en salud.

Por otra parte, condenó a la demandada al pago del retroactivo causado desde el 1 de agosto de 2020 debidamente indexado hasta el momento de su pago, con las mesadas adicionales de junio y diciembre correspondientes y absolvió del pago de los intereses moratorios de que trata el articulo 141 de la Ley 100 de 1993; decisión que fue apelada por las partes y revocada parcialmente en segunda instancia por esta Corporación.

Para cuantificar el interés jurídico del recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandante, debemos decir que estas recaen sobre las pretensiones de

[1] Al respecto de tiempo atrás la Corte Suprema de Justicia ha manifestado y reiterado: "*el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, que tratándose del demandado como el caso en estudio, se traduce en la cuantía de las resoluciones que económicamente lo perjudiquen y, respecto del demandante, el monto de las pretensiones que Radicación n.º 73011 4 hubiesen sido negadas por la sentencia que se intenta impugnar, teniendo en cuenta la conformidad o inconformidad del interesado respecto del fallo de primer grado"* Auto AL1514-2016 del 16 de marzo de 2016, Sala de Casación Laboral. M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.

la demanda que no le fueron reconocidas o en su defecto reconocidas en menores proporciones a las solicitadas.

Por lo anterior, luego de haber realizado las operaciones aritméticas correspondientes se observa lo siguiente:

Pretensiones	
Reparación del daño por afectación a sus derechos constitucional y convencionalmente protegidos al habeas data, seguridad social, buena fe-confianza legítima, mínimo vital y dignidad humana de la accionante.(50 SMLMV) tal como fueron solicitados en el escrito de demanda	$ 45.426.300
Total	**$ 45.426.300**

Teniendo en cuenta el cálculo anterior lo que debió pagársele a la demandante en caso de una eventual condena a la demandada asciende a la suma de **$ 45.426.300** suma que no supera los 120 salarios mínimos exigidos para recurrir en casación.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala de Decisión Laboral,

RESUELVE

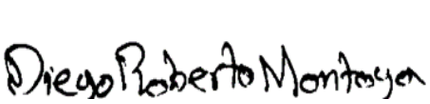
PRIMERO: NEGAR el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandante.

SEGUNDO: En firme el presente proveído, prosígase con el trámite correspondiente.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

H. MAGISTRADO DR. **DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO**

Me permito pasar a su despacho el expediente No. **11001310503820200030901,** informándole que el apoderado de la parte demandante dentro del término de ejecutoria interpuso recurso extraordinario de casación contra la sentencia proferida por esta Corporación el nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).

Lo anterior para lo pertinente.

Bogotá D.C., veinticinco (25) de mayo de dos mil veintidós (2022).

LINA PAOLA JIMÉNEZ ROMERO
Oficial Mayor

LPJR

H. MAGISTRADO DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO.

Expediente N° **110013105-004 2018 00450 01.**

Me permito pasar a su Despacho el presente proceso informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral - Sala de Descongestión; donde **CASA** la Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Laboral de fecha 15 de octubre de 2019.

Bogotá D.C. 1 de junio de 2022.

Yeimy Caicedo Camelo.
Citadora Grado IV.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., 1º de junio de 2022

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver en esta Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado Ponente.

H. MAGISTRADO DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO.

Expediente N° **110013105-011 2015 00279 01.**

Me permito pasar a su Despacho el presente proceso informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral - Sala de Descongestión; donde **CASA** la Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Laboral de fecha 16 de marzo de 2016.

Bogotá D.C. 1 de junio de 2022.

Yeimy Caicedo Camelo.
Citadora Grado IV.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C. 1º de junio de 2022

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver en esta Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado Ponente.

H. MAGISTRADO DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO.

Expediente N° **110013105-002 2017 00302 01.**

Me permito pasar a su Despacho el presente proceso informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral ; donde **NO CASA** la Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Laboral de fecha 09 de abril de 2019.

Bogotá D.C. 1º de junio de 2022.

Yeimy Caicedo Camelo.
Citadora Grado IV.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C. 1º de junio de 2022

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver en esta Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado Ponente.

H. MAGISTRADO DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO.

Expediente N° **110013105-017 2017 00472 01.**

Me permito pasar a su Despacho el presente proceso informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral - Sala de Descongestión; donde **CASA** la Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Laboral de fecha 27 de agosto de 2019.

Bogotá D.C. 1o de junio de 2022.

Yeimy Caicedo Camelo.
Citadora Grado IV.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C. 1º de junio de 2022

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver en esta Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado Ponente.

H. MAGISTRADO DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO.

Expediente N° **110013105-016 2015 00334 01.**

Me permito pasar a su Despacho el presente proceso informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral - Sala de Descongestión; donde **CASA** la Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Laboral de fecha 14 de febrero de 2017.

Bogotá D.C. 1o de junio de 2022.

Yeimy Caicedo Camelo.
Citadora Grado IV.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., 1º de junio de 2022

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver en esta Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado Ponente.

H. MAGISTRADO DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO.

Expediente N° **110013105-012 2017 00205 01.**

Me permito pasar a su Despacho el presente proceso informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral - Sala de Descongestión; donde **CASA** la Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Laboral de fecha 19 de febrero de 2019.

Bogotá D.C. 1º de junio de 2022.

Yeimy Caicedo Camelo.
Citadora Grado IV.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C. 1º de junio de 2022

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver en esta Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado Ponente.

H. MAGISTRADO DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO.

Expediente N° **110013105-030 2016 00613 01.**

Me permito pasar a su Despacho el presente proceso informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral - Sala de Descongestión; donde **NO CASA** la Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Laboral de fecha 14 de mayo de 2019.

Bogotá D.C. 1º de junio de 2022.

Yeimy Caicedo Camelo.
Citadora Grado IV.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C. 1º de junio de 2022

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver en esta Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado Ponente.

H. MAGISTRADO DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO.

Expediente N° **110013105-020 2018 00203 01.**

Me permito pasar a su Despacho el presente proceso informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral - Sala de Descongestión; donde **NO CASA** la Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Laboral de fecha 03 de marzo de 2020.

Bogotá D.C. 1º de junio de 2022.

Yeimy Caicedo Camelo.
Citadora Grado IV.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C. 1º de junio de 2022

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver en esta Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado Ponente.

H. MAGISTRADO DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO.

Expediente N° **110013105-003 2017 00567 01.**

Me permito pasar a su Despacho el presente proceso informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral - Sala de Descongestión; donde **NO CASA** la Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Laboral de fecha 25 de septiembre de 2018.

Bogotá D.C. 1º de junio de 2022.

Yeimy Caicedo Camelo.
Citadora Grado IV.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C. 1º de junio de 2022

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver en esta Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado Ponente.

H. MAGISTRADO DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO.

Expediente N° **110013105-018 2017 00097 01.**

Me permito pasar a su Despacho el presente proceso informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral - Sala de Descongestión; donde **NO CASA** la Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Laboral de fecha 10 de julio de 2018.

Bogotá D.C. 1º de junio de 2022.

Yeimy Caicedo Camelo.
Citadora Grado IV.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C. 1º de junio de 2022

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver en esta Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado Ponente.

H. MAGISTRADO DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO.

Expediente N° **110013105-007 2018 00324 01.**

Me permito pasar a su Despacho el presente proceso informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral - Sala de Descongestión; donde **CASA** la Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Laboral de fecha 13 de agosto de 2019.

Bogotá D.C. 1º de junio de 2022.

Yeimy Caicedo Camelo.
Citadora Grado IV.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C. 1º de junio de 2022

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver en esta Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado Ponente.

H. MAGISTRADO DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO.

Expediente N° **110013105-023 2017 00733 01.**

Me permito pasar a su Despacho el presente proceso informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral - Sala de Descongestión; donde **CASA** la Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Laboral de fecha 13 de agosto de 2019.

Bogotá D.C. 1º de junio de 2022.

Yeimy Caicedo Camelo.
Citadora Grado IV.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C. 1º de junio de 2022

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver en esta Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado Ponente.

H. MAGISTRADO DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO.

Expediente N° **110013105-033 2015 00793 01.**

Me permito pasar a su Despacho el presente proceso informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral - Sala de Descongestión; donde **NO CASA** la Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Laboral de fecha 6 de noviembre de 2018.

Bogotá D.C. 1º de junio de 2022.

Yeimy Caicedo Camelo.
Citadora Grado IV.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C. 1º de junio de 2022

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver en esta Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado Ponente.

H. MAGISTRADO DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO.

Expediente N° **110013105-032 2017 00748 01.**

Me permito pasar a su Despacho el presente proceso informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral - Sala de Descongestión; donde **CASA** la Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Laboral de fecha 26 de febrero de 2019.

Bogotá D.C. 1º de junio de 2022.

Yeimy Caicedo Camelo.
Citadora Grado IV.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C. 1º de junio de 2022

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver en esta Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado Ponente.

H. MAGISTRADO DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO.

Expediente N° **110013105-018 2017 00494 01.**

Me permito pasar a su Despacho el presente proceso informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral - Sala de Descongestión; donde **NO CASA** la Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Laboral de fecha 30 de julio de 2020.

Bogotá D.C. 1º de junio de 2022.

Yeimy Caicedo Camelo.
Citadora Grado IV.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C. 1º de junio de 2022

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver en esta Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado Ponente.

H. MAGISTRADO DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO.

Expediente N° **110013105-019 2016 00547 01.**

Me permito pasar a su Despacho el presente proceso informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral - Sala de Descongestión; donde **NO CASA** la Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Laboral de fecha 29 de octubre de 2019.

Bogotá D.C. 1º de junio de 2022.

Yeimy Caicedo Camelo.
Citadora Grado IV.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C. 1º de junio de 2022

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver en esta Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado Ponente.

H. MAGISTRADO DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO.

Expediente N° **110013105-021 2017 00566 01.**

Me permito pasar a su Despacho el presente proceso informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral - Sala de Descongestión; donde **NO CASA** la Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Laboral de fecha 4 de febrero de 2020.

Bogotá D.C. 1º de junio de 2022.

Yeimy Caicedo Camelo.
Citadora Grado IV.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C. 1º de junio de 2022

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver en esta Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado Ponente.

H. MAGISTRADO DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO.

Expediente N° **110013105-005 2016 00391 01.**

Me permito pasar a su Despacho el presente proceso informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia - Sala Laboral - Sala de Descongestión; donde **CASA** la Sentencia proferida por el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá - Sala Laboral de fecha 27 de mayo de 2020.

Bogotá D.C. 1º de junio de 2022.

Yeimy Caicedo Camelo.
Citadora Grado IV.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C. 1º de junio de 2022

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver en esta Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado Ponente.

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.
SALA LABORAL.

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO SONIA ESPERANZA MEDINA CELY CONTRA CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR (RAD. 12 2019 01224 01).

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Vencido el término de traslado otorgado, y habiéndose guardado presentado los alegatos de instancia por ambas partes (fls. 4 a 9), el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, con fundamento en el numeral segundo del artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020, profieren el siguiente,

PROVIDENCIA

Decide la Sala el Recurso de apelación oportunamente interpuesto y debidamente sustentado por el apoderado de la parte demandada, contra el auto proferido por el Juez Primero Laboral del Circuito de Bogotá D.C., dentro de la audiencia llevada a cabo el 4 de marzo de 2022 *(archivo 05 – Grabación de la reunión expediente digital[1])*, por medio del cual resolvió declarar no probada la excepción planteada por

[1] ***Juez (12:38):*** *El despacho procede a continuación entonces, a la etapa de excepciones previas. Teniendo en cuenta que la demandada CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR a través de apoderado judicial, al momento de contestar la demanda interpuso la excepción previa denominada así, "el proceso debe tramitarse como un proceso especial, y no como proceso ordinario", al respecto considera este despacho judicial y le hace saber al señor apoderado de la parte demandada que en proveído de fecha 8 de septiembre de 2020, visible a folio 197 y vuelto, se inadmitió la demanda judicial y se le indicó entre otras razones y falencias al apoderado de la parte actora que precisará en debida forma la clase de proceso que pretende adelantar, por lo que en escrito de subsanación, obrante a folio 293 y siguientes, se advierte en el numeral segundo: "teniendo en cuenta se aclaró que el proceso se trata de un ordinario laboral de primera instancia y no de un mero acoso laboral, debo prescindir de los demandados Margarita Serrano, Lorena Ramírez, y Fredy Parada, en razón a que las pretensiones se encuentran exclusivamente a cargo de la empresa COMPENSAR – CAJA DE COMPENSACIÓN, atendiendo a la observación hecha por este despacho, manifiesto que dando aplicabilidad al artículo 258 Código de procedimiento laboral, y adecuado la demanda, no puede aportar dicha dirección. Así mismo, en el poder y en el escrito de subsanación*

la demandada CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR denominada *"habérsele dado a la demanda un trámite diferente al que corresponde"* .

Inconforme con la decisión, el apoderado de la convocada CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR interpuso recurso de reposición y en subsidio de apelación, manifestando que su representada no desconoce, la demanda fu inadmitida entre otras razones para que la parte demandante precisara la clase de proceso que pretende adelantar y que en la subsanación de la misma aclaró se trata de un trámite ordinario y no de un acoso laboral. Sin embargo consideró, la designación de un trámite procesal no depende de la voluntad de la parte demandante sino de la naturaleza de los hechos que se están discutiendo. Estimó, del escrito de demanda se evidencia, lo que se está discutiendo es si se presentó o no un acoso laboral por parte de COMPENSAR y otras personas que en principio fueron demandadas, en aplicación de la ley 1010 de 2006.

Aludió a la pretensión sexta declarativa contenida en el escrito de subsanación de la demanda, relativa a que se condene a COMPENSAR al pago del 50% de unos costos de tratamiento, por considerar que la entidad permitió que se presentara el acoso laboral, pedimento que a su juicio solo puede ser ventilado en un proceso especial de acoso laboral. Recordó, la ley 1010 de 2006 desarrolla todos los aspectos a tener en cuenta en tratándose de acoso laboral, por lo que más allá de la voluntad de la parte demandante, al presente caso se le debe dar el trámite de un proceso especial reglado en la citada ley y no de un proceso ordinario[2].

---

se observa que la parte demandante manifiesta, y reitera que presenta demanda ordinaria laboral de primera instancia en contra de CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR.

Por todo lo anterior el despacho judicial considera que la excepción propuesta por la demandada, en la forma y términos planteada no está llamada a prosperar, por cuanto en el escrutinio y debate judicial donde se determinará en primera instancia si le asiste o no le asiste razón a la demandante de todas y cada una de las suplicas que como se ha indicado en forma que antecede a través de su apoderada judicial, reitera que el trámite o el proceso que se le debe impartir, el correspondiente pronunciamiento a que haya lugar, es de una decisión a través de un proceso ordinario laboral de primera instancia.

Por todo lo anterior, las razones anteriores son más que suficientes para declarar no probada la excepción en los términos como lo plantea el apoderado de la parte demandada. Así las cosas, en virtud de la decisión los apoderados quedan debidamente notificados en estrados. Teniendo en cuenta que el apoderado de la parte demandada está solicitando el uso de la palabra se le concede para los fines pertinentes.

[2] ***Apoderado demandada (15:48):*** *Muchas gracias señor juez, siendo la oportunidad procesal correspondiente me permito interponer recurso de reposición y en subsidio de apelación conforme al artículo 65 del código procesal del trabajo y de la seguridad social, contra el auto que acaba de*

Al resolver la reposición el Juez *a quo* confirmó su decisión, insistiendo, en la subsanación de la demanda, la parte actora determinó que el proceso corresponde a un ordinario y no a un proceso especial de acoso laboral; añadió que en el decurso del proceso, el juzgado determinará si al demandante le asiste o no razón en sus pretensiones[3]

---

ser proferido en declarar no probada la excepción previa, propuesta por mi defendida de haberle dado el trámite que no corresponde por los siguientes motivos:

Mi representada no es ajena y no desconoce el auto de inadmisión de la demandad, así como el escrito de subsanación de la demandada donde la parte actora hace esta afirmación, que el señor juez acaba de mencionar, donde dice esto no se trata de un simple acoso y que solicita se le dé un trámite ordinal. Ahora, el trámite o la designación de un trámite procesal no está o no corresponde a la voluntad de la parte, sino a la naturaleza de los hechos que se están discutiendo y hago un ejemplo, si se está discutiendo un fuero sindical por más que el apoderado diga que es un proceso ordinario y las pretensiones están encaminadas al reintegro por fuero sindical, necesariamente se debe dar el trámite de fuero sindical, con las formalidades que trae la ley para ello.

Si bien la parte demandante hace unos ajustes en la subsanación de la demanda, de la lectura de la demanda, de las pruebas y de las mismas pretensiones se evidencia que de fondo lo que se está discutiendo en el presente caso es si existió o no existió un acoso laboral por parte de COMPENSAR y otras personas, las que en principio fueron demandadas, y en consecuencia, si hay aplicación de las sanciones contempladas por la ley 1010 de 2006, basta remitirse señor juez, por ejemplo la pretensión sexta declarativa de la subsanación de la demanda, es la que nos ocupa en el presente caso, y se está haciendo la solicitud de que se declare y posteriormente en las pretensiones de condena se condene a COMPENSAR de unos costos de tratamientos por el 50% en la medida que COMPENSAR permitió actos de acoso, leo textualmente según el numeral 4 del artículo 10 de la ley 1010 del 2006, en ese sentido señor juez no es posible analizar esta pretensiones si no existe un pronunciamiento en un proceso especial en donde se determine que si COMPENSAR o personas naturales incurrieron o no incurrieron en las conductos establecidas como acoso laboral en la ley 1010.

Es importante remitirse a esta ley 1010, en la cual establece en sus diferentes artículos cuales son las conductas, después en su artículo 10 establece cual es el tratamiento, cuáles son las sanciones, cuáles son las implicaciones del acoso laboral, en el cual en el numeral 4 del artículo 10, esta pretensión que se trae en el proceso ordinario y luego tenemos en el artículo 12 la competencia y en el artículo 13 el tratamiento o el trámite que se le debe dar a esta clase de procesos. En ese sentido señor juez pese a que la parte demandante en su subsanación de la demanda manifiesta expresamente la demandada tiene debe dársele un tratamiento o el trámite ordinario, lo cierto es que la naturaleza de lo que acá se está discutiendo las pretensiones de lo que acá se está pretendiendo corresponde a un tema de acoso laboral, que reitero, debe ser tratado por la ley 1010 y no conforme a un proceso ordinario. En ese sentido señor juez, dejo sustentado mi recurso de reposición y en subsidio el recurso de apelación.

[3] ***Juez (23:11):*** *Una vez escuchada la apoderada de la parte actora, ahora si procede este director del proceso a emitir pronunciamiento con relación a la excepción propuesta frente a la cual el señor apoderado de la parte demandada, como se indicó anteriormente impetra recurso de reposición y en subsidio de apelación.*

Sea lo primero señalar por parte de este despacho judicial que una vez realizada la calificación o escrutinio de la demandada que ocupa la atención de este despacho judicial, la misma fue objeto de inadmisión, lo cual como se indicó hace o mejor en la parte objeto de pronunciamiento, fue objeto en este caso de inadmisión frente a lo cual este despacho judicial procedió conceder el término establecido en la ley para que la parte actora subsanará las irregularidades o falencias que había encontrado el despacho. Entre una de esas falencias esta la que ocupa la atención en lo referente a

Para resolver se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

De conformidad con el numeral 3º del artículo 65 del C.P.T. y de la S.S. el auto mediante el cual se decide una excepción previa, es susceptible del recurso de apelación, en consecuencia procede la Sala a resolver lo pertinente atendiendo los puntos concretos objeto de controversia (art. 66 A *ibídem).*

En el sub examine las pretensiones de la demandante, se dirigen a que se declare que entre las partes existió un contrato de trabajo a término indefinido que se extendió entre el 2 de febrero de 2009 y el 10 de junio de 2019; se declare que la terminación del contrato obedeció a causas atribuibles al empleador y en condiciones de extrema presión, se declare ineficaz la terminación del contrato de trabajo y se ordene su reintegro al cargo que venía desempeñando, con el consecuente pago de salarios y prestaciones dejadas de pagar, al pago del 50% del costo del tratamiento de las enfermedades, alteraciones de salud y secuelas originadas en el acoso laboral, por haber permitido estas prácticas; a pagar 180 días de salario por daño moral, sin perjuicio de las demás prestaciones a que haya lugar, por encontrarse en estado de debilidad manifiesta al momento de la

---

la excepción donde la apoderada judicial indicó en el escrito objeto de subsanación que el trámite que debería o debe imprimírsele al proceso, es un proceso ordinario laboral de primera instancia, por tanto, será el trascurso y durante las etapas correspondientes donde se determinará por parte de este despacho judicial, si le asiste o no razón a la demandante frente a las suplicas que son objeto de reparo con la presentación de la demanda.

Atendiendo a la anterior circunstancia, y como quiera que el apoderado de la parte demandada y que contestó en su momento el presente proceso judicial, propone la excepción denominada inepta demanda, en el entendido que se le está dando un trámite que no corresponde y que por el contrario el proceso se debe adecuar a una actuación especial, esto es en virtud de acoso laboral, conforme a las preceptivas de la ley 1010 del 2006, este despacho judicial encuentra que con el escrito de subsanación se corrigieron las falencias encontradas, por lo que el trámite se reitera el cual se le va a imprimir, es un proceso ordinario laboral, independiente con ello entonces el despacho judicial respeta más no comparte los argumentos esgrimidos por el señor apoderado de la parte demandada, en el entendido que se debe acceder a lo solicitado.

Las razones anteriores son más que suficientes para mantener incólume la decisión tomada el día de hoy frente a este proceso judicial, y no hay lugar a acceder a la reposición.

Teniendo en cuenta que subsidiariamente se interpone el recurso de apelación, este despacho judicial entonces dispone conceder el recurso de apelación y en el efecto suspensivo y ante el Tribunal Superior de Bogotá, sala laboral, para efectos que sea el superior quien determine si le asiste o no razón a la decisión tomada el día de hoy.

terminación del contrato de trabajo, la indexación de las sumas objeto de condena, lo ultra y extra petita y las costas del proceso. *(archivo 01 cuaderno 1 ordinario.pdf páginas 266 a 268)*

Encontrándose dentro del término de traslado de la demanda, la pasiva COMPENSAR CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR propuso la excepción previa denominada "habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde" *(archivo 01 cuaderno 1 ordinario.pdf página 334)* la cual hizo consistir en que la ley 1010 de 2006 tiene previsto un procedimiento especial para que sean conocidas las actuaciones que se alegan como acoso laboral y de la demanda se colige que la accionante pretende declaraciones y condenas derivadas de una supuesta conducta establecida en la citada disposición legal, por lo que a su juicio, el único trámite válido para adelantar la presente demanda es el proceso especial establecido en los artículos 12 y siguientes de la Ley 1010 de 2006.

Al decidir la excepción propuesta el operador judicial consideró que en la subsanación de la demanda, la parte actora determinó que el trámite a seguir es de un proceso ordinario y no un trámite especial de acoso laboral, prescindiendo incluso de la demanda contra las personas naturales inicialmente vinculadas en calidad de demandados, quedando como accionada la Caja de Compensación Compensar.

De este modo es menester recordar, que las excepciones son hechos distintos de los afirmados en la demanda, alegados por el demandado para contradecir el nacimiento del derecho pretendido por el demandante, o para producir su extinción, para negar su exigibilidad actual o simplemente para impedir el juicio, suspender o mejorar el procedimiento.

Uno de estos medios exceptivos, es el consagrado en el numeral 7° del artículo 100 C.G.P., denominado *"habérsele dado a la demanda el trámite de un proceso diferente al que corresponde".* A su turno, el artículo 101 del mismo compendio normativo establece que *"si prospera la de trámite inadecuado, el juez ordenará darle el trámite que legalmente le corresponda".*

Pues bien, el artículo 13 de la Ley 1010 de 2006, estableció un procedimiento para la imposición de las sanciones allí previstas por la comisión de conductas de acoso laboral; sin embargo, cuando las pretensiones no encuadran en los supuestos de

dicha normativa, o correspondan a otro proceso, deben analizarse por la vía del proceso ordinario laboral, conforme la competencia general atribuida a la especialidad laboral en el artículo 2° del Código Procesal del Trabajo y Seguridad Social. En este sentido se pronunció la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia SL 17063 de 5 de julio de 2017, con radicación 45992, donde señaló:

> *"Debe esta Corte, en principio, indicar que la Ley 1010 de 2006 pretendió generar una protección multidimensional en el lugar de trabajo, con la consecuente posibilidad de adoptar correctivos inmediatos ante la demostración efectiva de conductas que constituyan acoso laboral, a las cuales se les dio trámite especial, pero las demás que de allí pueden derivar, sin duda, continuaron bajo la esfera decisoria ordinaria y es por ello que esta Sala las conoce, cuando, como en este caso se debate el incumplimiento del acuerdo conciliatorio, las consecuencias de ineficacia del despido, de que trata el artículo 12 ibídem, o incluso el establecimiento de otras conductas previstas en convenciones colectivas o reglamentos internos de trabajo."* (subrayado por la Sala)

Así las cosas, en el caso en concreto, si bien los hechos narrados en el escrito introductor hacen referencia a situaciones de acoso laboral, lo cierto es que precisamente en ellos se fundan las pretensiones como la ineficacia de la terminación del contrato y la orden de reintegro de la demandante al cargo que venía desempeñando junto con el pago de los salarios y prestaciones adeudados, el pago de sumas por concepto de un tratamiento médico en que debió incurrir por el acoso laboral que dijo haber sufrido y sumas por concepto de daño moral.

Así, de la simple lectura de las pretensiones de la demanda, se extrae con claridad, que no se encuentran enmarcadas en la órbita de conocimiento prevista en la ley 1010 de 2006, pues aunque la pretensión relativa al pago del 50% del costo del tratamiento de las enfermedades, alteraciones de salud y secuelas originadas en el acoso laboral que la actora afirma haber sufrido, corresponde a una de las sanciones establecidas en el artículo 10 de la citada ley, las demás solicitudes de la demanda deben ser conocidas, tramitadas y resueltas a través de un proceso ordinario, razón por la que no es viable impartir al proceso el trámite de un acoso laboral, que impediría el conocimiento y juzgamiento de todas las pretensiones. En

este sentido, también se pronunció la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en la sentencia con radicación No. 45992 de 5 de julio de 2017, así:

> *"De lo anterior surge patente que el procedimiento especial que determinó la ley lo fue para emitir decisión pronta sobre las sanciones del pluricitado artículo 10, pero no para extraer del conocimiento de los jueces ordinarios otras consecuencias que pueden derivar de la demostración del acoso o persecución laboral como los perjuicios morales, la reinstalación, los daños materiales y las demás anexidades jurídicas que la compleja construcción del concepto lleva implícita y que impone a la Corte, como máxima instancia en materia del trabajo y de la seguridad social su intervención"*

En ese orden, como lo afirmó el a quo, será en la sentencia que ponga fin a la instancia, cuando se conozca si tienen vocación de prosperidad las solicitudes de la demanda en los términos en que fueron presentadas.

Agotada entonces la competencia en esta instancia, por el estudio de los motivos de apelación y conforme con los anteriores razonamientos, se confirmará el auto apelado, conforme a las consideraciones anteriormente expuestas.

COSTAS en esta instancia a cargo del recurrente.

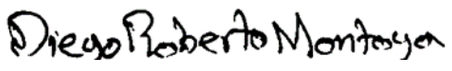
En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C, Sala Laboral,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido por el Juzgado Primero Laboral del Circuito de Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de la demandada CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN



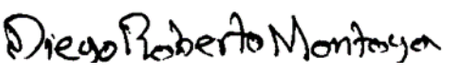
ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

AGENCIAS EN DERECHO: Se fija como valor por concepto de agencias en derecho la suma de $500.000, la cual deberá ser incluida en la liquidación de costas, al tenor de lo consagrado en el artículo 366 del C.G.P.



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL.

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR WILSON HERNANDEZ PAEZ CONTRA LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES- y PORVENIR S.A. (RAD. 02 2020 00036 01).

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022)

AUTO

Reconocer personería adjetiva al abogado DAVID RICARDO GUILLEN RODRIGUEZ como apoderado sustituto de la demandada COLPENSIONES, en los términos y para los efectos del poder conferido en sustitución por CLAUDIA LILIANA VELA en su calidad de representante legal de la firma CAL & NAF ABOGADOS S.A.S (fl. 6).

Diego Roberto Montoya

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

Vencido el término de traslado otorgado, y habiéndose presentado los alegatos de instancia por la UGPP (fls. 8 y 9), el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, con fundamento en el numeral segundo del artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020, profieren el siguiente,

PROVIDENCIA

Decide la Sala el Recurso de apelación oportunamente interpuesto y debidamente sustentado por la apoderada de COLPENSIONES, contra el auto proferido por la Juez Segunda Laboral del Circuito de Bogotá D.C., dentro de la audiencia llevada a cabo el 4 de mayo del 2022 (Audio Archivo 14 expediente digital), por medio del cual resolvió declarar NO probada la excepción planteada por la demandada Colpensiones denominada *falta de competencia por reclamación administrativa* y

en consecuencia dispuso continuar con el proceso, tras considerar que dentro del proceso sí se encontraba agotada la reclamación administrativa (Record: 10:06)[1]. Inconforme con la decisión, la apoderada de COLPENSIONES la impugnó expresando si bien el 31 de octubre del año 2018, se realizó una solicitud de traslado la cual reposa en el expediente y que quedo radicada bajo el No. 2018_13796833 a la cual se le dio contestación, lo cierto es que en dicha solicitud no se solicita la ineficacia o la nulidad del traslado, la cual, corresponde a la pretensión declarativa número 1 de la presente demanda, por lo que es claro que con ese formulario de afiliación que se radicó el 31 de octubre de 2018, no se pretende una nulidad o ineficacia de la afiliación, simplemente se está solicitando a través de un formulario de afiliación que se realice el traslado de régimen pensional, afirmando su representada no pudo dar contestación a una reclamación administrativa relativa a una nulidad o a una ineficacia del traslado, sino a una solicitud simple y llana de un traslado atendiendo a requisitos legales y jurisprudenciales, por lo que solicita la revocatoria del auto proferido y en

---

[1] **Juez (Record 10:06):** Escuchados los argumentos de la parte demandante, el despacho procede a resolver el medio exceptivo conforme las siguientes consideraciones, solicita la parte demandada ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, se dé por probada la excepción denominada falta de competencia por reclamación administrativa, indicando que la parte actora no presentó la correspondiente al artículo 6 del Código Procesal del Trabajo y de la seguridad social.

Para resolver se considera que de conformidad, en primer lugar que denotarse respecto a la reclamación administrativa, que la demanda debe congregar ciertos requisitos para que las pretensiones se resuelvan con éxito, estos requisitos son de forma y de fondo, y entre estos encontramos presupuestos procesales los formales que exige el artículo 25 del Código procesal del trabajo y la seguridad social, por tanto, el juez debe estudiar si el líbelo introductorio cumple o no la exigencias del mencionado artículo. En punto a la al artículo 6 del código procesal del trabajo y la seguridad social, modificado por la ley 712 de 2001, que regula la reclamación administrativa dispone lo siguiente: "las acciones contenciosas contra la Nación, entidades territoriales y cualquier otra entidad de la administración pública deberán iniciarse cuando haya agotado la reclamación administrativa, esta reclamación consiste en la simple reclamación por escrito del servidor público o trabajador sobre el derecho que pretende y se agota cuando se haya decidido, transcurridos un mes desde su presentación no ha sido resuelta".

En el presente asunto la discusión inicial planteada del demandante es que se declare la ineficacia del traslado de la afiliación en pensiones a PORVENIR S.A y de conformidad con lo anterior se ordene a trasladar los aportes, junto a los emolumentos a COLPENSIONES, de conformidad con lo anterior y revisadas las pruebas documentales aportadas por la parte demandante, se observa que el 31 de octubre de 2018, mediante formulario de afiliación al sistema general de pensiones expedido por COLPENSIONES, solicita el traslado de régimen, reclamación que reposa a folio 49 del ítem uno del expediente. Así mismo esta entidad mediante oficio BZ2018137968333732 del 29 de noviembre de 2018, negó la solicitud del traslado de régimen de conformidad con la sentencia C062 de 2010, razón por la cual se declarará no probado el medio exceptivo, se considera que el actor si agoto la reclamación administrativa que da competencia a este despacho para dirimir este conflicto. En consecuencia, se deberá continuar con el trámite correspondiente, por lo expuesto el despacho resuelve:

PRIMERO: DECLARAR NO PROBADA la excepción de falta de competencia por reclamación administrativa, propuesta por la parte demandada COLPENSIONES.

SEGUNDO: CONDENAR en costas

TERCERO: CONTINUAR con el presente proceso, en caso de no ser impugnada la decisión.

consecuencia se declare probado el medio exceptivo propuesto en la contestación de la demanda. (Audio Archivo 14 expediente digital, record: 13:05[2])
Para resolver se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

De conformidad con el numeral 3º del artículo 65 del C.P.T. y de la S.S. el auto mediante el cual se decide una excepción previa, es susceptible del recurso de apelación, en consecuencia, procede la Sala a resolver lo pertinente atendiendo los puntos concretos objeto de controversia (art. 66 A *ibídem).*

Sea lo primer indicar, en el sub examine las pretensiones de la demandante, se dirigen de manera principal a que se declare la nulidad del traslado efectuado del régimen de prima media al de ahorro individual administrado por PORVENIR S.A. y en consecuencia se ordene a la AFP a devolver los aportes, rendimientos financieros y bono pensional a COLPENSIONES para que estos los reciba y actualice su historia laboral *(Archivo 1 expediente digital, páginas 10 a 12).*

---

[2] **Apoderada demandada (Record: 13:05):** Gracias señora juez encontrándome dentro de la oportunidad procesal pertinente me permito interponer recurso de apelación en contra de la decisión proferida por su honorable despacho atendiendo las siguientes consideraciones. En primer lugar, si bien como lo manifestó la titular del despacho el 31 de octubre del año 2018, se realizó una solicitud de traslado la cual reposa en el expediente y que quedo radicado bajo el radicado 2018_13796833 y pese a que mi representada dio contestación a dicha solicitud, lo cierto es que en dicha solicitud no se solicita o no se depreca la ineficacia o la nulidad del traslado, la cual, corresponde a la pretensión declarativa número uno que solicita expresamente "declarar la nulidad o la ineficacia del traslado del régimen de prima media con prestación definida al régimen de ahorro individual con solidaridad del señor Wilson Hernández Páez". En ese sentido, es claro que con ese formulario de afiliación que se radicó el 31 de octubre de 2018, no se pretende una nulidad o ineficacia de la afiliación, simplemente se está solicitando a través de un formulario de afiliación que se traslade que se realice el traslado de régimen pensional, es decir, del RAIS al régimen de prima media con prestación definida que administra COLPENSIONES, así lo ha manifestado el Tribunal Superior de Bogotá en sentencia como la, perdón, en autos como el proferido por el magistrado ponente Luis Alfredo Barón Corredor el expediente número 11001310500102019003190l, en el que se arguyó lo siguiente:
"Al respecto esta sala de decisión difiere de ello, pues la pretensión formulada a COLPENSIONES se plateo como consecuencia que se declare la ineficacia del razón, razón por la cual la pretensión tercera no puede ir desconectada de la pretensiones principales de la demanda, aspecto por el cual le asiste razón al recurrente en cuanto a la entidad demandada únicamente dio respuesta frente a la solicitud de afiliación del germen de prima media con prestación definida, pues desconocía en dicho momento lo verdaderamente pretendido por la actora, consistente en la ineficacia del traslado ante el RAIS, lo cual conllevo a dicha entidad a contestar basado en los requisitos legales para cambio de régimen, situación toralmente diferente a lo pretendido en esta oportunidad por la parte actora"

En esos términos también la magistrada ponente Diana Marcela Camacho Hernández, en auto del 14 de diciembre de 2020, consideró probada la excepción propuesta por la entidad que represento, en similares términos.

En ese sentido y teniendo en cuenta lo manifestado y que obviamente mi representada no pudo dar contestación a una reclamación administrativa, relativa o referente a una nulidad o a una ineficacia del traslado sino a una solicitud simple y llana de un traslado atendiendo a requisitos legales y jurisprudenciales, es por lo que solicita la revocatoria del auto proferido por la titular del despacho y en consecuencia se declare probada, se declare probado el medio exceptivo propuesto en la contestación de la demanda. En esos términos dejo sustentado mi recurso de apelación muchas gracias.

Encontrándose dentro del término de traslado de la demanda, la pasiva COLPENSIONES propuso la excepcione previa denominada "*FALTA DE COMPETENCIA: (RECLAMACION ADMINISTRATIVA)"* (Archivo 7 expediente digital, páginas 26 a 31), la cual hizo consistir en que "*…la demandante nunca a presentada solicitud ante mi representada, en consecuencia, se tenga por terminado el proceso y archiven las diligencias*".

Al decidir la excepción propuesta el operador judicial consideró que en autos SÍ se presentó la reclamación administrativa, advirtiendo dentro del proceso se allegó como prueba de la excepción previa el formulario visible en la página 49 del Archivo 1 del expediente digital y una respuesta dada por Colpensiones relacionada con la solicitud de traslado, considerando dicho formulario cumple con las características establecidas en el artículo 6º de la norma objetiva laboral.

Así las cosas, debe señalarse toda demanda debe congregar ciertos requisitos para que las pretensiones se resuelvan con éxito, uno de ellos se encuentra previsto en el artículo 6º del C.P.L., modificado por el artículo 4º de la Ley 712 de 2001, en el cual se consagra uno de los parámetros previos a la iniciación de una demanda, esto es el agotamiento de la vía gubernativa, donde se indica que "…*las acciones contenciosas contra la Nación, las entidades territoriales y cualquiera otra entidad de la administración pública solo podrán iniciarse cuando se haya agotado la reclamación administrativa. Esta reclamación consiste en el simple reclamo escrito del servidor publico o trabajador sobre el derecho que pretenda, y se agota cuando se haya decidido o cuando transcurrido un mes desde su presentación no ha sido resuelta…*"

Conviene igualmente recordar, conforme a la norma en cuestión y a la jurisprudencia, la naturaleza jurídica de la reclamación administrativa, constituye factor de competencia, por cuanto es un requisito de procedibilidad que de manera obligada, debe ser agotado, previo a acudir a la jurisdicción, así se consideró en Sentencia de Casación Laboral, dentro del Radicado No. 12.221 del 13 de octubre de 1999[3], Radicado No. 30056 del 24 de mayo de 2007[4,] SL 1867 Rad. 57117del

[3] *"…que las entidades de derecho público y social con antelación a cualquier controversia ante los juzgados laborales, tengan la oportunidad de establecer, previo el estudio fáctico y jurídico que sea del caso, la procedencia o no del derecho que se pretende por el peticionario, y que de ajustarse a la ley la respectiva reclamación, la misma sea reconocida directamente por el ente obligado, logrando así, sin la intervención del Juez Laboral, la solución de un conflicto en cierne.*

29 de mayo del 2018[5] y SL4286 Rad. 66151 del 1° de octubre del 2019[6] siendo también una prerrogativa que se le concede a la administración para que se pronuncie previo acudir a la jurisdicción.

De ahí que se haya dicho por la doctrina y la jurisprudencia laboral que a través del instituto de la vía gubernativa se le da a dichas entidades, la oportunidad de ejercer una especie de justicia interna, como que la misma ley les permite conocer de manera primigenia, es decir, antes que a los propios jueces del trabajo, las inconformidades de orden laboral que tengan las personas legitimadas para formularles esta clase de cuestionamientos, para que sean tales organismos, actuando como juez de sus propias decisiones, los que definan la viabilidad de aquellas y puedan así corregir por sí mismas, cualquier error en que hayan podido incurrir en torno a las actuaciones que originaron tales desavenencias y evitar de esta manera los traumatismos propios de una controversia judicial".

[4] *"El Código de Procedimiento Laboral dispone en su artículo 6° que "Las acciones contra una entidad de derecho público, una persona administrativa autónoma, o una institución o entidad de derecho social podrán iniciarse sólo cuando se haya agotado el procedimiento gubernativo o reglamentario correspondiente". De manera, que antes de reclamarse ante los estrados laborales de la jurisdicción ordinaria alguna pretensión de orden social a cuales quiera de las anteriores entidades, se hace necesario que el interesado formule previamente su petición de reivindicación ante éstas.*

Tiene por finalidad el anterior procedimiento gubernativo que las entidades de derecho público y social con antelación a cualquier controversia ante los juzgados laborales, tengan la oportunidad de establecer, previo el estudio fáctico y jurídico que sea del caso, la procedencia o no del derecho que se pretende por el peticionario, y que de ajustarse a la ley la respectiva reclamación, la misma sea reconocida directamente por el ente obligado, logrando así, sin la intervención del Juez Laboral, la solución de un conflicto en ciernes.

De ahí que se haya dicho por la doctrina y la jurisprudencia laboral que a través del instituto de la vía gubernativa se le da a dichas entidades, la oportunidad de ejercer una especie de justicia interna, como que la misma ley les permite conocer de manera primigenia, es decir, antes que a los propios jueces del trabajo, las inconformidades de orden laboral que tengan las personas legitimadas para formularles esta clase de cuestionamientos, para que sean tales organismos, actuando como juez de sus propias decisiones, los que definan la viabilidad de aquellas y puedan así corregir por sí mismas, cualquier error en que hayan podido incurrir en torno a las actuaciones que originaron tales desavenencias y evitar de esta manera los traumatismos propios de una controversia judicial".

De otro lado, se ha manifestado que el mecanismo procesal contemplado en el artículo 6° del C. de P.L. ofrece ventajas incomparables para los entes relacionados en dicha norma, porque al brindar a los mismos la posibilidad de auto componer sus conflictos, se evitan los costos que implicaría para tales entidades un largo proceso laboral, lo que significa un considerable ahorro para los contribuyentes y una garantía de que no se verá afectada la buena marcha de dichos organismos como consecuencia de las vicisitudes y tropiezos que conlleva la atención de un juicio, lo que de paso asegura que todos los esfuerzos de aquellos entes se concentrarán en sus naturales cometidos estatales"

[5] *"Esta Corporación, repetidamente ha sostenido que la reclamación administrativa constituye un factor de competencia del juez del trabajo cuando la demandada sea la Nación, las entidades territoriales o cualquiera otra entidad de la administración pública, como lo son las encartadas en el sub lite. En sentencia CSJ SL8603-2015, reiteró lo dicho en las sentencias CSJ SL, 13 oct 1999, rad. 12221 y CSJ SL, 23 feb 2000, rad. 12719, donde dijo:*

> *Con todo, huelga resaltar que la demanda contra una entidad oficial, para su habilitación procesal y prosperidad, ha de guardar coherencia con el escrito de agotamiento de la vía gubernativa, de suerte que las pretensiones del libelo y su causa no resulten diferentes a las planteadas en forma directa a la empleadora, porque de lo contrario se afectaría el legítimo derecho de contradicción y defensa e, incluso, se violaría el principio de lealtad procesal. En este mismo sentido se ha pronunciado en anteriores oportunidades la Sala (cas. del 15/02/00, exp. 12767 y 22/10/98, exp. 11151).*

En esa misma providencia, y como consecuencia de lo anterior, puntualizó:

> *Significa lo anterior que mientras no se haya agotado dicho trámite, el juez del trabajo no adquiere competencia para conocer del asunto. La importancia de realizar la reclamación administrativa con anterioridad a iniciar la acción contenciosa radica en la posibilidad que la Ley le otorga a la administración pública de revisar sus propias actuaciones antes de que estas sean sometidas al conocimiento de la Jurisdicción*

Ordinaria en sus especialidades laboral y de seguridad social, de modo que la falta de esta reclamación con anterioridad a la instauración de la demanda es insubsanable.

[6] *"...en relación con el agotamiento de la vía gubernativa, sus efectos como factor de competencia, requisito de procedibilidad y la postura procesal de entidades como la demandada en la sentencia CSJ SL, 24 may. 2007, rad. 30056, rememorada en la CSJ SL13128-2014, esta Corporación, en un caso con similares características al debatido, adoctrinó:*

De otro lado, el tema propuesto por el censor, fue objeto de pronunciamiento por parte de esta Corporación, en el que, contrario al criterio expuesto en la sentencia que se rememora del 14 de octubre de 1970, se decidió que la nulidad por falta de agotamiento de la vía gubernativa es saneable […]:

El Código de Procedimiento Laboral dispone en su artículo 6° que "Las acciones contra una entidad de derecho público, una persona administrativa autónoma, o una institución o entidad de derecho social podrán iniciarse sólo cuando se haya agotado el procedimiento gubernativo o reglamentario correspondiente". De manera, que antes de reclamarse ante los estrados laborales de la jurisdicción ordinaria alguna pretensión de orden social a cualesquiera de las anteriores entidades, se hace necesario que el interesado formule previamente su petición de reivindicación ante éstas.

[…]

'En cuanto a la naturaleza jurídico-procesal de la exigencia del agotamiento de la vía gubernativa en el procedimiento laboral, si bien para explicar la misma se han construido varias tesis, tales como la de asimilarla a un requisito de la demanda, o de considerarla un presupuesto de la acción, o de calificarla como un factor de competencia, lo cierto es que la jurisprudencia de la Sala Laboral siempre que se ha ocupado del tema se ha inclinado por esta última, esto es, que la misma constituye un factor de competencia para el Juez laboral, pues mientras este procedimiento pre procesal no se lleve a cabo, el Juez del Trabajo no puede aprehender el conocimiento del conflicto planteado; además, esta calificación dada a la vía gubernativa encuentra sustento también en que el artículo 6° del C. de P.L. figura dentro de las normas de dicho estatuto procesal que regulan el fenómeno de la competencia en materia laboral.

'Entonces, dado que la exigencia del artículo 6° del C. de P.L es un factor de competencia, y por ende un presupuesto procesal, la misma debe encontrarse satisfecha en el momento de la admisión de la demanda. Por tanto, cuando se presenta una demanda contra alguna de las entidades públicas o sociales señaladas en la norma precitada es deber ineludible del Juez laboral constatar, antes de pronunciarse sobre la admisión de tal escrito introductorio, que se haya agotado el procedimiento gubernativo o reglamentario previsto en dicho precepto, obligación procesal que el dispensador de justicia debe cumplir con sumo cuidado y acuciosidad, ya que está de por medio nada menos que establecer si tiene competencia o no para conocer del pleito que se pone bajo su consideración, así como el cumplimiento de los imperativos que le imponen los artículos 37 del C.P.C., modificado por el D.E. 2282 de 1989, art. 1°, num. 13 y 38 ibídem, en relación con el deber de precaver los vicios de procedimiento, rechazar cualquier solicitud que sea notoriamente improcedente y evitar providencias inhibitorias. Y si se percata que no aparece demostrado el cumplimiento de esa etapa prejudicial, es su obligación rechazar de plano la demanda, por falta de competencia, tal y como lo prevé el artículo 85 del C. de P.L., modificado por el D. E. 2282/89, art. 1°, num. 37, norma aplicable al procedimiento laboral en virtud del principio de integración analógica consagrado en el artículo 145 del C. de P.L., toda vez que en este ordenamiento procesal no hay disposición que regule lo atinente a las consecuencias de la falta del presupuesto procesal de la competencia al examinarse la viabilidad o no de la demanda.

Pero puede suceder que el Juez Laboral admita la demanda sin advertir la falta de cumplimiento por parte del accionante de la exigencia contemplada en el pluricitado artículo 6° del C. de P.L. En este caso es deber procesal de la parte demandada, así como un elemental ejercicio de la lealtad que se deben los sujetos procesales entre sí y que éstos le deben al Juez, alertar a éste sobre la omisión del agotamiento del procedimiento gubernativo, pero no de cualquier manera, sino mediante la proposición de los medios de defensa que en su favor consagra la ley adjetiva del trabajo en su artículo 32, cuáles son las excepciones previas o dilatorias respectivas, que para el caso concreto que se examina se contrae a la de falta de competencia, por no agotamiento previo de la vía gubernativa, de conformidad con lo previsto en el numeral 2° del artículo 97 del C. de P.C., modificado por el D.E. 2282 de 1989, art. 1°, num.46, disposición a la cual fuerza remitirnos por mandato del artículo 145 del Código de Procedimiento Laboral. O también puede formularse la excepción dilatoria de no agotamiento del procedimiento gubernativo o reglamentario, que como ya ha tenido oportunidad la Corte de expresarlo, "[...] bien puede entenderse que constituye una excepción en el proceso laboral, propia y autónoma" (Sentencia de julio 21 de 1981. rad. N° 7619). Sí la parte accionada procede de esta forma, es decir, que ante la ausencia del cumplimiento de la exigencia consagrada en el artículo 6° del C. de P.L., propone oportunamente alguna de las anteriores excepciones, lo cual según las voces

En ese orden de ideas y atendiendo expresamente los argumentos de la alzada de la parte demandada COLPENSIONES se advierte en la documental obrante en el expediente se encuentra el "*FORMULARIO DE AFILIACION AL SISTEMA GENERAL DE PENSIONES"* donde se marca *TRASLADO DE REGIMEN –*

---

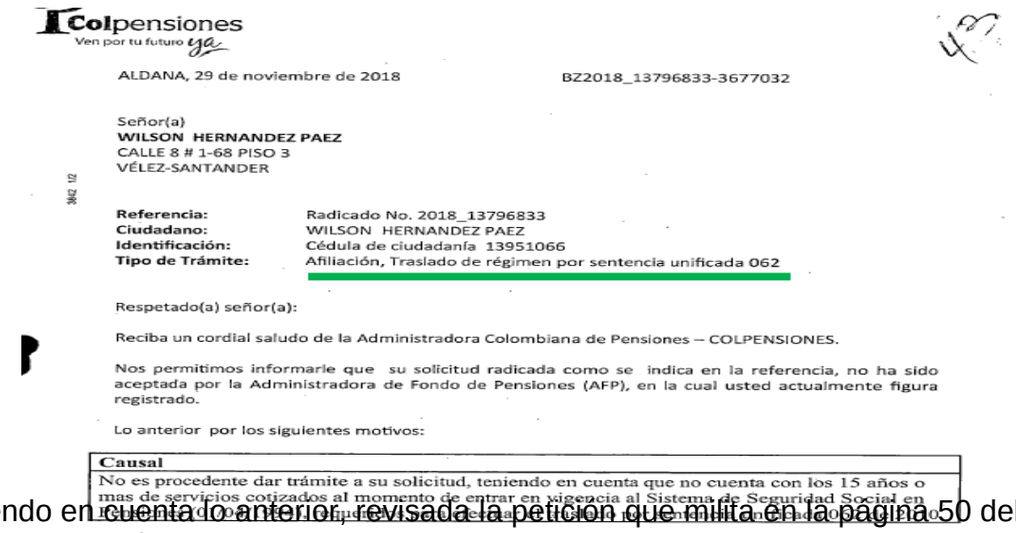
del artículo 32 ibídem bien puede hacer en la contestación de la demanda o en la primera audiencia de trámite, la decisión interlocutoria que adopte el Juez Laboral sobre este asunto, claro está, una vez ejecutoriada la misma, pone punto final a toda discusión sobre este tema, y en consecuencia cualquier vicio de procedimiento en torno al presupuesto procesal de competencia queda debidamente saneado y, por tanto, llegado el momento de dirimir el conflicto el juzgador debe emitir un fallo que resuelva de mérito la controversia planteada. Ahora, si la entidad demandada no utiliza en tiempo procesal oportuno las excepciones atrás indicadas para corregir o enmendar el vicio de procedimiento de la falta de competencia del Juez Laboral, surgido como consecuencia de haberse admitido por este funcionario judicial la demanda sin avistar el incumplimiento del requerimiento consagrado en el art. 6° del Estatuto Procesal Laboral, lo que, como ya se vio, constituye no sólo una carga procesal para aquélla sino un deber y una obligación en virtud del principio de lealtad procesal, la anomalía procedimental proveniente de tal falta de competencia quedará saneada a la luz de lo preceptuado en el numeral 5., del artículo 144 del C. de P.C., modificado por el D.E. 2282 de 1989, art. 1°, num. 84, norma que dispone que "La nulidad se considerara saneada... Cuando la falta de competencia distinta de la funcional no se haya alegado como excepción previa. Saneada esta nulidad, el Juez seguirá conociendo del proceso." Y es que la incompetencia del Juez laboral, a raíz de la pretermisión de la etapa previa de reclamación del derecho requerido a la entidad pública o social demandada, no escapa al principio de saneamiento de la nulidad proveniente de la falta de competencia recogido en el Código de Procedimiento Civil de 1970, y el cual a su vez es una de las manifestaciones esenciales del postulado de economía procesal que irradia a dicha rama del derecho y con mucho más razón al procedimiento laboral, dado el carácter social de los derechos que en esta órbita de la jurisdicción ordinaria se discuten, que exige del Juez del trabajo un rápido pronunciamiento, para lo cual debe evitar dentro del marco de sus poderes cualquier dilación que obstaculice ese fin. En efecto, si la jurisprudencia tradicional de la Corte ha sostenido que el procedimiento gubernativo o reglamentario es un factor de competencia para el Juez Laboral, lo cual ahora se vuelve a reiterar, no hay razón para que a esta forma especial de ella se le sustraiga de los efectos de saneamiento latente en todas las nulidades que puedan originarse en la falta de competencia, cuando no se hayan alegado como excepción previa, postulado del que solo se exceptúa la falta de competencia funcional. Nada justifica que luego de un proceso contra una entidad oficial, donde esta ha sido convocada oportunamente a través de la notificación de rigor y por ende ha tenido todas las oportunidades para ejercer cabalmente su derecho de defensa, se declare la nulidad de todo lo actuado ad portas de la emisión del fallo llamado a resolver de fondo el litigio iniciado, aduciendo como argumento que no se cumplió el procedimiento gubernativo tantas veces mencionado, cuando la parte demandada contando con el mecanismo procesal idóneo para remediar ese defecto, como son las excepciones previas pertinentes, ya señaladas en el curso de esta providencia, no hizo uso del mismo; mucho menos sentido tiene que se plantee una decisión de esta naturaleza en la segunda instancia o a través del recurso extraordinario de casación. Un pronunciamiento de esta índole reñiría frontalmente con los principios de economía procesal, de saneamiento de las nulidades por incompetencia y de prevalencia del derecho sustancial sobre el formal, instituciones estas que constituyen soporte esencial para los propósitos del derecho procesal laboral: hacer efectiva la concepción social y tutelar del derecho laboral sustancial.

[…]

De otro lado, como el fin último del agotamiento de la vía gubernativa es que la administración pública tenga la oportunidad de decidir de manera directa y autónoma si resulta procedente o no el reconocimiento de los derechos reclamados por el peticionario y de esta forma enmendar cualquier error que hubiera podido cometer sobre el particular, precaviendo a través del instrumento de la autocomposición un eventual pleito judicial, choca contra la lógica de lo razonable que habiendo tenido aquélla oportunidad de llevar a cabo ese cometido durante todo el curso del proceso, aun cuando ningún interés haya demostrado en este sentido, quizás porque no encuentra viable lo solicitado, la consecuencia o el efecto inmediato del incumplimiento de la exigencia del artículo 6° del C.de P. L. sea la nulidad de todo lo actuado. Ello resulta sumamente inconveniente, no sólo para las partes, sino para la propia administración de justicia, toda vez que luego de todo un derroche de jurisdicción, tiempo y gastos no se logró resolver de manera rápida y eficaz el conflicto.

Como se observa, esta Corporación es del criterio que la ausencia del agotamiento de la reclamación administrativa conlleva a la falta de competencia del Juez laboral, situación que resulta ser saneable si no se alega como excepción previa, según las voces del numeral 5° del artículo 144 del Código de Procedimiento Civil, aplicable al proceso laboral por remisión analógica del artículo 145 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, …"

PORVENIR y respecto del cual COLPENSIONES dio respuesta aduciendo lo siguiente (Archivo 1 expediente digital, páginas 49 a 52):



Colpensiones
Ven por tu futuro ya

ALDANA, 29 de noviembre de 2018 BZ2018_13796833-3677032

Señor(a)
WILSON HERNANDEZ PAEZ
CALLE 8 # 1-68 PISO 3
VÉLEZ-SANTANDER

3662 1/2

Referencia: Radicado No. 2018_13796833
Ciudadano: WILSON HERNANDEZ PAEZ
Identificación: Cédula de ciudadanía 13951066
Tipo de Trámite: Afiliación, Traslado de régimen por sentencia unificada 062

Respetado(a) señor(a):

Reciba un cordial saludo de la Administradora Colombiana de Pensiones – COLPENSIONES.

Nos permitimos informarle que su solicitud radicada como se indica en la referencia, no ha sido aceptada por la Administradora de Fondo de Pensiones (AFP), en la cual usted actualmente figura registrado.

Lo anterior por los siguientes motivos:

Causal
No es procedente dar trámite a su solicitud, teniendo en cuenta que no cuenta con los 15 años o mas de servicios cotizados al momento de entrar en vigencia al Sistema de Seguridad Social en

Teniendo en cuenta lo anterior, revisada la petición que milita en la página 50 del Archivo 1 expediente digital: "*Solicito el traslado de fondo Porvenir –pensiones- a COLPENSIONES, en cumplimiento de la sentencia unificación 062 de 2010"* y la respuesta dada por COLPENSIONES a la misma (página 50 ibídem), así como las pretensiones que sustentan el libelo introductor, es claro como lo sostiene la apelante que el requisito del agotamiento de la reclamación administrativa no se encuentra satisfecho en los términos previstos en la disposición previamente aludida, pues, aunque se pidió el traslado de régimen, tal petición no estuvo precedida de los motivos o razones en que se fundó dicho pedimento, puntualmente, no es posible inferir que el sustento de la misma fue la ineficacia de la afiliación a PORVENIR; además, tampoco se encuentran las restantes peticiones plasmadas en la demanda, de allí que no pueda entenderse que la administración tuvo la oportunidad de manifestarse, previo a la interposición del libelo, sobre los pedimentos de la parte actora, contraviniendo de esta forma el mentado artículo 6 del C.P.T y la S.S.

En consonancia con lo dicho, pertinente resulta precisar, la petición solicitando el traslado en manera alguna puede interpretarse fundada en la pretendida ineficacia, pues este no constituye necesariamente un supuesto para que proceda el mismo, por ello resultaba necesario que se puntualizara ante Colpensiones los motivos que daban lugar a petición de traslado, en aras de garantizarle a COLPENSIONES el derecho que le asistía de pronunciarse sobre lo pretendido por el demandante previo a la presentación de la demanda.

Como ello no ocurrió, no se surtió en debida forma la reclamación administrativa

Así las cosas, como quiera que la parte promotora del presente juicio no acreditó haber agotado el citado requisito previo, se revocará la decisión impartida en primer grado, para en su lugar declarar probada la excepción previa de falta de competencia por no agotamiento de la reclamación administrativa, con la consecuente exclusión de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES- del trámite procesal.

SIN COSTAS en esta instancia.

En mérito de lo expuesto el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C, Sala Laboral,

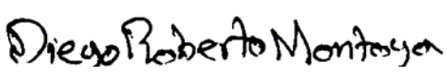
RESUELVE

PRIMERO: REVOCAR el auto proferido por el Juzgado 2° Laboral del Circuito de Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído y en su lugar **DECLARAR PROBADA** la excepción previa de falta de competencia por no agotamiento de la reclamación administrativa.

SEGUNDO: EXCLUIR por las razones aquí dichas, del presente trámite procesal a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES -COLPENSIONES-.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL.

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR JAIRO SADY BEJARANO BELTRAN CONTRA SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. (RAD. 03 2017 00537 01).

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022)

El Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, profieren de plano el siguiente

AUTO

Sería del caso admitir el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, en contra de la sentencia proferida el 19 de enero de 2022 por el Juzgado Tercero Laboral del Circuito de Bogotá, mediante la que se declaró probada la excepción de inexistencia de obligación y del derecho y se absolvió a la demandada SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E. de todas las pretensiones de la demanda, de no ser porque en este punto se obliga a la Sala a recurrir al control oficioso de legalidad, el cual debe realizarse en cualquier etapa del trámite procesal en ejercicio de las facultades conferidas al Juez como director del proceso y adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes (artículo 48 del C.P.L. y S.S. y 132 del C.G.P.).

Todo ello en punto a no pasar por alto, por razones de tipo meramente formal, aspectos que pudieren ir en abierta contradicción con el derecho sustancial y un eficaz y debido proceso.

Lo anterior con el fin de señalar que, revisado el periplo procesal se advierte, a través del presente proceso ordinario el accionante persigue la declaratoria de un contrato de trabajo entre las partes desde el 1° de septiembre de 2011 al 30 de abril de 2017 y se condene a la encartada al pago de reajustes salariales, primas de servicios, cesantías, intereses a las cesantías, vacaciones, recargos y compensatorios dominicales, horas extras, indemnización moratoria, indemnización por terminación del contrato sin justa causa, aportes a seguridad social, dotaciones, indemnización por daños morales, indexación, lo ultra y extra petita y las costas del proceso.

Según se desprende del sustento fáctico y las solicitudes de la demanda, la Sala advierte que no hay certeza de la existencia de un contrato de trabajo entre las partes, ni mucho menos de la calidad de trabajador oficial que afirma ostentar el demandante, en el entendido que las partes celebraron contratos de prestación de servicios y es a partir del principio de primacía de la realidad sobre las formalidades, que pretende el actor, la declaratoria de una relación laboral con la entidad encartada.

Dicho lo anterior, resulta necesario acoger el criterio expuesto ahora por el órgano de cierre constitucional, en relación al tema específico que se ventila en este caso y se desprende de varias decisiones emitidas por la Corte Constitucional, al resolver conflictos de jurisdicción suscitados entre la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y la contencioso administrativa, en punto a la discusión acerca de la legalidad de los contratos de prestación de servicios, cuando el anhelo del promotor del juicio refiere a señalar que se trata de meras formalidades y no de una realidad del acontecer fáctico. Corolario de todo lo anterior, mediante este proveído, se recoge el criterio que de antaño tenía sentado esta sala de decisión frente al tema.

Al efecto se tiene que la Corte Constitucional emitió el auto 492 de 2021, en el que estudió un conflicto de jurisdicción suscitado entre un juzgado laboral y uno administrativo respecto a una persona que desempeñó labores como celador al servicio de un ente territorial y su vinculación se verificó mediante contratos de prestación de servicios. En dicho proveído recordó que la prestación de servicios con el estado se puede presentar a) como empleados públicos, en virtud de una relación legal y reglamentaria, b) como trabajadores oficiales mediante contrato laboral ó c) como contratistas, condición que se ostenta según la naturaleza jurídica

de la entidad pública y las funciones desempeñadas, e hizo un recuento jurisprudencial relativo a la autoridad a quien corresponde conocer los conflictos originados en contratos estatales de prestación de servicios, cuando lo que se pretende es la declaración de una verdadera relación laboral.

Al tema consideró que el estudio de contratos de prestación de servicios celebrados por una entidad pública es de competencia de la jurisdicción contencioso administrativa al tenor de lo dispuesto en el artículo 104 CPACA y recordó que aunque por regla general un conflicto que corresponda a un trabajador oficial es de conocimiento de la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y si se trata de empleados públicos, la competencia recae en lo contencioso administrativo, ésta directriz no puede aplicarse cuando se discute la existencia de una vinculación laboral con el Estado, es decir, no existe certeza frente a la calidad de trabajador oficial o empleado público y se discute la presencia de subordinación de la autoridad pública contratante respecto al contratista, caso en el que es la jurisdicción administrativa la competente para dar solución al conflicto, lo que en palabras de la Corte fue del siguiente tenor:

> *"Sin embargo, esta regla no puede ser aplicada cuando el objeto de la controversia es, precisamente, el reconocimiento del vínculo laboral y el pago de las acreencias derivadas de la aparente celebración indebida de contratos de prestación de servicios con el Estado pues, en estos casos, se trata de evaluar i) la actuación desplegada por entidades púbicas en la suscripción de ii) contratos de naturaleza distinta a una vinculación laboral. Adicionalmente, la única autoridad judicial competente para validar si la labor contratada corresponde a una función que "no puede realizarse con personal de planta o requiere conocimientos especializados" es el juez contencioso".*

A renglón seguido explicó que en casos como el que aquí se analiza *"la solución adoptada por la Corte Constitucional implica que la jurisdicción no se cuestionará permanentemente dentro del trámite, pues ella se define por la existencia de un contrato de prestación de servicios estatal inicial, respecto del cuas se denuncia su posible desnaturalización, lo que ubica este asunto dentro de la competencia de la jurisdicción contenciosa"*

A partir del anterior raciocinio, en aplicación del artículo 104 del CPACA, la Corte Constitucional dispuso como regla de decisión para determinar la competencia en

tratándose de este tipo de problemas jurídicos, que "*La Jurisdicción Contencioso Administrativa es la competente para conocer y decidir de fondo un proceso promovido para determinar la existencia de una relación laboral, presuntamente encubierta a través de la suscripción sucesiva de contratos de prestación de servicios con el Estado, de conformidad con el Artículo 104 del CPACA"*.

En el caso en concreto, se advierte, la SUBRED INTEGRADA DE SERVICIOS DE SALUD SUR E.S.E es una Empresa Social del Estado, que celebró contratos de prestación de servicios con el demandante, por virtud de los cuales éste se desempeñó como camillero, lo que se extrae de los fundamentos fácticos de la demanda y de la documental aportada al paginario como medio de prueba, contratos que se celebraron bajo el marco legal del estatuto de contratación administrativa Ley 80 de 1993, que en su artículo 3° establece:

> *"3° Contrato de prestación de servicios*
>
> *Son contratos de prestación de servicios los que celebren las entidades estatales para desarrollar actividades relacionadas con la administración o funcionamiento de la entidad. Estos contratos solo podrán celebrarse con personas naturales cuando dichas actividades no puedan realizarse con personal de planta o requiera conocimientos especializados"*

Atendiendo todo lo anterior, y como se analizó en precedencia, no es la jurisdicción ordinaria en su especialidad laboral y seguridad social, la llamada a resolver la controversia propuesta como quiera que lo que lo que se pretende es la declaratoria de una relación laboral entre las partes, sometida a subordinación por parte del contratante, para lo cual debe adelantarse un análisis frente a la legalidad de los contratos de prestación de servicios celebrados y por tanto, como lo advirtió la Corte Constitucional, es la Jurisdicción Administrativa la encargada de resolver este problema jurídico.

Al paso de lo anterior, prosigue nulitar la sentencia proferida por el Juzgado 3° Laboral del Circuito de Bogotá el 19 de enero de 2022, conforme lo previsto en los artículo 16 y 138 del C.G.P., dejando a salvo las pruebas recaudadas en el trámite procesal, disponiendo además, que el a quo remita el expediente a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para lo de su cargo.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., Sala Laboral,

RESUELVE

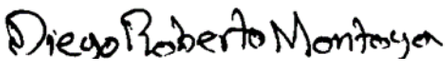
PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA para conocer el presente proceso.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la sentencia proferida el 19 de enero de 2022, por el Juzgado 3° Laboral del Circuito de Bogotá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 C.G.P.

TERCERO: ORDENAR al juez 3° Laboral del Circuito de Bogotá, remitir el expediente a los Juzgados Administrativos de Bogotá – reparto-, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

CUARTO: ESTA SALA SE RELEVA del estudio del recurso de apelación interpuesto por la parte demandante, por las razones expuestas en este proveído.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D. C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN

PROCESO EJECUTIVO LABORAL PROMOVIDO POR LUIS ALFREDO AREVALO RUBIO CONTRA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES -UGPP- (RAD. 05 2020 00024 01).

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Vencido el término de traslado otorgado, lapso durante el cual se presentaron los alegatos de instancia por ambas partes mediante correo electrónico del 4 y 5 de abril del 2022 (folios 4 a 10), el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, con fundamento en el numeral segundo del artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020, profieren la siguiente

P R O V I D E N C I A

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por la apoderada judicial del extremo ejecutado UGPP, contra el auto proferido por el Juez Quinto (5°) Laboral del Circuito de esta ciudad, en audiencia celebrada el pasado 10 de marzo 2021, por medio declaró no probadas las excepciones propuestas, entre ellas la de pago, ordenando seguir adelante la ejecución y decretando medidas cautelares, en los siguientes términos *(Audio Archivo 8 expediente digital, record: 19:54):*

> *"**PRIMERO: DECLARAR NO PROBADAS** las excepciones propuestas por la ejecutada UGPP.*
>
> ***SEGUNDO: ORDENAR** seguir adelante con la ejecución en los términos del mandamiento de pago del 6 de marzo de 2020.*

> ***TERCERO: CONDENAR*** *en costas a UGPP. Se fija por concepto de agencias de derecho el 7.5% de la liquidación del crédito.*
>
> ***CUARTO: REQUERIR,*** *a las partes para que de conformidad con lo dispuesto por el numeral 1o del artículo 446 del Código General del Proceso, presenten la liquidación del crédito, para lo cual las partes deberán incluir en dicha liquidación, los salarios que sirvieron de base para los aportes efectuados en forma interrumpida entre el 9 de agosto de 1985 y el 30 de enero de 2007 (3.600 días), debidamente indexados, e incluyendo para el efecto los factores salariales que define el Decreto 1158 de 1994 en su artículo 1°, tal como se indicó en la parte resolutiva que puso fin al proceso ordinario.*
>
> ***QUINTO: ACCEDER*** *a la solicitud de medidas cautelares, en los términos indicados en la parte motiva de la presente decisión.*
>
> ***SEXTO:*** *En firme esta providencia, el despacho analizará si compulsa copias a la Fiscalía General de la Nación para que se investigue al funcionario de la UGPP, JUAN DAVID GÓMEZ BARRAGÁN, Subdirector de Determinación de Derechos Pensionales, por la presunta comisión del delito de fraude a resolución judicial contemplado en el artículo 454 del Código Penal, mediante la emisión de actos administrativo totalmente contrarios a sentencia en firme y con efectos de cosa juzgada, esto es, resolución RDP031229 de octubre 20 de 2019, auto ADP 004995 de septiembre 21 de 2020 y auto ADP 006507 de diciembre 9 de 2020."*

Para arribar a la anterior decisión, el Juez de primer grado consideró, que, si bien la ejecutada expidió la Resolución RDP 031229 de octubre del 2019 mediante la cual reconoció la pensión de jubilación incluyendo en nómina al ejecutado, lo hizo con efectividad a partir del 1° de mayo del 2014, precisando lo que se debe validar en el proceso ejecutivo es el cumplimiento de la sentencia judicial proferida en donde se estableció el reconocimiento desde el 28 de mayo del 2008, precisando no puede la UGPP varios años después de haber terminado el proceso ordinario a alegar y discutir la prestación pensional la cual ya fue reconocida y condenada la ejecutada a su pago, señalando que por tales razones no se acredita el cumplimiento del pago total de la obligación, como tampoco el de las costas del proceso ordinario laboral, disponiendo seguir adelante con la ejecución y decretando como medida cautelar el embargo de las cuentas bancarias de la UGPP hasta por la suma de $290.000.000. *(Audio Archivo 8, expediente digital, record: 2:50)*[1]

[1] **Juez (Record: 02:50):** Procede el despacho a resolver las excepciones propuestas por la UGPP, en escrito del 18 de septiembre de 2020 en contra del mandamiento de pago del 6 de marzo del mismo año, el cual se le corrió traslado a la parte ejecutante del auto del 4 de febrero de 2021, que se suscribe el pago, inexistencia de la obligación imagínese, pago, inexistencia de la obligación, inexequibilidad

del título ejecutivo, prescripción, presunción de legalidad de los actos administrativos expedidos por la entidad y buena fe.

Frente a esto debe señalar el despacho que cuando el título ejecutivo lo constituye una sentencia, solo es procedente proponer las excepciones de pago, compensación, confusión, novación, remisión, prescripción o transacción, por así exponerlo expresamente el artículo 442 del código general del proceso, al respecto que tenemos en este caso, mediante providencia del 6 de marzo de 2020 se libró mandamiento de pago por la pensión de jubilación a partir del 24 de mayo de 2008, junto con las mesadas ordinarias adicionales, para lo cual la UGPP deberá definir el valor de la primera mesada pensional para el mes de mayo de 2008, teniendo en cuenta los salarios que sirvieron de base para los aportes efectuados de forma interrumpida, entre el 9 de agosto de 1985 y el 30 de enero de 2007, 3.600 pesos, debidamente indexados e incluyendo para los efecto los factores salariales que defina el decreto 1158 de 1994 en su artículo 1, en el cual debe aplicar una tasa de reemplazo igual a 75%, artículo 8 del decreto 2709 de 1994, reglamentario del artículo 7 de la ley 71 del 88, al valor de la mesada pensional, así definida para la fecha que se causó se le deberán efectuar los ajustes legales anuales.

También se condenó los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la ley 100 de 1993, a partir del 24 de septiembre de 2008 y hasta que se verifique el pago total de la prestación. Igualmente, la suma de $13.050.000 correspondientes a las costas del proceso ordinario.

Frente a este mandamiento de pago la UGPP, allegó memorial informando que la entidad mediante resolución 031229 del 20 de octubre de 2019, procedió a dar cumplimiento de la sentencia proferida dentro del proceso ordinario, allegando para tal efecto copia de dicho acto administrativo, también allegó los autos 4995 del 29 de octubre de 2020 y auto 6507 del 9 de diciembre de 2020, al descorrer el traslado a la parte ejecutante manifestó que esta acción no podía prosperar, pues bien indica la UGPP que en la resolución 31229 del 20 de octubre de 2019 constituye plena prueba del pago en debida forma del reconocimiento del demandante a su pensión de vejez, y su pago quedó supeditado al previo cumplimiento de las condiciones a cargo del demandante estipuladas en el fallo judicial, lo cual se prueba de manera clara que no existe obligación alguna por parte de mi representada UGPP, frente al reconocimiento de las sumas solicitadas.

Por otro lado, a través del auto 4995 del 21 de septiembre de 2020 la ejecutada indicó que la razón por la cual la efectividad de la pensión no es indicada en el fallo judicial del 24 de mayo de 2008, es porque el interesado figura con cotizaciones a COLPENSIONES, desde el 1 de septiembre de 2005 al 30 de abril del 2014, por lo cual la efectividad real, hágame el favor, es a partir del 1 de mayo de 2014, sin embargo, no figura retirado del sistema. Así mismo, manifestó que el ente judicial no tuvo en cuenta las cotizaciones del interesado al instituto de los seguros sociales hoy COLPENSIONES, ya que a fecha de la adquisición del derecho el 18 de agosto del 2013 la competencia del reconocimiento y pago de la pensión de jubilación por aportes está a cargo de COLPENSIONES. Nuevamente en auto 6507 del 9 de diciembre de 2020, la ejecutada manifiesta que mediante la resolución ya mencionada de octubre de 2019, se había dado cumplimiento al fallo judicial, reconociendo y ordenando el pago al ejecutante de una pensión de vejez en cuantía de $610.000 a partir del 1 de mayo de 2014, condicionada a demostrar el cese de cotizaciones al sistema general de pensiones, queda explicado a lo largo de los autos administrativos que la razón por la cual la efectividad de la pensión no es la indicada en el fallo judicial, 24 de mayo de 2008, es porque el interesado figura con cotizaciones a COLPENSIONES desde el 1 de septiembre de 2005, hasta el 30 de abril de 2014, por lo que la efectividad real es a partir del 1 de mayo de 2014.

Para resolver esta situación que es bastante sorprendente, de una vez le digo doctora Andrea nunca había tenido semejante respuesta de la UGPP, tan absurda en un proceso ejecutivo, es pertinente indicar lo que aquí se debe validar es el cumplimiento de la sentencia proferida el 30 de abril de 2014, modificada por la sala laboral del Tribunal Superior de Bogotá en sentencia de 1 de julio de 2014, providencias que se encuentran legalmente ejecutoriadas, y no hechos sobrevinientes o estas manifestaciones que aduce la UGPP que son totalmente infundadas frente a una sentencia judicial en firme.

De la revisión de las diligencias en el proceso ordinario, se tiene que la decisión proferida por el juzgador no fue con ocasión al material probatorio que obraba en dicho expediente, tales como las propias resoluciones de la UGPP, 42823 de 2011, o 40159 de 2012, y reportes de cotizaciones debidamente aportados por las partes en dicho proceso ordinario. De allí se advierten únicamente

cotizaciones inicialmente hasta el 27 de febrero de 1995, como da cuenta la propia resolución de la UGPP 42823 del 11 de marzo de 2011, luego cotizaciones hasta el 30 de enero de 2007, que modifica la resolución 40159 del 27 de marzo de 2012, siendo entonces que las propias resoluciones de la UGPP y la última proferida en 2012 ni siquiera daban cuenta de ningún cotización del actor posterior al año 2007, dichas cotizaciones también se vieron reflejadas en el reporte de las semanas de cotización. En el proceso ordinario la UGPP nunca acreditó cotizaciones posteriores a 2007, por lo que dicho material probatorio sirvió de base para que en su momento el juzgado profiriera un fallo en esos términos, un fallo inmutable sin que sea dable controvertirlo en este momento, cuando fue objeto de estudio por parte de la sala laboral de la Corte Suprema de Justicia, quien decidió no casar la sentencia, modificada por el tribunal superior; en el trámite del proceso ejecutivo no se puede discutir asuntos que debieron ser debatidos en el proceso ordinario, prácticamente UGPP está alegando su propia torpeza, su propia negligencia en su8 defensa judicial en el ordinario, y tratar de sacarla a relucir en el proceso ejecutivo, quitándole rigor a la sentencia, ya ejecutoriada, por tanto, las partes se encontraban atadas a la sentencia, mucho menos se puede pretender en este momento procesal y por cotizaciones del 1 de septiembre de 2012 al 30 de abril de 2014, que son 19 meses, porque eso si la UGPP menciona un periodo de 9 años, 2005 a 2014, hay cotizaciones, pero cuando se va a ver la historia laboral, son 19 meses que fueron cotizados por el propio demandante como independiente y con base en el salario mínimo, para esta forma despojar de una forma arbitraria, irregular, grosera, y que raya en fraude en resolución judicial al ejecutante del reconocimiento de la pensión por aportes desde el 28 de mayo de 2008 tal como se ordenó, pretendiendo ahora que la fecha de reconocimiento sea desde el 1 de mayo de 2014, cuando es evidente que por un desorden administrativo de la entidad, dentro del trámite del proceso ordinario no se acreditaron cotizaciones posteriores a 2007.

Es claro que se debe dar cumplimiento a la sentencia y reconocer y pagar la pensión de jubilación por aportes al señor LUIS ALFREDO AREVALO RUBIO, desde el 28 de mayo de 2008, por lo que este juzgado en la liquidación no va a tener cotizaciones posteriores a 2007.

Aquí en verdad doctora Andrea para que le comunique obviamente si ejerce su derecho a apelar, pues apelará y una vez en firme esta decisión en verdad hay que el juzgado hace un llamado de atención a esta persona juan David Gómez barragán subdirector de terminación de derecho pensionales de la UGPP, quien en forma totalmente contraria al orden jurídico establecido, grosería, totalmente de una forma absurda emite unos actos administrativos que rayan al fraude a la resolución judicial, como se indicó y rayan con un principio básico del debido proceso, el deber de cumplimiento de las providencias judiciales como componente del estado social de derecho, como componente del derecho fundamental del acceso a la administración de justicia, al debido proceso, tantas veces anotado y agotado por la Corte Constitucional, entre otras la sentencia SU 034 de 2018, que alude y trae a colación el artículo 21 de la convención americana de derecho humanos en la que se obliga y corresponde al estado garantizar el cumplimiento por las autoridades competentes de toda acción que se haya estimado procedente dentro de los juicios, el artículo 2 del pacto internacional de derechos civiles y políticos, las autoridades competentes cumplirán toda decisión que se hayan estimado procedente en el recurso del proceso, es decir, aquí está borrando de tajo este funcionario persona juan David Gómez barragán, está borrando de tajo todo el artículo 29, se está burlando de la administración de justicia, como si esto fuera un chiste, como si fuera un favor que se le está pidiendo a este señor o a la UGPP, que cumpla una sentencia judicial y que no es de su agrado, inventándose y sacando a relucir temas que en un proceso ejecutivo no puede sacar a relucir, sencillamente si encontró 19 meses cotizados con posterioridad a la fecha de la cual la justicia ordenó el pago de la pensión, pues no los tenga en cuenta, y punto, no los tenga en cuenta, son 19 meses que va, que son de cotizaciones independientes, como ya se dijo del propio ejecutante salario mínimo, entonces es crear un manto de duda en una decisión judicial, de forma grosera, que no que la fecha real no es mayo de 2008, discutiendo la decisión de juzgado, Tribunal y Corte Suprema, que le pasa a este señor, discutiendo una decisión en firme, discutiendo una sentencia inmutable, y poniéndose en rebeldía a la administración de justicia, yo no sé qué está pasando en la UGPP, y sacando y argumentando razones que definitivamente, como es eso que se le ha explicado al ejecutante hasta la saciedad que su fecha de disfrute y de efectividad de la pensión no es mayo de 2008, cuando la sentencia es muy clara, la orden es clara, como es posible en la resolución y en esos autos contarios a ley, como en el auto 4995 de 2020.

Se evidencia que el ente judicial no tuvo en cuenta las cotizaciones del interesado al ISS, hoy COLPENSIONES, ya que acorde con la fecha de adquisición al derecho 18 de agosto de 2003, imagínese esa falsa motivación tal grosera, de la adquisición del derecho 18 de agosto de 2013, la

Inconforme con la decisión la apoderada de la UGPP interpuso recurso de apelación, manifestando que con la resolución RDP 031229 del 20 de octubre de 2019, se le reconoció la pensión de jubilación al ejecutante incluido en nómina en octubre de 2020, cancelándole el respectivo retroactivo en el mismo mes, correspondiente a las mesadas pensionales causadas por los periodos comprendidos entre el periodo de mayo de 2014 al 30 de septiembre de 2020, solicitando estudiar la excepción de pago propuesta por la UGPP, señalando no existe saldo pendiente por los conceptos que el ejecutante eleva dentro de la presente acción ejecutiva, en consecuencia, peticiona se revoque la decisión adoptada por medio de la cual se ordenó seguir adelante con la ejecución y se negó la excepción propuesta de pago propuesta.

---

competencia para el reconocimiento y pago de la pensión por aportes estará cargo de COLPENSIONES, discutiendo hasta quien es el encargado y quien es el encargado de reconocer la prestación, imagínese el tamaño de despropósito de este señor, de este funcionario de la UGPP, venir aquí años después de que un proceso ya termino, a alegar y discutir la competencia del pago de una prestación, cuando en el proceso ordinario fue condenado UGPP y además olvida el funcionario también entre otras, la sentencia T039 de 2017 emanada de la Corte Constitucional o la sentencia del Consejo de Estado de febrero 7 de 2019, auto 5418 de 2018, las dos altas Cortes, Consejo de Estado y Corte Constitucional le han dicho a COLPENSIONES y a la UGPP que no involucren los derechos fundamentales de los pensionados, bajo el argumento de reglas de competencia y que se dispongan a resolver sobre los derechos pensionales y más aquí que estamos sobre una sentencia ejecutoriada, entonces como es posible a estas alturas, hasta venga a discutir la falta de legitimación en la causa por pasiva, este señor, de verdad que queda uno sorprendido y se va a tomar acciones en contra de este señor una vez este esta decisión quede en firme por parte del Tribunal, que se va a confirmar, eso es obvio.

Entonces, es claro que se debe dar cumplimiento a la sentencia y a reconocer y pagar la pensión de jubilación al señor LUIS ALFREDO AREVALO RUBIO, desde el 28 de mayo de 2008, como se indicó, y además, porque el propio acto administrativo de la UGPP señala que el pago está condicionado, imagínese eso, que el pago está condicionado a que el demandante no tenga más cotizaciones al sistema en seguridad social en pensiones, condicionando, está condicionando una sentencia ejecutoriada, así es el tamaño de despropósito de este funcionario.

En lo que hace la excepción de prescripción se declarara como no probada, por cuanto el auto que ordenó obedecer y cumplir lo dispuesto por la superior data del 6 de junio de 2019, y la solicitud de mandamiento de pago se presentó ese mismo año.

Por todo lo anterior, con la resolución 31229 de octubre 20 de 2019, se advierte que no se acredita el cumplimiento del pago total de la obligación que aquí se ejecuta, así como el pago de las costas del proceso ordinario laboral, por lo que se debe seguir con la ejecución en los mismos términos en los que se libró el mandamiento de pago, advierte el despacho que en el expediente obra solicitud de medidas cautelares, por cuanto se decretan el embargo de las sumas de dinero que la ejecutada UGPP, posea o llegare a poseer en las cuentas de ahorro corrientes de las entidades de ahorro Bancolombia, Davivienda, Banco Bogotá, Banco Caja Social, Banco GM Sudameris, Banco Popular, las cuales no estén marcadas como inembargables. Límite de la medida, se limita la medida de $290.000.000. en aras de evitar excesos de embargo se ordena librar oficio de embargo de uno a uno hasta que obre respuesta el banco oficiado.

En relación con las medidas cautelares solicita igualmente se revoque la decisión como quiera que dichos dineros hacen parte del tesoro publico y no son de uso y goce libre de la UGPP, por lo tanto, inembargables. *(Audio Archivo x, expediente digital, record: 21:48)*[2]*.*

Para resolver, se hacen las siguientes,

---

[2] **Apoderada ejecutada:** Gracias su señoría, procedo a interponer recurso de apelación en contra de la decisión que usted acaba de adoptar, de conformidad con los siguientes argumentos.

Su señoría respecto a ordenar seguir adelante con la ejecución, le solicito al Honorable Tribunal se tenga en cuenta que en el presente asunto mi representada mediante resolución RDP 031229 del 20 de octubre dio cumplimiento a un fallo judicial proferido por el juzgado 5 laboral de fecha de 30 de abril de 2014, confirmado por el Tribunal Superior del Distrito Judicial sala laboral mediante fallo del 1 julio de 2014, debidamente ejecutoriado por medio del cual se le reconoció una pensión por partes al ejecutante, dicha pensión fue liquidada por el 75% de los salarios que sirvieron de base para los aportes efectuados de forma interrumpida entre el año 1986 y el año 2014, con la inclusión de los factores salariales de asignación básica del IBC, actualizando dichos valores conforme al IPC desde el año 1986 al año 2013, en cuantía de $582.380 con efectividad desde el 1 de mayo de 2014, condicionado al cese de cotizaciones al sistema de seguridad social de pensiones, de conformidad con el fallo objeto del cumplimiento.
De igual manera, se tiene que una vez verificado los aplicativos por parte de la entidad y las instrucciones de mi representada, conforme a la información suministradas en las ADP y las cuales fueron puestas en conocimiento a su señoría, se pudo observar que la resolución RDP 031229 del 20 de octubre de 2019, mediante la cuales se le reconoció la pensión de jubilación al ejecutante fue incluido en nómina en octubre de 2020, cancelándole el respectivo retroactivo en el mismo mes, correspondiente a las mesadas pensionales causadas por los periodos comprendidos entre el periodo de mayo de 2014 al 30 de septiembre de 2020, por los siguientes valores, que solicitó al tribunal se tenga en cuenta, con el fin que se estudió la excepción de pago propuesta por mi representada.

Valor del retroactivo se le pago la suma de 461.295.667. Valor por concepto de intereses la suma de $45.505.069. Se hicieron unos descuentos en aportes en salud de $6.490.720. Para un valor neto a pagar de $100.310.015,90.

Por lo anterior, no existe saldo pendiente por dichos conceptos que el ejecutante eleva dentro de la presente acción ejecutiva, en consecuencia, le solicito al Honorable Sala, se revoque la decisión adoptada por este despacho por medio de la cual se ordenó seguir adelante con la ejecución y se negó la excepción propuesta de pago propuesta por mi representada.

Respecto a la medida cautelar decretada por el despacho, le solicito a su señoría la misma sea revocada, como quiera que mi representada la UGPP, tal y como se ha venido manifestando en diferentes escenarios, no es procedente el embargo y retención de los dineros de propiedad de la UGPP, los cuales solicita el ejecutante, como quiera que estas sumas dinerarias entras, que se encuentran en cuentas corrientes mencionadas dentro del auto que ordenó seguir adelante con la ejecución, no puede ser objeto de embargo o retención, toda vez que en ella reposan dineros recaudados de impuestos, deducciones de orden parafiscal realizadas a proveedores y contratistas, los recursos destinados al pago de la seguridad social de los funcionarios, las deducciones con distintos a la cuentas de ahorro de las cuales no pueden ser embargados, dicho dineros que hacen parte, como ya lo mencione parte del tesoro público y no son de uso y goce libre de la UGPP, y son por lo tanto, inembargables. Por lo anterior, le solicito se revoque esta decisión de embargo de decretar el embargo de las cuentas que se encuentran a cargo de la UGPP.

En este sentido dejo sustentado el recurso de apelación, solicitando nuevamente se absuelva a mi representada, como quiera que no existe ningún emolumento pendiente por pagar, como ya lo indique, al ejecutante ya se le pagó los conceptos que él está solicitando a la demanda ejecutiva.

C O N S I D E R A C I O N E S

Asume la Sala el conocimiento de este especial, en orden a desatar el recurso de apelación promovido por la parte ejecutada, contra la providencia proferida por el Juez 5° Laboral del Circuito de esta ciudad, en audiencia celebrada el pasado 10 de marzo del 2021, mediante la cual declaró no probada la excepción de pago y condenó en costas dentro del trámite.

En esa dirección, previo a resolver debe recordarse, el título base de la ejecución lo constituyen las sentencias proferidas en primera instancia el 30 de abril de 2014 *(Páginas 455 a 461 Archivo 2 expediente digital)* por el Juzgado 5° Laboral, modificada por esta Corporación el 1° de julio del 2014 *(Páginas 469 a 483 Archivo 2 expediente digital)* dentro del proceso ordinario radicado bajo el número 05 2013 00475 01, junto con el auto que aprobó la liquidación de costas por la suma de $13.050.000 *(Página 609 Archivo 2 expediente digital).*

De tal manera, teniendo en cuenta la solicitud de ejecución *(Pagina 613 Archivo 2 expediente digital)*, el Juzgado primigenio, mediante proveído del 6 de marzo del 2020 *(Paginas 619 y 620 Archivo 2 expediente digital)*, libró mandamiento de pago en los siguientes términos:

> ***"a)*** *Por la pensión de jubilación a partir del 24 de mayo del 2008, junto con las mesadas ordinarias y adicionales; para lo cual la UGPP, deberá definir el valor de la primera mesada pensional para el mes de mayo del 2008, teniendo en cuenta los salarios que sirvieron de base para los aportes efectuados en forma interrumpida entre el 9 de agosto de 1985 y el 30 de enero de 2007 (3600 días), debidamente indexados, e incluyendo para el efecto los factores salariales que define el Decreto 1158 de 1994 en su artículo 1°, IBL al cual deberá aplicar una tasa de reemplazo igual al 75% (artículo 8° del Decreto 2709 de 1994, reglamentario del artículo 7 de la Ley 71 de 1988). Al valor de la mesada pensional así definida para la fecha que se causó, se le deberán efectuar los ajustes legales anuales.*

> ***b)*** *Por los intereses moratorios previstos en el artículo 141 de la Ley 100 de 1993, a partir del 24 de septiembre de 2008, y hasta que se verifique el pago total de la prestación.*
>
> ***c)*** *Por la suma de $13.050.000, correspondientes a las costas del proceso ordinario**”**.*

Así las cosas, teniendo en cuenta las manifestaciones de la alzada, en virtud del principio de consonancia, la controversia en esta instancia girará en torno a establecer si la obligación objeto de mandamiento de pago se encuentra pagada en su totalidad y si resulta procedente o no el decreto de la medida cautelar.

En esa orientación se advierte, de conformidad con las providencias base de la ejecución a las que se hizo referencia, la obligación a cargo de la ejecutada se sintetiza en el reconocimiento de la pensión de jubilación a partir del **24 de mayo del 2008,** junto con los intereses moratorios desde el **24 de septiembre del 2008** y las costas del proceso en suma de **$13.050.000.**

De esta manera, y conforme al acto administrativo con el cual la UGPP aduce acreditar el pago total de la obligación RDP 031229 del 20 de octubre del 2019 (*visible en las páginas 633 a 639 del Archivo 2 del expediente digital),* evidencia esta Sala de decisión si bien se reconoce la pensión de vejez en cumplimiento de un fallo judicial, lo cierto es que tal como lo consideró el Juez de primer grado no se efectuó en los términos precisos del mandamiento de pago, en tanto el reconocimiento fue del siguiente tenor:

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Dar cumplimiento al fallo judicial proferido por TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA SALA LABORAL el 1 de julio de 2014 y en consecuencia, reconocer y ordenar el pago a favor del (a) señor (a) AREVALO RUBIO LUIS ALFREDO, ya identificado (a), de una pensión mensual vitalicia de VEJEZ, en cuantía de $616,000 (SEISCIENTOS DIECISEIS MIL PESOS M/CTE), efectiva a partir del 1 de mayo de 2014, condicionada a demostrar el cese de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Pensiones.

ARTÍCULO SEGUNDO: El Fondo de Pensiones Públicas del Nivel Nacional pagará al interesado (a) la suma a que se refiere el artículo anterior, con los reajustes correspondientes, previas las deducciones ordenadas por la ley, con observancia del turno respectivo.

PARAGRAFO: El pago de las diferencias quedará condicionado al reintegro de la yo cancelado por COLPENSIONES con ocasión del reconocimiento y pago de la Indemnización Sustitutiva de la Pensión de Vejez.

(…)

ARTÍCULO SÉPTIMO: En cumplimiento al fallo judicial proferido por el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA SALA LABORAL el 1 de julio de 2014, ordenar el pago de los intereses moratorios del artículo 141 de la Ley 100 de 1993 a cargo del FONDO DE PENSIONES PÚBLICAS FOPEP a favor del señor AREVALO RUBIO LUIS ALFREDO a partir del 01 de mayo de 2014 y hasta la fecha en que se verifique el pago.

Así las cosas, se evidencia la UGPP reconoce la prestación pensional pero a partir del 1° de mayo del 2014 "*condicionada a demostrar el cese de cotizaciones al Sistema de Seguridad Social en Pensiones"* y ordena el reconocimiento de los intereses moratorios desde la misma fecha -01/05/14-, cuando como ya se indicó se ordenó a través de la presente ejecución el reconocimiento de la pensión de jubilación a partir del **24 de mayo del 2008,** junto con los intereses moratorios desde el **24 de septiembre del 2008,** sin ningún tipo de condicionamiento, circunstancias que no se evidencian tal acto administrativo aunado a que tampoco obra el pago de las costas del proceso.

Recuérdese, el proceso ejecutivo tiene una naturaleza jurídica propia, distinta de los demás de su género o del ordinario. Es un juicio sumario en que no se trata de aclarar derechos dudosos y controvertidos, sino sólo de llevar a efecto lo que ya está determinado por el Juez o consta evidentemente de uno de aquellos títulos que por sí mismo hacen plena prueba y que la ley da tanta fuerza como a la decisión judicial. En sentido estricto no se trata de un juicio, sino más bien de un modo de proceder para que se ejecuten y no

queden ilusorias las obligaciones o deudas ventiladas y decididas en juicio o comprobadas por título o instrumentos tan eficaces como las sentencias judiciales; no se debate, pues, la existencia o la inexistencia del derecho, lo que se procura es la exigencia, por intermedio del Juez del cumplimiento de una obligación preestablecida, por parte del deudor, con el fin de que satisfaga el derecho del acreedor; obligación y derechos estos que deberán demostrarse de conformidad al derecho probatorio.

Así las cosas, y si bien la parte ejecutada expidió un acto administrativo con el cual pretende efectuar el pago de la obligación a su cargo, el mismo no se efectuó en los términos señalados en la sentencia que constituye el titulo ejecutivo dentro de este especial tramite, expresando en las consideraciones de tal resolución circunstancias que no pueden ahora y dentro de este ejecutivo ser objeto de discusión, además brilla por su ausencia la inclusión en nómina de la prestación reconocida en la citada resolución por lo que a la fecha se encuentra aun de manera total la deuda en cabeza de la UGPP.

Razón por la cual se confirmará la decisión de primer grado en cuanto declaró NO probada la excepción de pago.

Ahora, a efectos de resolver lo pertinente en punto al decreto de la medida cautelar, providencia que resulta susceptible del recurso de apelación a voces del artículo 65 numeral 7 del Código de Procedimiento del Trabajo y de la Seguridad social, en consonancia con el artículo 321 numeral 8° del Código General del Proceso[3], baste con señalar, la imposibilidad de revocar tal orden por cuanto si bien el argumento de la apelante es la inembargabilidad de los recursos de la ejecutada, tal situación no se ha constatado en el presente asunto, aspecto que cobra relevancia, por cuanto ni tan siquiera hasta este momento se ha embargado alguna de las cuentas bancarias de la UGPP, por lo que dicha condición especial –inembargabilidad- debe ser constatada, justamente mediante la información que pudieren dar las entidades bancarias, pues una vez se obtengan esas

[3] *8. El que resuelva sobre una medida cautelar, o fije el monto de la caución para decretarla, impedirla o levantarla.*

respuestas se tendrán mayores elementos de juicio para determinar tal circunstancia.

Al tenor de las motivaciones precedentes, sin más consideraciones conforme se indicó en líneas anteriores se confirma la decisión del *a quo* en cuanto declaró no probaba la excepción de pago y se decretaron medidas cautelares.

SIN COSTAS en esta instancia.

En mérito de lo expuesto el **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C**., Sala Laboral

R E S U E L V E

PRIMERO: CONFIRMAR el proveído apelado frente, por las razones expuestas por esta Sala de Decisión.

SEGUNDO: DEVOLVER el expediente al Juzgado de origen para lo de su cargo.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.
SALA LABORAL.

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR MARCO FIDEL TORRES ROMERO CONTRA BAKER HUGHES DE COLOMBIA (RAD. 06 2017 00257 01).

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Vencido el término de traslado otorgado, y habiéndose presentado los alegatos de conclusión en esta instancia únicamente por la demandad BAKER HUGHES DE COLOMBIA (fls. 4 a 7), el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, con fundamento en el numeral segundo del artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020, profieren la siguiente

PROVIDENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación oportunamente interpuesto y debidamente sustentado por la apoderada de la sociedad demandada contra el auto proferido por el Juzgado Sexto (6°) Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el pasado 8 de febrero del 2022 *(Archivo 2 expediente digital, páginas 222 y 223)*, por medio del cual resolvió declarar *"ineficaz"* la integración del litisconsorcio necesario con PORVENIR que fuere ordenado por el mismo despacho por auto proferido en audiencia llevada a cabo el 22 de junio del 2021, donde resolvió la excepción previa propuesta por la demandada declarándola probada (*Ver acta página 221 Archivo 1 expediente digital)*, señalando en el proveído atacado que además de haber transcurrido más de 6 meses desde que se dispuso la integración del contradictorio con la AFP sin que se hubiera surtido la notificación "*revisado nuevamente el expediente surge que la vinculación de la Administradora de Fondos de Pensiona y Cesantías PORVENIR S.A., no resulta necesaria para definir el conflicto, en*

el entendido que de que la reclamación relacionada con el pago de los aportes a seguridad social en pensiones (cálculo actuarial por el periodo comprendido entre el 14 de julio de 1980 y el 16 de diciembre de 1987 derivada del incumplimiento de las obligaciones a cargo del empleador por la falta de afiliación al sistema en pensiones permite concluir que en el caso de una eventual condena la misma correría a cargo del empleador que omitió la afiliación y en ese sentido se concluye que no se hace necesaria la vinculación de PORVENIR S.A." (Páginas 222 y 223 Archivo 2 expediente digital).

Contra la decisión anterior, la apoderada de la pasiva, oportunamente interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, insistiendo se integre la litis con PORVENIR S.A. en razón a que, en primer lugar, la carga de la notificación no estaba en cabeza de la demandada sino del demandante y en segundo lugar por cuanto en su sentir resulta incongruente que el mismo despacho declare probada la excepción previa de falta de integración del litisconsorcio necesario y luego de manera posterior y mediante auto interlocutorio decida que ya no es necesaria la intervención de PORVENIR, considerando con tal decisión se estaría violando el debido proceso pues no es la etapa para decidir nuevamente sobre la excepción previa que se propuso en su oportunidad, señalando se deben respetar y garantizar las etapas del procesos y decisiones o actos jurídicos adoptados por las partes y el Juez sin que sea dable fuera de tales etapas se cambie una decisión que ya se encuentra en firme, solicitando revocar el fallo recurrido. *(Archivo 1 expediente digital, páginas 224 a 230).*

Para resolver se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

Asume la Sala el conocimiento de este ordinario, en orden a desatar el recurso de apelación propuesto por la demandada contra el auto que negó la integración del litisconsorcio con PORVENIR, debiéndose señalar, en primer lugar, si bien el Juzgado de primer grado en oportunidad anterior –como atrás se anotó- había declarado probada la excepción previa propuesta por la

demandada denominada "*EXCEPCIÓN PREVISA FALTA DE INTEGRACIÓN DE LITISCONSORCIO NECESARIO EN LA PARTE PASIVA"* ordenando la integración con PORVENIR S.A., mediante el auto aquí atacado revocó su decisión y negó su intervención, lo que permite concluir a esta a Sala de decisión que se debe estudiar la apelación contra el auto que declara no probada la excepción previa de falta de integración del Litis consorcio necesario, proveído que se encuentra enlistado como susceptible del recurso de apelación, al tenor de lo dispuesto en el numeral 3º del artículo 29 de la Ley 712 de 2001, que reformó el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo, lo cual permite el estudio del recurso de marras.

En los anteriores términos, ha de recordarse, el Litis consorcio necesario se encuentra previsto para aquellos casos en que no sea posible dictar sentencia de mérito sin la comparecencia de determinadas personas bien por activa ora por pasiva, debido a su estrecha relación con el objeto del litigio que hace que se configure una relación jurídica material o jurídica inescindible, que impide al Juez esa tarea, conforme se puede colegir de la disposición contenida en el artículo 61 del C.G.P[1]., situación que, tal como lo estimó la Juez de conocimiento, no se presenta en el caso de autos.

Frente al tema, ilustrativo resulta traer a colación lo dicho de antaño por la Corte Suprema de Justicia, en cuanto ha considerado que *"… la característica esencial del litisconsorcio necesario es el supuesto de que la sentencia haya de ser única y de idéntico contenido para la pluralidad de partes en la relación jurídico-procesal por ser única la relación material que en ella se controvierte; unicidad ésta que impide hacerle modificaciones que no puedan operar conjuntamente frente a los varios sujetos. En el litisconsorcio facultativo, en cambio, como a la pluralidad de partes, corresponde también una pluralidad de relaciones sustanciales controvertidas, es posible entonces que en cierto momento las causas reunidas se separen y cada uno vuelva a ser objeto de proceso separado; y*

[1] *"ARTÍCULO 61. LITISCONSORCIO NECESARIO E INTEGRACIÓN DEL CONTRADICTORIO. Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado."*

aunque el juicio continúa siendo único hasta el fin, nada impide que a las distintas causas se les dé decisión diferente"[2]

En esa medida, y atendiendo los términos de la demanda descarta la Sala de entrada la hipótesis del litis consorcio necesario con la AFP PORVENIR, pues en el caso de marras, las pretensiones se encuentran dirigidas a que se reconozcan y paguen los aportes a seguridad social en pensiones por el no pago de los mismos por parte de BAKER HUGHES DE COLOMBIA por el periodo comprendido del 14 de julio de 1980 al 1° de octubre de 1994 *(pretensiones páginas 5 a 6, Archivo 2 expediente digital)*, pago que considera la parte actora debe ser asumido directamente por quien fue su empleador, situación que por sí sola no alcanza a irradiar efectos a la sociedad administradora de pensiones llamada a integrar el contradictorio, toda vez que en el caso presente, la persona jurídica que ha sido ubicada por el demandante en el lado pasivo de la relación, cuenta con total autonomía para actuar y es únicamente sobre ésta que puede recaer la condena, pues la sentencia no tendría que ser necesariamente uniforme para la encartada y respecto de quien se pretende la integración a la litis, sino que la misma puede producirse teniendo en cuenta la regulación legal frente al caso, así pues, tal como se planteó la demanda, la falta de integración al proceso con PORVENIR, no impide decidir de fondo la presente controversia, siendo el demandante al momento de la presentación de la demanda quien decide a su arbitrio contra quien dirige la demanda contando con total autonomía para actuar, como así lo hizo.

En la misma dirección, se precisa las pretensiones se dirigen exclusivamente en contra de BAKER HUGHES DE COLOMBIA, sin que de las mismas se pueda extraer que se pretenda condenar a la AFP PORVENIR a llevar a cabo alguna gestión, advirtiéndose en caso de prosperar los anhelos del actor resulta que por disposición legal (Decreto 1887 de 1994), es el fondo de pensiones al que se encuentre vinculado el demandante el que debe realizar el correspondiente cálculo actuarial por el tiempo en que no existió afiliación al sistema general de pensional, sin orden judicial que así lo disponga, y

---

[2] *Corte Suprema de Justicia. Sentencia fechada 14 de junio de 1971,t. CXXXVIII, pág. 389, 1ª y 2ª. Héctor Roa Gómez, en jurisprudencia de la Corte Suprema de Justicia, Bogotá, Edit. ABC, 1979, pág. 937.*

debe ser la demandada la que debe cancelar el valor que así lo estime el fondo de pensiones, por lo que en efecto como lo adujo la Juez de primer grado no resulta necesaria su comparecencia.

Ahora y en cuanto a que el Juez no podía modificar una decisión que ya se encontraba en firme y ejecutoriada, téngase en cuenta lo relacionado con el control oficioso legalidad, el cual debe realizarse en cualquier etapa del proceso en ejercicio de las facultades conferidas al Juez como director del proceso y adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes (Artículo 48 del C.P.L. y S.S.). Todo ello en punto a no pasar por alto, aspectos que pudieren ir en abierta contradicción con un eficaz y debido proceso, de modo que no encuentra esta Corporación que con la decisión tomada por la Juez 6° Laboral del Circuito se estén vulnerando los derechos de las partes aquí en contienda, pues como ya se explicó en efecto la intervención de PORVENIR no resulta necesaria dentro de esta Litis, pues fue así como el Juzgador de primer grado al advertir que ya habían transcurrido más de 6 meses desde que se dispuso la notificación a PORVENIR sin que la partes dieran cumplimiento al trámite que correspondía, dada su función como Juez director del proceso y en busca de imprimir celeridad al presente asunto por la desatención de las partes en su obligación de integrar el contradictorio conforme lo señala el numeral 6 del artículo 78 del C.G.P., tomó la decisión de darle impulso a la litis y como fueron las partes las que incumplieron con su deber en la diligencia de notificación, resolvió en la forma en que atrás se anotó, decisión respecto de la cual esta Sala de decisión ya tomó la correspondiente determinación.

Agotada como está la competencia de ésta Corporación, por el estudio de los motivos de apelación, y habiéndose arribado las mismas conclusiones de la *a quo*, deberá confirmarse la providencia impugnada.

COSTAS en ésta instancia a cargo de la demandada.

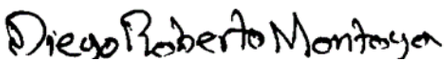
En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C., SALA LABORAL**-,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido por el JUZGADO 6° LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ D.C., el 8 de febrero del 2022.

SEGUNDO: COSTAS en ésta instancia a cargo de la demandada.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

AGENCIAS EN DERECHO: Se fija como valor por concepto de agencias en derecho la suma de $100.000, a cargo de la parte demandada, la cual deberá ser incluida en la liquidación de costas, al tenor de lo consagrado en el artículo 366 del C.G.P.



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTA D. C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO EJECUTIVO LABORAL SEGUIDO POR DARÍO ALFONSO GUALTERO VEGA CONTRA BANCO CENTRAL HIPOTECARIO EN LIQUIDACIÓN (RAD. 12 2017 00078 01).

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Vencido el término de traslado otorgado, habiéndose presentado los alegatos de conclusión únicamente por la parte incidentante (fl. 422), el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, con fundamento en el numeral segundo del artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020, profieren la siguiente

PROVIDENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el ejecutante (aquí incidentado) en contra de su anterior apoderado y aquí incidentante contra la providencia proferida por el Juez Doce (12) Laboral del Circuito de Bogotá D.C. el 29 de junio de 2021 (fls. 384 y 385) por medio del cual resolvió el incidente de regulación de honorarios y ordenó al señor Darío Alfonso Gualtero Vega, pagar 15 S.M.L.M.V. por valor de $13’627.890, a favor del doctor Gilberto Enrique Vitola Márquez, por concepto de honorarios por el proceso adelantado hasta la fecha de la revocatoria del poder que se le confirió.

Como motivos de inconformidad, el apoderado del incidentado adujo, el juzgado no tuvo en cuenta que la corrección aritmética que se hizo a la sentencia, fue ordenada por la Corte Suprema de Justicia por virtud de un trámite de tutela adelantado por él y no por el abogado a quien se le revocó el poder; fue él y no el incidentante quien llevó a cabo “el proceso de corrección de sentencia”.

Estimó, el incidente de regulación de honorarios fue presentado en forma extemporánea, es decir, cuando ya habían pasado los 30 días que establece el artículo

76 del Código General del Proceso, en tanto el auto que le reconoció personería al nuevo apoderado data del 7 de junio de 2019 y el incidente fue presentado el 8 de octubre de 2020. Añadió, a la fecha de interposición del recurso, el incidentante no ha recibido ninguna suma por concepto de las pretensiones de la demanda ordinaria; que en el contrato de prestación de servicios se estableció como condición para el pago de honorarios al incidentante la revisión y revocación del fallo de tutela por parte de la Corte Constitucional respecto de la acción interpuesta por el señor Gualtero en el año 2017, pero el expediente nunca fue escogido para su revisión ni el Dr. Vitola insistió con el recurso ante la Procuraduría General de La Nación.

A efectos de resolver lo pertinente se hacen las siguientes,

C O N S I D E R A C I O N E S

Al punto del trámite procesal objeto de análisis, se tiene que el artículo 127 del C.G.P. aplicable al procedimiento del trabajo conforme al artículo 145 del C.P.L., indica expresamente que *"Solo se tramitarán como incidente los asuntos que la ley expresamente señale",* el trámite, la preclusión y efectos son los consagrados en los artículos 128 y 129 del mismo compendio procesal.

Es así que el artículo 76 del Código General del Proceso establece en lo que acá interesa:

> *"…El poder termina con la radicación en secretaría del escrito en virtud del cual se revoque o se designe otro apoderado, a menos que el nuevo poder se hubiese otorgado para recursos o gestiones determinadas dentro del proceso.*
>
> *El auto que admite la revocación no tendrá recursos. Dentro de los treinta (30) días siguientes a la notificación de dicha providencia, el apoderado a quien se le haya revocado el poder podrá pedir al juez que se regulen sus honorarios mediante incidente que se tramitará con independencia del proceso o de la actuación posterior. Para la determinación del monto de los honorarios el juez tendrá como base el respectivo contrato y los criterios señalados en este código para la fijación de las agencias en derecho. Vencido el término indicado, la regulación de los honorarios podrá demandarse ante el juez laboral…"*

En el presente caso se observa, mediante memorial de 17 de septiembre de 2018, el señor Darío Alfonso Gualtero Vega otorgó poder al abogado Clímaco Achury Murcia (fl. 289), a quien el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá, reconoció personería mediante auto de 7 de junio de 2019 (293 a 295); sin embargo, solo

mediante auto de 10 de diciembre de 2020, el juzgado tuvo por revocado el poder primigenio, conferido al abogado Gilberto Enrique Vitola Márquez (fl. 367), providencia que tuvo en cuenta para contabilizar el término de los 30 días a que hace referencia el artículo 76 del Código General del Proceso, por lo que según entendimiento del a quo, el incidente de regulación de honorarios no se presentó fuera del plazo legamente establecido para ello y en consecuencia se cumplen los presupuestos fijados en la norma en cita para fijar los honorarios solicitados.

De esta manera la Sala precisa, es imperioso determinar la data a partir de la cual debe contabilizarse el término de 30 días para presentar el incidente de regulación de honorarios, en tanto este aspecto que fue objeto de reparo por parte del recurrente y de éste depende la procedencia del estudio de fondo respecto a la regulación de los honorarios solicitada.

Al tema, la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia, en providencia AC4063-2019 de 24 de septiembre de 2019, radicación 11001-31-10-010-2011-00571-01, recabó en las directrices que deben tenerse en cuenta para la procedencia del incidente de regulación de honorarios, en relación con la terminación del poder. En esa oportunidad señaló:

> *"3. A partir de lo que disponía el artículo 69 del Código de Procedimiento Civil en torno al finiquito del poder, que básicamente es similar a la regulación actual, la Sala ha expresado que la figura del incidente de regulación de honorarios está sometido a las siguientes directrices:*
>
> *a) Presupone revocación del poder otorgado al apoderado principal o sustituto, ya expresa, esto es, en forma directa e inequívoca, ora por conducta concluyente con la designación de otro para el mismo asunto.*
>
> *b) Es competente el juez del proceso en curso, o aquél ante quien se adelante alguna actuación posterior a su terminación, siempre que se encuentre dentro de la órbita de su competencia, la haya asumido, conozca y esté conociendo de la misma.*
>
> *c) Está legitimado en la causa para promover la regulación, el apoderado principal o sustituto, cuyo mandato se revocó.*
>
> *d) Es menester proponer incidente mediante escrito motivado dentro del término perentorio e improrrogable de los treinta días hábiles siguientes a la notificación del auto que admite la revocación. Ésta, asimismo se produce con la designación de otro apoderado, en cuyo caso, el plazo corre con la notificación de la providencia que lo reconoce.*
>
> *e) El incidente es autónomo al proceso o actuación posterior, se tramita con independencia, no la afecta ni depende de ésta, y para su decisión se considera la gestión profesional realizada hasta el instante de la notificación de la providencia admitiendo la revocación del poder.*

> *f) La regulación de honorarios, en estrictez, atañe a la actuación profesional del apoderado a quien se revocó el poder, desde el inicio de su gestión hasta el instante de la notificación del auto admitiendo la revocación, y sólo concierne al proceso, asunto o trámite de que se trate, sin extenderse a otro u otros diferentes* (…).
>
> *g) El quantum de la regulación, "no podrá exceder el valor de los honorarios pactados", esto es, el fallador al regular su monto definitivo, no podrá superar el valor máximo acordado*» (CSJ AC, 31 may. 2010, Rad. 4269, reiterado el 2 nov. 2012, Rad. 2010-00346-00". (subrayado por la Sala)

El asunto bajo estudio también fue objeto de análisis por parte de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, en sentencia STL2678-2019, con radicación 83245 de 27 de febrero de 2019, manifestó:

> *"Al respecto, y tal como lo indicó la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, se observa que, la determinación de no acceder al incidente de regulación de honorarios, tuvo sustento en que el mismo fue presentado de forma extemporánea, como quiera que la parte demandante otorgó poder a un nuevo abogado, al cual se le reconoció personería, de acuerdo a lo preceptuado por el artículo 76, inciso 2º del Código General del Proceso, y por ende se dio la revocatoria tácita del poder conferido a la tutelante, lo que daba lugar a que la actora en esta acción de amparo iniciara dentro de la oportunidad establecida en la norma en comento, el respectivo incidente, lo cual hizo sólo un año después de revocado su mandato, determinación que fue edificada, de conformidad con las normas aplicables al caso, y que contemplan la posibilidad que tiene la petente de reclamar mediante vía judicial, a través de un proceso ordinario laboral el reconocimiento de honorarios".*

De acuerdo al canon procesal transcrito, la terminación del poder se presenta bien de manera expresa por revocatoria del poder o en forma tácita por designación de un nuevo apoderado y en este último caso, conforme lo señaló claramente la Sala Civil de la Corte Suprema de Justicia, los 30 días hábiles de plazo para para la proposición del incidente de regulación de honorarios se contabilizan a partir de la providencia que reconoce al nuevo apoderado.

En ese orden, en el caso bajo análisis, mediante poder visible a folio 289, el señor Darío Alfonso Gualtero Vega confirió poder al abogado Clímaco Achury Murcia, para que adelantara la solicitud de corrección de un error aritmético; situación que a tono con lo dispuesto en el artículo 76 CGP no terminaría con el poder que se le había conferido al abogado Gilberto Enrique Vitola Márquez; sin embargo, el juzgado le reconoció personería al doctor Achury Murcia mediante auto de 7 de junio de 2019 (fls. 293 a 295), pero lo hizo en forma general y no para la gestión específica

de la corrección del error aritmético, lo que conllevó a que el citado abogado continuara actuando en las demás actuaciones del trámite de ejecución, hecho que además, llevó al abogado Gilberto Enrique Vitola Márquez a entender que el señor Gualtero Vega le había revocado el poder, entendimiento que lo llevó a solicitar copias de las actuaciones procesales y presentar el incidente de regulación de honorarios. (folios 333 y 344 a 364), actuaciones que marcan la realidad ocurrida al interior del periplo procesal.

Teniendo en cuenta todo lo anterior, a partir del día siguiente a la providencia de reconocimiento de personería al abogado Clímaco Achury (7 de junio de 2019), en los términos aquí anotados, se contabilizan los 30 días hábiles establecidos en el artículo 76 C.G.P. para la interposición del incidente de regulación de honorarios; sin embargo, como bien los recalcó el recurrente, el trámite incidental fue radicado mediante mensaje enviado al correo electrónico institucional del juzgado, el 8 de octubre de 2020 (fls. 344 a 364), es decir, habiendo transcurrido más de un año, desde que le fue revocado el poder, como ya se indicó en forma tácita, y acorde a la actuación del juzgado.

Así las cosas, aunque mediante auto de 10 de diciembre de 2020 (fl. 367) el juzgado de conocimiento haya tenido por revocado en forma expresa el poder al abogado Vitola Márquez, lo cierto es que desde el 7 de junio de 2019, ya no fungía como mandatario del señor Gualtero Vega, quien para esa data ya había designado otro apoderado judicial en su reemplazo.

Teniendo en cuenta entonces todo lo reseñado, para la Sala es claro que ya no le era posible al abogado incidentante, reclamar el pago de sus honorarios profesionales a instancias del presente proceso, en tanto, como ya se anotó su solicitud en este sentido fue presentada cuando ya se había extinguido el término legal establecido para el efecto y por tanto, lo que le queda es acudir a una demanda para que el juez laboral resuelva al respecto.

Por ello, se revocará la providencia recurrida y en su lugar, se rechazará por extemporáneo el incidente de regulación de honorarios promovido en contra del ejecutante.

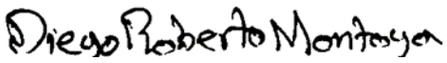
SIN COSTAS en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C., Sala Laboral

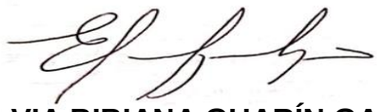
R E S U E L V E

PRIMERO: REVOCAR la providencia materia de impugnación, proferida por el Juzgado Doce Laboral del Circuito de Bogotá, fechada 29 de junio de 2021 y en su lugar RECHAZAR POR EXTEMPORÁNEO el incidente de regulación de honorarios presentado.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTÁ D.C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR JOHNNATAN ANDRÉS BONILLA GLAVIS CONTRA CONSORCIO EXPRESS S.A.S. (RAD. 14 2020 00103 01).

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Vencido el término de traslado otorgado y habiéndose presentado alegatos únicamente por la parte demandada CONSORCIO EXPRESS S.A.S (fls. 5 y 6), el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, profieren la siguiente decisión, con fundamento en el artículo 15 numeral segundo del Decreto 806 del 4 de junio del 2020.

PROVIDENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación oportunamente interpuesto por el apoderado del demandado contra el auto proferido por la Juez 14 Laboral del Circuito de Bogotá D.C., en audiencia llevada a cabo el 21 de febrero del 2022, por medio del cual dispuso que la excepción de prescripción debería ser estudiada de fondo en la sentencia.

Para llegar a tal conclusión, la Juez de primera instancia consideró que el hecho generador de las pretensiones, esto es, el accidente de trabajo se encuentra absolutamente discutido pues la demandada en su contestación aduce que lo acaecido no constituyo un accidente de trabajo, por lo que la existir discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensiones no resulta dable resolver el medio exceptivo como previo, debiéndose diferir su estudio para el momento de proferir sentencia (Audio archivo 5 expediente digital)[1]

[1] **Juez (Record: 7:38):** En lo que hace a la etapa de decisión de excepciones previas, teniendo en cuenta que con carácter dilatorio propuso la demandada la excepción que denomino prescripción, el juzgado emite el siguiente auto.

Inconforme con la decisión, el apoderado del accionado interpuso recurso de reposición y en subsidio apelación, pues considera que las pretensiones no están prescritas en su totalidad, por cuanto jamás se hizo una reclamación acerca los derechos del demandante, precisando tenía hasta el 6 de marzo del 2017 para presentar la misma (Audio archivo 5 expediente digital)[2]

Muy bien, ciertamente el artículo 32 de nuestro estatuto procesal del trabajo, habilita para proponer como previa la excepción de prescripción, pero bajo la condición que no haya discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción, o de su suspensión, en este caso afirma el excepcionaste que los perjuicios que reclama el demandante con ocasión de accidente de trabajo, que aduce padeció, se encuentran cobijados por este fenómeno jurídico, en tanto que el accidente se produjo, el hecho mejor se produjo el 6 de marzo de 2014, luego la fecha límite para que ejerciera la acción era el 6 de marzo de 2017, y lo cierto es que la presentó transcurrido ese término trienal que consagran nuestras normas, las normas procesales y sustancial que rigen la materia.

Para resolver el juzgado tendrá en cuenta que el hecho generador de los perjuicios, que se están reclamando, que constituyen las pretensiones de la demandada, esto es, el accidente de trabajo, se encuentra absolutamente discutido, discutido en tanto, que en la misma contestación de demandada, se aduce como argumento de defensa que el hecho ocurrido en esa fecha no puede, o no constituyo accidente laboral, de tal manera que existe controversia sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión, no es dable resolver el medio exceptivo, como previo, debiéndose diferir su estudio al momento de dictarse sentencia, pues porque de hecho debe primero establecerse la existencia del derecho, en este caso de la ocurrencia o no del accidente de trabajo, para luego determinar si esta cobijado por este fenómeno jurídico de la prescripción.

En ese orden de ideas, se difiere el estudio de la excepción para el momento de dictarse sentencia, notifíquese en estados. Alguna manifestación.

[2] **Apoderado demandada (Record: 10:52):** Si su señoría, me permito presentar el recurso de reposición y en subsidio apelación, en la medida que como es claro el artículo 488 del código sustantivo del trabajo, establece que se tiene el término de 3 años, para perdón, me permito leerlo, perdón el artículo 489, perdón 488: las acciones correspondientes a los derechos regulados por este código prescriben en 3 años, que se cuentan desde la respectiva obligación se hecho exigible, salvo los casos de prescripción especial establecidas en el código procesal del trabajo.

En ese orden de ideas, y teniendo en cuenta que el demandante aduce que tuvo una un accidente laboral, en el 2014 el 6 de marzo, y que teniendo en cuenta que la fecha para presentar algún tipo de reclamación para la empresa, cosa que el demandante jamás presentó, y como se puede observar en el libelo introductorio de la demanda, jamás se hizo una reclamación acerca de los derechos que supuestamente se están vulnerando al demandante, es por ende que se tenía hasta el 6 de marzo de 2017 para presentar dicha, dicha reclamación.

Así mismo, es importante tener en cuenta que dado a que la persona jamás presentó ningún tipo de reclamación, me permito citar la sentencia con radicación 33278 que tuvo al magistrado ponente doctor Luis Javier Osorio López, el cual advierte que el simple reclamo escrito del trabajador que recibió el empleador sobre un derecho debidamente determinado interrumpe la prescripción por un lapso igual al inicialmente señalado, la exigencia de la indemnización de derecho, tiene razón de ser en la necesidad de que la eventual contienda judicial, se desarrolle sobre los conceptos claramente especificados, en la reclamación y no sobre otros que no sean detallados, o cuya ambigüedad le resta eficacia a los efectos que su presentación al empleador se pretenden.

En ese orden de ideas, y como estaba manifestando al inicio de esta intervención, el aquí demandante jamás presentó ningún tipo de reclamación a mi representada y tampoco hizo algún tipo de manifestación alguna que permitiera evidenciar algún tipo de vulneración, si bien es cierto el demandante presentó algunos correos electrónicos, donde supuestamente manifiesta o se advierte que tenía algún tipo de sintomatología por el hecho ocurrido, jamás fue una reclamación administrativa donde fuera determinado o estuviera debidamente determinado el derecho, por ende, no daría cabida a que se aplicara la prescripción solicitada en el escrito de contestación de la demanda. Muchas gracias su señoría.

En cuanto a la reposición la Juez de primer grado mantuvo su decisión, señalando que no se dan los presupuestos para que se resuelva de manera previa el medio exceptivo, en tanto, no se cumplen las exigencias del artículo 32 del código procesal del trabajo al que acudió el juzgado para resolver la excepción, pues el accidente de trabajo no es admitido por la demandada (Audio archivo 5 expediente digital)[3]

Como quiera que no se observa causal de nulidad que invalide lo actuado, se procede a resolver lo pertinente, previas las siguientes,

C O N S I D E R A C I O N E S

Se aprecia que lo atacado por el impugnante es la decisión de la Juez de primer grado donde se dispuso diferir el estudio de la excepción de prescripción para el momento de dictarse la sentencia, providencia que resulta susceptible del recurso de apelación a voces del numeral 3º del artículo 29 de la Ley 712 de 2001, modificatoria del artículo 65 del C.P.T. y de la S.S., razón por la cual se estima viable proceder a su estudio, en los términos del artículo 66A del estatuto procesal laboral.

De este modo ha de recordarse, en el ámbito jurídico es sabido que las excepciones son hechos distintos de los afirmados en la demanda, alegados

[3] **Juez (Record: 13:40):** AUTO: Verifica el juzgado el pronunciamiento entorno al recurso de reposición, que interpone la parte demandada, en contra del auto que dispone diferir el estudio de la excepción de prescripción, para el momento en que se dicte sentencia.

Lo primero que debe advertirse, o mejor llama la atención este juzgado al recurrente en cuanto no presenta ninguna argumentación para controvertir los, o la entregada por el juzgado al momento de resolver el medio exceptivo, solamente se limita a reproducir la argumentación que esgrimió en contestación de demanda. En esa perspectiva el juzgado no tendría nada adicional que agregar, repite porque no se entregaron razones del o mejor, razones de reproche a la decisión que adoptó el juzgado. Ciertamente no desconoce el juzgado que el artículo 488 que cita textualmente o que la jurisprudencia en que se apoya pues habla del término trienal para ejercitar las acciones laborales sin embargo, aquí lo que debe entenderse es que no se dan los presupuestos para que este juzgado resuelva de manera previa el medio exceptivo, en tanto, no se dan o mejor o por cuanto no se cumplen las exigencias del artículo 32 del código procesal del trabajo al que acudió el juzgado para resolver la excepción, en tanto, es posible resolverla como previa cuando no haya discusión frente a la fecha de exigibilidad de la pretensión, en este caso, si tenemos en cuenta que los perjuicios reclamados se generan en un accidente de trabajo, según lo aduce el demandante, accidente que, de trabajo, que cuya ocurrencia no admite la parte demandada, estamos entonces o se evidencia o se pone en evidencia, que la exigibilidad de la pretensión está en discusión, de allí que no puede entrar a resolverse de manera previa la excepción.

Se no hay lugar entonces, que este juzgado revoque su decisión, hay lugar en condenar en costas a la parte demandada, por habérsele resuelto de manera desfavorable el medio exceptivo. Notifíquese en estrados.

por el demandado para contradecir el nacimiento del derecho pretendido por el demandante o para producir su extinción, para negar su exigibilidad actual o simplemente para impedir el juicio, suspender o mejorar el procedimiento.

Pues bien, frente a la excepción de prescripción, es de anotarse que en vigencia de la Ley 712 de 2001 se dispuso en el artículo 19, la posibilidad de examinar el medio exceptivo de prescripción como de carácter previo, sin embargo, tal evaluación únicamente procede siempre y cuando no exista discusión sobre la fecha de exigibilidad de la pretensión o de su interrupción o suspensión.

En el caso de marras, contrario a lo considerado por el apoderado recurrente para esta Corporación resulta claro que existe discusión entre las partes frente a la existencia del accidente de trabajo alegado por la parte demandante y por ende la causación de los perjuicios reclamados, pues desde la contestación de la demanda CONSORCIO EXPRESS S.A.S. señaló no ser cierto que el demandante hubiere sufrido un accidente de trabajo, aduciendo: "*(...) el 6 de marzo del 2014 el señor MILTON VERDUGO presentó un comportamiento contrario a las normas de respeto, al agredir físicamente al señor Johnnatan Andrés Bonilla Galvis, conducta calificada como grave por las partes y que dio lugar a la terminación del contrato de trabajo del señor Milton Verdugo. Al punto se destaca que el 6 de marzo de 2014 el demandante no reportó a mi representada lesión física ni afectación a la salud alguna, derivada de la agresión del señor Milton Verdugo", oponiéndose a las pretensiones pues expresa: "(…) En todo caso, manifestamos que el hecho ocurrido el día 6 de marzo de 2014, no se constituye como un accidente laboral, razón por la cual no le correspondía a mi representada realizar reporte alguno ante la ARL, dándosele el procedimiento correspondiente, referente a la apertura de los procesos disciplinarios a los trabajadores que se encontraban incursos en la riña"* (Archivo 3 contestación expediente digital), razón por la cual es claro para esta Sala de decisión que aún está en discusión la fecha de exigibilidad de las pretensiones.

Por lo que dada las posiciones de las partes frente a la existencia del accidente de trabajo que aduce la parte actora, a juicio de esta Sala, la citada excepción de prescripción debe ser objeto de un estudio de fondo, luego entonces debe ser sometida a un debate probatorio que permita establecer con claridad si en efecto existió o no el precitado accidente laboral que dé lugar a conceder los perjuicios pretendidos y en ese orden, no es dable para la Juez resolver el fenómeno de prescripción como una excepción previa, iterando que para que se pueda estudiar así, no debía existir discusión respecto de la fecha de exigibilidad de los derechos, debiendo entonces efectuarse su estudio en la sentencia que ponga fin a la Litis.

Nótese, para el caso de autos, el estudio del medio exceptivo como previo y la declaración de prosperidad del mismo priva al demandante de la posibilidad de demostrar la concurrencia de los requisitos legales para la causación de los derechos reclamados; sin dejar de lado que el debate probatorio puede arrojar como resultado que el demandante no acredite el cumplimiento de los supuestos de hecho para la causación de los derechos que reclama, evento en el cual la decisión así tomada puede haber llegado al punto de declarar la extinción de una obligación inexistente.

De acuerdo con las anteriores consideraciones, solamente agotado el debate probatorio se tendrá certeza de la existencia del derecho, la fecha de su causación y la exigibilidad del mismo; asertos todos que llevan a la conclusión como ya se anunció de que, en el caso bajo estudio, la decisión de la excepción debe postergarse hasta el momento en que se resuelva el fondo del asunto.

Al respecto puede consultarse el razonamiento de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, realizado en sentencia con radicación 26939 del 25 de julio de 2006[4], en la cual expuso criterio según el

[4] *"En este orden de ideas, para que el juez pueda decidir sobre la prescripción, al comienzo de la litis, no debe tener duda en cuanto a la claridad y existencia del derecho; pero si hay controversia en cuanto a la exigibilidad, interrupción o suspensión de la prescripción, la resolución de la misma debe esperar a la sentencia. Si el juzgador tiene la certeza que el derecho reclamado se extinguió por el paso del tiempo, por su inactividad, por medio de auto interlocutorio así lo debe declarar en la audiencia del artículo 77 del Código Procesal del Trabajo y en este evento no le es dable retomar en el fallo el punto debatido. Pero, a* contrario sensu*, si el juez, como sucede en el sub examine, consideró que no tenía los suficientes elementos de juicio para decidir de entrada sobre la excepción de*

cual, para que el Juez pueda resolver la excepción de prescripción al inicio de la Litis no debe tener duda en cuanto a la claridad y existencia del derecho, pues si hay controversia en relación con la exigibilidad, interrupción o suspensión de la prescripción, es su deber legal pronunciarse sobre ella al momento de la sentencia; igualmente en la Sentencia SL 6380 de 2015[5], se reitera que no le es dado al Juez resolver la excepción de prescripción, si previamente no ha determinado la existencia del derecho.

Lo expuesto conduce a confirmar el auto impugnado, y en ese orden de debe continuar con el trámite de la primera instancia pues como bien lo dispuso la *a quo* la excepción de prescripción sea resuelta de fondo al momento de proferir el fallo correspondiente.

COSTAS en esta instancia a cargo de la parte demandada, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 365 del C.G.P.

---

prescripción en la audiencia de trámite, era su deber legal pronunciarse sobre ella al momento de la sentencia." (Subrayado de la Sala)

[5] *"Para resolver la controversia debe decirse que al juzgador no le es viable jurídicamente pronunciarse sobre la extinción de un derecho que no ha sido declarado, pues ello desconoce que en el marco de las obligaciones existen unas que permiten exigir su cumplimiento (civiles) y otras que pese a ser inexigibles (naturales) «cumplidas autorizan para retener lo que se ha dado o pagado en razón de ellas», entre las que se cuentan "las obligaciones civiles extinguidas por la prescripción" (artículo 1527 Código Civil). A lo anterior se suma que la existencia jurídica de un hecho es susceptible de demandarse en cualquier tiempo, pues deriva del ejercicio del derecho público de acción, y en ese evento lo que procede es que el Juez declare extinguidos los derechos que de aquel emanen, como obligación civil, dado el retardo en su ejercicio.*

En tal sentido se ha pronunciado esta Sala de la Corte, entre otros en decisión CSJ SL 1, mar, 2011, rad. 39396:

> *Ahora bien, en torno a la prescripción ha sostenido la jurisprudencia de esta Sala, que bastan las reglas de la lógica para entender que para decidir dicha excepción, es necesario haber determinado previamente la existencia del derecho, pues solo puede prescribir lo que en un tiempo tuvo vida jurídica (sentencia 01-08-2006, radicación 28071). No obstante lo anterior, aunque el Tribunal señaló inicialmente que no tenía ningún sentido práctico examinar las aspiraciones del demandante si ya estaban prescritas, lo cierto es que más adelante consideró la pertinencia del derecho reclamado, en cuanto afirmó "También a esta altura de la disquisición no le cabe la menor duda a la Sala que por concepto de alojamiento y manutención, la demandante se le canceló viáticos permanentes.", para luego transcribir los artículos 127 y 130 del C. S. T. que regulan la materia.*
>
> *Verificada la existencia del derecho en el demandante, era pertinente declarar su extinción por prescripción, como lo hizo el Tribunal, sin que fuera necesario, por no oponerse a la lógica, que lo hubiera cuantificado, de donde cabe concluir que, por este aspecto, en ningún yerro incurrió el ad quem, al menos, con incidencia en la sentencia.*

(…) *Tales reflexiones dan cuenta de la equivocación hermenéutica que el censor le endilga a la sentencia del Tribunal, dado que sin haber definido la existencia de la relación laboral, de la que se pidió la declaración, declaró la extinción de las obligaciones por prescripción"*

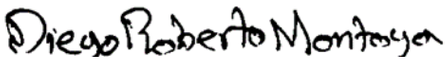
En mérito de lo expuesto **EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D. C. - SALA LABORAL**,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto dictado por la Juez 14 Laboral del Circuito de Bogotá D.C., proferido en audiencia del 21 de febrero del 2022, conforme a lo considerado.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de la parte demandada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

AGENCIAS EN DERECHO: Se fija como valor por concepto de agencias en derecho la suma de $100.000, a cargo de la parte demandada, la cual deberá ser incluida en la liquidación de costas, al tenor de lo consagrado en el artículo 366 del C.G.P.



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL.

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO DE SANITAS EPS CONTRA LA NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, Y ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES (RAD. 15 2015 00343 01).

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022)

El Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, profieren de plano el siguiente

AUTO

Sería del caso pronunciarse sobre el recurso de apelación interpuesto por las partes contra la sentencia proferida por el Juez Quince Laboral del Circuito de Bogotá, el 22 de abril de 2021 *(Audiencia CD folio 1032),* por medio de la cual condenó al ADRES a pagar a favor de EPS SANITAS $800.441.343, por concepto de 329 ítems respecto de los cuales consideró procedente su recobro y la indexación, absolviendo a la demandada de las restantes pretensiones y costas procesales, de no ser porque en este punto se obliga a la Sala a recurrir al control oficioso de legalidad, el cual debe realizarse en cualquier etapa del trámite procesal en ejercicio de las facultades conferidas al Juez como director del proceso y adoptar las medidas necesarias para garantizar el respeto de los derechos fundamentales y el equilibrio entre las partes (artículo 48 del C.P.L. y S.S. y 132 del C.G.P.). Todo ello en punto a no pasar por alto, por razones de tipo meramente formal, aspectos que pudieren ir en abierta contradicción con el derecho sustancial y un eficaz y debido proceso.

Lo anterior con el fin de señalar que, revisado el periplo procesal se advierte, a través del presente proceso ordinario se pretende la condena a la demandada a pagar a su favor, sumas por concepto del suministro de procedimientos, servicios o medicamentos no incluidos en el plan obligatorio de salud y según se desprende del supuesto fáctico, lo pretendido corresponde al reembolso de servicios médicos no

incluidos en el POS cuya prestación obedeció a órdenes de tutela, que fueron glosados, aspiraciones que, atendiendo lo previsto en el artículo 2° del CPTSS, escapan de la órbita de la competencia de esta jurisdicción.

Al respecto, en tratándose de conflictos derivados de la seguridad social, el numeral 4° de la aludida disposición señala:

> "***Artículo 2:*** *Modificado Ley 712 de 2001, artículo 2. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *(...)*
>
> ***4.*** *Modificado L. 1564/2012, art. 622. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleados y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos."*

Al tenor de dicha preceptiva, la competencia de esta especialidad está condicionada a la "*prestación de servicios*", no así al pago de las prestaciones económicas a cargo del sistema que es sobre lo que versa la demanda. Además, también está limitada a las controversias presentadas entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, empero no entre estas últimas como aquí acurre, en tanto las partes en conflicto son entidades administradoras del Sistema General de Seguridad Social en Salud (la EPS -demandante- como administradora de los planes de beneficios en salud y ADRES -demandada- como administradora de los recursos del S.G.S.S.S y que hace parte del mismo[1]).

Sobre el particular, la Corte Constitucional en Auto 389 de 2021, proferido en cumplimiento de las atribuciones conferidas por el numeral 11 del artículo 241[2] de la Constitución Política, en un caso que resulta predicable al caso de marras, con relación a la competencia de los jueces laborales asignada en el precitado numeral 4 del artículo 2 del C.P.T y la S.S., determinó que el proceso judicial de recobro no corresponde, en estricto sentido, a una controversia relativa a la prestación de servicios de la seguridad social, como quiera que dicho procedimiento se adelanta

---

[1] Sobre su naturaleza jurídica y competencias puede consultarse el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015.

[2] "***Artículo 241:*** *a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: (...)*
11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones."

cuando ya la entidad prestó el servicio, en otros términos, dijo, no tiene por objeto decidir sobre la prestación del servicio sino sobre su financiación. Puntualmente, sostuvo esa Corporación:

> *"(…)*
>
> *19. Frente a la tensión expuesta, la Sala procederá a estudiar las disposiciones normativas ya señaladas y algunos precedentes fijados por esta Corporación.*
>
> *20. Resulta importante hacer referencia a la Sentencia C-1027 de 2002, en la que la Corte estudió una demanda presentada en contra del numeral 4º del artículo 2 de Ley 712 de 2001, en su versión original. En esa ocasión la Corporación concluyó que "en el artículo 2 de la ley en mención se regula la* ***competencia general de la jurisdicción ordinaria 'en sus especialidades laboral y de seguridad social'*** *" (negrillas fuera de texto), siendo enfática al señalar que la unidad conceptual de la seguridad social integral, sumada a las características propias de la conflictividad que gira en torno a la materia, demandan la existencia de un proceso especial y de una jurisdicción también especializada que pueda dirimir tales controversias. En ese orden, dijo que "no cabe duda de que el legislador es el llamado a diseñar el régimen jurídico de la seguridad social con sujeción a los principios superiores de eficiencia, universalidad y solidaridad, facultad que implica también la asignación de las competencias jurisdiccionales para el conocimiento de las controversias sobre esta materia". Cuestión última que dio lugar a la conclusión de que la especialización de la justicia ordinaria laboral "corresponde al sentido unificado del sistema de seguridad social integral querido por el constituyente. Unidad del sistema que se proyecta en la unidad de la jurisdicción"*[3]*.*
>
> *21. Una lectura armónica de los artículos 15*[4] *y 622*[5] *de la Ley 1564 de 2012, de los numerales 4º*[6] *y 5º*[7] *del artículo 2 de la Ley 712 de 2001 y del artículo 12 de la Ley 270 de 1996*[8]*, permite reiterar que corresponde a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social, la competencia general para dirimir las* ***controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social***. Exceptuándose de dicho marco los asuntos, (i) de responsabilidad médica y los relacionados con contratos, y (ii) aquellos que por disposición expresa del legislador le sean asignados a otras autoridades judiciales. Así, en atención a la cláusula general de competencia, son los jueces laborales los competentes para conocer de las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social y de la ejecución de

---

[3] Corte Constitucional, Sentencia C-1027 de 2002.

[4] El artículo 15 de la Ley 1564 de 2012 señala: "Corresponde a la jurisdicción ordinaria, el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otra jurisdicción".

[5] El artículo 622 de la Ley 1564 de 2012, que modificó el numeral 4º del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establece: "4. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos".

[6] Modificado por el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012.

[7] El numeral 5º del artículo 2 de la Ley 712 de 2001 dispone que la jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social, conoce de: "La ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad".

[8] El artículo 12 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 5 de la Ley 1285 de 2009, señala que la función jurisdiccional "[…] se ejerce por la jurisdicción constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, las jurisdicciones especiales tales como: la penal militar, la indígena y la justicia de paz, y **la jurisdicción ordinaria que conocerá de todos los asuntos que no estén atribuidos por la Constitución o la ley a otra jurisdicción**" (negrillas fuera de texto).

obligaciones emanadas del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad.

22. Dicha competencia en cabeza de los jueces laborales tiene importancia para la Corte Constitucional, pues la remisión de los asuntos de la seguridad social a dichos juzgados supone que "el nuevo estatuto procesal del trabajo reconoce expresamente la autonomía conceptual que al tenor de lo dispuesto en el artículo 48 Fundamental ha adquirido la disciplina de la seguridad social, asignándole a la jurisdicción ordinaria laboral el conocimiento de los asuntos relacionados con el sistema de seguridad social integral en los términos señalados en el numeral 4° del artículo 2° de la Ley 712 de 2001"[9].

23. Entonces, de acuerdo con el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012, que modificó el numeral 4º del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, es claro que en los jueces laborales recae la competencia general para dirimir las ***controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social*** *que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras. Así, es necesario examinar, en el caso que estudia la Sala, primero, si las controversias referidas a los recobros corresponden a la prestación de servicios de la seguridad social, y, segundo, si se trata de una controversia entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras.*

24. ***La Sala encuentra, en primer lugar, que el proceso judicial de recobro no corresponde, en estricto sentido, a una controversia relativa a la prestación de servicios de la seguridad social.*** *Dicho procedimiento se adelanta cuando ya la entidad prestó el servicio (el tratamiento o el suministro del insumo excluido del PBS), en virtud de la orden proferida por un comité técnico científico –en su momento– o por un juez de tutela; es decir,* ***no tiene por objeto decidir sobre la prestación del servicio sino sobre su financiación****.* ***En este sentido, el recobro busca resolver un desequilibrio económico entre el Estado y una EPS, de manera que esta última lo que pretende es recuperar los recursos que debió destinar para cubrir asistencias a las que no se considera obligada por estimar que no hacen parte de la cobertura del Plan de Beneficios en Salud. En ese orden, el recobro no pretende garantizar en forma directa que el servicio o la tecnología en salud efectivamente sean prestados.***

No se debe olvidar que los recobros tienen la virtualidad de permitir que los recursos del sistema fluyan adecuadamente y que, de esta forma, tienen repercusiones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud[10]. Sin embargo, esta relación es meramente indirecta y condicional (circunstancial), pues materialmente el procedimiento de recobro constituye una controversia económica, no de salud en estricto sentido, que formula la EPS ante el Estado por haber asumido obligaciones que considera ajenas a lo que estaba legal y reglamentariamente obligada a cumplir.

[9] Corte Constitucional, Sentencia C-1027 de 2012.

[10] La Corte ha considerado que, dada la complejidad de los procedimientos implementados para el recobro y la asignación de los dineros de la salud, se han ocasionado graves problemas de iliquidez en las entidades promotoras y prestadoras de servicios de salud. En la sentencia C-383 de 2020, esta Corporación indicó que el flujo de recursos "ha comportado una falla estructural del sistema de salud que data de hace varios años, (incluso antes de proferida la sentencia T-760 de 2008 en la que se hizo más evidente), lo que dificulta gravemente la situación financiera de los actores del sistema de salud y perjudica directamente el goce efectivo del derecho fundamental a la salud".

> *25. En segundo lugar, las controversias relacionadas con el pago de recobros judiciales al Estado por prestaciones no incluidas en el PBS y por las devoluciones o glosas a las facturas entre entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud vinculan, en principio, a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. En este tipo de controversias, en consecuencia,* ***no intervienen afiliados, beneficiarios, usuarios ni empleadores****.*
>
> *(…)*
>
> *29. Ahora, aunque el artículo 622 del CGP, que modificó el numeral 4º del artículo 2 del CPTSS, fue expedido cuando la ADRES aún no se había creado, no puede desconocerse que se trata de una entidad administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y que hace parte del mismo.*
>
> *30. Con fundamento en lo anterior,* ***concluye la Sala que el numeral 4º del artículo 2 del CPTSS (en la forma como fue modificado por el artículo 622 del CGP) no es aplicable a las controversias relacionadas con el pago de recobros judiciales*** *al Estado por prestaciones no incluidas en el PBS y por las devoluciones o glosas a las facturas,* ***que se susciten entre las EPS y la ADRES****, en la medida en que,* ***como ya se indicó, no corresponden a litigios que, en estricto sentido, giren en torno a la prestación de servicios de la seguridad social. Además, porque se trata de controversias presentadas únicamente entre entidades administradoras, relativas a la financiación de un servicio que ya se prestó.****"*

Así las cosas, como en el presente asunto la controversia se ventila por SANITAS EPS (persona jurídica), en contra de la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES, por la presunta falta de pago de servicios NO POS que fueron prestados en cumplimiento de órdenes de tutela, es claro que no está de por medio de manera directa el afiliado, beneficiario, usuario o empleador, en procura de servicios asistenciales o prestacionales.

Adicionalmente, si bien la prestación de los servicios de salud hace parte del Sistema Integral de Seguridad Social, no son del mismo resorte los conflictos económicos que se desprendan de tales servicios, los cuales, por tratarse del Estado (ADRES), se deben ventilar ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, atendiendo los factores subjetivo y objetivo de competencia, correspondiéndole por tanto el conocimiento del asunto a dicha jurisdicción, al tenor de lo previsto en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 que indica "*(…) la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, d****e las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo****, en los que estén involucradas las entidades públicas, o*

los particulares cuando ejerzan función administrativa" , por lo que se itera, no es la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad laboral y seguridad social, la llamada a solventar la controversia propuesta.

Descendiendo al caso bajo análisis, advierte la Sala que mediante auto de 10 de agosto de 2016 (fl. 9687) el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá, rechazó la demanda por falta de competencia y ordenó la remisión de las diligencias a la Superintendencia de Salud Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación, entidad que mediante auto de 19 de octubre de 2016 también rechazó la demanda y remitió el expediente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, autoridad que mediante proveído del 27 de septiembre de 2017 dirimió el conflicto, asignando el conocimiento del asunto al Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá (*cuaderno 3 folios 7 a 18)*, juzgado que conforme la decisión del Superior, avocó el conocimiento del presente proceso, impartiéndole el trámite correspondiente *(fls. 9690 y 9691).*

Frente a este punto, es necesario señalar, la Corte Constitucional, en Auto 1025 de 2021, memoró su entendimiento de Auto 1008 de 2021, donde explicó que si bien la Superintendencia Nacional de Salud corresponde a una autoridad administrativa adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, de conformidad con la Ley 1122 de 2007, le fueron otorgadas funciones jurisdiccionales específicas y los recursos en contra de sus sentencias son resueltos en segunda instancia por la Sala Laboral del Tribunal Superior correspondiente, por lo que en estricto sentido, los conflictos que se generen entre la citada Superintendencia y un juzgado laboral, corresponden a conflictos de competencia, porque ambas autoridades hacen parte de la especialidad laboral y no a un conflicto de jurisdicción, como quiera corresponden ambas a la jurisdicción ordinaria. Así se pronunció:

> *"1.2 Al respecto, esta Corporación, mediante* ***Auto 1008 de 2021***[11]*, afirmó que, a pesar de ser una autoridad administrativa*[12]*, la Superintendencia Nacional de Salud desarrolla atribuciones jurisdiccionales que se asimilan a las desempeñadas por los jueces de la jurisdicción ordinaria. En primer lugar, porque la Ley 1122 de 2007 establece que quien conoce de los recursos de apelación interpuestos contra sus sentencias es la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial.*[13] *Y, en*

[11] CJU-925. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[12] De conformidad con el artículo 1° del Decreto 1080 de 2021, "*[l]a Superintendencia Nacional de Salud es una entidad de carácter técnico adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente*". Sin embargo, a partir de la Ley 1122 de 2007, se otorgaron funciones jurisdiccionales específicas a esa autoridad.
[13] Parágrafo 1º del artículo 41 de la Ley 1122 de 2007. Modificado por el artículo 6 de la Ley 1949 de 2019. *"Las providencias emitidas dentro del proceso jurisdiccional se notificarán por el medio más ágil y efectivo. La sentencia podrá ser apelada dentro de los 3 días siguientes a su notificación. En caso de ser concedido el*

segundo lugar, porque, la Corte Constitucional ha sostenido que cuando la Superintendencia Nacional de Salud ejerce sus facultades jurisdiccionales "desplaza, a prevención, a los jueces laborales del circuito (o civiles del circuito en los lugares en que no existen los primeros), cuya segunda instancia está asignada a la Sala Laboral de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. En ese orden de ideas, las decisiones judiciales de la Superintendencia Nacional de Salud serán apelables ante las Salas Laborales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, como superiores jerárquicos de los jueces que fueron desplazados por la referida entidad administrativa de su función de decidir en primera instancia"[14].

1.3 Por tanto, corresponderá dirimir esta controversia a las autoridades designadas por la ley para resolver conflictos al interior de la jurisdicción ordinaria[15], quienes deberán determinar si, en el caso concreto, la Superintendencia Nacional de Salud actuó en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Así, aunque en principio se advierte la existencia de un conflicto entre autoridades que, funcionalmente, integran la jurisdicción ordinaria, el análisis sobre si, en efecto, sus actuaciones tuvieron naturaleza jurisdiccional en el presente asunto, recae en las autoridades judiciales competentes.

1.4 En este sentido, la norma aplicable para resolver conflictos entre la jurisdicción ordinaria y la Superintendencia Nacional de Salud es el inciso 5 del artículo 139 del Código General del Proceso según el cual: "Cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempeñen funciones jurisdiccionales, o entre una de estas y un juez, deberá resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada"[16]. Dado que la Superintendencia Nacional de Salud desplaza a los jueces laborales del circuito, son los Tribunales Superiores del Distrito Judicial los llamados a conocer de estos asuntos".

A tono con lo anterior, es claro que mediante el proveído de 27 de septiembre de 2017 *(cuaderno 3*), la Sala Jurisdiccional Disciplinaria dirimió un conflicto de competencia que se suscitó entre el Juzgado Quince Laboral del Circuito de Bogotá y La Superintendencia Nacional de Salud- Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación, mas no un conflicto de jurisdicción.

En consecuencia, advirtiendo esta Sala que carece de jurisdicción y competencia para resolver las pretensiones incoadas en esta demanda y que de conformidad con el establecido en el artículo 104 del CPACA[17] es la Jurisdicción Administrativa la

---

recurso, el expediente deberá ser remitido al Tribunal Superior del Distrito Judicial - Sala Laboral del domicilio del apelante."

[14] Sentencia C-119 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

[15] La Sala advierte que, en su momento, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dirimió conflictos de jurisdicción entre la Superintendencia Nacional de Salud y autoridades judiciales. Así lo determinó, por ejemplo, en las providencias del 19 y 11 de noviembre de 2020, 29 y 15 de enero del mismo año, 22 de mayo y 30 de octubre de 2019, 5 de julio de 2018, 1° de noviembre de 2017, entre otras. Sin embargo, también pone de presente que, en ninguno de estos casos, se analizó expresamente la competencia de esa Corporación para dirimir tales controversias o si las partes integraban una misma jurisdicción.

[16] La Corte Suprema de Justicia ha considerado que carece de competencia para resolver conflictos entre jueces del circuito y autoridades administrativas, cuando estima que aquellas desplazan a otros jueces del circuito. Por consiguiente, estima que, en estos casos, la atribución para resolver conflictos de competencia es de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial (AC2977-2021).

[17] "**ARTÍCULO 104. DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos,

encargada de resolver esta litis, prosigue nulitar la sentencia proferida por el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Bogotá el 22 de abril de 2021, conforme lo previsto en los artículo 16 y 138 del C.G.P., dejando a salvo las pruebas recaudadas en el trámite procesal, disponiendo además, que el a quo remita el expediente a la jurisdicción de lo Contencioso Administrativo para lo de su cargo.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D. C., Sala Laboral,

RESUELVE

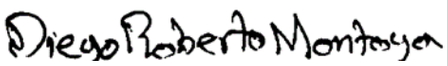
PRIMERO: DECLARAR LA FALTA DE JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA para conocer el presente proceso.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de la sentencia proferida el 22 de abril de 2021, por el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Bogotá, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 138 C.G.P.

TERCERO: ORDENAR al juez 15 Laboral del Circuito de Bogotá, remitir el expediente a los Juzgados Administrativos de Bogotá – reparto-, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

CUARTO: ESTA SALA SE RELEVA del estudio del recurso de apelación interpuesto por las partes, por las razones expuestas en este proveído.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

---

omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa"

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO SEGUIDO POR JUAN DE JESUS RUIZ VELANDIA CONTRA LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES- (RAD. 15 2016 00663 02).

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Vencido el término de traslado otorgado, y habiéndose presentado los alegatos de instancia únicamente por la parte demandante (fls. 405 y 406), el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, con fundamento en el numeral segundo del artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020, profieren la siguiente:

P R O V I D E N C I A

Se decide por la Sala la apelación de la parte demandada en contra del auto de fecha 1° de octubre del 2021 (fl. 378) proferido por el Juzgado 15 Laboral del Circuito de Bogotá, mediante el cual se aprobó la liquidación de costas en la suma de $32.000.000 a favor de la parte demandante y a cargo de COLPENSIONES, solicitando se revoquen las mismas.

Aduce la apoderada recurrente, que en la sentencia de primera instancia se condenó a la demandada por concepto de costas lo correspondiente a 5 SMMLV para el año 2018, condena que no fue recurrida ni tampoco modificada en segunda instancia, por lo que el auto que liquida las costas en $32.000.000 excede inicialmente lo ordenado por el despacho que correspondería a $3.906.210 (fl. 380).

Para resolver se hacen las siguientes,

C O N S I D E R A C I O N E S

Para resolver, advierte la Sala en sentencia proferida el 17 de mayo del 2018 el JUZGADO 15 LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ, dispuso en punto a la condena en costas lo siguiente (fl. 280):

> ***TERCERO: CONDENAR*** *en costas a la parte vencida en juicio, es decir la demandada Colpensiones, para el efecto entonces se fija teniendo en cuenta la cuantía de la condena, se fijan como agencias en derecho a tener en cuenta para efecto de esta liquidación de costas lo correspondiente a 5 SMLMV para el año 2018, como agencias en derecho a tener en cuenta en esta liquidación de costas, a cargo de la parte demandada y a favor de la parte actora.*

La anterior sentencia pese a que fue objeto de modificación por esta Corporación en decisiones del 14 de noviembre del 2018 (ver fls. 320 a 336) y 12 de agosto del 2021 (fls. 366 a 375), ésta última en cumplimiento a lo dispuesto por la H. Corte Suprema de Justicia – Sala de Casación Penal, en sentencia de tutela STP6638 del 4 de mayo del 2021[1], confirmo lo atinente a la condena en costas , esto es, se mantuvo sin modificación alguna el numeral tercero del fallo de primer grado.

En este orden de ideas ha de recordarse, el contenido del artículo 366 del Código General del Proceso, en punto a la liquidación de costas así:

> ***ARTÍCULO 366. LIQUIDACIÓN.*** *Las costas y agencias en derecho serán liquidadas de manera concentrada en el juzgado que haya conocido del proceso en primera o única instancia, inmediatamente quede ejecutoriada la providencia que le ponga fin al proceso o notificado el auto de obedecimiento a lo dispuesto por el superior, con sujeción a las siguientes reglas:*
>
> 1. *El secretario hará la liquidación y corresponderá al juez aprobarla o rehacerla.*
>
> 2. *Al momento de liquidar, el secretario tomará en cuenta la totalidad de las condenas que se hayan impuesto en los autos que hayan resuelto los recursos, en los incidentes y trámites que los sustituyan, en las sentencias de ambas instancias y en el recurso extraordinario de casación, según sea el caso.*
>
> 3. *La liquidación incluirá el valor de los honorarios de auxiliares de la justicia, los demás gastos judiciales hechos por la parte beneficiada con la condena, siempre que aparezcan comprobados, hayan sido útiles y correspondan a actuaciones autorizadas por la ley, y l**as agencias en***

[1] Proferida dentro de la acción de tutela con radicación No. 116442, mediante la cual revocó el fallo de tutela STL2958 Rad. No. 62416 del 17 de marzo del 2021 dictado por la Sala Laboral de la Corte Suprema de Justicia y dejó sin efectos la decisión adoptada por esta Sala de decisión el 14 de noviembre del 2018

> ***derecho que fije el*** *magistrado sustanciador o el* ***juez****, aunque se litigue sin apoderado.*

Conforme a lo anterior, es claro que la liquidación de costas tiene su génesis entre otras en las agencias en derecho previamente fijadas, en este caso, por el JUEZ como quiera que en segunda instancia no se condenó en costas, de modo que dentro del presente asunto el Secretario del Juzgado 15 Laboral del Circuito de Bogotá, debió liquidar las agencias en derecho conforme fue ordenado por el Juez de primer grado; no obstante evidencia la Sala en auto del 1° de octubre del 2021 (fl. 378) se aprobó una liquidación de costas en suma de $32.000.000, conforme a la liquidación realizada por la secretaria de tal despacho, así:

REPUBLICA DE COLOMBIA

RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO QUINCE (15) LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

Bogotá D.C., 17 de septiembre de 2021. Al Despacho del señor Juez el presente proceso ordinario **No.** 11001310501520160066300, informando que fue devuelto con decisión del superior quien MODIFICÓ el ordinal primero, REVOCÓ el ordinal segundo, ADICIONÓ el ordinal quinto y CONFIRMÓ en lo demás la sentencia recurrida, y que en cumplimiento a lo ordenado en la sentencia de primera, segunda del Tribunal Superior de Bogotá – Sala Laboral de fecha 12 de agosto de 2021, me permito efectuar la siguiente liquidación de costas, para lo cual pongo en su consideración así:

Agencias en derecho a cargo de la demandada Administradora Colombiana de Pensiones - COLPENSIONES

Primera instancia.....	$ 32.000.000
Segunda instancia.....	$ - 0 -
Costas.....	- 0 -
Total.....	$ 32.000.000

La Secretaria

DEYSI VIVIANA APONTE COY

JUZGADO QUINCE LABORAL DEL CIRCUITO DE BOGOTÁ

Bogotá D.C., primero (01) de octubre de dos mil veintiuno (2021)

Teniendo en cuenta el informe secretarial que antecede, se ordena:

OBEDEZCASE Y CUMPLASE lo resuelto por el Tribunal Superior de Distrito Judicial de Bogotá Sala Laboral en providencia de fecha 12 de agosto de 2021.

Apruébese la liquidación de costas practicada anteriormente, conforme lo dispone el numeral 1 del artículo 366 del Código General del Proceso.

En firme, archívese el expediente.

En dicha liquidación de costas, advierte esta Sala de decisión no se tuvo en cuanta la fijación de agencias en derecho efectuada por el Juez en sentencia proferida el 17 de mayo del 2018 (fl. 280) donde expresamente señaló "*se fijan como agencias en derecho a tener en cuenta para efecto de esta liquidación de costas lo correspondiente a 5 SMLMV para el año 2018",* lo que equivaldría a la suma de $3.906.210[2], de modo que en este especial asunto la razón se encuentra del lado de la parte demandada, en tanto no existe orden alguna en dentro del expediente donde se indique que el valor de las agencias en derecho correspondía a $32.000.000 y no se acreditan costas por el excedente, recuérdese que el secretario debe hacer la liquidación de costas teniendo en cuenta el valor que fije el Juez como agencias en derecho, de modo que al haber sido fijadas en 5 smmlv para el 2018, así debió efectuarse la liquidación correspondiente.

Precisándose si bien el Juzgado señala en auto del 22 de marzo del 2022 (fl. 398 a 400) que el valor de los $32.000.000 resulta procedente en virtud del valor de la condena impuesta, cuyo retroactivo ascendía a 31 de octubre de 2018 a la suma de $580.295.625,86, debe tenerse en cuenta que la única forma de controvertir el monto de las agencias en derecho, es por medio del recurso de reposición y en subsidio apelación presentando por las partes en contienda, aspecto que obvió la Juez de primera instancia, pues echo de menos que desde el 2018 ya había fijado las agencias en *5 SMLMV para el año 2018,* estimando ahora que correspondían a $32.000.000.

Razones por las cuales, y dadas las conclusiones arribadas se dispone dejar sin valor y efecto la liquidación de costas efectuada por la secretaría del Juzgado 15 Laboral del Circuito de Bogotá el 17 de septiembre del 2021 (fl. 378), y en ese orden se revoca el auto que aprobó dicha liquidación en suma de $32.000.000 (fl. 378), para que en su lugar, dando aplicación al artículo 366 del C.G.P., **se rehaga la liquidación de costas y agencias en derecho** de conformidad con las motivaciones precedentemente expuestas.

SIN COSTAS en esta instancia.

[2] El salario mínimo de 2018 correspondía a $781.242.

En mérito de lo expuesto **EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C. - SALA LABORAL**

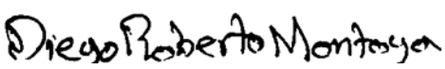
R E S U E L V E

PRIMERO: **DEJAR SIN VALOR Y EFECTO** la liquidación de costas efectuada por la Secretaría del Juzgado 15 Laboral del Circuito de Bogotá (fl. 378).

SEGUNDO: REVOCAR el auto del 1° de octubre del 2021, mediante el cual se aprobó la liquidación de costas en suma de $32.000.000, para que, en su lugar, dando aplicación al artículo 366 del C.G.P., **se rehaga la liquidación de costas y agencias en derecho,** de conformidad con las motivaciones precedentes.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL.

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR JURY MILENA RODRÍGUEZ NARANJO CONTRA MODERNIZACIÓN VIAL DE COLOMBIA MASORA & FCM MVC S.A.S. y la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS (RAD. 17 2018 00522 01).

Bogotá D.C. treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Vencido el término de traslado otorgado, sin que las partes presentaran los alegatos de instancia, el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala, profieren la siguiente decisión, con fundamento en el artículo 15 numeral primero del Decreto 806 del 4 de junio del 2020.

PROVIDENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación oportunamente interpuesto y debidamente sustentado por el apoderado de la parte demandante contra el auto proferido en audiencia celebrada el 15 de febrero del 2022 por el Juzgado Diecisiete Laboral del Circuito de Bogotá D.C., por medio del cual se negó el decreto de las pruebas solicitadas por el demandante concretamente en las que solicita oficiar a la EPS SANITAS, a la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR y al JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BOGOTÁ.

Lo anterior tras considerar la *a quo* que tales pruebas las debió solicitar el demandante directamente o a través de un derecho de petición, pues era una

carga procesal que le incumbía a ésta parte y no al Juzgado *(Expediente digital archivo 1, audio record: 12:34[1])*

Contra la decisión anterior, el apoderado de la demandante oportunamente interpuso recurso de apelación, fundamentando la alzada en la negativa a librar los oficios descritos en los numerales 4, 5 y 6 del acápite respectivo, precisando ser muy importante tal prueba dado que documentos justifican o ayudan a acreditar los hechos de la demanda respecto al despido indirecto a la renuncia forzada a la que fue sometida la actora, pues en su sentir se encargarán de fundamentar y demostrar los hechos correspondientes a las situaciones que forzaron a su cliente a presentar una renuncia forzada y que termina conllevando a un despido injustificado, reiterando es muy importante saber que ella no fue la única desvinculada en ese momento y que fueron aproximadamente 30 trabajadores desvinculados de la misma forma, lo cual en su sentir genera un indicio o demuestra que existió un acto de corrupción en dicha empresa. *(Expediente digital archivo 1, audio record: 16:37)[2]*

---

[1] **Juez (Record: 12:34):** Observa además el despacho que la parte actora solicita en un acápite que titula "oficios", solicita que se requiera a la demandada para que nos aporte una información, concerniente a vínculos laborales, relaciones, y circunstancias de terminación de vínculos laborales de personas ajenas a este proceso, por lo que el despacho advierte que la forma solicita no se decretará a la prueba, de manera concreta me refiero a la petición que obra a folio 11 del expediente, en virtud de la cual que se libre oficio, así dice expresamente la solicitud, con destino a empresa MODERNIZACIÓN VIAL DE COLOMBIA, que recordemos que es demandada en este proceso, para que esta empresa nos remita copia de renuncias presentadas por trabajadores, cartas de respuesta a esas renuncias, y manifiesta otras circunstancias numeral 3, 4, 5 y 6, para que nos remita una información. Sin embargo, pues el despacho precisa que en la forma que esta formulada la solicitud no resulta procedente por esa razón denegará la prueba, advirtiendo, además, que esa petición que antes se titulaba oficios, era una carga que los apoderados judiciales pretendían atribuir o dejar en manos del juzgado, siendo como lo sabemos que es una carga probatoria que le incumbe a la parte que pretende demostrar los supuestos de hecho que aduce, y por esa razón pues no accederá a decretarla. Sin embargo, si la parte demandante en aras de poder aportar esa documental le demuestra al juzgado que elevo los correspondientes derechos de petición o que elevó las solicitudes correspondientes solicitudes a las entidades que allí se mencionan, además de la demandada, el despacho en un momento dado analizará la posibilidad de requerir que de la respuesta a esos derechos de petición, pero esa será una carga o actuación que deberá cumplir y está a cargo de la parte demandante y no del juzgado. En consecuencia, se deniega esta solicitud.

[2] **Apoderado demandante (Record 16:37):** Muchas gracias su señoría, muchas gracias, su señoría con todo el respeto me permito realizar el respectivo recurso, presentar recurso de apelación respecto a la solicitud del decreto de pruebas, más específicamente su señoría al no decretó de las pruebas de oficio que aparecen en el expediente, respecto únicamente su señoría, se va a presentar el recurso de apelación respecto a los numerales 4, 5 y 6, que me permito citar.

Numeral 4 se solicitó que se librará oficio a la EPS SANITAS, para que indique si MODERNIZACIÓN VIAL DE COLOMBIA MASORA con NIT 900846605-1, ha presentado novedades en sentido de vincular o desvincular al sistema de seguridad social empelados de dicha empresa, en caso afirmativo indicar sobre qué novedades y sobre que empleados recayeron.

Para resolver se hacen las siguientes:

CONSIDERACIONES

Asume la Sala el conocimiento de este ordinario, en orden a desatar el recurso de apelación propuesto por la parte demandante, contra el auto que negó el decreto y la práctica de las pruebas que pretendían se oficiara a la EPS SANITAS, a la CAJA DE COMPENSACION FAMILIAR COMPENSAR y al JUZGADO TERCERO DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BOGOTÁ, debiendo señalar, en primer lugar, tal proveído, se encuentra enlistado como susceptible del recurso de apelación, al tenor de lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 29 de la Ley 712 de 2001, que reformó el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo, lo cual permite el estudio del recurso de marras.

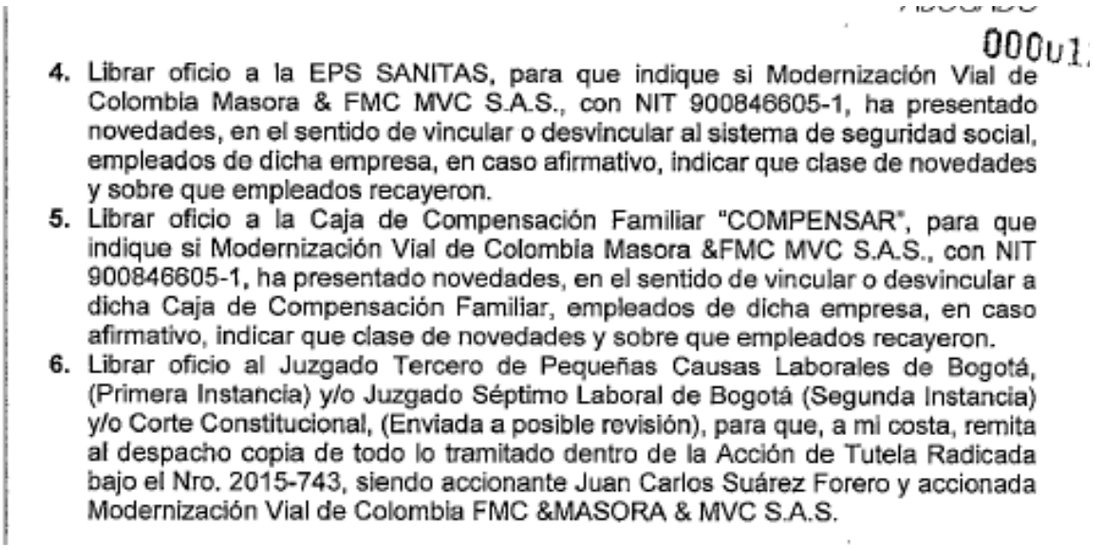
Igualmente, el 5 punto, que es librar oficio a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR, para que explique la misma situación, si hubo una novedad respecto a los empleados de ese momento.

Y 6, librar oficio al Juzgado tercero de pequeñas causas laborales de Bogotá, donde se resolvió una acción de tutela, en donde era, con radicado 2015- 743, donde fue accionado (sic) el señor Juan Carlos Suarez Forero y accionada, siendo accionante Juan Carlos Suarez Forero, y accionada MODERNIZACIÓN VIAL DE COLOMBIA MAZORA.
Respecto a estas tres solicitudes su señoría presento recurso de apelación, porque para este servidor y para la parte demandante su señoría, y señores segunda instancia, es muy importante que se tengan dichos documentos, porque dichos documentos justifican o ayudan a acreditar los hechos de la demanda, respecto al despido indirecto a la renuncia forzada a la que fue sometida mi poderdante, entonces si bien su señoría indica que no existe derecho de petición o no existe la solicitud que debió haberse realizado en su momento con el apoderado anterior que había, los apoderados anteriores, si bien es cierto el código laboral indica que el juez laboral en aras de llegar a la verdad puede decretar pruebas de oficio, para esclarecer la verdad en caso que lo vea necesario su señoría."

Por ese motivo le solicito cordialmente al tribunal en segunda instancia que permita que se libran estos oficios a EPS SANITAS, a la CAJA DE COMPENSACIÓN FAMILIAR COMPENSAR, y se solicite al Juzgado tercero de pequeñas causas laborales de Bogotá la tutela bajo radicado 2015-743, porque dichos documentos se encargarán de fundamentar y demostrar los hechos correspondientes a las situaciones que forzaron a mi cliente a presentar una renuncia forzada y que termina conllevando a un despido injustificado y en caso de demostrarse la tesis correspondiente a que no fue solamente ella que presentó la renuncia, sino que fue un trabajo mancomunado de la empresa demandada para hacer renunciar a varios trabajadores, que no fue solamente ella que renuncio porque quiso o fue ella que renuncio porque no estaba acorde o feliz, sino que fue una renuncia colectiva, que fue gracias a una estrategia presentada por la empresa en ese momento para sacar a varios trabajadores, como están en los hechos mejor escritos, es muy importante saber que ella no fue la única que fue desvinculada en ese momento y que fueron aproximadamente 30 trabajadores desvinculados de la misma forma, lo cual genera un indicó o genera una o demuestra que existió un acto de corrupción en dicha empresa, para generar este tipo de despido indirectos, renuncias forzadas, su señoría, entonces cordialmente solicito no estoy de acuerdo, presento recurso de apelación, vuelvo y lo repito frente a los numerales 4,5 y 6 del título pruebas de oficio que se encuentra en el numeral probatorio.

Respecto al numeral 1, 2 y 3, que son los que se solicitan a la empresa MODERNIZACIÓN VIAL DE COLOMBIA MAZORA, es la empresa demandada, sobre estos no presentó recurso su señoría, por el motivo que usted expuso que, por el motivo que la empresa no se ha hecho presente, la empresa está a través de curador, se tuvo que emplazar.

En este orden de ideas, el problema jurídico que debe dilucidar esta Sala de decisión se circunscribe en determinar si es procedente decretar las pruebas denominadas por el recurrente como "*OFICIO*" concretamente las de los numerales 4 a 6, pues frente a los numerales 1 a 3 señalo no presentar inconformidad en cuanto a su no decreto, tales pruebas corresponden a las siguientes:



000U1

4. Librar oficio a la EPS SANITAS, para que indique si Modernización Vial de Colombia Masora & FMC MVC S.A.S., con NIT 900846605-1, ha presentado novedades, en el sentido de vincular o desvincular al sistema de seguridad social, empleados de dicha empresa, en caso afirmativo, indicar que clase de novedades y sobre que empleados recayeron.
5. Librar oficio a la Caja de Compensación Familiar "COMPENSAR", para que indique si Modernización Vial de Colombia Masora &FMC MVC S.A.S., con NIT 900846605-1, ha presentado novedades, en el sentido de vincular o desvincular a dicha Caja de Compensación Familiar, empleados de dicha empresa, en caso afirmativo, indicar que clase de novedades y sobre que empleados recayeron.
6. Librar oficio al Juzgado Tercero de Pequeñas Causas Laborales de Bogotá, (Primera Instancia) y/o Juzgado Séptimo Laboral de Bogotá (Segunda Instancia) y/o Corte Constitucional, (Enviada a posible revisión), para que, a mi costa, remita al despacho copia de todo lo tramitado dentro de la Acción de Tutela Radicada bajo el Nro. 2015-743, siendo accionante Juan Carlos Suárez Forero y accionada Modernización Vial de Colombia FMC &MASORA & MVC S.A.S.

Para resolver, se tiene que la parte demandada tan sólo está constituida por MODERNIZACIÓN VIAL DE COLOMBIA MASORA & FCM MVC S.A.S. y la FEDERACIÓN COLOMBIANA DE MUNICIPIOS, tal como consta en el auto admisorio de la demanda de fecha 1° de febrero del 2019, visible en la página 56 del archivo 2 del expediente digital, solicitando la demandante sean requeridos unos terceros (*EPS SANITAS, COMPENSAR y JUZGADO 3° DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BOGOTÁ*) a través de oficio a fin de aportar documentos que en su modo de ver son imprescindibles para tomar decisión de fondo.

En lo que atañe frente a esta solicitud, esta colegiatura se remite a lo dispuesto en el artículo 51 de nuestra Obra Procesal que señala: *"Son admisibles todos los medios de prueba establecidos en la ley…"*

Teniendo en cuenta lo anterior, pretende el apoderado de la accionante que se alleguen al proceso documentos, que debió aportar con la demanda, ello

contrariando lo establecido en las normas procesales, específicamente lo dispuesto en el art. 173 del CGP en donde se indica:

> **"ARTÍCULO 173. OPORTUNIDADES PROBATORIAS.**
>
> (…)
>
> En la providencia que resuelva sobre las solicitudes de pruebas formuladas por las partes, el juez deberá pronunciarse expresamente sobre la admisión de los documentos y demás pruebas que estas hayan aportado. El juez se abstendrá de ordenar la práctica de las pruebas que, directamente o por medio de derecho de petición, hubiera podido conseguir la parte que las solicite, salvo cuando la petición no hubiese sido atendida, lo que deberá acreditarse sumariamente.
> (…)"

En este orden de ideas, al solicitar la parte actora, que sea el Juez quien elabore los oficios a fin de obtener la prueba documental que le interesa aducir, lo que está pretendiendo es que sea el *a quo* quien despliegue los actos propios que a dicha sujeto procesal le correspondía. Recuérdese que es a las partes a quienes les corresponde realizar los actos tendientes en procura de acreditar y/o probar los fundamentos facticos en que funda sus pretensiones, y no al juez, tal como lo establece el artículo 167 del CGP el cual señala: "*Incumbe a las partes probar el supuesto de hecho de las normas que consagran el efecto jurídico que ellas persiguen*".

Lo cual, además encuentra sustento jurídico en el numeral 10º del artículo 78 del CGP, que en relación con los deberes y responsabilidades de las partes y sus apoderados señala:

> *"Abstenerse de solicitarle al juez la consecución de documentos que directamente o por medio del ejercicio de petición hubiere podido conseguir"*

Atendiendo entonces el tenor de los parámetros procesales aludidos, conviene precisar que la obligación de acreditar los hechos en que se fundan las reclamaciones y por ende suministrar los insumos probatorios para acreditar cada una de las tesis puestas en consideración del operador judicial, está inicialmente en cabeza de las partes, quienes a su vez tienen el deber de: *"8. Prestar al juez*

su colaboración para la práctica de pruebas y diligencias."[3], a fin de contribuir con la agilidad y rapidez propios del procedimiento laboral[4].

Por ello, en el presente asunto la parte actora debió desempeñar un papel activo en el recaudo de los medios de prueba que consideraba eran conducentes e imprescindibles para las resultas del proceso, acreditando, por lo menos, que hizo ejercicio de su derecho de petición ante las entidades respecto de las cuáles solicita ahora se oficie - *EPS SANITAS, COMPENSAR y JUZGADO 3° DE PEQUEÑAS CAUSAS LABORALES DE BOGOTÁ* -, hecho que no fue documentado en el plenario.

Por lo tanto, de conformidad con lo señalado en precedencia y al no haber demostrado la parte actora que ejerció la petición ante las entidades mentadas, la negativa de estas para dar la información, la dificultad para obtener el medio probatorio o la imposibilidad física para su obtención, no resulta procedente que su negligencia deba ser ahora subsanada por el operador judicial.

Razones por las cuales no se avizora errada la decisión de primera instancia ya que atendiendo sus facultades como director del proceso de conformidad con el artículo 48 del C.P.T. y de la S.S., resulta viable al Juzgador negarlas, lo cual no obsta para que en caso de considerarlo viable el *a quo,* en ejercicio de las facultades establecidas en el Articulo 54 del C.P.L, decrete otros medios de prueba que estime necesarios para resolver el debate planteado por las partes.

De conformidad con las consideraciones que anteceden procede la confirmación del proveído apelado.

COSTAS en esta instancia a cargo de la parte demandante, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 365 del C.G.P.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Laboral,

---

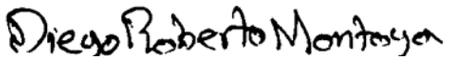
[3] CODIGO GENERAL DEL PROCESO art. 78, numeral 8.
[4] CODIGO PROCESAL DEL TRABAJO, art. 48.

RESUELVE

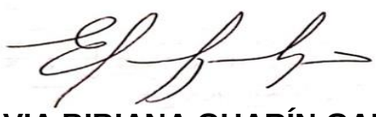
PRIMERO: CONFIRMAR el auto del decreto de pruebas dictado por el Juzgado 17 Laboral del Circuito de Bogotá en audiencia celebrada el 15 de febrero del 2022, de conformidad con las motivaciones precedentemente expuestas.

SEGUNDO: COSTAS en esta instancia a cargo de la parte demandante.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

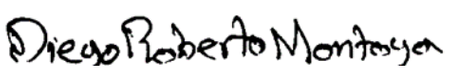


ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

AGENCIAS EN DERECHO: Se fija como valor por concepto de agencias en derecho la suma de $50.000, a cargo de la parte demandante, la cual deberá ser incluida en la liquidación de costas, al tenor de lo consagrado en el artículo 366 del C.G.P.



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL.

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO DE SANITAS EPS CONTRA LA NACIÓN – MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL, UNION TEMPORAL NUEVO FOSYGA Y ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES (RAD. 18 2016 00265 01).

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Vencido el término de traslado otorgado, y habiéndose presentado los alegatos de instancia únicamente por la parte demandante (fls. 4 a 6), el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, con fundamento en el numeral segundo del artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020, profieren el siguiente,

PROVIDENCIA

Decide la Sala el Recurso de apelación oportunamente interpuesto y debidamente sustentado por el apoderado de la demandada ADRES, contra el auto proferido por la Juez Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá D.C., dentro de la audiencia llevada a cabo el 4 de mayo de 2022 *(archivo CD. FOLIO 318 AUDIENCIA 04 DE MAYO DE 2022l[1])*, por medio del cual resolvió declarar no probadas la excepciones

[1] ***JUEZ (6:24):*** *pasa el despacho a resolver sobre las excepciones previas falta de jurisdicción y competencia, ineptitud sustancial de la demanda por indebida acumulación de pretensiones e ineptitud de la demanda por el no agotamiento del requisito de procedibilidad reclamación administrativa del artículo 6 del código de procedimiento del trabajo y de la seguridad social*

Frente a la falta de jurisdicción y competencia aduce la entidad vinculada como litisconsorcio necesario que la sala plena de la Corte Suprema de Justicia en un caso similar remitió el expediente a la jurisdicción contencioso administrativa, conviene igualmente recordar que los presupuesto procesales para una adecuada estructuración del proceso contemplados en vía jurisdiccional por

planteadas por la demandada ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES denominadas *"Falta de jurisdicción y competencia, ineptitud sustancial de la demanda por indebida acumulación de pretensiones e ineptitud de la demanda por el no agotamiento".*

Inconforme con la decisión, el apoderado de la convocada ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES interpuso recurso de apelación únicamente en relación con la excepción de falta de jurisdicción y competencia. Estimó que la jurisdicción y competencia en estos temas de recobros no han tenido una solución pacífica, al punto que están siendo resueltos de forma aleatoria en las especialidades civil y laboral como en la jurisdicción contencioso administrativa.

Pese a ello, citó como hecho sobreviniente la decisión adoptada por la Corte Constitucional mediante auto 389 de 22 de julio de 2021, donde esa Corporación resolvió un conflicto de competencia por un tema de recobros entre un juzgado

---

nuestro máximo tribunal de justicia son: jurisdicción y competencia, capacidad para ser parte, capacidad para comparecer en el proceso y demanda en forma.

La falta de jurisdicción y competencia o capacidad procesal produce la nulidad de lo actuado y la ausencia del presupuesto y capacidad para ser parte de la demandada en forma, induce al procedimiento de un fallo inhibitorio, en el primer presupuesto debe mirar el juez que conoce el proceso que sea competente para conocer de él conforme a las atribuciones conferidas por las normas reguladoras de dicho fenómeno.

Ahora bien existe evidencia que inicialmente en el proceso que fue conocido por este despacho mediante auto del 8 de septiembre de 2016, lo cual se puede corroborar en el folio 211se rechazo por falta de competencia indicando que el asunto debía ser conocido por la superintendencia de salud delegada para la función jurisdiccional y de conciliación, posteriormente esta entidad mediante actuación del 16 de febrero de 2017 lo cual se puede corroborar en folio 223 a 224 también rechazo la demanda y ordeno remitir las diligencias al Consejo Superior de la Judicatura Sala jurisdiccional-disciplinaria para que dirimiera el conflicto que se había suscitado, finalmente el Consejo Superior de la Judicatura Sala jurisdiccional-disciplinaria mediante Auto del 05 de septiembre del 2017 dirimió el conflicto de competencia del presente asunto asignándolo a esta jurisdicción, por lo que mediante auto del 29 de noviembre de 2017 se da cumplimiento a lo ordenado y se admite la demanda, lo que significa que este aspecto procesal ya fue controvertido y debatido dentro de presente proceso por lo que sería improcedente entrar nuevamente a debatir el mismo asunto pues el mismo se reitera ya fue definido previamente lo cual se trae a colación lo establecido en el artículo 139 del Código General del Proceso en el cual se indica que el juez que reciba el expediente no podrá declararse incompetente cuando el proceso le sea remitido por alguno de sus superiores funcionales, así las cosas y sin mayores consideraciones se procederá a declarar no probada la excepción de falta de jurisdicción y competencia.

.

laboral y uno administrativo, creando como regla de decisión que dichos asuntos corresponden a los jueces administrativos. Consideró que esa decisión tiene efectos *erga omnes* y en consecuencia debe ser acatada por todos los jueces de la república[2].

---

[2] ***Apoderado ADRES (18:00):*** *Entendiendo la imposibilidad de su despacho de ligarse el conocimiento de este asunto en virtud de la orden de un superior como lo es el Consejo Superior de la Judicatura de forma respetuosa su señoría solicitaría trasladar el debate únicamente sobre la falta de competencia y jurisdicción al tribunal superior a través del recurso de apelación en los siguientes argumentos: La competencia y jurisdicción de los conflictos suscitados por temas de recobros no han tenido una resolución pacífica, tal es así que conflictos con las mismas partes, con los mismos hechos y que recaen sobre las mismas pretensiones en estos momentos se están resolviendo de forma aleatoria en la jurisdicción ordinaria en sus especialidades civil y laboral como en la jurisdicción contenciosa administrativa, sin embargo existe un hecho sobreviniente que fue notificado en el mes de noviembre de 2021 que es la decisión proferida a través del auto 389 del 22 de julio de 2021 en el expediente CJU072 en que la sala plena de la Corte Constitucional en cumplimiento del numeral 11 del artículo 241 de la constitución política resolvió un conflicto de competencia jurisdiccional suscitado entre el juzgado 6 laboral del circuito de Bogotá y el juzgado 61 administrativo del circuito de Bogotá por un tema de recobros, asunto de la misma naturaleza que nos ocupa y cabe resaltar que las mismas partes Sanitas EPS contra ADRES y crea una regla de decisión: "el conocimiento de los asuntos relacionados con los recobros de servicios y tecnologías en salud incluidos en el POS (hoy PBS) corresponde a los jueces contencioso administrativos en virtud de lo dispuesto en el inciso primero del artículo 104 de la ley 1437 de 2011 por cuanto a través de estos se cuestiona por parte de una EPS un acto administrativo proferido por la ADRES, ese tipo de controversias no corresponde a las previstas en el numeral4 del artículo 2 del código procesal del trabajo y la seguridad social, en la medida en que no se relaciona en estricto sentido con la prestación del servicio de la seguridad social, en cambio se trata de litigios presentados exclusivamente entre entidades administradoras y relativos a la financiación de servicios ya prestados que no implican a afiliados, beneficiarios, usuarios ni a empleadores"*

Ahora bien su señoría en el concepto de esta regla de decisión de la Honorable Corte Constitucional tiene un efecto erga omnes la cual debe ser de acatamiento por los demás jueces de la república, no se debe ocultar que frente al valor vinculante de las decisiones de los órganos de cierre la Honorable Corte Constitucional en sentencia C-816/2011 en sus consideraciones 6.4.1 y 6.4.2 explico " Mientras la jurisprudencia de juzgados y tribunales es criterio auxiliar de interpretación en el ejercicio de la función judicial, las sentencias de los órganos judiciales de cierre y unificación de las diferentes jurisdicciones, además del valor de cosa juzgada propio de ellas frente al caso sub judice, posee fuerza vinculante como precedente respecto de posteriores decisiones judiciales que examinen casos similares, sin perjuicio de la posibilidad de apartamiento e inaplicación del mismo que tiene el juez, a partir de argumentaciones explícitas al respecto(...).la jurisprudencia de la Corte Constitucional, en materia de interpretación de la Constitución y los derechos fundamentales, tiene preeminencia en relación con la jurisprudencia de los órganos judiciales de cierre de las diferentes jurisdicciones, dada la supremacía de la Constitución sobre la normatividad restante del sistema jurídico y las competencias constitucionales de la Corte" en ese sentido su señoría es clara la fuerza vinculante que tiene las decisiones emanadas de los órganos de cierre y repito la obligación que tienen los operadores judiciales de apegarse a los pronunciamientos de sus decisiones, máxime cuando vienen de la Corte Constitucional dada su función de interpretación de la constitución y los derechos fundamentales, ahora bien su señoría por lealtad con la contraparte y con su despacho en esos eventos donde hay fallos que dirimen conflictos de jurisdicción que provienen del Consejo Superior de la Judicatura aun no es tan clara y si ha generado bastante interpretaciones con respecto a esta postura que estoy trayendo a su despacho de la Corte Constitucional por tal medida presentaría recurso de apelación para que pueda ser ante el tribunal revisado este argumento

Para resolver se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

De conformidad con el numeral 3º del artículo 65 del C.P.T. y de la S.S. el auto mediante el cual se decide una excepción previa, es susceptible del recurso de apelación, en consecuencia procede la Sala a resolver lo pertinente atendiendo los puntos concretos objeto de controversia (art. 66 A *ibídem).*

En el sub examine las pretensiones de la demandante EPS SANITAS, se dirigen al Reconocimiento de una indemnización por la ausencia de reconocimiento y pago de 105 recobros y los gastos administrativos en que incurrió la entidad por la gestión de los mismos (*folios 11 a 13, archivo "folio 1 a 317 cuaderno 1.pdf", expediente digital*) y según se desprende del supuesto fáctico, lo pretendido corresponde al reembolso de servicios médicos no incluidos en el POS cuya prestación obedeció a órdenes de tutela, que fueron glosados sin especificar la causal de rechazo, aspiraciones que, atendiendo lo previsto en el artículo 2° del CPTSS, escapan de la órbita de la competencia de esta jurisdicción.

Al respecto, entratándose de conflictos derivados de la seguridad social, el numeral 4° de la aludida disposición señala:

> "***Artículo 2:*** *Modificado Ley 712 de 2001, artículo 2. Competencia general. La jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social conoce de:*
>
> *(...)*
>
> ***4.*** *Modificado L. 1564/2012, art. 622. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleados y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos."*

Al tenor de dicha preceptiva, la competencia de esta especialidad está condicionada a la "*prestación de servicios*", no así al pago de las prestaciones económicas a cargo del sistema que es sobre lo que versa la demanda. Además, también está limitada a las controversias presentadas entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, empero no entre estas últimas como aquí acurre, en tanto las partes en conflicto son entidades administradoras del Sistema General de Seguridad Social en Salud (la EPS -demandante- como administradora de los planes de beneficios en salud y ADRES -demandada- como administradora de los recursos del S.G.S.S.S y que hace parte del mismo[3]).

Sobre el particular, la Corte Constitucional en Auto 389 de 2021, proferido en cumplimiento de las atribuciones conferidas por el numeral 11 del artículo 241[4] de la Constitución Política, en un caso que resulta predicable al caso de marras, con relación a la competencia de los jueces laborales asignada en el precitado numeral 4 del artículo 2 del C.P.T y la S.S., determinó que el proceso judicial de recobro no corresponde, en estricto sentido, a una controversia relativa a la prestación de servicios de la seguridad social, como quiera que dicho procedimiento se adelanta cuando ya la entidad prestó el servicio, en otros términos, dijo, no tiene por objeto decidir sobre la prestación del servicio sino sobre su financiación. Puntualmente, sostuvo esa Corporación:

> *"(…)*
>
> *19. Frente a la tensión expuesta, la Sala procederá a estudiar las disposiciones normativas ya señaladas y algunos precedentes fijados por esta Corporación.*
>
> *20. Resulta importante hacer referencia a la Sentencia C-1027 de 2002, en la que la Corte estudió una demanda presentada en contra del numeral 4º del artículo 2 de Ley 712 de 2001, en su versión original. En esa ocasión la Corporación concluyó que "en el artículo 2 de la ley en mención se regula la* ***competencia general de la jurisdicción ordinaria 'en sus especialidades laboral y de seguridad social'****" (negrillas fuera de texto), siendo enfática al señalar que la unidad conceptual de la seguridad social integral, sumada a las características propias de la conflictividad que gira en torno a la materia, demandan la existencia de un proceso especial y de una jurisdicción también especializada que pueda dirimir tales controversias. En ese orden, dijo que "no cabe duda de que el legislador es el llamado a diseñar el régimen jurídico de la seguridad*

[3] Sobre su naturaleza jurídica y competencias puede consultarse el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015.
[4] "***Artículo 241:*** *a la Corte Constitucional se le confía la guarda de la integridad y supremacía de la Constitución, en los estrictos y precisos términos de este artículo. Con tal fin, cumplirá las siguientes funciones: (…)*
11. Dirimir los conflictos de competencia que ocurran entre las distintas jurisdicciones."

social con sujeción a los principios superiores de eficiencia, universalidad y solidaridad, facultad que implica también la asignación de las competencias jurisdiccionales para el conocimiento de las controversias sobre esta materia". Cuestión última que dio lugar a la conclusión de que la especialización de la justicia ordinaria laboral "corresponde al sentido unificado del sistema de seguridad social integral querido por el constituyente. Unidad del sistema que se proyecta en la unidad de la jurisdicción"[5].

21. Una lectura armónica de los artículos 15[6] *y 622*[7] *de la Ley 1564 de 2012, de los numerales 4º*[8] *y 5º*[9] *del artículo 2 de la Ley 712 de 2001 y del artículo 12 de la Ley 270 de 1996*[10]*, permite reiterar que corresponde a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social, la competencia general para dirimir las* ***controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social***. Exceptuándose de dicho marco los asuntos, (i) de responsabilidad médica y los relacionados con contratos, y (ii) aquellos que por disposición expresa del legislador le sean asignados a otras autoridades judiciales. Así, en atención a la cláusula general de competencia, son los jueces laborales los competentes para conocer de las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social y de la ejecución de obligaciones emanadas del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad.

22. Dicha competencia en cabeza de los jueces laborales tiene importancia para la Corte Constitucional, pues la remisión de los asuntos de la seguridad social a dichos juzgados supone que "el nuevo estatuto procesal del trabajo reconoce expresamente la autonomía conceptual que al tenor de lo dispuesto en el artículo 48 Fundamental ha adquirido la disciplina de la seguridad social, asignándole a la jurisdicción ordinaria laboral el conocimiento de los asuntos relacionados con el sistema de seguridad social integral en los términos señalados en el numeral 4° del artículo 2° de la Ley 712 de 2001"[11].

23. Entonces, de acuerdo con el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012, que modificó el numeral 4º del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, es claro que en los jueces laborales recae la competencia general para dirimir las ***controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social*** *que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras. Así, es necesario examinar, en el caso que estudia la*

---

[5] Corte Constitucional, Sentencia C-1027 de 2002.
[6] El artículo 15 de la Ley 1564 de 2012 señala: "Corresponde a la jurisdicción ordinaria, el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otra jurisdicción".
[7] El artículo 622 de la Ley 1564 de 2012, que modificó el numeral 4º del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establece: "4. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos".
[8] Modificado por el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012.
[9] El numeral 5º del artículo 2 de la Ley 712 de 2001 dispone que la jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social, conoce de: "La ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad".
[10] El artículo 12 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 5 de la Ley 1285 de 2009, señala que la función jurisdiccional "[…] se ejerce por la jurisdicción constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, las jurisdicciones especiales tales como: la penal militar, la indígena y la justicia de paz, y **la jurisdicción ordinaria que conocerá de todos los asuntos que no estén atribuidos por la Constitución o la ley a otra jurisdicción**" (negrillas fuera de texto).
[11] Corte Constitucional, Sentencia C-1027 de 2012.

Sala, primero, si las controversias referidas a los recobros corresponden a la prestación de servicios de la seguridad social, y, segundo, si se trata de una controversia entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras.

24. ***La Sala encuentra, en primer lugar, que el proceso judicial de recobro no corresponde, en estricto sentido, a una controversia relativa a la prestación de servicios de la seguridad social.*** *Dicho procedimiento se adelanta cuando ya la entidad prestó el servicio (el tratamiento o el suministro del insumo excluido del PBS), en virtud de la orden proferida por un comité técnico científico –en su momento– o por un juez de tutela; es decir,* ***no tiene por objeto decidir sobre la prestación del servicio sino sobre su financiación****.* ***En este sentido, el recobro busca resolver un desequilibrio económico entre el Estado y una EPS, de manera que esta última lo que pretende es recuperar los recursos que debió destinar para cubrir asistencias a las que no se considera obligada por estimar que no hacen parte de la cobertura del Plan de Beneficios en Salud. En ese orden, el recobro no pretende garantizar en forma directa que el servicio o la tecnología en salud efectivamente sean prestados.***

No se debe olvidar que los recobros tienen la virtualidad de permitir que los recursos del sistema fluyan adecuadamente y que, de esta forma, tienen repercusiones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud[12]. Sin embargo, esta relación es meramente indirecta y condicional (circunstancial), pues materialmente el procedimiento de recobro constituye una controversia económica, no de salud en estricto sentido, que formula la EPS ante el Estado por haber asumido obligaciones que considera ajenas a lo que estaba legal y reglamentariamente obligada a cumplir.

25. En segundo lugar, las controversias relacionadas con el pago de recobros judiciales al Estado por prestaciones no incluidas en el PBS y por las devoluciones o glosas a las facturas entre entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud vinculan, en principio, a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. En este tipo de controversias, en consecuencia, ***no intervienen afiliados, beneficiarios, usuarios ni empleadores****.*

(…)

29. Ahora, aunque el artículo 622 del CGP, que modificó el numeral 4º del artículo 2 del CPTSS, fue expedido cuando la ADRES aún no se había creado, no puede desconocerse que se trata de una entidad administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y que hace parte del mismo.

30. Con fundamento en lo anterior, ***concluye la Sala que el numeral 4º del artículo 2 del CPTSS (en la forma como fue modificado por el artículo 622 del CGP) no es aplicable a las controversias relacionadas con el pago de recobros judiciales*** *al Estado*

[12] La Corte ha considerado que, dada la complejidad de los procedimientos implementados para el recobro y la asignación de los dineros de la salud, se han ocasionado graves problemas de iliquidez en las entidades promotoras y prestadoras de servicios de salud. En la sentencia C-383 de 2020, esta Corporación indicó que el flujo de recursos "ha comportado una falla estructural del sistema de salud que data de hace varios años, (incluso antes de proferida la sentencia T-760 de 2008 en la que se hizo más evidente), lo que dificulta gravemente la situación financiera de los actores del sistema de salud y perjudica directamente el goce efectivo del derecho fundamental a la salud".

> *por prestaciones no incluidas en el PBS y por las devoluciones o glosas a las facturas,* ***que se susciten entre las EPS y la ADRES****, en la medida en que,* ***como ya se indicó, no corresponden a litigios que, en estricto sentido, giren en torno a la prestación de servicios de la seguridad social. Además, porque se trata de controversias presentadas únicamente entre entidades administradoras, relativas a la financiación de un servicio que ya se prestó.*** *"*

Así las cosas, como en el presente asunto la controversia se ventila por SANITAS EPS (persona jurídica), en contra de la ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD – ADRES, por la presunta falta de pago de servicios NO POS que fueron prestados en cumplimiento de órdenes de tutela, es claro que no está de por medio de manera directa el afiliado, beneficiario, usuario o empleador, en procura de servicios asistenciales o prestacionales.

Adicionalmente, si bien la prestación de los servicios de salud hace parte del Sistema Integral de Seguridad Social, no son del mismo resorte los conflictos económicos que se desprendan de tales servicios, los cuales, por tratarse del Estado (ADRES), se deben ventilar ante la Jurisdicción Contencioso Administrativa, atendiendo los factores subjetivo y objetivo de competencia, correspondiéndole por tanto el conocimiento del asunto a dicha jurisdicción, al tenor de lo previsto en el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 que indica "*(…) la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, d****e las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo****, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa"* , por lo que se itera, no es la Jurisdicción Ordinaria, en su especialidad laboral y seguridad social, la llamada a solventar la controversia propuesta.

Pese a todo lo anterior, la juez a quo analizó que el caso de marras, mediante auto de 8 de septiembre de 2016, el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá, rechazó la demanda por falta de competencia y ordenó la remisión de las diligencias a la Superintendencia de Salud Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación (*archivo "folio 1 a317 cuaderno 1.pdf" folios 326 a 329, expediente digital*), entidad que mediante auto de 16 de febrero de 2017 también rechazó la

demanda y remitió el expediente a la Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura, autoridad que mediante proveído del 5 de septiembre de 2017 dirimió el conflicto, asignando el conocimiento del asunto al Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá (*cuaderno 2 folio 1 a 21 Consejo Superior Sala Disciplinaria.pdf, expediente digital)*, juzgado que mediante auto de 29 de noviembre de 2017, en obedecimiento a lo dispuesto por el Superior, avocó el conocimiento del presente proceso *(fls. 350 y 351 ibídem).* Situación que le impide reparar nuevamente frente a su competencia para conocer del proceso, en tanto esta ya fue definida por el Superior.

Frente a este punto, es necesario señalar, la Corte Constitucional, en Auto 1025 de 2021, memoró su entendimiento de Auto 1008 de 2021, donde explicó que si bien la Superintendencia Nacional de Salud corresponde a una autoridad administrativa adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, de conformidad con la Ley 1122 de 2007, le fueron otorgadas funciones jurisdiccionales específicas y los recursos en contra de sus sentencias son resueltos en segunda instancia por la Sala Laboral del Tribunal Superior correspondiente, por lo que en estricto sentido, los conflictos que se generen entre la citada Superintendencia y un juzgado laboral, corresponden a conflictos de competencia, porque ambas autoridades hacen parte de la especialidad laboral y no a un conflicto de jurisdicción, como quiera corresponden ambas a la jurisdicción ordinaria. Así se pronunció:

> *"1.2 Al respecto, esta Corporación, mediante* ***Auto 1008 de 2021***[13]*, afirmó que, a pesar de ser una autoridad administrativa*[14]*, la Superintendencia Nacional de Salud desarrolla atribuciones jurisdiccionales que se asimilan a las desempeñadas por los jueces de la jurisdicción ordinaria. En primer lugar, porque la Ley 1122 de 2007 establece que quien conoce de los recursos de apelación interpuestos contra sus sentencias es la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial.*[15] *Y, en segundo lugar, porque, la Corte Constitucional ha sostenido que cuando la Superintendencia Nacional de Salud ejerce sus facultades jurisdiccionales "desplaza, a prevención, a los jueces laborales del circuito (o civiles del circuito en los lugares en que no existen los primeros), cuya segunda instancia está asignada a la Sala Laboral*

[13] CJU-925. M.P. Gloria Stella Ortiz Delgado.
[14] De conformidad con el artículo 1° del Decreto 1080 de 2021, "*[l]a Superintendencia Nacional de Salud es una entidad de carácter técnico adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, con personería jurídica, autonomía administrativa y patrimonio independiente*". Sin embargo, a partir de la Ley 1122 de 2007, se otorgaron funciones jurisdiccionales específicas a esa autoridad.
[15] Parágrafo 1º del artículo 41 de la Ley 1122 de 2007. Modificado por el artículo 6 de la Ley 1949 de 2019*."Las providencias emitidas dentro del proceso jurisdiccional se notificarán por el medio más ágil y efectivo. La sentencia podrá ser apelada dentro de los 3 días siguientes a su notificación. En caso de ser concedido el recurso, el expediente deberá ser remitido al Tribunal Superior del Distrito Judicial - Sala Laboral del domicilio del apelante."*

> *de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial. En ese orden de ideas, las decisiones judiciales de la Superintendencia Nacional de Salud serán apelables ante las Salas Laborales de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial, como superiores jerárquicos de los jueces que fueron desplazados por la referida entidad administrativa de su función de decidir en primera instancia"*[16].
>
> *1.3 Por tanto, corresponderá dirimir esta controversia a las autoridades designadas por la ley para resolver conflictos al interior de la jurisdicción ordinaria*[17]*, quienes deberán determinar si, en el caso concreto, la Superintendencia Nacional de Salud actuó en ejercicio de sus funciones jurisdiccionales. Así, aunque en principio se advierte la existencia de un conflicto entre autoridades que, funcionalmente, integran la jurisdicción ordinaria, el análisis sobre si, en efecto, sus actuaciones tuvieron naturaleza jurisdiccional en el presente asunto, recae en las autoridades judiciales competentes.*
>
> *1.4 En este sentido, la norma aplicable para resolver conflictos entre la jurisdicción ordinaria y la Superintendencia Nacional de Salud es el inciso 5 del artículo 139 del Código General del Proceso según el cual: "Cuando el conflicto de competencia se suscite entre autoridades administrativas que desempeñen funciones jurisdiccionales, o entre una de estas y un juez, deberá resolverlo el superior de la autoridad judicial desplazada"*[18]*. Dado que la Superintendencia Nacional de Salud desplaza a los jueces laborales del circuito, son los Tribunales Superiores del Distrito Judicial los llamados a conocer de estos asuntos".*

A tono con lo anterior, es claro que mediante el proveído de 5 de septiembre de 2017 *(cuaderno 2*), la Sala Jurisdiccional Disciplinaria dirimió un conflicto de competencia que se suscitó entre el Juzgado Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá y La Superintendencia Nacional de Salud- Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación, mas no un conflicto de jurisdicción.

En consecuencia, advirtiendo esta Sala que carece de jurisdicción y competencia para resolver las pretensiones incoadas en esta demanda y que de conformidad con el establecido en el artículo 104 del CPACA[19] es la Jurisdicción Administrativa la encargada de resolver esta litis, se revocará la providencia emitida por la juez a quo

---

[16] Sentencia C-119 de 2008, M.P. Marco Gerardo Monroy Cabra.

[17] La Sala advierte que, en su momento, la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura dirimió conflictos de jurisdicción entre la Superintendencia Nacional de Salud y autoridades judiciales. Así lo determinó, por ejemplo, en las providencias del 19 y 11 de noviembre de 2020, 29 y 15 de enero del mismo año, 22 de mayo y 30 de octubre de 2019, 5 de julio de 2018, 1° de noviembre de 2017, entre otras. Sin embargo, también pone de presente que, en ninguno de estos casos, se analizó expresamente la competencia de esa Corporación para dirimir tales controversias o si las partes integraban una misma jurisdicción.

[18] La Corte Suprema de Justicia ha considerado que carece de competencia para resolver conflictos entre jueces del circuito y autoridades administrativas, cuando estima que aquellas desplazan a otros jueces del circuito. Por consiguiente, estima que, en estos casos, la atribución para resolver conflictos de competencia es de los Tribunales Superiores de Distrito Judicial (AC2977-2021).

[19] "**ARTÍCULO 104. DE LA JURISDICCIÓN DE LO CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO**. La Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa"

y en su lugar se declarará probada la excepción previa de FALTA DE JURISDICICION y COMPETENCIA y se dispondrá la remisión del expediente al reparto de los jueces Administrativos del Circuito de Bogotá, para lo de su cargo.

SIN COSTAS en esta instancia.

En mérito de lo expuesto **EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C., SALA LABORAL**

R E S U E L V E

PRIMERO: REVOCAR PARCIALMENTE el auto proferido por la Juez Dieciocho Laboral del Circuito de Bogotá, el 4 de mayo de 2022, en el sentido de **DECLARAR PROBADA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE JURISDICCIÓN Y COMPETENCIA** para conocer el presente proceso.

SEGUNDO: ORDENAR a la juez 18 Laboral del Circuito de Bogotá, **REMITIR** el expediente al reparto de los Juzgados Administrativos del Circuito de Bogotá para lo de su cargo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

NOTIFÍQUESE y CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTA D.C.

SALA LABORAL

Magistrado Ponente: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR NOHORA ELENA QUINTERO MAHECHA CONTRA LA ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, PORVENIR S.A. y SKANDIA S.A. (23 2021 00489 01)

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022)

AUTO

Reconocer personería adjetiva al abogado JAVIER RAMIRO CASTELLANOS, como apoderado sustituto de la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES- COLPENSIONES, en los términos y para los efectos del poder conferido en sustitución por MIGUEL ANGEL RAMIREZ GAITAN, en su calidad de representante legal de la firma de abogados WORLD LEGAL CORPORATION S.A.S (FL. 15)

Diego Roberto Montoya

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

Vencido el término de traslado otorgado, y habiéndose presentado los alegatos de conclusión en esta instancia por SKANDIA S.A, y COLPENSIONES (fls. 3 a 13), el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, con fundamento en el numeral segundo del artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020, profieren la siguiente

P R O V I D E N C I A

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de SKANDIA ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES Y

CESANTÍAS S.A. contra el proveído calendado 22 de marzo del 2022 (*Archivo 10 expediente digital*), mediante el cual se negó el llamamiento en garantía respecto de MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., en razón a que el juez de primera instancia consideró no satisfechos los presupuestos previstos en el artículo 64 del C.G.P. por cuanto la acción se dirige a obtener principalmente la ineficacia de la afiliación al régimen pensional de ahorro individual, con las consecuencias que ello acarrea, y no al reconocimiento de prestaciones a cargo del sistema donde tenga que intervenir como garante la compañía aseguradora.

Como se indicó, la decisión anterior fue objeto de apelación por el apoderado de SKANDIA S.A., como se advierte en el escrito que milita en el *Archivo 11 del expediente digital*, con el cual pretende se revoque la decisión impugnada y, en su lugar, se admita el llamamiento en garantía propuesto, argumentando para el efecto que, en el evento de conceder la ineficacia se deben trasladar entre otros rubros, los montos correspondientes a las cuotas de seguros previsionales, precisando por disposición legal deben ser deducidas del monto del aporte y trasladadas a MAPFRE COLOMBIA VIDA DE SEGUROS S.A., por ende asegura, en caso de que la sentencia que ponga fin a la litis condene a devolver la prima pagada como contraprestación legal por el seguro, la llamada a hacer esa devolución es la mentada aseguradora quien recibió esos dineros por la AFP, siendo esto, a su juicio, lo que justifica su llamamiento en garantía al tenor de lo previsto en el artículo 64 del C.G.P.

Bajo esa orientación entonces, supone, dada la existencia de un vínculo contractual, en caso de condena, es esa sociedad –MAPRE COLOMBIA VIDA SEEGUROS S.A.- quien debería reembolsar los valores pagados por concepto de seguro previsional obligatorio.

Para resolver se hacen las siguientes,

C O N S I D E R A C I O N E S

Asume la Sala el conocimiento de este ordinario, en orden a desatar el recurso de apelación propuesto por SKANDIA, contra el auto que negó la intervención como llamada en garantía de MAPRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., debiendo señalar, en primer lugar, tal proveído, se encuentra enlistado como susceptible del recurso de apelación, al tenor de lo dispuesto en el numeral 2o del artículo 29 de la Ley 712 de 2001, que reformó el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo, lo cual permite el estudio del recurso de marras.

Al punto, memórese, con el llamamiento en garantía, y según lo estatuido en el artículo 64 del C.G.P. [1], se habilita al llamante a convocar a un tercero que le proteja y pague por él o le reembolse lo que erogó por razón de la condena, figura que a su vez posibilita que un demandado llame en garantía a otro demandado (demanda de coparte).

Así, dicha figura procesal se origina cuando la parte de un proceso hace intervenir en el mismo a un tercero que debe proteger o garantizar al llamante, cubriendo los riesgos que se derivan de las peticiones de otro sujeto distinto, siempre y cuando haya un riesgo en el que llama y que por ley o por contrato deba ser protegido o garantizado por el que se llama.

Sobre el tema el maestro DEVIS ECHANDÍA explicaba que

> "(…) *con alguna frecuencia ocurre que una de las partes -demandante o demandada- **tiene el derecho contractual o legal de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio o la restitución del pago que llegue a soportar como resultado, por existir entre él y ese tercero una relación de garantía,** es decir, aquella en virtud de la cual ese tercero (garante) está obligado a garantizar un derecho del demandante y, en consecuencia, a reponer a la parte principal (garantizada) lo que haya dado o perdido en virtud de la acción de otra persona. En otras ocasiones, el derecho a citar al tercero proviene de una relación jurídica distinta, existente entre los dos, respecto a la cosa materia del litigio, como cuando el tenedor demandado en reivindicación denuncia al verdadero poseedor en cuyo nombre tiene el inmueble. Esa citación puede*

[1] "*Artículo 64. Llamamiento en garantía. Quien afirme tener derecho legal o contractual a exigir de otro la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia que se dicte en el proceso que promueva o se le promueva, o quien de acuerdo con la ley sustancial tenga derecho al saneamiento por evicción, podrá pedir, en la demanda o dentro del término para contestarla, que en el mismo proceso se resuelva sobre tal relación.*"

> *prevenir (sic) también de la pretensión excluyente de un tercero sobre la misma cosa"*[2]).

Además la Corte Suprema de Justicia, en su Sala de Casación Civil, advirtió que para que proceda el llamamiento en garantía se requiere que exista –la garantía-, es decir, que este último, por ley o por contrato, esté obligado a indemnizar al llamante por la condena al pago de los perjuicios que llegare a sufrir, o que esté obligado, en la misma forma, al "*reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia*"[3]. Sobre el particular ha sostenido esa Corporación:

> *"El llamamiento en garantía es uno de los casos de comparecencia forzosa de terceros, que se presenta cuando entre la parte y el tercero, existe una relación legal o contractual de garantía que lo obliga a indemnizarle al citante el "perjuicio que llegare a sufrir o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia" que se dicte en el proceso que genera el llamamiento.*
>
> ***La justificación procesal del llamamiento en garantía, previsto en el artículo 57 del Código de Procedimiento Civil*** -hoy artículo 64 del C.G.P.-, ***no es otra que la de la economía, pues lo que se procura es hacer valer en un mismo proceso, las relaciones legales o contractuales que obligan al tercero a indemnizar, sin perjuicio, claro está, de las garantías fundamentales del proceso, que en manera alguna se ven conculcadas. Por tal razón, la Corte ha sostenido que "El texto mismo del precepto transcrito indica que el llamamiento en garantía requiere como elemento esencial que por razón de la ley o del contrato, el llamado deba correr con las contingencias de la sentencia, como consecuencia de la cual el demandado se vea compelido a resarcir un perjuicio o a efectuar un pago" (Sent. de 11 de mayo de 1976).***
>
> *(...)*

---

[2] " Devis Echandía, Hernando, nociones generales de derecho procesal civil, segunda edición, Temis, Bogotá 2009, página 519.

[3] *"(...) como el vocablo mismo así lo indica, para que proceda el llamamiento en garantía requiérese que la halla; es decir, que exista un afianzamiento que asegure y proteja al llamante contra algún riesgo, según la definición que de garantía da la Real Academia Española. O, en otras palabras, que el llamado en garantía, por ley o por contrato, esté obligado a indemnizar al llamante por la condena al pago de los perjuicios que llegare a sufrir, o que esté obligado, en la misma forma, al "reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia", según los términos del artículo 57 del C. de P. Civil".*

Agregó además que "el llamamiento en garantía se produce, al decir de Guasp, «cuando la parte de un proceso hace intervenir en el mismo a un tercero, que debe proteger o garantizar al llamante, cubriendo los riesgos que se derivan del ataque de otro sujeto distinto, lo cual debe hacer el tercero, bien por ser transmitente: llamado formal, o participante: llamado simple, de los derechos discutidos». En uno y otro caso precísase, como se dejó dicho antes, que haya un riesgo en el llamante, que por ley o por contrato deba ser protegido o garantizado por el llamado; o según palabras del Art. 57 ya citado, que el llamante tenga "derecho legal o contractual de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia" Sentencia Sala de Casación Civil, CSJ. radicado 2393 del 14 oct. 1976, reiterada en sentencia SC1304 de 2018.

> *Ahora, sea que el llamamiento en garantía lo proponga una u otra parte, lo significativo* ***es que éste comporta el planteamiento de la llamada pretensión revérsica, o la "proposición anticipada de la pretensión de regreso" …, o el denominado "derecho de regresión" o "de reversión"****, como lo ha indicado la Corte, que tiene como causa la relación sustancial de garantía que obliga al tercero frente a la parte llamante, "a indemnizarle el perjuicio que llegare a sufrir, o el reembolso total o parcial del pago que tuviere que hacer como resultado de la sentencia" (artículo 57). De modo que, de acuerdo con la concepción que sobre el llamamiento en garantía establece el texto legal antes citado,* ***la pretensión que contra el tercero se formula es una pretensión de condena eventual (in eventum), es decir, que ella sólo cobra vigencia ante el hecho cierto del vencimiento de la parte original y que con ocasión de esa contingencia de la sentencia****, "se vea compelido a resarcir un perjuicio o a efectuar un pago", como lo ha dicho la Corte."*[4](Negrilla y Subrayas de la Sala)

De igual forma, en sentencia del 16 dic. 2006, rad. 2000-00276-01, concluyó:

> *"El llamamiento en garantía es un instrumento procesal por el cual se provoca la comparecencia forzosa de un tercero a un proceso en curso, intervención que tiene su germen en la citación que le formula una de las partes en dicha contienda, con fundamento en la relación de garantía de naturaleza personal entre ellos existente, que le confiere el derecho de exigirle que corra con las consecuencias perjudiciales que deba soportar en el evento de resultar vencida en el juicio, de ahí que lo llame a afrontar la pretensión de regreso que introduce para que sea considerada in eventum, es decir, en el caso de perder el pleito. En otras palabras, lo trae al proceso para que se resuelva sobre la obligación legal o contractual que tiene de reembolsarle o indemnizarle las pérdidas económicas que experimente en el caso de un sentenciamiento adverso.*
>
> *Con el llamamiento en garantía, tiene dicho la Corte, se suscita un 'evento de acoplamiento o reunión de una causa litigiosa principal con otra de garantía que le es colateral, dando lugar a una modalidad acumulativa cuyos alcances precisa el art. 57 del C. de P.C.' (…), que conjuga dos relaciones materiales distintas. Por un lado, la que une al demandante con el demandado, y por el otro, la que liga al demandado con el llamado: 'la del demandante contra el demandado, en procura de que este sea condenado de acuerdo con las pretensiones de la demanda contra él dirigida; y la del demandado contra el llamado en garantía a fin de que éste lo indemnice o le reembolse el monto de la condena que sufriere' (…)."*[5]

Adicionalmente, esa Corporación precisó que "*La relación material del llamamiento involucra únicamente al llamante y a la llamada. No se expande a ningún otro sujeto procesal ni siquiera a la parte actora, al punto que solo será objeto de estudio en el evento de prosperidad de las súplicas, de modo que si éstas se desestimaren el análisis resulta inocuo o innecesario, por regla general"*[6]

[4] Corte Suprema de Justicia, sentencia SC1304 de 2018.
[5] CSJ SC 16 dic. 2006, rad. 2000-00276-01
[6] CSJ SC5885-2016, reiterada en auto AC2900-2017.

En el mismo sentido, la Sala Laboral del órgano de cierre de esta jurisdicción, en sentencia SL 5031 de 2019, explicó

> *"Así, el aludido llamamiento se caracteriza porque una de las partes tiene el derecho contractual o legal de exigir a un tercero la indemnización del perjuicio o la restitución del pago que llegue a soportar en el juicio, por existir entre él y ese tercero una relación de garantía, es decir, aquella en virtud de la cual ese tercero (garante) está obligado a garantizar un derecho del demandante y, en consecuencia, a reponer a la parte principal (garantizada) lo que haya dado o perdido en virtud de la acción de otra persona. Pero esa no es la única posibilidad, porque suele suceder, que el derecho a citar al tercero proviene de una relación diferente entre los dos, como cuando se discute en materia laboral, si el empleador se subrogó en la ARL en las prestaciones de ese sistema.*
>
> *"Aquí, lo importante es que exista un afianzamiento que asegure y proteja al llamante contra algún riesgo, pues eso es la esencial del término "garantía", esto es, protección o defensa contra el ataque de otro sujeto, que por Ley o por convención, el llamado debe salir a cubrir en nombre del llamante."*

Así las cosas, como se indicó desde el inicio de este proveído, el apoderado de SKANDIA S.A., insiste en el llamamiento en garantía de MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A., pues asegura que en virtud de los contratos de seguro previsional cuya vigencia estuvo comprendida entre 2007 y 2008, los cuales corresponden a las pólizas No. 9201407000002 y 9201411900149 (*páginas 104 a 115 , archivo7 "contestación demanda y llamamiento en garantía"*), es su obligación devolver los valores recibidos por concepto de prima, en caso de que la AFP resulte condenada a la restitución de este concepto como consecuencia de la ineficacia del traslado.

No obstante, en sentir de esta Corporación, en virtud de las referidas pólizas de seguros, la aseguradora cuya integración se pretende no está obligada a cubrir ninguna de las eventuales condenas, atendiendo que lo pretendido en autos no es otra cosa que la declaratoria de nulidad o ineficacia, por falta de consentimiento informado, de la afiliación realizada por la demandante al régimen de ahorro individual con solidaridad con el consecuente retorno al régimen de prima media con prestación definida y el traslado de las sumas recibidas por concepto de cotizaciones, bonos pensionales, sumas adicionales, con todos sus frutos e intereses y rendimientos (*Archivo 1 expediente digital, páginas 8 a 10*).

El anterior razonamiento encuentra sustento en lo previsto en el artículo 108[7] de la Ley 100 de 1993, que impone a las administradoras de fondos de pensiones el deber de contratar seguros colectivos previsionales que concurran a la financiación de las pensiones de invalidez y sobrevivientes que deban reconocerse a los afiliados del RAIS, lo cual implica que la garantía contratada solo se activa cuando ocurre el reconocimiento de dichas prestaciones –invalidez y sobrevivientes- y se requiere completar el capital respectivo para su pago al beneficiario, aspectos no comprendidos en la discusión de autos, lo que desde luego torna en improcedente el llamamiento e impide darle el trámite respectivo.

En ese orden, se itera, ninguna de las obligaciones que eventualmente deriven de una sentencia favorable a la actora incumben a la entidad aseguradora según el objeto de la póliza que se contrató por parte de la AFP recurrente, y en ese orden, tal como lo concluyó el juez de primer grado, no se cumplen los requisitos exigidos por en el estatuto adjetivo civil para integrar a MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A. como llamada en garantía.

Agotada la competencia en esta instancia por el estudio de los motivos de apelación, conforme las motivaciones precedentes, se confirmará el auto apelado en lo pertinente.

COSTAS en esta instancia a cargo de SKANDIA S.A.

En mérito de lo expuesto se

R E S U E L V E

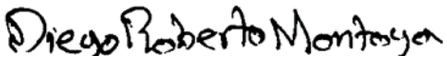
PRIMERO: CONFIRMAR el auto proferido por el Juez Veintitrés (23) Laboral del Circuito de Bogotá, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

---

[7] **ARTÍCULO 108. SEGUROS DE PARTICIPACIÓN.** Los seguros que contraten las administradoras para efectuar los aportes adicionales necesarios para financiar las pensiones de invalidez y sobrevivientes deberán ser colectivos y de participación.
<Inciso modificado por el artículo 54 de la Ley 1328 de 2009. El nuevo texto es el siguiente:> El Gobierno Nacional determinará la forma y condiciones cómo las sociedades administradoras de Fondos de Pensiones del Régimen de Ahorro Individual con Solidaridad deberán contratar los seguros previsionales para el pago de las pensiones de invalidez y sobrevivencia.

TERCERO: COSTAS en esta instancia a cargo de SKANDIA PENSIONES Y CESANTÍAS S.A.

NOTIFIQUESE y CÚMPLASE



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

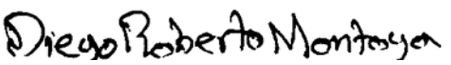


ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

AGENCIAS EN DERECHO: Se fija como valor por concepto de agencias en derecho la suma de $100.000, la cual deberá ser incluida en la liquidación de costas, al tenor de lo consagrado en el artículo 366 del C.G.P.



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL.

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR NEIDA PATRICIA RODRIGUEZ ROPERO CONTRA AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A., JUNTA REGIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ DE BOGOTÁ y JUNTA NACIONAL DE CALIFICACIÓN DE INVALIDEZ (RAD. 27 2019 00388 01).

Bogotá D.C. treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Vencido el término de traslado otorgado, y habiéndose presentado los alegatos de instancia únicamente por AXA COLPATRIA SEGUROS DE VIDA S.A (fls. 5 a 7), el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala, profieren la siguiente decisión, con fundamento en el artículo 15 numeral primero del Decreto 806 del 4 de junio del 2020.

PROVIDENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación oportunamente interpuesto y debidamente sustentado por la apoderada de la parte demandante contra el auto proferido en audiencia celebrada el 4 de abril del 2022 por el Juzgado Veintisiete Laboral del Circuito de Bogotá D.C., por medio del cual se negó el decreto de los testimonios solicitados por la parte demandante *(Expediente digital, audio archivo 4, record: 9:09[1])*

[1] **Juez (Record: 9:09):** En cuanto a las testimoniales solicita la parte demandante que se recepcionen las declaraciones de Oscar Hernández Parra, José Giraldo Rivera Reyes, José Ferney Gutiérrez Quesada, las cuales se niegan por considerar el despacho que son inconducentes e improcedentes, porque conforme al litigio, lo que se pretende es modificar el origen de la enfermedad de la actora, con lo cual se requiere de un conocimiento y experticia pertinente que no es posible llegar con las declaraciones de terceros, pues este estudio lo debe realizar una entidad que estudia esa clase de patologías, que tenga los conocimientos para ello.

Contra la decisión de la *a quo* de negar la prueba, el apoderado de la demandante oportunamente interpuso recurso de reposición y en subsidio el de apelación, indicando que tal prueba es pertinente, en razón a que la patología de la demandante se logra establecer dependiendo de las funciones del puesto de trabajo, y ese es el objetivo de la prueba testimonial. *(Expediente digital audio archivo 4, record: 11:35[2])*

Respecto al recurso de reposición presentado la Juez de primer grado mantuvo incólume su decisión aduciendo que el origen del manguito rotador que padece la demandante no puede ser determinado con los testimonios pues se necesitan estudios técnicos y específicos para ello. *(Expediente digital audio archivo 4, record: 21:27)[3]*

Para resolver se hacen las siguientes:

CONSIDERACIONES

De conformidad con el numeral 4º del artículo 65 del C.P.T. y de la S.S. el auto mediante el cual se *"… niegue el decreto… de una prueba"* es susceptible del recurso de apelación, y en consecuencia procede la Sala a

---

[2] **Apoderado demandante (Record 11:35):** Gracias su señoría, respetuosamente manifiesto que interpongo recurso de reposición y en subsidio apelación, respecto a la decisión que toma el despacho en negar la prueba testimonial, pues si bien es cierto que en verdad, la ciencia médica a través del dictamen es la que puede dictaminar la patología, no menos cierto es que esta patología se logra establecer dependiendo de las funciones del puesto de trabajo de la demandante, y es así que eso es el objetivo de la prueba testimonial, por cuanto la misma cumplía funciones laborales en tal sentido, aspecto que fue objeto de controversia en el dictamen en su debida oportunidad.

En consecuencia, consideró que se debe acceder a esta solicitud. Muchas gracias.

[3] **Juez (Record: 21:27)**: Respecto del recurso de reposición y en subsidio de apelación plateado por el apoderado demandante, (inaudible), pues el origen del maguito rotador que padece la demandante (inaudible), que ha determinado la Junta Regional y la Junta Nacional de calificación de invalidez no podrá ser (inaudible), en virtud de unos testimonios, para ello se necesitan unos estudios técnicos y específicos, en este caso (inaudible), por lo que (inaudible), realmente no (inaudible), al expediente.

(…)

En cuanto al recurso de reposición y en subsidio apelación planteado por la parte demandante, la decisión de negar la recepción de los testimonios pedidos, de acuerdo con el artículo 65 del código procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, numeral 4, se concede ante el superior en efecto devolutivo. En consecuencia (inaudible) para lo de su cargo. Esta decisión queda notificada en estrados, tiene el uso de la palabra el apoderado de la parte demandante.

resolver lo pertinente atendiendo los puntos concretos objeto de controversia (Art. 66 A *ibídem*).

En este orden de ideas, el problema jurídico que debe dilucidar esta Sala de decisión se circunscribe en determinar si es procedente decretar la prueba testimonial solicitada por el demandante, quien aduce que se requiere su práctica "*para que declaren lo que les conste de las funciones y labores de la trabajadora, jornada laboral, empresas donde ha laborado, lugares de prestación del servicio, tiempo de servicio, exposición de riesgos laborales". (Archivo 1 expediente digital página 19).*

Al tema, debe inicialmente recordarse, según se lee de los hechos y pretensiones de la demanda lo que se pretende con este proceso ordinario es que se deje sin valor ni efecto los dictámenes proferidos por la Junta Regional y Nacional de Calificación de Invalidez, en punto al origen de la enfermedad que padece, pues desea que se modifique de común a laboral.

De este modo a juicio de la Sala, contrario a lo concluido por la Juez *a quo* los deponentes solicitados SÍ resultan ser conducentes, pertinentes y útiles, para solventar la Litis, en tanto de sus manifestaciones podría extraerse cuál fue la exposición al riesgo que tuvo la demandante en su puesto de trabajo, lo cual podría generar mayor convicción al Juzgador para determinar la procedencia de las pretensiones de la actora dentro de la litis, ese decir se contaría con mayores elementos de juicio para decidir, constituyendo por ende los testimonios solicitados un medio adicional de convicción susceptible de ser valorado en conjunto con los demás elementos probatorios.

Téngase en cuenta, en casos como el de autos los dictámenes emitidos por la Juntas de Calificación no son la única prueba en que se puede soportar la decisión, pues los mismos pueden ser controvertidos con los demás medio de prueba legalmente establecidos, y así está definido por la H. Corte Suprema de Justicia entre otras en sentencia SL. 2698 de 2021 cuando refiere:

> *"(…) en relación con la idoneidad de los dictámenes, como medio de convicción para establecer la pérdida de la capacidad laboral, esta Sala de Casación ha señalado que, para demostrar ese estado y su dimensión, no existe tarifa legal de pruebas, de suerte que se puede acreditar por cualquiera de los medios de persuasión previstos en las codificaciones procesales del trabajo y civil.*
>
> *En sentencia CSJ SL1958-2021, en relación con la temática, esta Corporación indicó:*
>
> *(…)*
>
> *Por lo demás, es necesario destacar que la Corte en numerosas oportunidades ha precisado que la existencia de una experticia emitida por alguna de las entidades competentes en el procedimiento de determinación de invalidez en el sistema de seguridad social no es vinculante ni ata al juez al momento de resolver en sede jurisdiccional las controversias que se susciten respecto al mismo (CSJ SL4571-2019). Precisamente, en esta providencia se indicó:*
>
> *Así las cosas, las partes pueden discutir el contenido de los dictámenes emitidos por las juntas de calificación de invalidez ante la jurisdicción ordinaria laboral; incluso, dentro del proceso, el juez puede como en este caso, ordenar una nueva valoración para decidir conforme a la sana crítica, sobre la pretensión solicitada.*
>
> *[…]*
>
> *Así, el Tribunal soportó su decisión en una prueba a la que le otorgó mayor valor probatorio (dictamen de la Facultad Nacional de Salud Pública de la Universidad de Antioquia), en perjuicio de otra que también figura en el proceso (Dictamen de la Junta Nacional de Calificación de Invalidez), determinación que se acompasa con la posibilidad legal de apreciar libremente las pruebas y, por lo mismo, no comporta ningún desatino jurídico.*
>
> […]"

De conformidad con las consideraciones que anteceden procede la revocatoria del proveído apelado.

SIN COSTAS en esta instancia.

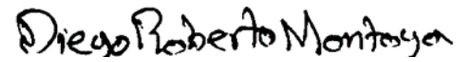
En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C., Sala Laboral,

RESUELVE

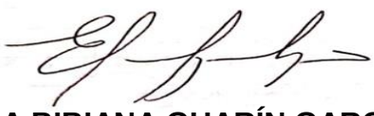
PRIMERO: REVOCAR el auto apelado, en cuanto negó el decreto de la prueba testimonial, para en su lugar **DECRETAR** la misma, en los términos de la solicitud efectuada por el demandante en su escrito de demanda.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTA D. C.

SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL SEGUIDO POR EXNEIDER RAMIREZ DIAZ contra JOSE ALBERTO LUCENA MARTINEZ y solidariamente contra SERVINACIONALES LTDA. Y contra SOLUCIONES TEMPORALES SIGLO XXI S.A.S. (RAD. 29 2021 00031 01).

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Vencido el término de traslado otorgado, habiéndose presentado los alegatos de conclusión por la parte de la demandada SERVINACIONALES S.A.S. y SOLUCIONES TEMPORALES SIGLO XXI S.A.S. mediante correo electrónico del 9 de mayo del 2022, el Magistrado Ponente en asocio de los demás Magistrados con quienes integra la Sala de Decisión, con fundamento en el numeral segundo del artículo 15 del Decreto 806 del 4 de junio del 2020, profieren la siguiente

PROVIDENCIA

Decide la Sala el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de las sociedades demandadas SERVINACIONALES S.A.S. y SOLUCIONES TEMPORALES SIGLO XXI S.A.S. *(Archivo 8 expediente digital)* contra el auto proferido por la Juez Veintinueve (29) Laboral del Circuito de Bogotá D.C. el 11 de febrero del 20022 *(Archivo 7 expediente digital)* por medio del cual tuvo por no contestada la demanda de éstas demandadas ante la ausencia de la misma.

Como motivos de inconformidad *(Archivo 8 expediente digital)* las convocadas a juicio aducen *"(…) El día 8 de febrero de 2021, a las 2:27 pm, aporté mediante correo electrónico memorial contentivo de la contestación de la demanda y sus anexos a nombre de la Empresa SOLUCIONES TEMPORALES SIGLO XXI S.A.S. (…) y SERVINACIONALES S.A.S. Por error involuntario y desafortunado de digitación, y en atención a que en ese despacho cursa el proceso No. 11001310502920190073100, contra las mismas personas demandadas que represento, se dirigió el correo y el encabezado de la contestación con ese dato errado y no con el del proceso en referencia, cuya finalización es similar. Mientras en*

el proceso en referencia es demandante el señor EXNEIDER RAMIREZ DÍAZ, en el otro lo es el señor GUSTAVO ADOLFO OSPINA BONILLA. Sin embargo, el poder adjunto, contiene el dato correcto del proceso en referencia."

A efectos de resolver lo pertinente se hacen las siguientes,

C O N S I D E R A C I O N E S

Inicialmente, señala la Sala, el auto que dé por no contestada la demanda, se encuentra enlistado como susceptible del recurso de apelación, al tenor de lo dispuesto en el numeral 1º del artículo 29 de la Ley 712 de 2001, que reformó el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo, lo cual permite el estudio del presente recurso.

Con el fin de dar solución al presente asunto, debe tenerse en cuenta que el artículo 74 del CPTSS prevé que "*admitida la demanda, el juez ordenará que se dé traslado de ella al demandado o demandados para que la contesten y al Agente del Ministerio Público si fuere el caso, por un término común de diez (10) días, traslado que se hará entregando copia del libelo a los demandados."*

Por su parte, el artículo 8 del Decreto 806 de 2020, que modificó transitoriamente el Código General del Proceso, y vigente para la fecha en que fue incoada la demanda *(25 de enero del 2021, acta de reparto, archivo 01 demanda expediente digital)* establece:

> *"**ARTÍCULO 8. Notificaciones personales.** Las notificaciones que deban hacerse personalmente **también podrán** efectuarse con el envío de la providencia respectiva como mensaje de datos a la dirección electrónica o sitio que suministre el interesado en que se realice la notificación, sin necesidad del envío de previa citación o aviso físico o virtual. Los anexos que deban entregarse para un traslado se enviarán por el mismo medio.*
>
> *El interesado afirmará bajo la gravedad del juramento, que se entenderá prestado con la petición, que la dirección electrónica o sitio suministrado corresponde al utilizado por la persona a notificar, informará la forma como la obtuvo y allegará las evidencias correspondientes, particularmente las comunicaciones remitidas a la persona por notificar.*
>
> ***La notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y los términos empezarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación.***
>
> *Para los fines de esta norma **se podrán Implementar o utilizar sistemas de confirmación del recibo de los correos electrónicos o mensajes de datos**.*

> *Cuando exista discrepancia sobre la forma en que se practicó la notificación, la parte que se considere afectada deberá manifestar bajo la gravedad del juramento, al solicitar la declaratoria de nulidad de lo actuado, que no se enteró de la providencia, además de cumplir con lo dispuesto en los artículos 132 a 138 del Código General del Proceso.*
>
> ***PARÁGRAFO** 1. Lo previsto en este artículo se aplicará cualquiera sea la naturaleza de la actuación, incluidas las pruebas extraprocesales o del proceso, sea este declarativo, declarativo especial, monitorio, ejecutivo o cualquiera otro.*
>
> ***PARÁGRAFO 2.** La autoridad judicial, de oficio o a petición de parte, podrá solicitar información de las direcciones electrónicas o sitios de la parte por notificar que estén en las Cámaras de Comercio, superintendencias, entidades públicas o privadas, o utilizar aquellas que estén informadas en páginas Web o en redes sociales."* (Negrilla y subrayas de la Sala).

Dicha disposición fue objeto de control de constitucionalidad por parte de la Corte Constitucional, quien mediante sentencia C-420 de 2020, declaró exequible el inciso tercero de manera condicionada bajo el entendido que "***el término allí dispuesto empezará a contarse cuando el iniciador recepcione acuse de recibo o se pueda por otro medio constatar el acceso del destinatario al mensaje.***"

.

Atendiendo lo anterior, y al tenor de las consideraciones vertidas por el Alto Tribunal Constitucional, cuando la notificación se realice a través de mensaje de datos, la misma se entenderá surtida contados dos días a partir de i) la fecha en que se acuse recibo o ii) la fecha en que el mensaje **haya sido efectivamente recibido**, si la misma puede verificarse a través de cualquier medio.

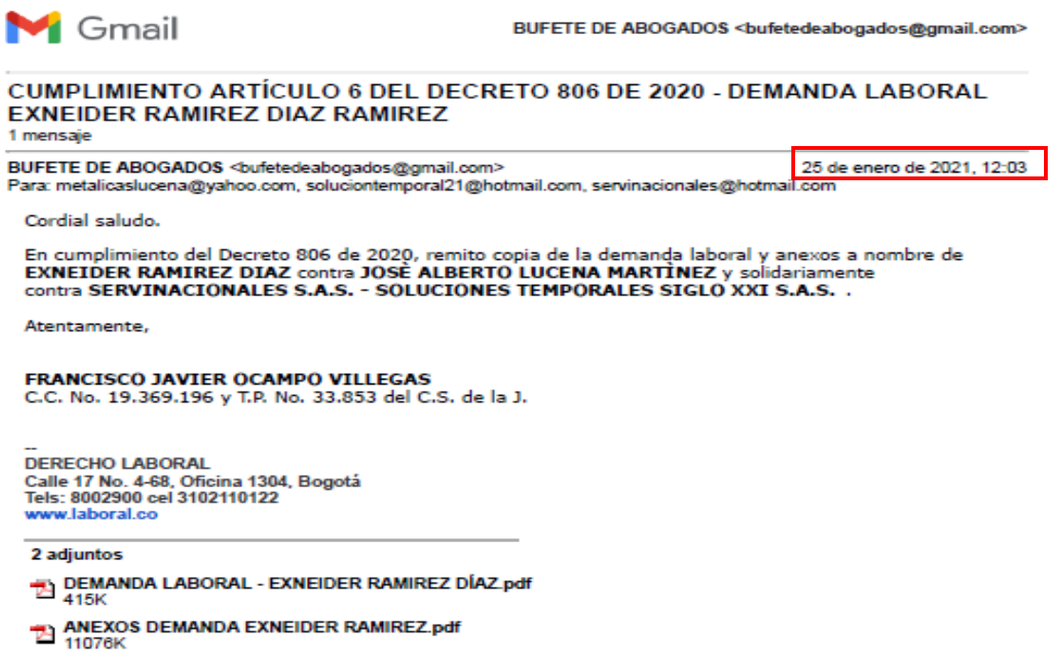
En el caso bajo examen, se debe aclarar en primer lugar en autos pese a que obra constancia de notificación por parte del demandante al extremo demandado *(Archivo 6 expediente digital)* pues aporta CERTIFICADO DE TRAZABILIDAD DE NOTIFICACIÓN ELECTRONICA, en donde se puede constatar que el mensaje de datos se envió a SERVINACIONALES S.A.S. y SOLUCIONES TEMPORALES SIGLO XXI S.A.S. el 29 de noviembre del 2021 y los destinatarios abrieron la notificación y dieron lectura al mensaje ese mismo día, no puede perderse de vista que la parte demandante junto con la radicación de la demanda aporta el correo electrónico por medio del cual da cumplimiento a lo previsto en el Decreto 806 de 2020 artículo sexto el cual prevé:

> *En cualquier jurisdicción, incluido el proceso arbitral y las autoridades administrativas que ejerzan funciones jurisdiccionales, salvo cuando se soliciten medidas cautelares previas o se desconozca el lugar donde recibirá notificaciones el demandado, **el demandante, al presentar la demanda, simultáneamente deberá enviar por medio***

> ***electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados**. Del mismo modo deberá proceder el demandante cuando al inadmitirse la demanda presente el escrito de subsanación. El secretario o el funcionario que haga sus veces velará por el cumplimiento de este deber, sin cuya acreditación la autoridad judicial inadmitirá la demanda. De no conocerse el canal digital de la parte demandada, se acreditará con la demanda el envío físico de la misma con sus anexos.*

En ese orden de ideas y teniendo en cuenta lo señalado por el apelante en su recurso, resulta evidente que en efecto obran las contestaciones de la demanda de SERVINACIONALES S.A.S. y SOLUCIONES TEMPORALES SIGLO XXI S.A.S. enviadas al correo electrónico del Juzgado de primer grado con fecha **8 de febrero del 2021** (Archivo 8 expediente digital, páginas 4 a 7) en las cuales, si bien se anota erradamente el número del proceso, la partes si corresponden al presente litigio, incluso el poder que obra dentro de las mismas contiene los datos correctos del presente proceso (ver archivos 9 y 10 del expediente digital), correos electrónicos que fueron recibidos por el Juzgado 29 Laboral del Circuito de Bogotá y a los cuales se les dio ACUSO DE RECIBIDO ese mismo día -8 de febrero del 2021- a las 4:41 pm, por parte de la escribiente de tal despacho judicial.

De esta manera y si bien la parte pasiva aquí apelante no allegó la contestación dentro de los 10 días siguientes a la notificación del auto admisorio de la demanda remitido por la parte actora el pasado 29 de noviembre del 2021, no se puede pasar por alto que las mismas se aportaron con anticipación, esto es, el **8 de febrero del 2021** como se acaba de relatar y ello en razón a que la parte demandante desde el día 25 de enero del 2021, cuando radicó la demanda laboral informó a las demandas la existencia del proceso.



Gmail BUFETE DE ABOGADOS <bufetedeabogados@gmail.com>

CUMPLIMIENTO ARTÍCULO 6 DEL DECRETO 806 DE 2020 - DEMANDA LABORAL EXNEIDER RAMIREZ DIAZ RAMIREZ

1 mensaje

BUFETE DE ABOGADOS <bufetedeabogados@gmail.com> 25 de enero de 2021, 12:03
Para: metalicaslucena@yahoo.com, soluciontemporal21@hotmail.com, servinacionales@hotmail.com

Cordial saludo.

En cumplimiento del Decreto 806 de 2020, remito copia de la demanda laboral y anexos a nombre de **EXNEIDER RAMIREZ DIAZ** contra **JOSÈ ALBERTO LUCENA MARTÍNEZ** y solidariamente contra **SERVINACIONALES S.A.S. - SOLUCIONES TEMPORALES SIGLO XXI S.A.S.** .

Atentamente,

FRANCISCO JAVIER OCAMPO VILLEGAS
C.C. No. 19.369.196 y T.P. No. 33.853 del C.S. de la J.

--
DERECHO LABORAL
Calle 17 No. 4-68, Oficina 1304, Bogotá
Tels: 8002900 cel 3102110122
www.laboral.co

2 adjuntos

DEMANDA LABORAL - EXNEIDER RAMIREZ DÍAZ.pdf 415K

ANEXOS DEMANDA EXNEIDER RAMIREZ.pdf 11076K

De modo que al tener conocimiento la parte demandada de la existencia del litigio desde el 25 de enero del 2021, procedió a dar contestación a la misma incluso desde antes de la admisión del libelo que lo fue el 23 de febrero del 2021 (Archivo 3 expediente digital), lo cual en manera alguna puede generar perjuicios en su contra, por lo que, al haberse radicado la contestación de la demanda el **8 de febrero del 2021,** no se puede afirmar que no se presentó o que fue extemporanea.

De otra parte debe precisarse en este particular caso, la demanda presentada por la parte actora no fue objeto de inadmisión, razón por la cual resulta procedente el estudio de las contestaciones allegadas por las pasivas SERVINACIONALES S.A.S. y SOLUCIONES TEMPORALES SIGLO XXI S.A.S. desde el 8 de febrero del 2021, además téngase en cuenta con la introducción del Decreto 806 del 2020 se incluyó un requisito adicional para la presentación de la demanda, esto es, enviar por medio electrónico copia de ella y de sus anexos a los demandados, por lo cual resulta evidente que desde el 25 de enero del 2021 la parte pasiva en este ordinario tenía conocimiento de la existencia del litigio, lo que se itera en nada impide que puedan ser evaluadas por el Juzgador las contestaciones de la demanda allegadas antes del término que dispone la Ley para ello.

Precisado lo anterior, a juicio de esta Corporación, si la contestación de la demanda fue presentada el 8 de febrero del 2021, no puede tomarse como extemporánea, pues pese a que la misma como ya se dijo se presentó antes del inicio del terminó consagrado por el artículo 8 del Decreto 806 de 2020 (que iniciaba a contarse dos días después del 29 de noviembre del 2021), lo cierto es que no se superó el límite de dicho término, el que en autos se cumplía el 16 de diciembre de 2021. A ello se suma, la eventual admisión de la contestación antes del término atrás señalado, no constituye vulneración alguna al debido proceso ni genera dilación al proceso, razones suficientes para revocar la decisión de primer grado.

Sobre el punto y en un caso donde tanto la reforma de la demanda como la de casación se presentaron de manera anticipada, situación que se asimila a lo aquí, ocurrido la Corte Suprema de Justicia Sala Laboral en providencia STL 13757-2018 Rad. 53038 del 10 de octubre del 2018, consideró:

> *"Esta Sala de la Corte, ha considerado la tesis de negar el trámite de la reforma de la demanda pre tempore, cómo un razonamiento arbitrario y contrario al ordenamiento jurídico, ya que el actor con su proceder, en momento alguno está vulnerando los derechos de defensa del demandado, así como tampoco se avizora, ninguna dilación al proceso en sí, que impida su normal desarrollo; así lo ha sostenido en diversas oportunidades esta Sala de Casación, como en la sentencia STL55750-2017, rad. 46826, del 26 de abril de 2017, donde adoctrinó:*

> *Ahora bien, se aprecia que dentro del proceso ordinario laboral el Juzgado Veinticuatro Laboral del Circuito de Bogotá por auto del 16 de octubre de 2013, se abstuvo de darle trámite a dicha solicitud, al estimar que la misma había sido presentada «pre tempore»; razonamiento que a juicio de la Sala, se muestra arbitrario y contrario al ordenamiento jurídico, pues la conducta del actor no vulnera el derecho de defensa de la parte demandada ni tampoco constituye dilación alguna en el trámite del proceso, además de que el artículo 28 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social no hace referencia a conjurar la presentación anticipada de la reforma a la demanda, sino por el contrario refiere que dicho mecanismo solo puede ser utilizado una vez, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término de traslado de la inicial o de la reconvención, si fuere el caso; posición ésta que ha sido asumida por esta Sala de la Corte en varias oportunidades (Auto del 30 de abril de 2004, radicado n.º 22692, Sentencia del 6 de marzo de 2011, Sentencia del 20 de marzo de 2013, radicación n.º 42923, entre otras), y que, no obstante hacer referencia a la «demanda de casación» cuando es presentada anticipadamente, igualmente resulta aplicable al evento de la reforma a la demanda que es allegada en esas mismas condiciones.*
>
> *(…) la presentación anticipada de la demanda de casación ni causa dilación o demora en los trámites del recurso extraordinario, ni sorprende a la parte contraria en desmedro de su derecho de defensa. También, que lo "perentorio e improrrogable" de los términos, en consonancia con el principio de preclusión y aún, el de eventualidad, alude, para el caso del recurso de casación, no a conjurar la anticipación de la demanda sino, cosa distinta, su presentación posterior al vencimiento del traslado que al efecto concede la ley. Luego entonces, para este asunto, el haberse presentado por el apoderado del recurrente en casación la demanda antes de correr el término no inhibe su consideración […]»; asimismo, por auto del 14 de agosto de 2012, radicado n.º 56498, destacó que «la sustentación anticipada del recurso extraordinario no es sinónimo de extemporaneidad», precisión que guarda relación con el tema aquí discutido.*

Esta posición de la Corte, fue reiteración de la sentencia CSJ STL2798-2013, donde señaló lo siguiente:

> *En el caso concreto, como lo afirma la accionante y se corrobora con lo señalado en los autos del 26 de abril; 22 de mayo y 24 de julio de 2013, la decisión de no tener en cuenta la "reforma a la demanda" obedeció al hecho de que el escrito contentivo de la misma fue presentado el 8 de octubre de 2012, esto es, "antes del 21 de marzo del año en curso, fecha en la cual empezó a correrle el término de cinco días que tenía para reformarla", acorde con lo señalado en el artículo 28 del C.P.L. y de la S.S., razón por la cual se consideró que dicha actuación fue extemporánea, por anticipación; razonamiento que, a juicio de la Sala, no acoge un criterio hermenéutico lo suficientemente válido, sino, todo lo contrario, uno que indiscutiblemente debe calificarse de arbitrario o abiertamente contrario al ordenamiento jurídico toda vez que, según se concluye de lo dicho con antelación, lejos está dicha conducta de causar dilaciones en el trámite del proceso y, menos aún, de vulnerar el derecho de defensa de la parte demandada; sumado a lo cual el mentado artículo 28 del C.P.L. y S.S., de cara al principio de preclusión, no alude a conjurar la anticipación de la reforma a la demanda sino más bien que ese mecanismo puede ser utilizado, por una sola vez, dentro de los cinco (5) días siguientes al vencimiento del término de traslado de la inicial o de la reconvención, si fuere el caso; posición ésta que ha sido asumida por esta Sala de la Corte en varias oportunidades y que, no obstante hacer referencia a la "demanda de casación" cuando es presentada anticipadamente, igualmente resulta aplicable al evento de la reforma a la demanda que es allegada en esas mismas condiciones.*
>
> *En efecto, […], "Tal teleología impone entender que la presentación anticipada de la demanda de casación ni causa dilación o demora en los trámites del recurso extraordinario, ni sorprende a la parte contraria en desmedro de su derecho de defensa. También, que lo 'perentorio e improrrogable' de los términos, en consonancia con el principio de preclusión y, aún, el de eventualidad, alude, para el caso del recurso de casación, no a conjurar la anticipación de la demanda sino, cosa distinta, su presentación posterior al vencimiento del traslado que al efecto concede la ley. Luego entonces, para este asunto, el haberse presentado por el apoderado del recurrente en casación la demanda antes de correr el término no inhibe su consideración (…)"; aunado a lo cual también ha reiterado que "la sustentación anticipada del recurso extraordinario no es sinónimo de extemporaneidad";*

> *precisiones que se hacen porque, se repite, guardan íntima relación con el tema aquí planteado.*
>
> *(...).”*

De acuerdo con los anteriores razonamientos como ya se anunció se impone la revocatoria del auto apelado para en su lugar, ordenar que el Juzgado 29 Laboral del Circuito de Bogotá D.C., estudie la procedencia de admitir o no la contestación de la demanda de SERVINACIONALES S.A.S. y SOLUCIONES TEMPORALES SIGLO XXI S.A.S., sin atender las circunstancias ya examinadas, acorde a las motivaciones que anteceden.

SIN COSTAS en esta instancia.

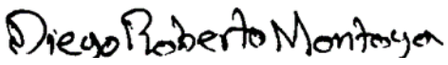
En mérito de lo expuesto, **EL TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C., SALA LABORAL**-,

RESUELVE

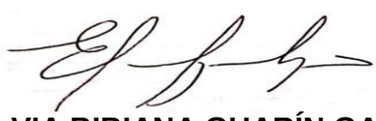
PRIMERO: REVOCAR el auto apelado, para en su lugar ordenar al Juez a quo que proceda a estudiar la procedencia dar o no por contestada la demanda, sin atender las circunstancias ya examinadas, acorde a las motivaciones que anteceden.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN



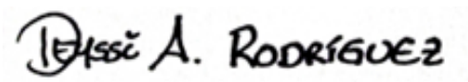
ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

INFORME: Se deja constancia que el 18 de mayo de los corrientes, y debido a que, luego de revisado el expediente, no se halló prueba de la inclusión del emplazamiento de la demandada INDEGA S.A. en el Registro Nacional de Personas Emplazadas de la Rama Judicial, el Despacho estableció comunicación telefónica con DANIELA MARTÍNEZ escribiente del Juzgado 33 Laboral del Circuito a efectos de corroborar, si se había efectuado dicho registro en el sistema correspondiente, frente a lo cual se recibió respuesta negativa, manifestando que el mensaje dado por el Secretario del Juzgado Dr. ESAÚ ALBERTO MIRANDA BUELVAS fue el siguiente: "*Para esa época del auto no teníamos usuario para entrar al registro de emplazados, el edicto emplazatorio duro publicado en la cartelera del juzgado y la parte interesada retiró otra copia del edicto y lo publicó en El Nuevo Siglo en marzo de 2018, piezas que obran en el expedient*e.". Del mismo modo, se hizo la consulta en el Registro Nacional de Personas Emplazadas, búsqueda que no arrojó registro alguno de dicho emplazamiento.



DEYSSI AZUCENA RODRIGUEZ CUERVO
Abogada Asesora Grado 23

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL
BOGOTÁ D.C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR EFRAÍN NIETO AGUDELO CONTRA INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A. -INDEGA S.A.- (33 2016 00012 01).

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022)

AUTO

Sería del caso resolver lo pertinente en relación con el presente ordinario, el cual ingresa a este Tribunal a efectos de estudiar el recurso de apelación propuesto por la parte demandante, contra la sentencia proferida por el Juzgado Treinta y Tres (33) Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el pasado 7 de octubre del 2021 en

audiencia virtual realizada a través de la plataforma Microsoft Teams; sin embargo, advierte la Sala, dentro de la actuación se evidencia la ocurrencia de la causal de nulidad contenida en el numeral 8º del artículo 133 del Código General del Proceso que será preciso declarar.

A través de apoderado, el demandante accionó contra la **INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A.** la declaratoria de existencia de un contrato de trabajo desde el 1° de abril de 1984 al 6 de agosto de 2011, con el consecuente pago prestaciones sociales, vacaciones, dotación, reintegro de los valores cancelados por aportes a pensión, salud y riesgos profesionales con su consecuente sanción, indemnización por despido sin justa causa, moratoria, sanción por la evasión de pagos por concepto de parafiscales y costas del proceso (fls. 9 y 10), la cual fue admitida en providencia del 17 de junio del 2016 (fl. 253), en la que se ordenó correr traslado a la convocada a juicio por el término de 10 días hábiles.

A la demandada le fue remitida la citación para diligencia de notificación personal establecida en el artículo 291 del C.G.P (folios 255 a 262), frente a la cual se rehusó a recibir como lo certifica la empresa de mensajería INTERRAPIDISIMO.

Conforme a lo anterior mediante auto del 10 de mayo del 2017 se requirió a la parte demandante *"para que se acerque (sic) la secretaria del despacho a retirar el aviso de notificación dirigido a la parte demandada INDUSTRIA NACIONAL DE GASEOSAS S.A."* (fl .265), la parte actora retiró dicho aviso (fl.269) y procedió a su notificación (fls. 271 a 290), respecto de la cual la empresa INTERRAPIDISIMO la devolvió bajo la causal "REHUSADO/SE NIEGA A RECIBIR" señalando "*con lo anterior se confirma que el destinatario Industria Nacional de Gaseosas S.A. INDEGA- representante legal y/o quien haga sus veces no recibió el envio por el causal de REHUSADO/SE NEGO A RECIBIR".*

Por tales razones, en proveído del 4 de diciembre del 2017 el Juez *a quo* dio aplicación a lo dispuesto en el artículo 29 del C.P.L. y dispuso la designación de un curador *ad litem* para dicha demandada y ordenó el emplazamiento de la misma en un medio de amplia circulación nacional, a lo cual se dio cumplimiento como se evidencia a folio 296 donde se encuentra la página respectiva del periódico DEL NUEVO SIGLO., así mismo ordenó "*Por Secretaría súrtase la publicación del emplazamiento en el Registro Nacional de Personas Emplazados (Art. 108 Inciso 6° del CGP)*

El Juez de primera instancia designó como curador ad litem de la sociedad INDEGA S.A. al togado RAMON ANTONIO PABA ROSO (fls. 298 y 299) quien se notificó de manera personal el 23 de octubre del 2018 (fl. 300) dando contestación al libelo mediante escrito del 7 de noviembre del 2018 (fls. 302 y 303), el cual fue objeto de inadmisión (fl. 305) corregido mediante escrito del 21 de mayo del 2019 (fls. 306 a 310) admitida mediante providencia del 31 de julio del 2019 (fl. 311) misma en la cual se citó a las partes para llevar a cabo la audiencia prevista en el artículo 77 del C.P.L.

En este orden de ideas, debe recordarse el artículo 29 de la Constitución Nacional consagra el debido proceso en todas las actuaciones judiciales y administrativas para que nadie pueda ser juzgado sino conforme a las leyes preexistentes al acto que se le imputa, ante Juez o Tribunal Competente, con observancia de las formas propias de cada juicio.

Para garantizar dichos postulados, el legislador en su sabio entender erigió en nulidades determinados vicios que impiden que exista el debido proceso, para efectos de no dejar al albedrío del intérprete el determinar cuándo se da la violación.

Fue así entonces como se taxaron las nulidades que pueden invalidar la actuación surtida dentro de un proceso, como desarrollo del art. 29 de la Constitución, por lo que no puede existir causal de nulidad distinta de las señaladas en el artículo 133 del Código General del Proceso. Cosa diferente es que se configuren otras irregularidades, por lo que fuera de las taxativamente contempladas en la norma procesal, no existen otras nulidades o si se generan no producen la invalidez de la actuación, salvo que tal yerro lleve consigo una violación al debido proceso o a las prerrogativas fundamentales de las partes.

Revisado cuidadosamente el expediente el cual fue radicado el 18 de diciembre del 2015 (fl. 156), advierte esta Corporación que, pese a que se ordenó por el Juez *a quo* realizar el edicto emplazatorio y su publicación conforme lo ordena la Ley como también la publicación del emplazamiento en el Registro Nacional de Personas Emplazados, no se efectuó el citado registro de INDEGA S.A. en el sistema Nacional de Personas Emplazadas de la Rama Judicial.

Nótese que el artículo 108 del C.G.P. vigente para la data en que se admitió la demanda (17 de junio del 2016 fl. 253) preveía que el EMPLAZAMIENTO surtiría efectos una vez cumplidos los requisitos legales, de su publicación que son: i) nombre del emplazado; ii) la partes del proceso; iii) la clase de proceso; y iv) que el juzgado que lo requiere; efectúe **la publicación en el "registro nacional de personas emplazadas"** en el que se incluirán, fuera de los anteriores requisitos, el nombre del sujeto emplazado, su número de identificación, si se conoce, las partes del proceso, su naturaleza y el juzgado que lo requiere. Realizado lo anterior el Registro Nacional de Personas Emplazadas publicará la información remitida y **el emplazamiento se entenderá surtido quince (15) días después de publicada la información de dicho registro**. Surtido el emplazamiento se debe proceder a la designación de curador *ad litem*.

Así mismo en el parágrafo del citado artículo 108, se dispuso que el Consejo Superior de la Judicatura regularía todo lo correspondiente a dicho registro, con el fin de darle publicidad; garantizar el acceso y establecer la base de datos que permita consultar tal información y fue en cumplimiento de esa función que se emitió el Acuerdo PSAA14-10118 del CSJ del 4 de marzo del 2014, cuyo artículo 5º dispuso que "(…) *Una vez efectuada la publicación en uno de los medios expresamente señalados por el juez, la parte interesada deberá solicitar la inclusión de los datos de la persona requerida en el Registro Nacional de Personas Emplazadas, para lo cual el despacho ordenará previo el cumplimiento de los requisitos legales la inclusión de los datos de la persona requerida en el Registro Nacional de Personas Emplazadas, para lo cual el Despacho ordenará previo el cumplimiento de los requisitos legales la inclusión de la siguiente información en la base de datos; (…)"*, trámite que corresponde al juzgado de conocimiento.

Ahora bien, se debe tener en cuenta, para la fecha en que se profirió la sentencia 7 de octubre del 2021 (Cd. fl. 320, acta folios 321 y 322), se encontraba rigiendo el Decreto 806 del 4 de junio del 2020 "*Por el cual se adoptan medidas para implementar las tecnologías de la información y las comunicaciones en las actuaciones judiciales, agilizar los procesos judiciales y flexibilizar la atención a los usuarios del servicio de justicia, en el marco del Estado de Emergencia Económica, Social y Ecológica"* el cual en su artículo 10 dispuso:

> *"ARTÍCULO 10. Emplazamiento para notificación personal.* ***Los emplazamientos que deban realizarse en aplicación del artículo 108 del Código General del Proceso se harán únicamente en el registro nacional de personas emplazadas****, sin necesidad de publicación en un medio escrito.*

En este caso, como ya se indicó revisado el registro nacional de emplazados de la Rama Judicial (página web), se observa que el mismo no se realizó para el caso de la demandada INDEGA S.A., y pese a ello, se continuó con el trámite del proceso y se dictó sentencia.

Frente al tema del emplazamiento, el jurista Hernán López Blanco en su libro Instituciones de Derecho Procesal Civil Colombiano expresa:

> *"(...) Es de primordial importancia, tanto para las partes como para el juez asegurarse que las notificaciones hechas por el sistema de emplazamiento reúnan todos los requisitos de forma establecidos, porque si estos no se cumplen se puede generar nulidad en la actuación, pues quien no compareció al proceso resulta vinculado a éste en igual forma que si hubiera estado presente; además la Ley (considerando que el curador por más buena voluntad e idoneidad que tenga no puede llevar a cabo la defensa cuando ignora las pruebas que pueden beneficiar a su representado) es particularmente severa en la sanción de sus irregularidades (art. 140, num.8º), por ejemplo, cando el término de fijación del edicto no se cumplió en su totalidad o no se hicieron todas las publicaciones, o se hicieron fuera del plazo."*

En consecuencia, dado que no existe el registro en el sistema nacional de personas emplazadas de la sociedad INDEGA S.A. único requisito ahora contemplado en el artículo 10 del Decreto 806 de 2020, se configura la causal prevista en el numeral 8 del artículo 133 del C.G.P[1], razón por la cual se decretará la nulidad de lo actuado a partir de la sentencia proferida el 7 de octubre del 2021 inclusive, y se ordenará la devolución del expediente al juzgado de origen, para que se realice dicha actuación en debida forma.

En este punto es preciso igualmente recordar, lo dispuesto por el art. 29 del C.P.L., norma expresa de nuestra especialidad, según la cual no se dictará sentencia mientras no se haya efectuado el emplazamiento, razón que hace viable la nulidad a decretar.

[1] "*8. Cuando no se practica en legal forma la notificación del auto admisorio de la demanda a personas determinadas, o el emplazamiento de las demás personas, aunque sean indeterminadas, que deban ser citadas como partes, o de cualquier de las partes, cuando la ley así lo ordena, o no se cita en debida forma al Ministerio Público o cualquier otra persona o entidad que de acuerdo con la ley debió ser citado."*

En consecuencia, se dejará sin valor y efecto el proveído del 9 de diciembre del 2021 (fl. 325) por el cual esta Corporación admitió la apelación formulada y corrió traslado a las partes para alegar de conclusión.

En mérito de lo expuesto el TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ D.C. - Sala Laboral,

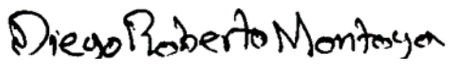
R E S U E L V E

PRIMERO: DEJAR SIN VALOR Y EFECTO el auto calendado 9 de diciembre del 2021 proferido por esta Corporación, de acuerdo a lo motivado.

SEGUNDO: DECLARAR la nulidad de todo lo actuado a partir de la sentencia proferida el 7 de octubre del 2021, inclusive.

TERCERO: DEVOLVER el expediente al juzgado de conocimiento, para lo de su cargo, de conformidad con lo expuesto en la parte motiva de la presente decisión.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE,



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCIA

PROCESO ORDINARIO LABORAL adelantado por FLOREIDA IBAÑEZ GARCIA contra la UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTION PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCION SOAICLA Y ROSALBA VELASQUEZ DE GALLEGO Rad. 110013105-033-2016-00548-02.

Bogotá D.C., Treinta y uno (31) de mayo dos mil veintidós (2022).

AUTO

Dando cumplimiento al deber legal consagrado en el artículo 140 del CGP, según el cual, los magistrados y jueces deben declararse impedidos cuando consideren que en ellos concurra una causal de recusación, manifiesto estar incursa en la causal enlistada en el numeral 2° del artículo 141 del CGP, aplicable por remisión expresa del artículo 145 del CPTSS, el cual establece que es causal de impedimento el «*Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente*».

Lo anterior, habida cuenta que, al entrar al estudio de fondo del proceso ordinario de la referencia, se encuentra que la suscrita profirió la sentencia de primera instancia como titular del Juzgado Segundo Transitorio Laboral del Circuito de Bogotá el 29 de octubre de 2021; por lo dicho, se incurre en la causal antes anotada, al participar en la adopción de la decisión de primer grado dentro del proceso ordinario ibídem.

Por lo expuesto, se

RESUELVE

PRIMERO: DECLARAR el impedimento para conocer del presente proceso ordinario laboral, por estar la suscrita magistrada incursa en la causal del numeral 2°, del artículo 141 del CGP.

CÚMPLASE,



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTA D.C.
SALA LABORAL

MAGISTRADO PONENTE: DR. DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN.

PROCESO ORDINARIO LABORAL PROMOVIDO POR FLOREIDA IBAÑEZ GARCIA CONTRA LA UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y CONTRIBUCIONES PARAFISCALES DE LA PROTECCIÓN SOCIAL – UGPP y como interviniente excluyente ROSALBA VELASQUEZ DE GALLEGO (RAD. 33 2016 00548 02).

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022).

AUTO

En el presente asunto, la Magistrada Dra. ELVIA BIBIANA GUARIN GARCIA, integrante de la Sala de decisión, se declaró impedida para conocer del mismo, por estar incursa en la causal prevista en el numeral 2° del artículo 141 del Código General del Proceso, que establece:

> *Artículo 141. CAUSALES DE RECUSACIÓN. Son causales de recusación las siguientes:*
> *(...)*
> *2. Haber conocido del proceso o realizado cualquier actuación en instancia anterior, el juez, su cónyuge, compañero permanente o algunos de sus parientes indicados en el numeral precedente".*

Conforme lo anterior, teniendo en cuenta, que la Magistrada Dra. Elvia Bibiana Guarín García, como Juez Segundo Laboral Transitorio del Circuito de Bogotá, profirió sentencia de 29 de octubre de 2021 dentro del proceso de la referencia y

que fue objeto de la apelación que motivó la alzada, resulta evidente que se encuentran configurada la causal invocada por la Magistrada (numeral 2 del artículo 141 del C.G.P..), razón suficiente para aceptar el impedimento referido, procediendo en consecuencia los demás integrantes de la Sala de decisión.

En atención al contenido del inciso 4º del artículo 140 del C.G.P., se admite el impedimento.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN
Magistrado

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado

TRIBUNAL SUPERIOR DE DISTRITO JUDICIAL

DE BOGOTÁ D.C.

SALA LABORAL.

MAGISTRADO PONENTE: DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR JHON ALEXANDER VALBUENA PARRA CONTRA COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P. Y EFICIENCIA Y SERVICIOS S.A. (RAD. 38 2019 00715 01).

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022)

El apoderado de la demandada COLOMBIA MOVIL S.A. E.S.P., quien reasume el poder, mediante correo electrónico de 16 de mayo de 2022 manifiesta que DESISTE del recurso de apelación interpuesto contra el auto proferido por el Juzgado 38 Laboral del Circuito de Bogotá, el 4 de marzo de 2022.

Así las cosas, de conformidad con lo preceptuado en el artículo 316 del C.G.P., **SE ACEPTA EL DESISTIMIENTO** del recurso impetrado por tener dicho profesional del derecho la facultad para ello según el poder que milita en el expediente digital *(carpeta 01 DemandaFísica, subcarpeta C001 archivo 11101310503820190071500.pdf página 143).* **COSTAS** a cargo de ese extremo procesal, conforme lo prevé el inciso 3 del aludido precepto.

En firme este proveído, y como quiera que no quedan actuaciones pendientes por surtir por parte de esta Corporación, **POR SECRETARÍA** remítase el proceso al juzgado de origen para los fines legales pertinentes.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE,

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020

AGENCIAS EN DERECHO: Se fija como valor por concepto de agencias en derecho la suma de $500.000, a cargo de la demandada ARL COLMENA SEGUROS S.A., la cual deberá ser incluida en la liquidación de costas, al tenor de lo consagrado en el artículo 366 del C.G.P.

DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

RAD. No. 01-2019-01085-01: PROCESO ORDINARIO LABORAL.
DEMANDANTE: ERKI FERNANDO CASAS HERNÁNDEZ.
DEMANDADA: AUTOMOTORA NACIONAL S.A. -AUTONAL S.A.

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022).

El demandante **ERKI FERNANDO CASAS HERNÁNDEZ**, en nombre propio, presentó solicitud de desistimiento incondicional de la acción ordinaria laboral y de todas y cada una de las pretensiones, petición que fue coadyuvada por el representante legal de la demandada **AUTOMOTORA NACIONAL S.A. -AUTONAL S.A.** y los apoderados de las partes.

En dicha solicitud, se invoca al artículo 314 CGP, de lo cual infiere que la real finalidad es desistir de las pretensiones, norma que señala que, si el desistimiento se presenta ante el Superior por haberse interpuesto el recurso de apelación, se entiende que comprende al recurso. De otra parte, dicho artículo establece que el desistimiento produce efectos de sentencia absolutoria, incluido el de cosa juzgada.

Así las cosas, como quiera que fue el propio **DEMANDANTE** quien desistió de todas las pretensiones, respecto de quien no existe ninguna evidencia de que sufra de discapacidad, la solicitud de desistimiento es procedente conforme el artículo 314 CGP, aplicable al proceso laboral y de la seguridad social por el artículo 145 CPTSS.

Como quiera que el desistimiento lo fue sobre la totalidad de las pretensiones, conlleva a la terminación del proceso, sin que sea procedente efectuar pronunciamiento alguno respecto el recurso de apelación presentado por la demandada **AUTOMOTORA NACIONAL S.A. -AUTONAL S.A.**, por tanto, se ordenará la devolución del expediente al juzgado de origen.

Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto se

RESUELVE

PRIMERO: ACEPTAR el desistimiento de todas las pretensiones, efectuado por el propio demandante **ERKI FERNANDO CASAS HERNÁNDEZ**, conforme la parte motiva de esta providencia.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

TERCERO: ejecutoriada ésta providencia, Secretaría de la Sala proceda a devolver el expediente al Juzgado de origen.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



HUGO ALEXANDER RÍOS GARAY
Magistrado.

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

RAD. No. 15-2019-00766-01: PROCESO ORDINARIO LABORAL.
DEMANDANTE: GUILLERMO ERNESTO MANSILLA ÁLVAREZ.
DEMANDADA: COLPENSIONES Y OTRO

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022).

El Doctor Gustavo Adolfo Poveda Ruíz, en calidad de apoderado del demandante **GUILLERMO ERNESTO MANSILLA ÁLVAREZ**, mediante correo electrónico del 16 de mayo de 2022, presentó derecho de petición indicando que desde el 26 de noviembre de 2021 se envió el expediente al Tribunal para agotar el recurso de reposición, sin que a la fecha se haya admitido la segunda instancia, por lo cual solicitó admitir la segunda instancia en el menor tiempo posible.

Sea lo primero recordar al profesional del derecho que la H. Corte Constitucional, de forma pacífica y reiterada ha señalado que solicitudes relativas a actuaciones judiciales no se resuelven con las reglas del derecho de petición en sede administrativa sino con las disposiciones legales que regulan el proceso judicial, tal y como ha indicado las sentencias C-551 de 2014, T-172 de 2016, t-267 de 2017, T-394 de 2018, T-230 de 2020, SU-333 de 2020, entre otras, por tanto, la autoridad judicial solo está sujeta a la regulación del derecho de petición cuando la solicitud versa sobre requerimientos de contenido administrativo, lo cual no ocurre en el caso bajo estudio.

No obstante, el suscrito magistrado interpreta el "*derecho de petición*" como una solicitud de impulso procesal por parte del apoderado

de la parte **DEMANDANTE** y, como tal, la resuelve en los mismos términos indicados en el auto del 02 de febrero de 2022, proveído en el cual se le indicó que los procesos se resuelven en el orden de llegada al Tribunal, teniendo en cuenta aquellos que tienen un trámite preferente establecido en la ley, tales como habeas corpus, acciones de tutela, fueros sindicales, sumarios, autos ordinarios y ejecutivos, por lo anterior, el demandante deberá estarse al turno correspondiente para lo cual se correrá traslado en el momento que corresponda.

En todo caso, se le informa al apoderado de dicha parte que luego de revisar el proceso en la página de consulta web de la RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO (proceso 1100131050-15-2019-00766-01), se observa que el mismo se asignó por reparto al suscrito magistrado el 14 de enero de 2022 y no el 26 de noviembre de 2021, además, por auto del 20 de mayo de 2022 se admitió el recurso y se corrió traslado a las partes para alegar.

Finalmente, se invita al apoderado de la parte **DEMANDANTE** para que en lo sucesivo indique en sus memoriales el número completo del expediente o al menos el Juzgado de origen, para agilizar el trámite de los mismos, considerando que en Bogotá D.C. hay actualmente 41 juzgados permanentes y 02 juzgados transitorios laborales de circuito, lo cual dificulta la búsqueda de los expedientes cuando no se indican los datos antes señalados.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



HUGO ALEXANDER RÍOS GARAY
Magistrado.

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

RAD. 19-2017-00428-01 y 02: PROCESO ORDINARIO LABORAL.
DEMANDANTE: DEYANIRA RODRÍGUEZ PATIÑO.
DEMANDADA: ÓPTICAS VISIÓN STORE.

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022).

El doctor Justo Darío Ortiz Murcia, identificado con CC 3.172.989 y TP 89.050 del C.S.J., mediante correo electrónico del 02 de mayo de 2022, presentó recurso de reposición contra el auto del 26 de abril de 2022, por el cual reconoció personería en cuanto la parte demandada **ÓPTICAS VISIÓN STORE**.

Al respecto, conforme el artículo 63 CPTSS establece que el recurso de reposición se interpondrá dentro de los dos días siguientes a la notificación del auto interlocutorio. Así las cosas, el auto del 26 de abril de 2022 se notificó mediante estado del 27 de abril de 2022, por tanto, el plazo para interponer oportunamente el recurso venció el 29 de abril de 2022, siendo radicado el mismo hasta el 02 de mayo de 2022, siendo extemporáneo.

Sin perjuicio de lo anterior, advierte el suscrito magistrado que por error involuntario se indicó que la sustitución de poder era de la demandada **ÓPTICAS VISIÓN STORE**, cuando lo correcto era señalar que se trata de la demandante **DEYANIRA RODRÍGUEZ PATIÑO**. En consecuencia, en uso de la facultad consagrada en el artículo 286 CGP, aplicable al proceso laboral y de la seguridad social por el artículo 145 CPTSS, de oficio se ordenará la corrección del precitado auto.

En mérito de lo expuesto se

RESUELVE

NUMERAL ÚNICO: CORREGIR el auto del 26 de abril de 2022, en el sentido de **RECONOCER** al doctor RAFAEL CUENTAS MORENO, identificado con CC 91.518.801 y TP 175.739 del CSJ, como apoderado sustituto de la demandante **DEYANIRA RODRÍGUEZ PATIÑO**, en los términos y con las facultades señaladas en el instrumento que otorgó poder a la apoderada principal, mismas con las cuales queda investido el apoderado sustituto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



HUGO ALEXANDER RÍOS GARAY
Magistrado.

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

RAD. No. 23-2021-00074-01: PROCESO ORDINARIO LABORAL.
DEMANDANTE: JOSÉ VICENTE GARZÓN JIMÉNEZ.
DEMANDADA: COLPENSIONES.

Bogotá D.C., treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022).

La doctora Dannia Vanessa Yusselfy Navarro Rosas, identificada con CC 52.454.425 y TP 121.126 del CSJ, en su calidad de representante legal de la firma NAVARRO ROSAS ABOGADOS S.A.S. identificada con NIT 900.847.037, sociedad integrante de la UNIÓN TEMPORALES ASESORES EN DERECHO – NAVARRO ROSAS ABOGADOS S.A.S., allegó memorial de renuncia al poder general otorgado por la demandada **COLPENSIONES**, acompañando su petición con copia de la comunicación radicada ante la entidad poderdante el 18 de abril de 2022 informando la renuncia a 4582 procesos judiciales, entre los cuales figura el expediente de la referencia (Pág. 107 archivo "*06RenunciaPoderColpensiones*").

Así las cosas, al cumplirse los requisitos señalados en el artículo 76 CGP, aplicable al proceso laboral y de la seguridad social por el artículo 145 CPTSS, se **ACEPTA** la renuncia al poder, la cual se hizo efectiva el 20 de mayo de 2022.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

HUGO ALEXANDER RÍOS GARAY
Magistrado.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

SALA LABORAL

Magistrado Ponente: DR. MANUEL EDUARDO SERRANO BAQUERO

Bogotá D.C., primero (1°) de junio de dos mil veintidós (2022).

El apoderado de la parte demandante**,** dentro del término legal interpuso recurso extraordinario de casación contra el fallo proferido en esta instancia el nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), notificado por edicto de fecha catorce (14) de diciembre de la misma anualidad, dado su resultado adverso.

A efectos de resolver lo pertinente se hacen las siguientes,

CONSIDERACIONES

Es criterio reiterado de la jurisprudencia de la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia, que el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, tratándose del **demandante**, corresponde al monto de las pretensiones que hubiesen sido negadas por la sentencia que se intenta impugnar, y respecto del **demandado**, se traduce en la cuantía de las condenas impuestas.[1]

[1] *AL1514-2016 Radicación n.° 73011, del 16 de marzo de 2016, M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.*

También ha señalado la Corte Suprema en su Sala Laboral que, tratándose de reintegro con aumentos salariales, a la tasación de la cuantía debe agregarse otra cantidad igual. Esto por cuanto se ha considerado que la reinstalación del trabajador a mediano y largo plazo tiene incidencias económicas que no se reflejan y que se originan propiamente en la declaración que apareja la garantía de la no solución de continuidad del contrato de trabajo[2].

De acuerdo con el artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, son susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda los 120 salarios mínimos, que a la fecha del fallo de segunda instancia asciende a la suma de **$109.023.120.**

En el presente asunto, el fallo de primera instancia absolvió de todas las pretensiones de la demanda, decisión que fue confirmada por el Tribunal.

Así las cosas, el interés jurídico para recurrir en casación de la parte demandante se encuentra determinado por el monto de las pretensiones que fueron negadas en las instancias, entre otras, el reintegro del trabajador junto con el pago de salarios y prestaciones dejados de percibir (fl.7), los cuales se liquidaran, para efectos de este recurso, con base en el último salario indicado por el actor ($ 2.913.035.00-fl.10) por 12 pagos al año y hasta la fecha de fallo de alzada, conforme al siguiente cuadro.

EXTREMO FINAL CONTRATO	SALARIO	NO. MESES	SUB TOTAL.
30/11/17	$2.913.035	48.3	**$140.699.591**

[2] *Sentencia del 21 de mayo de 2003, Radicación No. 2010 y Auto del 25 de mayo de 2006 Radicación 29.095.*

Así las cosas, el interés jurídico liquidado supera ampliamente los 120 salarios mínimos establecidos en el artículo 43 de la Ley 712 de 2001. En consecuencia, se concede el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandante.

En mérito de lo expuesto, la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá D.C.

RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER el recurso extraordinario de casación impetrado por la parte demandante.

SEGUNDO: En firme el proveído, continúese con el trámite correspondiente, digitalizando el expediente para surtir el recurso.

Notifíquese y Cúmplase,

MANUEL EDUARDO SERRANO BAQUERO
Magistrado

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado

MARLENY RUEDA OLARTE
Magistrada

ALBERSON

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado Ponente

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR **LILIANA ALEXANDRA TARAZONA RODRIGUEZ** CONTRA **COLOMBO HISPANA Y ARENAS IMPRESORES COHISA LTDA EN LIQUIDACIÓN, NATALIA ARIJON DIEZ, ANA BEATRIZ DIEZ DE ARIJON** Y **JOSE ANTONIO ARIJON DIEZ.**

RADICADO: 11001 3105 006 2015 00332 01

Bogotá D. C., Treinta y uno de mayo (31) de mayo de dos mil veintidós (2022).

PROVIDENCIA

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, procede a resolver el recurso de apelación presentado por la apoderada de la demandada Ana Beatriz Diez de Arijon, contra el auto proferido por el Juzgado

sexto Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el 21 de octubre de 2020.

I. ANTECEDENTES

La señora Liliana Alexandra Tarazona, promovió proceso ordinario laboral, con el fin que se declarara la existencia de un contrato de trabajo con la empresa Colombo Hispana y Arenas Impresores Cohinsa LTDA en Liquidación, entre el 1° de enero de 2008 al 3 de agosto de 2016, que la empresa aludida y los señores Natalia Arijon Diez, Ana Beatriz Diez De Arijon y José Antonio Arijon Diez, eran solidariamente responsables de las obligaciones laborales que se le adeudaban que comprendían: cesantías 2011 y 2012, vacaciones 2010, 2011 y 2012 indemnización por despido indirecto, indemnización moratoria por no consignación de cesantías, indemnización moratoria por no pago de salarios y prestaciones sociales, reliquidación de aportes al SGSS (meses de septiembre a diciembre de 2011 y de enero a julio de 2012).

En sustento de sus pretensiones refirió que debió presentar renuncia irrevocable ante el incumplimiento de las obligaciones laborales de su empleador; que desempeñó como último cargo el de Directora de Gestión de Calidad y recibió como último salario la suma de $2.000.0000; que la empresa demandada se encuentra en proceso de liquidación obligatoria, según auto decretado el 17 de febrero de 2015, expedido por la Superintendencia de Sociedades y que no fue enterada de ninguna manera del inicio del trámite del proceso de

liquidación, ya que se enteró fue en una reunión con compañeros.

La empresa Colombo Hispana y Arenas Impresores Cohisa Ltda. en Liquidación, contestó la demanda indicando que al momento de apertura del proceso de liquidación judicial de Cohinsa, la sociedad se atenía a lo dispuesto en el numeral 5° del artículo 48 de la Ley 1116 de 2006, esto es, que son los acreedores los llamados a presentar la solicitud de reconocimiento de los créditos adeudados por las personas jurídicas y las personas naturales en el proceso de liquidación durante el término de los 20 días contados a partir de la des fijación del aviso auto de apertura del proceso de liquidación judicial, de manera que el ex trabajador y su apoderado eran los encargados de presentar la solicitud de reconocimiento de la obligación laboral para que dicho crédito hubiera formado parte del proyecto de calificación y graduación de créditos, por lo que se debería solicitar el reconocimiento de la obligación de conformidad con el procedimiento establecido en la Ley 1116 de 2006.

De igual forma, preciso que en lo atinente a los valores por derechos ciertos e indiscutibles, la referida ley imponía la carga procesal al acreedor, de probar dicha obligación y en el evento en que no se hubiese presentado al proceso concursal en el proyecto de calificación y graduación de créditos se atendría a lo dispuesto en el artículo 69 de la Ley 1116 de 2006, razón por la que la Superintendencia de Sociedades mediante Auto No. 405_001009 y Acta No. 405-002244 del 12 de noviembre de 2015, reconoció el crédito a favor de la ex trabajadora por valor

de $13.595.980, dentro del que se incluyeron los siguientes conceptos: cesantías 2011 y 2012 ($3.183.333); prima de servicios segundo periodo 2012 ($183.333); intereses a las cesantías 2011 y 2012 ($608.017); vacaciones enero 2010 al 3 de agosto de 2012 ($2.625.000) y salarios dejados de pagar ($200.000).

La Curadora ad litem de los señores Natalia Arijon Diez, José Antonio Arijon Diez y Ana Beatriz Diez de Arijon, contestó la demanda, manifestò que se oponía a las pretensiones, hasta que no se probaran los extremos del contrato que se peticionaba y hasta que se probara lo afirmado y que debía tenerse en cuenta que una de las causales de terminación del contrato de trabajo a la luz del artículo 61 del C.S.T., modificado por el artículo 5 de la Ley 50 de 1990 era la liquidación o clausura definitiva de la empresa.

Posteriormente, mediante memorial radicado el 22 de agosto de 2017 (fl. 129-131)), se informó por la apoderada de la sociedad Colombo Hispana y Arenas Impresores Cohisa Ltda. en liquidación Judicial, que el 30 de marzo de 2017, la Cámara de Comercio de Bogotá, procedió a cancelar el registro mercantil de la demandada en razón a la aprobación de la rendición de cuentas final de la gestión de la liquidadora con corte al 31 de diciembre de 2016, se ordenó el archivo del expediente del proceso y declaró terminado el proceso liquidatorio y adjunto el certificado correspondiente, acto seguido solicitó dar aplicación a la sucesión procesal con los socios propietarios de las cuotas partes de la sociedad.

A su turno, el apoderado de la actora, mediante escrito del 11 de septiembre de 2017, igualmente, solicitó la sucesión procesal con los socios Natalia Arijon Diez, José Antonio Arijón Diez y Ana Beatriz Diez de Arijon.

Mediante Auto del 20 de junio de 2018, el Juzgado Sexto Laboral del Circuito señalo que atendiendo lo dispuesto en las sentencias de la C.S.J, S.C.L., No. 29522 del 22 de julio de 2009 y 40.058 del 10 de septiembre de 2014, se encontraba que la solicitud de sucesión procesal estaba llamada a prosperar, sin embargo, como los sucesores que debían ser llamados, ya se encontraban vinculados y hacían parte del asunto estando representados por curador, no ordenó la misma.

La anterior decisión fue objeto de recurso de reposición por los apoderados de la sociedad demandada (extinta) y de la actora, el cual fue resuelto por el juzgado de conocimiento mediante auto del 13 de diciembre de 2018, trayendo a colación sentencia de radicación No. 7189 del 10 de mayo de 1995, precisando que si bien del mismo se colegía que el trabajador podría demandar a cualquiera de los socios, como estos estaban vinculados al proceso en calidad de demandados en su condición de socios de sociedad extinta y se encontraban debidamente notificados y representado por Curador, concluyó que la sucesión procesal estaba en armonía con la regulación adjetiva del artículo 36 del C.S.T., que había elegido el actor frente a lo previsto en el Código de Comercio, norma que en todo caso debía respetar la figura de la solidaridad, de esta manera procedió a fijar fecha para audiencia.

Finalmente, mediante memorial radicado el 28 de noviembre de 2019, la apoderada judicial de la señora Ana Beatriz Diez de Arijon, invoco la nulidad a partir del auto que admitió la demanda, bajo el fundamento de encontrase frente a la causal prevista en el numeral 1° del artículo 133 del CGP, que hace relación a una falta de competencia dentro del trámite del proceso, pues el juez competente para llevar el proceso era en su momento el juez del concurso dentro de la liquidación de COHINSA LTDA, donde se generaron las obligaciones reclamadas y donde fueron debidamente canceladas, de igual manera, señaló que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 1116 de 2006, ni los jueces civiles ni los laborales eran competentes para conocer de los procesos que se adelantaron posteriormente y dentro del trámite de liquidación, pues como la norma lo señalaba el competente para decidir los procesos en curso dentro de la liquidación judicial, era el juez del concurso en este caso la Superintendencia de Sociedades, en donde la personería por activa correspondía al liquidador y no a los titulares del crédito, ya que los dineros o bienes que pudieran recuperarse de los socios entrarían a la masa concursal y a repartirse por el liquidador conforme a la prelación de créditos.

Igualmente, refirió que el titulo ejecutivo como se extraía de la norma, no eran las sentencias proferidas en los procesos declarativos, ni lo era un contrato de prenda o un pagare puesto que el título ejecutivo lo integraba una copia de los inventarios y avalúos en firme, una certificación de contador, revisor fiscal en donde se acredite la insuficiencia de los

activos, concluyendo que la actora debió haber promovido dicho cobro dentro del trámite de liquidación en la empresa en la oportunidad prevista en la ley y no esperar que se pagaran con la adjudicación de los activos. También trajo a colación la sentencia T-316 de 2009, que establecía que el fuero de atracción era propio del proceso concursal, en razón a que todos los procesos de ejecución que se adelantaran contra el deudor en liquidación obligatoria debían ser remitidos al juez del concurso, quien en virtud del fuero el competente para adelantarlo.

II. DECISIÓN DEL JUZGADO

En providencia del 21 de octubre de 2021, El Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá D.C., indicó que no se configuraba la causal de nulidad invocada en la medida que en el evento de presentarse un proceso liquidatorio, el trabajador debía asegurar su ingreso en la oportunidad prevista en el artículo 48 de la Ley 1116 de 2006, no obstante, de no efectuarse tenía la opción de adelantar un proceso judicial, debiéndose disponer de la constitución de una reserva adecuada para atender el pago de obligaciones condicionales o sujetas a litigios (Art. 245 del CCO), resaltando además que el proceso bajo estudio era un proceso declarativo ordinario de carácter laboral, por lo que al no tratarse de un proceso ejecutivo no se encontraba dentro de lo normado en el numeral 8 del artículo 48 y del numeral 12 del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006 y por tanto debiera allegarse al proceso de liquidación judicial antes de la audiencia de decisión de objeciones. Finalmente indicó que el juez que conducía el proceso estaba

sometido a las reglas del mismo, lo que significaba que las actuaciones administrativas no eran necesariamente las mismas que debía observar el juez cuando le presentarán reclamaciones que habrían de ser resueltos con arreglo a las normas propias de cada juicio.

III. RECURSO DE APELACIÓN

La apoderada de la incidentante presentó recurso de apelación contra la decisión proferida, reiterando que en el presente asunto existía una causal de nulidad correspondiente a la prevista en el numeral 1° del artículo 133 del CGP, esto es, a una falta de competencia dentro del trámite del proceso, pues el juez competente para llevar el proceso era en su momento el juez del concurso dentro de la liquidación de COHINSA LTDA, donde se generaron las obligaciones reclamadas y donde fueron debidamente canceladas. De igual manera, señaló que de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 60 de la Ley 1116 de 2006, ni los jueces civiles o laborales eran competentes para conocer de los procesos que se adelantaron posteriormente y dentro del trámite de liquidación, pues como la norma lo señalaba el competente para decidir los procesos en curso dentro de la liquidación judicial, era el juez del concurso en este caso la superintendencia de sociedades, en donde la personería por activa correspondía al liquidador y no a los titulares del crédito, ya que los dineros o bienes que pudieran recuperarse de los socios entrarían a la masa concursal y a repartirse por el liquidador conforme a la prelación de créditos.

También refirió que las decisiones de la Superintendencia de Sociedades eran providencias judiciales y que en caso que estas decisiones vulneraran derechos a algún acreedor le era permitido acudir a la acción de tutela como se había indicado en la sentencia SU 773/14, de manera que si el acreedor dentro del trámite liquidatorio se abstuvo de solicitar reclamación por derechos distintos de los que le fueron reconocidos y pagados y vio vulnerado algún derecho, debió acudir a la tutela para la reclamación y no a una doble reclamación de derechos que le fueron concedidos a petición del mismo y por mandato de la autoridad competente, de igual forma, resaltó que dentro de los procesos de insolvencia o de liquidación judicial prevalecía el fuero de atracción como garantía de igualdad entre todos los acreedores.

CONSIDERACIONES

En primer lugar, es preciso señalar que el auto que decida sobre nulidades es recurrible, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 6º del artículo 29 de la Ley 712 de 2001, que reformó el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Puntualizado lo anterior, resulta pertinente recordar que el artículo 135 del C.G.P., consagra los requisitos para alegar una nulidad, en los siguientes términos:

> ***"ARTÍCULO 135. REQUISITOS PARA ALEGAR LA NULIDAD.*** *La parte que alegue una nulidad deberá tener legitimación para proponerla, expresar la causal invocada y los hechos en que se fundamenta, y aportar o solicitar las pruebas que pretenda hacer valer.*

No podrá alegar la nulidad quien haya dado lugar al hecho que la origina, ni quien omitió alegarla como excepción previa si tuvo oportunidad para hacerlo, ni quien después de ocurrida la causal haya actuado en el proceso sin proponerla.

La nulidad por indebida representación o por falta de notificación o emplazamiento solo podrá ser alegada por la persona afectada.

El juez rechazará de plano la solicitud de nulidad que se funde en causal distinta de las determinadas en este capítulo o en hechos que pudieron alegarse como excepciones previas, o la que se proponga después de saneada o por quien carezca de legitimación."

Conforme a la norma citada, es claro que quien alegue una nulidad debe tener legitimación para proponerla, indicar expresamente la causal invocada e indicar los hechos en que se sustenta. Sobre el particular, habría que anotar que la solicitante es una de las demandadas en el proceso, vinculada al mismo como socia de la empresa accionada, quien aduce que se presenta la causal establecida en el numeral 1° del artículo 133 del CGP, correspondiente a *"Cuando el juez actúe en el proceso después de declarar la falta de jurisdicción o de competencia.",* toda vez que el juez competente para llevar el proceso era en su momento el juez del concurso dentro del proceso de liquidación que se adelantó.

Así las cosas, lo primero que habría que señalar es que en este caso, no se cumplen los presupuestos de la causal de nulidad que se invoca, toda vez que no obra decisión judicial en la que se hubiese declarado la falta de jurisdicción o de competencia y mucho menos que después de ello el operador judicial hubiese adelantado actuaciones.

Adicionalmente y en gracia de discusión resulta pertinente recordar cómo funciona el fuero de atracción a que alude la incidentante y que debe aplicarse en los procesos liquidatarios, como lo expone la Corte Constitucional, en sentencia C –006 de 2018, en donde se indicó:

> *"(…)*
>
> *El régimen de insolvencia está construido como un proceso armónico que procura salvaguardar a la empresa como unidad de producción y de empleo, y al mismo tiempo, conservar las garantías para el pago de las deudas, tratando a todos los acreedores en condiciones de igualdad y dando prelación al pago de aquellos créditos cuyo cumplimiento afecta derechos fundamentales. El trato paritario entre los acreedores es un principio fundamental que transversaliza toda la normatividad en la materia y que responde a las necesidades y finalidades concretas que rodean este proceso especial. Al respecto, el artículo 1 de la Ley 1116 de 2006 establece:*
>
> *"ARTÍCULO 1o. FINALIDAD DEL RÉGIMEN DE INSOLVENCIA. El régimen judicial de insolvencia regulado en la presente ley, tiene por objeto la protección del crédito y la recuperación y conservación de la empresa como unidad de explotación económica y fuente generadora de empleo, a través de los procesos de reorganización y de liquidación judicial, siempre bajo el criterio de agregación de valor.*
> *El proceso de reorganización pretende a través de un acuerdo, preservar empresas viables y normalizar sus relaciones comerciales y crediticias, mediante su reestructuración operacional, administrativa, de activos o pasivos.*
> *El proceso de liquidación judicial persigue la liquidación pronta y ordenada, buscando el aprovechamiento del patrimonio del deudor.*
> *El régimen de insolvencia, además, propicia y protege la buena fe en las relaciones comerciales y patrimoniales en general y sanciona las conductas que le sean contrarias".*
> *En ese ámbito, la protección de los derechos de los acreedores se aplica a la luz de varios principios. El primero de ellos es la universalidad, un principio general del derecho privado, consagrado en el artículo 2488 del Código Civil, y según el cual "[t]oda obligación personal da al acreedor el derecho de perseguir su ejecución sobre todos los bienes raíces o muebles del deudor, sean presente o futuros, exceptuándose solamente los no embargables designados en el artículo 1677".*
> *En la ley 1116 de 2006, la universalidad se encuentra consagrada como el primero de los principios del régimen de insolvencia, en el artículo 4, numeral 1º que determina: "Universalidad: La totalidad de los bienes del deudor y todos sus acreedores quedan vinculados al proceso de insolvencia a partir de su iniciación."*
> *Este principio, por el cual todas los bienes y débitos hacen parte de una sola bolsa en el proceso de insolvencia, se compatibiliza con el principio de igualdad, (artículo 4, numeral 2) por el cual se debe dar un "Tratamiento equitativo a todos los acreedores que concurran al proceso de insolvencia, sin perjuicio de la aplicación de las reglas sobre prelación de créditos y preferencias".*
> *De tal manera que en el caso de insolvencia son los principios más importantes del proceso, el integrar en el mismo trámite a todos los bienes y responder con ellos a todos los acreedores, en un plano de igualdad –par conditio creditorum- para procurar la mejor solución para la persona insolvente, así como para todos los que concurren al pago de sus deudas.*

La igualdad entre acreedores frente a las diferencias que surgen cuando algunos de ellos estuvieron o están adelantando procesos patrimoniales contra el deudor, solo es posible bajo tres condiciones: la primera es que todos los procesos y acciones contra el deudor sean llevados al proceso de insolvencia; la segunda es que no haya prejudicialidad respecto de dichos procesos y la última, es que el trámite se rija para todos por las normas de insolvencia y no se permitan tratos normativos excepcionales para algunos acreedores.
El primero de estos elementos hace parte del denominado principio del fuero de atracción, cuyo significado ha sido entendido como que "todas las acciones relacionadas con los bienes de naturaleza patrimonial del deudor, iniciados contra el fallido, y posteriormente las que se deduzcan contra la masa de acreedores sean atraídas por el juez que interviene el proceso concursal", puntualmente obliga a la remisión al proceso de insolvencia de los procesos ***ejecutivos iniciados contra el deudor****, sin importar su estado de avance, y sin esperar una decisión. En Colombia, dicho principio está claramente contemplado en la legislación y constituye uno de los pilares del régimen normativo de la insolvencia, que resulta coherente además con los principios de la Carta Política.*
Luego de la entrada en vigencia de la Constitución de 1991 y sus correspondientes principios constitucionales, muchas de las normas vigentes en materia de insolvencia fueron replanteadas. Así sucedió con el régimen de los procesos concursales, que fue modificado por la Ley 222 de 1995, en cuyo artículo 151, inciso 5 se disponía:

"ARTICULO 151. EFECTOS DE LA APERTURA. La apertura del trámite liquidatorio implica: (…) 5. La remisión e incorporación al trámite de la liquidación de todos los procesos de ejecución que se sigan contra el deudor. Con tal fin se oficiará a los jueces que puedan conocer de procesos ejecutivos contra el deudor".
Esta disposición, también hizo parte del Título II del Código de Comercio, y luego fue derogada por el artículo 126 de la Ley 1116 de 2006, a partir del 28 de junio de 2007.
En la nueva ley, el legislador recalcó la importancia de la figura y la enmarcó en una serie de principios que guían el proceso liquidatario concursal. Así, en el artículo 4º la norma enumera entre otros principios del régimen de insolvencia, los de universalidad e igualdad, por los que el legislador plasmó la regla de que todos los bienes y deudas deben integrarse al proceso, y estableció el trato equitativo a los acreedores- par conditio creditorum.

Más adelante, la ley regula concretamente la obligación resultante del fuero de atracción de la siguiente forma.

"Artículo 50. Efectos de la Apertura del proceso de liquidación judicial. La declaración judicial del proceso de liquidación judicial produce: (…)

12. La remisión al Juez del concurso de todos los procesos de ejecución que estén siguiéndose contra el deudor, hasta antes de la audiencia de decisión de objeciones, con el objeto de que sean tenidos en cuenta para la calificación y graduación de créditos y derechos de voto. Con tal fin, el liquidador oficiará a los jueces de conocimiento respectivos. La continuación de los mismos por fuera de la actuación aquí descrita será nula, cuya declaratoria corresponderá al Juez del concurso.
Los procesos de ejecución incorporados al proceso de liquidación judicial estarán sujetos a la suerte de este y deberán incorporarse antes del traslado para objeciones a los créditos.
Cuando se remita un proceso de ejecución en el que no se hubiesen decidido en forma definitiva las excepciones de mérito propuestas estas serán consideradas objeciones y tramitadas como tales".

En el numeral 13 del mismo artículo 50, ahora demandado, la disposición complementa la norma a través de una regla de preponderancia normativa que permite solucionar las posibles contradicciones que surjan del ejercicio del

fuero de atracción, previendo la posible incompatibilidad de las normas específicas de cada proceso con aquel de liquidación. Dice la disposición señalada "13. La preferencia de las normas del proceso de liquidación judicial sobre cualquier otra que le sea contraria."

A su vez, estas disposiciones se ven complementadas con los artículos 25, 70 y 77 de la misma ley, que regulan tres excepciones a la regla: (i) ***la continuación de los procesos declarativos sobre créditos litigiosos en espera de una decisión para incluir la deuda en el orden de pago que corresponda, frente a los cuales el deudor constituirá una provisión contable;*** *(ii) la continuidad de los procesos ejecutivos en donde existen otros demandados, pero solo frente a ellos, y (ii) la continuidad de los procesos ejecutivos alimentarios en curso."*

De conformidad con la jurisprudencia citada y particularmente con las normas analizadas en esta, se tiene que el fuero de atracción se genera tratándose de liquidaciones obligatorias, como lo es la liquidación judicial, figura que impone la remisión al Juez del concurso de todos los procesos de **ejecución** que estén siguiéndose contra el deudor, hasta antes de la audiencia de decisión de objeciones, conforme se precisa en el numeral 12 del artículo 50 de la Ley 1116 de 2006, el cual se complementa con lo dispuesto en el numeral 13 Ibídem, ya que este último permite solucionar las posibles contradicciones que resultaran del ejercicio del fuero de atracción, previendo la posible incompatibilidad de las normas específicas de dicho proceso con el de liquidación, pues tal normativa contempla la preferencia de las normas del proceso de liquidación judicial sobre cualquier otra que le sea contraria.

Teniendo en cuenta lo anterior y dado que el presente proceso corresponde a un ordinario declarativo y no a un proceso ejecutivo, se colige que el proceso bajo análisis no es uno de aquellos frente a los que opere el fuero de atracción,

En consecuencia, se procederá a confirmar la decisión del juez de primer grado atendiendo las razones expuestas en la motiva de esta providencia.

Costas en esta instancia a cargo de la demandada Ana Beatriz Diez de Arijon.

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia proferida por el Juzgado Sexto Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el 21 de octubre de 2021, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva.

CUARTO: COSTAS, en esta instancia a cargo de la demandada Ana Beatriz Diez de Arijon. Se fija como agencias en derecho la suma de $400.000.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Los Magistrados,



LORENZO TORRES RUSSY



MARLENY RUEDA OLARTE



MANUEL EDUARDO SERRANO BAQUERO

AUTO

El magistrado sustanciador fija las agencias en derecho por valor de $400.000, inclúyanse en la liquidación de conformidad con lo establecido en el artículo 366 del C.G.P.



LORENZO TORRES RUSSY

República de Colombia
Tribunal Superior de Bogotá
Sala Laboral

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado Ponente

PROCESO ORDINARIO PROMOVIDO POR **LUBINO BOLAÑOS** CONTRA **PORVENIR S.A., PROTECCIÓN S.A**. y **COLPENSIONES.**

RADICADO: 11001 3105 008 2019 00860 01

Bogotá D. C., Treinta y Uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022).

PROVIDENCIA

La Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, procede a resolver el recurso de apelación presentado por el apoderado de Protección S.A., contra el auto proferido por el Juzgado 1 Transitorio Laboral del Circuito de Bogotá D.C., el 22 de junio de 2021.

En esta instancia se allegaron alegatos por

I. ANTECEDENTES

El señor Lubino Bolaños promovió proceso ordinario laboral contra Porvenir S.A., Protección S.A. y Colpensiones, con el fin que se declarara la ineficacia de la afiliación inicial al RAIS, realizada en 1995 ante la AFP Horizonte hoy Porvenir S.A., y consecuencialmente la afiliación realizada con posterioridad a Protección S.A., así como que para todos los efectos nunca se trasladó al RAIS, por lo que siempre permaneció en el RPM, en consecuencia, se condenara a Colpensiones a aceptar el traslado pensional y a Porvenir S.A. y Protección S.A., a trasladar a Colpensiones todos los aportes con sus rendimientos. Subsidiariamente en el evento en que no saliera avante la ineficacia, solicitó que se condenara a Protección S.A. al reconocimiento y pago de la pensión mínima de vejez, en cumplimiento de la garantía contemplada en el artículo 65 de la Ley 100 de 1993.

Mediante auto del 17 de enero de 2020, notificado por estado el día 20 del mismo mes y año, se admitió la demanda, a continuación, las accionadas contestaron la demanda, evidenciándose que Protección S.A., en su contestación de demanda formuló la excepción previa de “falta de integración del litisconsorcio necesario con La Nación – Ministerio de Hacienda – Oficina de Bonos Pensionales”

II. DECISIÓN DEL JUZGADO

El Juzgado 1 Transitorio Laboral del Circuito de Bogotá, mediante audiencia del 22 de junio de 2021, indicó que atendiendo lo señalado en el artículo 61 del CGP, la vinculación al proceso bajo la modalidad de litisconsorcio necesario no estaba vinculada a la pluralidad de sujetos que persiguieran un fin similar o por el de aquellos que tuvieron algún tipo de relación, sino porque la cuestión a decidir versaba sobre relaciones, situaciones o actos jurídicos que por su naturaleza o mandato legal no era posible resolver de fondo sin su intervención, en cuanto era sujeto de esa relación o en ese acto, de conformidad con ello, la no comparecencia del Ministerio de Hacienda y Crédito Público, no constituía un obstáculo para que se emitiera un pronunciamiento de fondo frente a la ineficacia, por cuanto tal y como lo ha señalado la C.S.J., el fallo no tiene que emitir ninguna orden a la entidad en mención.

III. RECURSO DE REPOSICIÓN Y APELACIÓN

El apoderado de Protección S.A., en los recursos de reposición y de apelación y demás argumentaciones realizadas, indicó que contrario a lo señalado por el despacho la participación de la OBP si tenía injerencia directa en el asunto por cuanto se demostró que el demandante actualmente ostentaba la condición de pensionado bajo la modalidad de garantía de pensión mínima, siendo la OBP quien autorizó y reconoció dicha garantía para que el demandante tuviera la condición de pensionado y toda vez que la pretensión era la ineficacia siendo de conocimiento que en estas sentencias se retrotraen los efectos jurídicos del traslado, lo cierto era que

dicha decisión afecta el reconocimiento del bono pensional y actuación administrativa de la OBP, por lo que su no vinculación generaría un impacto directo al derecho de defensa de dicha autoridad administrativa.

Al resolver el recurso de apelación la juzgadora de primera instancia señaló que habría que negarse el recurso en la medida en que la intervención del Ministerio de Hacienda y Crédito Público -Oficina de Bonos Pensionales, no era necesaria para poder decidir de fondo el asunto en cuestión, especialmente por la razón que daba el propio apoderado, pues en caso que se declarara la ineficacia de la afiliación es retrotraer a su estado inicial, de modo que si ya se recibieron los dineros para financiar pensión lo que se debía hacer era remitir esos dineros a Colpensiones en caso de una ineficacia del traslado, por lo que no habría razón para variar la decisión.

CONSIDERACIONES

En primer lugar, es preciso señalar que el auto que resuelve sobre excepciones previas es recurrible, de acuerdo con lo dispuesto en el numeral 3° del artículo 29 de la Ley 712 de 2001, que reformó el artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social.

Para resolver debe tenerse en cuenta lo dispuesto en el artículo 61 del CGP, que contempla el litisconsorcio necesario en lo pertinente en los siguiente términos: *"Cuando el proceso verse sobre relaciones o actos jurídicos respecto de los cuales, por su naturaleza o por disposición legal, haya de resolverse de*

manera uniforme y no sea posible decidir de mérito sin la comparecencia de las personas que sean sujetos de tales relaciones o que intervinieron en dichos actos, la demanda deberá formularse por todas o dirigirse contra todas; si no se hiciere así, el juez, en el auto que admite la demanda, ordenará notificar y dar traslado de esta a quienes falten para integrar el contradictorio, en la forma y con el término de comparecencia dispuestos para el demandado."

De la norma transcrita se desprende que la vinculación al proceso de una persona bajo la modalidad del litisconsorcio necesario, no está condicionada por la pluralidad de sujetos que que tuvieron algún tipo de relación o vinculación, sino porque la cuestión a decidir, verse sobre relaciones, situaciones o actos jurídicos que por su naturaleza o mandato legal, no sea posible resolver de fondo sin su intervención, en cuanto es sujeto de esa relación o porque intervino en esa situación o acto.

En el presente asunto, tal y como se señaló por la juzgadora de primera instancia, el objeto de la litis es la declaratoria de ineficacia del traslado de régimen, en esa medida y aunque el demandante estuviera pensionado y se hubiesen recibido dineros de la OBP para tal fin, como quiera que es la Administradora Pensional la responsable directa de dicha prestación, se tiene que la controversia puede resolverse sin su intervención, en la medida en que el acto que se ataca es la afiliación a la AFP. Para ahondar en razones, téngase en cuenta, que todo el precedente jurisprudencial sentado por la H Sala de Casación de la Corte Suprema de Justicia, ha

resuelto infinidad de litigios como el presente sin ordenar la integración de litis consorcio necesario y con un precedente hasta hoy frente a los pensionados, en el sentido de negar la ineficacia de la afiliación por tratarse de una situación definida, distinta a la del afiliado.

De acuerdo con lo anterior, se tiene que en este caso no se dan los presupuestos del citado artículo 61 del CGP, para determinar que se configura el litis consorcio necesario y en esa medida no le asiste razón al recurrente para solicitar la integración del contradictorio.

En conclusión, en el caso de autos, la juez del conocimiento puede perfectamente resolver la causa sometida a su escrutinio, en relación con la parte pasiva en el presente juicio, sin que forzosamente deba ordenar la concurrencia al proceso de la entidad que señala la demandada, pues nada impide que el juicio se tramite y se decida con quien se vinculó como parte demandada.

Sin costas en esta instancia.

En mérito de lo expuesto, la Sala Sexta de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C., administrando justicia en nombre de la República y por autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: CONFIRMAR la providencia expedida el 22 de junio de 2021, por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá D.C., de acuerdo con lo expuesto en la parte motiva de este proveído.

SEGUNDO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFIQUESE Y CUMPLASE

Los Magistrados,

LORENZO TORRES RUSSY

MARLENY RUEDA OLARTE

MANUEL EDUARDO SERRANO BAQUERO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Demandante: ANTONIO MANUEL JR COLLAZOS GAMEZ
Demandado: ECOPETROL S.A.
Tema: AUTO RESUELVE CASACION

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintidós (2022)

El apoderado de la **parte demandada** dentro del término de ejecutoria interpuso, recurso extraordinario de casación, contra el fallo proferido en esta instancia el treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), dado el resultado desfavorable.

Para resolver la viabilidad del recurso de casación interpuesto se considera

El Artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establece que: "*sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente*."

Tal cuantía se determina bajo el concepto de "*interés jurídico para recurrir*", que de forma clara la H. Corte Suprema de Justicia lo ha interpretado como el perjuicio que sufre la parte afectada con la sentencia impugnada[1], definiéndose para el demandante, las pretensiones que no hubieran sido acogidas en segunda instancia y para la demandada las condenas impuestas, en ambos casos teniendo en cuenta los recursos de apelación que hubieran sido interpuestos.

En el presente asunto la sentencia de primera instancia absolvió a la demandada de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra; decisión que apelada por la parte demandante y revocada en segunda instancia por esta Corporación.

Ahora bien, para cuantificar el interés jurídico para acudir en casación por parte de la demandada, debemos decir que estas recaen sobre las condenas que le fueron impuestas con la sentencia de segunda instancia, esto es:

Concepto	**Valor**
Salarios dejados de percibir desde el despido	$ 636.498.092,00
Cesantias dejadas de percibir	$ 49.578.316,44
Intereses Cesantias dejadas de percibir	$ 5.949.397,97
Vacaciones dejadas de percibir	$ 24.789.158,22
Primas de servicio	$ 49.578.316,44
Aportes a la SS Salud y Pension	$ 151.184.701,44
Reintegro	$ 917.577.982,52
Total	**$ 1.835.155.965,05**

[1] Al respecto de tiempo atrás la Corte Suprema de Justicia ha manifestado y reiterado: "*el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, que tratándose del demandado como el caso en estudio, se traduce en la cuantía de las resoluciones que económicamente lo perjudiquen y, respecto del demandante, el monto de las pretensiones que Radicación n.° 73011 4 hubiesen sido negadas por la sentencia que se intenta impugnar, teniendo en cuenta la conformidad o inconformidad del interesado respecto del fallo de primer grado"* Auto AL1514-2016 del 16 de marzo de 2016, Sala de Casación Laboral. M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.

Por lo anterior, una vez realizadas las operaciones aritméticas correspondientes, se observa que la condena impuesta asciende a la suma de **$ 1.835.155.965,05** valor que supera los 120 salarios mínimos exigidos para recurrir en casación.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala de Decisión Laboral,

RESUELVE

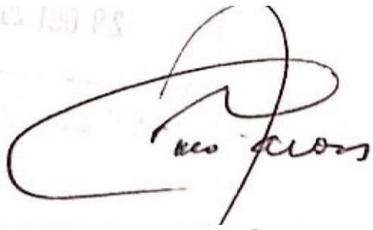
PRIMERO: CONCEDER el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandada.

SEGUNDO: En firme el presente proveído, prosígase con el trámite correspondiente.

Notifíquese y Cúmplase,



DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ
Magistrada



LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR
Magistrado



EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS
Magistrado

LPJR

H. MAGISTRADA DRA. **DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ**

Me permito pasar a su despacho el expediente No. **11001310500620180068401,** informándole que el apoderado de la parte demandada **ECOPETROL S.A.** dentro del término de ejecutoria interpuso recurso extraordinario de casación contra la sentencia proferida por esta Corporación el treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).

Lo anterior para lo pertinente.

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintidós (2022)

LINA PAOLA JIMÉNEZ ROMERO
Oficial Mayor

LPJR

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA LABORAL

Proceso:	ORDINARIO LABORAL
Demandante:	MILTON CASTAÑEDA DUARTE
Demandado:	COOPERATIVA MULTIACTIVA PARA LOS PROFESIONALES DEL SECTOR SALUD
Tema:	AUTO QUE RESUELVE REPOSICION

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintidós (2022)

El apoderado de la parte demandada interpuso en término, recurso de reposición contra el auto proferido por esta Corporación el treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), mediante el cual le negó por extemporáneo el recurso de casación interpuesto por dicha parte, por cuanto considera que al momento de verificar el edicto y la publicación de la sentencia, esta no se encontraba en la Pagina de la Rama Judicial.

El impugnante, considera que el recurso extraordinario de casación fue interpuesto en termino, pues dado que no le fue posible acceder a la sentencia por intermedio de la página de la rama judicial, el ocho (8) de abril de dos mil veintiuno (2021) envió un correo electrónico al email de la secretaria de esta Corporación, solicitando copia del edicto y la sentencia respectiva.

Manifiesta que a dicho correo le dieron contestación el treinta (30) de abril de dos mil veintiuno (2021) mismo día en el que interpuso el recurso extraordinario de casación, a su juicio dentro del término de ejecutoria de la sentencia.

Acto seguido la Sala procede a decidir previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

De acuerdo con lo manifestado por el recurrente, su inconformidad radica básicamente, en que la Sala al momento de resolver el recurso extraordinario de casación presentado por la parte demandada, tuvo en cuenta la fecha de la publicación del edicto y la sentencia de segunda instancia para efectos de verificar los términos de la misma, pero que al momento de verificar dicha información por parte del usuario, esta no se encontraba publicada en el micrositio web de la Rama Judicial.

Por lo anterior radico un correo electrónico y solicito dicha información la cual fue suministrada el treinta (30) de abril de dos mil veintiuno (2021) mismo día en el que interpuso recurso extraordinario de casación a su modo dentro del término de ejecutoria

Al respecto, encuentra la Sala que en la decisión se mantienen los fundamentos facticos y jurídicos que condujeron a la corporación a negar el recurso extraordinario de Casación interpuesto por la parte demandada, consignados en la parte motiva del proveído cuya reposición se solicita, pues verificado nuevamente el micrositio web de la rama judicial, se observa que el edicto y la sentencia efectivamente se encuentran publicados el día y la fecha previamente indicados, razón por la cual no es posible acceder al pedimento presentado por la parte demandada

Ahora, respecto a la solicitud de que se realicen pruebas de oficio como *"La trazabilidad y establecimiento de la fecha y hora de cargue y publicación del edicto del 8 de abril de 2021 dentro del proceso 11001310503620160022401, en la página de la rama judicial"* [1]esto no se encuentra llamado a prosperar, pues la información fue verificada en su momento por el funcionario que realizó la publicación en el micrositio, tanto así que si no hubiera estado publicado, habría tenido que dejar una constancia secretarial y volverlo a publicar nuevamente, lo cual no ocurrió en el caso en concreto, razón por la cual se rechaza de plano la solicitud realizada por la parte demandada.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala de Decisión Laboral,

RESUELVE

PRIMERO: NO REPONER el auto del treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), por las razones anteriormente expuestas.

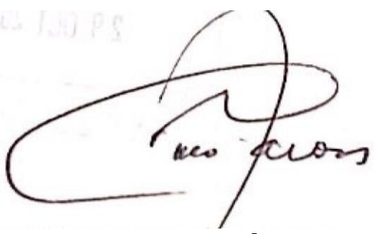
SEGUNDO: **NEGAR** la solicitud de oficio presentada por la parte demandada por las razones anteriormente expuestas.

TERCERO: Por Secretaría de la Sala, remítanse las actuaciones pertinentes de manera digital, con las constancias y formalidades de Ley, para que se surta lo pertinente ante el Superior.

Notifíquese y Cúmplase,



DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ
Magistrada



LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR
Magistrado



EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS
Magistrado

[1] Folio 446 reverso

LPJR

H. MAGISTRADA DRA. **DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ**

Me permito pasar a su despacho el expediente **No. 11001310503620160022401,** informándole que el apoderado de la **parte demandada** dentro del término de ejecutoria interpuso recurso de reposición en contra del auto que negó el recurso extraordinario de casación interpuesto por la misma parte respecto del auto dictado por esta Corporación el treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).

Lo anterior para lo pertinente.

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintidós (2022)

LINA PAOLA JIMÉNEZ ROMERO
Oficial Mayor

LPJR

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA LABORAL

Proceso: ORDINARIO LABORAL
Demandante: JUVENAL FLOREZ NIÑO
Demandado: COMKASOL S.A.
Tema: AUTO RESUELVE CASACION

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintidós (2022)

El apoderado de la **parte demandada** interpuso dentro del término de ejecutoria, recurso extraordinario de casación, contra la sentencia proferida en esta instancia el nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), dado el resultado desfavorable.

Para resolver la viabilidad del recurso de casación interpuesto se considera

El Artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establece que: "*sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente*."

Tal cuantía se determina bajo el concepto de "*interés jurídico para recurrir*", que de forma clara la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia lo ha interpretado como el perjuicio que sufre la parte afectada con la sentencia impugnada[1], definiéndose para el demandante, las pretensiones que no hubieran sido acogidas en segunda instancia y para la demandada las condenas impuestas, en ambos casos, atendiendo los recursos de apelación que hubieran sido interpuestos.

En el presente asunto, la sentencia de primera instancia declaró la existencia de un contrato de trabajo a término indefinido entre las partes desde el 1 de abril de 2016 hasta el 5 de julio de 2018 y como consecuencia de ello condenó a la demandada al pago de trabajo suplementario dominicales y festivos, cesantías, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones, sanción por no consignación de cesantías, indemnización moratoria del articulo 65 del CST, intereses moratorios y el pago de los aportes al sistema de seguridad social en pensiones de conformidad con la tabla anexa a la sentencia; decisión que fue apelada por la parte demandada y confirmada en segunda instancia por esta Corporación.

Ahora bien, para cuantificar el interés jurídico para acudir en casación por parte de la demandada, debemos decir que estas recaen sobre las condenas que le fueron impuestas con las resultas del proceso.

Por lo anterior, luego de haber realizado las operaciones aritméticas correspondientes se observa lo siguiente:

[1] Al respecto de tiempo atrás la Corte Suprema de Justicia ha manifestado y reiterado: "*el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, que tratándose del demandado como el caso en estudio, se traduce en la cuantía de las resoluciones que económicamente lo perjudiquen y, respecto del demandante, el monto de las pretensiones que Radicación n.° 73011 4 hubiesen sido negadas por la sentencia que se intenta impugnar, teniendo en cuenta la conformidad o inconformidad del interesado respecto del fallo de primer grado"* Auto AL1514-2016 del 16 de marzo de 2016, Sala de Casación Laboral. M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.

Condenas Impuestas	**Valor**
Trabajo Suplementario dominicales y festivos	$ 4.810.959,00
Cesantías	$ 2.318.177,00
Intereses a las Cesantías	$ 278.181,00
Diferencia Prima de Servicios	$ 914.044,00
Vacaciones	$ 1.253.707,00
Sanción por no consignación de cesantías	$ 15.917.988,00
Indemnización Moratoria Art 65 CST desde el 6 de julio de 2018 hasta el 5 de julio de 2020	$ 26.614.311,00
Aportes al SS en pensiones	$ 985.029,00
Intereses Moratorios	$ 10.480.347,00
Total Condenas Impuestas	**$ 63.572.743,00**

Teniendo en cuenta el cálculo anterior lo que deberá pagar la demandada por tales conceptos asciende a la suma de **$ 36.579.341,00** suma que no supera los 120 salarios mínimos exigidos para recurrir en casación.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala de Decisión Laboral,

RESUELVE

PRIMERO: NEGAR el recurso de casación impetrado por la parte demandada.

SEGUNDO: En firme el presente proveído, prosígase con el trámite correspondiente.

Notifíquese y Cúmplase,

DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ
Magistrada

LUIS ALFREDO BARÓN CORREDOR
Magistrado

EDUARDO CARVAJALINO CONTRERAS
Magistrado

LPJR

H. MAGISTRADA DRA. **DIANA MARCELA CAMACHO FERNÁNDEZ**

Me permito pasar a su despacho el expediente No. **11001310503920190036001,** informándole que el apoderado de la parte demandada interpuso recurso extraordinario de casación contra la sentencia proferida por esta Corporación el nueve (9) de diciembre de dos mil veintiuno (2021).

Lo anterior para lo pertinente.

Bogotá, D. C., diecisiete (17) de mayo de dos mil veintidós (2022)

LINA PAOLA JIMENEZ ROMERO
Oficial Mayor

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCIA

Proceso Ordinario Laboral No. 110 013105- **001-2017-00126-**02

Demandante:	**LUZ YENNY RUÍZ ALARCÓN**
Demandada:	**COLFONDOS PENSIONES Y CESANTÍAS S.A. Y MAPFRE COLOMBIA VIDA SEGUROS S.A.**

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

AUTO

Se advierte que regresó del Juzgado de origen el expediente con el proceso del asunto, sin embargo, se evidencia que no se dio cumplimiento al auto anterior proferido por este Despacho el 11 de febrero de 2021 (Fl. 356), el que remitió nuevamente en medio magnético (CD Fl.357) contentivo de la audiencia celebrada el 06 de diciembre de 2021, pero de forma incompleta, pues tal como se precisó en la providencia en cita: «*presenta inconsistencias en el respectivo medio magnético aportado en CD a folio 347, denominado «11001310500120170012600-20211206_110309-Grabación de la reunión.mp4», pues al efecto, el mismo se reproduce hasta el minuto 31:15, situación que por obvias razones, impide adelantar en forma completa el estudio del presente proceso*» y, ciertamente, la diligencia únicamente contiene 31:15 minutos de grabación mientras se profería la sentencia de primera instancia.

Por lo anterior, se **ORDENA NUEVAMENTE** su devolución inmediata al Juzgado de origen, **para que incorpore y/o reconstruya el contenido de la audiencia completamente diligenciada** y lo remita nuevamente de la manera más pronta a esta Corporación con la finalidad de estudiar la admisión y resolución de las apelaciones formuladas, respecto de la sentencia de primer grado, según quedó consignado en el acta visible a folios 351 a 353.

Adicionalmente, **se requiere a la Secretaría de esta Sala** para que una vez retorne el expediente del Juzgado, antes de recibirlo y/o hacerle el respectivo tránsito al Despacho, verifique que en él conste efectivamente lo aquí solicitado.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Proceso Ordinario Laboral No. 110 013105- **009-2019-00331**-01

Demandante:	**LUCILA SÁNCHEZ DE DURÁN**
Demandada:	**ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, AFP COLFONDOS S.A. Y AFP PORVENIR S.A.**

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITEN** los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de Colpensiones y Porvenir S.A. contra la sentencia emitida el 02 de marzo de 2022. Asimismo se admite el Grado Jurisdiccional de CONSULTA en favor de Colpensiones (art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una*, iniciando con las demandadas y apelantes, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de la accionadas, empieza a correr el traslado para la demandante. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105- **016-2018-00054-**01

Demandante:	**DERLY YULIETH BELTRÁN BUITRAGO**
Demandada:	**SANDRA YOLIMA GÓMEZ RIVERA**

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPT y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITE** el Grado Jurisdiccional de CONSULTA en favor de la parte actora respecto de la sentencia proferida el 11 de febrero de 2022 (art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una,* término que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos el antedicho traslado, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada
Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105-**036-2020-00210-**01

Demandante:	**CAROLINA SÁENZ MEJÍA**
Demandada:	**ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.**

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPT y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITE** el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la demandada, contra la sentencia emitida el 28 de abril de 2022. Así mismo se admite el Grado Jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES (art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral primero (1°) del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una*, iniciando con la demandada y apelante, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de la accionada, empieza a correr el traslado para la actora. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105- **014-2019-00173-**01

Demandante:	**JOSÉ MISAEL MONTEALEGRE MESA**
Demandada:	**ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.**

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITE** el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia del 03 de mayo de 2022.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una*, iniciando con el demandante y apelante, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de la actora, empieza a correr el traslado para la accionada. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105-**037-2021-00021-**01

Demandante: **JOSÉ ALCIBIADES LEÓN CAMARGO**

Demandada: **MECÁNICOS ASOCIADOS S.A.S.**

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITE** el recurso de apelación interpuesto por el demandante contra la sentencia del 03 de mayo de 2022.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una*, iniciando con el demandante y apelante, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor del actor, empieza a correr el traslado para la accionada. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105- **027-2019-00050**-01

Demandante:	**JOSÉ DEL CARMEN CAPERA**
Demandada:	**ALPINA PRODUCTOS S.A. y la vinculada UNIÓN SINDICAL DE TRABAJADORES DE EMPRESA ALPINA PRODUCTOS ALIMENTICIOS**

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITE** el recurso de apelación interpuesto por el demandante, contra la sentencia del 29 de abril de 2022.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una*, iniciando con la demandante y apelante, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor del actor, empieza a correr el traslado para la accionada. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105- **020-2021-00267**-01

Demandante:	**SANDRA MILENA RUEDA LEGUIZAMÓN**
Demandada:	**CAPITAL SALUD EPSS S.A.S Y OPCIÓN TEMPORAL Y CIA S.A.S.**

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITEN** los recursos de apelación formulados por los apoderados de las partes contra la sentencia del 20 de abril de 2022.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días*, el cual corre de manera conjunta, a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105- **014-2019-00792-**01

Demandante:	**VÍCTOR MANUEL NEIRA RODRÍGUEZ**
Demandada:	**ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES Y AFP PORVENIR S.A.**

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITEN** los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de las demandadas contra la sentencia emitida el 25 de abril de 2022. Asimismo se admite el Grado Jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES (art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una*, iniciando con las demandadas y apelantes, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de la accionadas, empieza a correr el traslado para el demandante. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105-**035-2021-00386**-01

Demandante:	**MARTHA CECILIA CALDERÓN**
Demandada:	**ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.**

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPT y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITE** el recurso de apelación interpuesto por la apoderada de la parte accionada contra la sentencia emitida el 05 de abril de 2022. Así mismo se admite el Grado Jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES (art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral primero (1°) del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una*, iniciando con la demandada y apelante, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de la accionada, empieza a correr el traslado para la actora. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105-**023-2022-00022-**01

Demandante:	**EDWIN FABIÁN RODRÍGUEZ CASTIBLANCO**
Demandada:	**ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE LA SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD - ADRES**

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITE** el recurso de apelación interpuesto el apoderado del demandante, contra el auto del 21 de abril de 2022.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 2° del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días*, el cual corre de manera conjunta a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtido el antedicho traslado, se proferirá la decisión escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105-**038-2019-00797-**01

Demandante:	**ANA MARÍA GONZÁLEZ VILLEGAS**
Demandada:	**ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, AFP PROTECCIÓN S.A. Y AFP PORVENIR S.A.**

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITE** el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la demandante, contra la sentencia del 29 de abril de 2022.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral primero (1°) del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una*, iniciando con el demandante y apelante, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor del accionante, empieza a correr el traslado para las demandadas. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtido el antedicho traslado, se proferirá la decisión escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105-**038-2019-00188-**01

Demandante:	**CONSUELO SÁNCHEZ CABEZAS**
Demandada:	**LA NACIÓN - MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES.**

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITE** el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la demandada, contra el auto del 26 de abril de 2022.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 2° del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días*, el cual corre de manera conjunta a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtido el antedicho traslado, se proferirá la decisión escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105- **022-2017-00346-**02

Demandante:	**GABRIEL USECHE MORENO**
Demandada:	**DELTEC S.A., CODENSA S.A. Y AXA COLPATRIA S.A.**

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITEN** los recursos de apelación formulados por los apoderados del demandante y la demandada DELTEC S.A., contra la sentencia del 16 de septiembre de 2021.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días*, el cual corre de manera conjunta, a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105-**038-2021-00093-**01

Demandante:	**LUIS GERMÁN ROTTA DUARTE**
Demandada:	**ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITE** el recurso de apelación interpuesto la apoderada del demandante, contra el auto del 02 de mayo de 2022.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 2° del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días*, el cual corre de manera conjunta a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtido el antedicho traslado, se proferirá la decisión escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105- **029-2021-00269**-01

Demandante:	**FIDEL ALFONSO PARRADO JIMÉNEZ**
Demandada:	**ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES Y AFP PORVENIR S.A.**

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITEN** los recursos de apelación presentados por los apoderados judiciales de las demandadas, contra la sentencia del 28 de marzo de 2022. Asimismo se admite el Grado Jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES (art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral primero (1°) del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una*, iniciando con la demandada y apelante, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de la accionada, empieza a correr el traslado para el actor. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Proceso Ordinario Laboral No. **110013105- 001-2020-00053 01**

Demandante:	**SANDRA NAVARRO LUNA**
Demandada:	**ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, AFP PROTECCIÓN S.A. Y AFP PORVENIR S.A.**

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPT y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITEN** los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de las demandadas contra la sentencia emitida el 22 de mayo de 2022. Así mismo se admite el Grado Jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES (art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una,* iniciando con las demandadas y apelantes, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de la accionadas, empieza a correr el traslado para la demandante. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105- **015-2019-00419-**02

Demandante:	**ALIRIO TALERO MENDOZA**
Demandada:	**ALMACENES MÁXIMO S.A.S.**

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPT y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITE** el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del demandante, contra la sentencia del 18 de abril de 2022.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una*, iniciando con el demandante y apelante, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor del actor, empieza a correr el traslado para la accionada. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105-**005-2019-00004-**02

Demandante:	**CLAUDIA PATRICIA SAER SAKER**
Demandada:	**ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, AFP COLFONDOS S.A., AFP PROTECCIÓN S.A Y AFP PORVENIR S.A.**

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITE** el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la demandada Colpensiones, contra el auto del 05 de marzo de 2021.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 2° del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días*, el cual corre de manera conjunta a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtido el antedicho traslado, se proferirá la decisión escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105- **029-2021-00343-**01

Demandante:	**ANGÉLICA QUIÑONEZ VILLA**
Demandada:	**ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.**

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITE** el recurso de apelación formulado por la apoderada de la demandada contra la sentencia del 18 de abril de 2022. Asimismo se admite el Grado Jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES (art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una,* iniciando con la demandada y apelante, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de la accionada, empieza a correr el traslado para la demandante. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105- **008-2019-00630**-01

Demandante:	**CARLOS ARNULFO LIZARAZO ÁVILA**
Demandada:	**ALMACENES ÉXITO S.A.**

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPT y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITE** el recurso de apelación interpuesto por el apoderado del demandante, contra la sentencia del 07 de abril de 2022.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una*, iniciando con el demandante y apelante, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor del actor, empieza a correr el traslado para la accionada. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105-**001-2016-00776-**01

Demandante:	**ERNESTO RODRÍGUEZ BALLÉN**
Demandada:	**ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES y SOCIEDAD CONSTRUCTORA RODRÍGUEZ NUEVA ERA S.A.**

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITE** el recurso de apelación interpuesto por la Curadora Ad lítem de Constructora Rodríguez Nueva Era S.A., contra el auto del 17 de febrero de 2022.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 2° del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días*, el cual corre de manera conjunta a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtido el antedicho traslado, se proferirá la decisión escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105- **038-2020-00380**-01

Demandante:	**LILIANA ESTUPIÑAN ORJUELA**
Demandada:	**COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO – SERVICOPAVA EN LIQUIDACIÓN**

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPT y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITE** el recurso de apelación interpuesto por la apoderada del demandante, contra la sentencia del 09 de mayo de 2022.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral primero (1°) del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una*, iniciando con el demandante y apelante, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor del accionante, empieza a correr el traslado para la demandada. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105- **020-2021-00280**-01

Demandante:	**MARTHA ALCIRA ROA FERNÁNDEZ**
Demandada:	**ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES.**

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITE** el recurso de apelación interpuesto por la demandante contra la sentencia del 19 de abril de 2022.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una*, iniciando con la demandante y apelante, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de la actora, empieza a correr el traslado para la accionada. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CUMPLASE

ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105-**027-2020-00178-**01

Demandante:	**MANUEL OCTAVIO TORRES MUÑOZ**
Demandada:	**ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES-COLPENSIONES Y AFP PORVENIR S.A.**

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITE** el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la demandada Colpensiones, contra la sentencia del 17 de mayo de 2022. Asimismo, se admite el Grado Jurisdiccional de CONSULTA en favor de la COLPENSIONES (art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral primero (1°) del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una*, iniciando con la demandada y apelante, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de la accionada, empieza a correr el traslado para el actor. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105- **020-2020-00399**-01

Demandante:	**JOSÉ SALOMÉ BLANCO ROMERO**
Demandada:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y COTRIBUCIONES PARAFISCALES - UGPP**

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPT y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITE** el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada contra la sentencia del 03 de marzo de 2022. Asimismo, se admite el Grado Jurisdiccional de CONSULTA en favor de la UGPP (art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una*, iniciando con la demandada y apelante, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de la accionada, empieza a correr el traslado para el actor. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105- **020-2020-00381**-01

Demandante:	**CRISTOBAL BARÓN GARCÍA**
Demandada:	**UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE GESTIÓN PENSIONAL Y COTRIBUCIONES PARAFISCALES UGPP**

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPT y S.S., modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITE** el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la parte demandada contra la sentencia del 03 de marzo de 2022. Asimismo, se admite el Grado Jurisdiccional de CONSULTA en favor de la UGPP (art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una*, iniciando con la demandada y apelante, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de la accionada, empieza a correr el traslado para el actor. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Proceso Ordinario Laboral No. 110 013105- **021-2021-00405**-01

Demandante:	**MARTHA LUCÍA GALLO RUIZ**
Demandada:	**ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES Y AFP PROTECCIÓN S.A.**

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITEN** los recursos de apelación interpuestos por los apoderados de las accionadas contra la sentencia emitida el 16 de mayo de 2022. Asimismo se admite el Grado Jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES (art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una*, iniciando con las demandadas y apelantes, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de las accionadas, empieza a correr el traslado para la demandante. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105- **029-2020-00213-**01

Demandante:	**DOMINGO HERNÁNDEZ (QEPD), sucesora procesal NANCY MARCELA HERNÁNDEZ BALLEN**
Demandada:	**AFP PORVENIR S.A.**

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITEN** los recursos de apelación formulados por los apoderados de las partes contra la sentencia del 11 de mayo de 2022.

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral 1° del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días*, el cual corre de manera conjunta, a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
SALA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105- **014-2019-00505-**01

Demandante:	**LUZ AMPARO DUARTE GARZÓN**
Demandada:	**ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES COLPENSIONES y COLFONDOS S.A.**

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

AUTO

De conformidad con lo previsto en el artículo 82 del CPTSS, modificado por el artículo 13 de la Ley 1149 de 2007, se **ADMITE** el recurso de apelación interpuesto por el apoderado de la accionada COLPENSIONES, contra la sentencia del 03 de mayo de 2022. Asimismo, se admite el Grado Jurisdiccional de CONSULTA en favor de COLPENSIONES (art. 69 CPTSS).

De igual modo, atendiendo lo previsto en el numeral primero (1°) del artículo 15 del Decreto Legislativo 806 del 04 de junio de 2020, se ordena **CORRER TRASLADO** *a las partes para alegar por escrito por el término de cinco (5) días cada una*, iniciando con la demandada y apelante, el que empieza a correr a partir del día siguiente a la ejecutoria de esta providencia. Una vez vencido el plazo a favor de la accionada, empieza a correr el traslado para la actora. El correo electrónico dispuesto para tal fin, es el siguiente: secsltribsupbta@cendoj.ramajudicial.gov.co.

Se advierte a las partes que, una vez surtidos los antedichos traslados, se proferirá la sentencia escrita que corresponda dentro del presente asunto.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTA D.C. – SALA CUARTA DE DECISIÓN LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCIA

Treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Proceso Ordinario Laboral No. 1100131050 08 2015 00482 02

Demandante:	**SOLEDAD MURILLO LOZANO**
Demandada:	**ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES, AFP PORVENIR S.A Y MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**

En la fecha, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto, la Sala Cuarta de Decisión Laboral previa la deliberación correspondiente al proyecto sometido a su consideración por la Magistrada Sustanciadora, dicta la siguiente

PROVIDENCIA

En los términos y para los fines previstos en el artículo 15 del Decreto 806 del 04 de junio de 2020, en concordancia con el Acuerdo PCSJA20-11632 del 30 de septiembre del mismo año, procede la Sala de Decisión a resolver el recurso de apelación interpuesto por el apoderado judicial de la parte actora contra la decisión proferida por el Juzgado 8 Laboral del Circuito de Bogotá el día 3 de febrero de 2022, mediante el cual se aprobó la liquidación de costas.

I. ANTECEDENTES

El Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, en fecha seis (06) de diciembre de dos mil dieciocho (2018), profirió sentencia, en la cual resolvió:

> PRIMERO: Declarar imprósperas las pretensiones incoadas por la demandante SOLEDAD MURILLO LOZANO en contra de las demandadas conforme a lo considerado.

> SEGUNDO: Absolver a las demandadas AFP PORVENIR S.A., a la ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES — COLPENSIONES y al MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO de todas y cada una de las pretensiones solicitadas en su contra por al demandante.
>
> TERCERO: Remitir el presente asunto al Tribunal Superior de Bogotá Distrito Judicial en el caso de no impugnarse la misma para que se surta el grado jurisdiccional de CONSULTA.
>
> CUARTO: Sin condena en costas.

Posteriormente, esta Sala de Decisión, mediante sentencia del doce (12) de mayo de dos mil diecinueve (2019), confirmó el anterior fallo en los siguientes términos:

> PRIMERO: CONFIRMAR la sentencia proferida por el Juzgado 8º Laboral del Circuito de Bogotá el día 06 de diciembre de 2018, pero por las precisas consideraciones expuestas en precedencia.
>
> SEGUNDO: Sin costas en esta instancia por considerar que no se causaron.

El apoderado de la parte demandante interpuso recurso extraordinario de casación, el cual, una vez concedido y conocido por la Sala de Descongestión de la Sala de Casación Laboral, profirió la sentencia CSJ SL4900-2021 de fecha veintiséis (26) de octubre de dos mil veintiuno (2021), donde resolvió:

> […] **NO CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, el 12 de marzo de 2019, en el proceso ordinario laboral que instauró **SOLEDAD MURILLO LOZANO** contra la **ADMINISTRADORA COLOMBIANA DE PENSIONES – COLPENSIONES**, la sociedad **ADMINISTRADORA DE FONDOS DE PENSIONES PORVENIR S. A.** y la **NACIÓN - MINISTERIO DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO**, ésta última, en calidad de litisconsorte necesario.
>
> Costas como se indicó en precedencia.

Frente a las costas, se precisó en las consideraciones:

> Las costas en el recurso extraordinario estarán a cargo de la demandante. Se fija por concepto de agencias en derecho la suma de $4.400.000, la que se incluirá en la liquidación que se practique conforme a lo dispuesto en el artículo 366 del CGP.

AUTO APELADO

Mediante auto del tres (03) de febrero de dos mil veintidós (2022), el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, obedeció y cumplió lo resuelto por esta superioridad, así como lo dispuesto por la Alta Corporación, y aprobó la liquidación de costas practicada por Secretaría en la suma de cuatro millones cuatrocientos mil pesos -$4.400.000 (fl. 303 del cuaderno principal).

II. RECURSO DE APELACIÓN

El apoderado judicial de la demandante, Soledad Murillo Lozano, interpuso recurso de apelación contra el auto anterior, para lo cual consideró, que el monto de las costas y agencias en derecho no son proporcionales a las condiciones fijadas en el proceso y lo acontecido en el mismo, en atención a que lo pedido fue el traslado de régimen y consecuente pensión por parte de Colpensiones, lo cual generara no sólo el respectivo retroactivo, sino también su derecho a la denominada mesada 14.

Afirmó que, la improsperidad del recurso de casación no se debió a una actitud pretenciosa o similar de la demandante, sino a una posibilidad de que la prestación pensional de vejez fuese reconocida con aplicación del régimen de transición, bajo criterios propios constitucionales que discrepó la Corte. Así entonces, consideró que la decisión no solo debió regirse por el elemento objetivo de imposición de agencias del Acuerdo No. PSAA 16-10554 del 5 de agosto de 2016 del Consejo Superior de la Judicatura, sino a la situación ya referida que, bajo ese mismo acuerdo, permite o no imponer la condena, o a lo sumo, en un monto no superior a un SMMLV (Fls. 304 y 305, ib.).

SEGUNDA INSTANCIA

Surtido el término de traslado previsto por el numeral 2° del artículo 15 del Decreto 806 de 2020, en concordancia con el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, la parte demandante presentó alegaciones solicitando se revoque la decisión de primer grado en similares términos a los indicados en la apelación. Por su parte COLPENSIONES presentó alegatos, pero por razones distintas al objeto del recurso. Porvenir S.A. guardó silencio.

PROBLEMA JURÍDICO

Reunidos los presupuestos procesales y no encontrando causal de nulidad que invalide lo actuado, corresponde a ésta Colegiatura determinar si procede la modificación de la liquidación de costas fijadas por la Juez de primer grado.

VII. CONSIDERACIONES

De conformidad con lo dispuesto por el numeral 11 del artículo 65 del CPT y de la SS, el proveído impugnado es susceptible del recurso de apelación.

Con la finalidad de resolver el problema jurídico, es preciso indicar que, para la fijación de las costas procesales, se debe tener en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión adelantada por la parte actora, así como la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, sin que éstas puedan exceder las tarifas fijadas por el Consejo Superior de la Judicatura, conforme lo dispone el artículo 366 del C.G.P.

Ahora bien, según la norma que regula la fijación de las agencias en derecho, esta debe realizarse de conformidad con lo dispuesto por el Acuerdo 1887 del 26 de junio de 2003, ello en atención a que la presente litis se radicó el día 19 de junio de 2015 (Fl. 55 ib.), y el Acuerdo PSAA16-10554 de 2016 sólo regula la fijación de las agencias en derecho de los procesos radicados a partir de su vigencia, que lo fue el 5 de agosto de 2016, razón por la que, como el presente proceso fue radicado con anterioridad a su vigencia, la norma aplicable resulta ser el Acuerdo 1887 de 2003 proferido por el Consejo Superior de la Judicatura.

Así las cosas, se tiene que el artículo 3 del acuerdo en cita, establece que los funcionarios judiciales «*para aplicar gradualmente las tarifas establecidas hasta los máximos previstos en este Acuerdo, tendrá en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión ejecutada por el apoderado o la parte que litigó personalmente, autorizada por la ley, la cuantía de la pretensión y las demás circunstancias relevantes, de modo que sean equitativas y razonables. Las tarifas por porcentaje se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones*».

Conforme a lo anterior, es claro que el primer criterio a evaluar para establecer el monto de las costas del proceso son el rango de las tarifas mínimas y máximas establecidas en el acuerdo en mención, para ello nos debemos dar aplicación al parágrafo del numeral 2.1.1 del artículo 6 del Acuerdo 1887 de 2003, proferido por el Consejo Superior de la Judicatura, reguló la fijación de las agencias en derecho para los procesos declarativos en general, en primera instancia así:

> Primera instancia.
>
> Hasta el veinticinco por ciento (25%) del valor de las pretensiones reconocidas en la sentencia. Si ésta, además, reconoce obligaciones de hacer, se incrementará hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes por este concepto.
>
> En los casos en que únicamente se ordene o niegue el cumplimiento de obligaciones de hacer, hasta cuatro (4) salarios mínimos mensuales legales vigentes…
>
> **PARÁGRAFO.** Si la sentencia reconoce prestaciones periódicas, hasta veinte (20) salarios mínimos mensuales legales vigentes.

Ahora bien, para definir si el valor determinado en la decisión apelada luce correcto con el trámite del proceso y las vicisitudes que le fueron propias, de modo que sean equitativas y razonables, advierte la Sala que la demanda fue radicada el 19 de julio de 2015, fecha a partir de la cual y agotadas las etapas procesales pertinentes, se dictó sentencia de primera instancia el 06 de diciembre de 2018, la que resultó absolutoria, pues se declararon imprósperas las pretensiones incoadas por la accionante y no se impuso condena en costas. (Fl. 280, ib.).

La anterior decisión fue apelada por la parte demandante y resuelta la instancia por ésta Corporación el 12 de marzo de 2019, en donde se confirmó la decisión de primer grado, absolviendo a las demandadas de las condenas solicitadas y sin condena alguna por concepto de costas y agencias en derecho (Fl. 292, ib.).

La parte actora interpuso recurso extraordinario de casación, el cual fue concedido por reunir los requisitos establecidos en el art. 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, modificado por el art. 43 de la Ley 712 de 2001 (Fls. 297 y 298), allí, la Alta Corporación, como se vio, decidió no casar la sentencia emitida por este Tribunal y fijó como agencias

en derecho la suma de cuatro millones cuatrocientos mil pesos ($4.400.000) a cargo de la demandante (Fl. 28 Cuaderno Corte Suprema de Justicia).

Del recuento procesal expuesto, debe advertirse que para la fijación de las agencias en derecho debe tenerse en cuenta la naturaleza, calidad y duración útil de la gestión adelantada por la parte actora, así como la cuantía del proceso y otras circunstancias especiales, por lo tanto, atendiendo dichas circunstancias, de modo que sean equitativas y razonables que se aplicarán inversamente al valor de las pretensiones, se tiene que el presente proceso estuvo dirigido a obtener la declaratoria de nulidad de afiliación al régimen de ahorro individual con solidaridad, con sus consecuenciales condenas, en el que si bien tuvo una duración de seis (6) años, (10) meses y doce (12) días, éste siguió los cauces normales de un litigio de esta naturaleza, es por lo que a juicio de la Sala da lugar a confirmar el valor impuesto, pues la suma fijada correspondió a cuatro millones cuatrocientos mil pesos ($4'400.000), atiende al real acontecer procesal y jurídico y las condenas impuestas, suma que en todo caso precisó la Sala de Casación Laboral atendiendo lo predispuesto en artículo 366 del CPTSS.

Así las cosas, considera esta Corporación que la decisión adoptada por la Juez de primera instancia se ajusta a los derroteros del parágrafo del numeral 2.1.1 del artículo 6 del Acuerdo 1887 de 2003, y de los artículos 365 y 366 del CGP, aplicables por remisión expresa del artículo 145 del CPTSS.

Aunado a lo anterior, la naturaleza de la interposición de costas y agencias en derecho, consiste precisamente en retribuir a la parte vencedora los gastos en que ha tenido que incurrir en el pago de los servicios profesionales para la representación en el proceso, los cuales valga decir, pueden presentarse de manera distinta de acuerdo al sujeto procesal, como quiera que los esfuerzos y las gestiones de cada uno de estos resultan disímiles, razón por la cual no podría imponerse o establecerse el mismo valor que se predique de uno al otro.

Así las cosas, considera esta Sala de Decisión que la decisión adoptada por la Juez de primera instancia no es excesiva, ni discriminatoria o arbitraria,

por el contrario, el proveído mediante el cual se fijan y aprueban la liquidación de costas y agencias en derecho se ajusta a lo normado en los artículos 365 y 366 del CGP, en armonía con lo establecido en el el numeral 2.1.1 del artículo 6 del Acuerdo 1887 de 2003, por lo que se confirmará la decisión de primera instancia. Sin costas en esta instancia ante su no causación.

VIII. DECISIÓN

Con fundamento en las anteriores consideraciones la Sala de Decisión Laboral del **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**,

RESUELVE

PRIMERO: CONFIRMAR el auto de fecha tres (03) de febrero de dos mil veintidós (2022), proferido por el Juzgado Octavo Laboral del Circuito de Bogotá, por las razones expuestas en la parte motiva de la providencia.

SEGUNDO: En firme la presente decisión, se ordena la devolución del expediente al juzgado de origen para los fines pertinentes.

TERCERO: SIN COSTAS en esta instancia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ELVIA BIBIANA GARÍN GARCIA
Magistrada



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA LABORAL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022).

El apoderado de la **parte demandada** dentro del término de ejecutoria interpuso recurso extraordinario de casación, contra el fallo proferido en esta instancia el treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), dado su resultado desfavorable.

Para resolver la viabilidad del recurso de casación interpuesto se considera:

El Artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establece que: "*sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente*."

Tal cuantía se determina bajo el concepto de "*interés jurídico para recurrir*", que de forma clara la H. Corte Suprema de Justicia lo ha interpretado como el perjuicio que sufre la parte afectada con la sentencia impugnada[1], definiéndose para el demandante, las pretensiones que no hubieran sido acogidas en segunda instancia y para la demandada las condenas impuestas, en ambos casos teniendo en cuenta los recursos de apelación que hubieran sido interpuestos.

En el presente asunto la sentencia de primera instancia declaró que la bonificación por cumplimiento de metas era factor constitutivo de salario y como consecuencia de ello condenó a la demandada al pago de comisiones adeudadas, reliquidación de cesantías, intereses a las cesantías, primas de servicio, vacaciones, aportes al sistema de seguridad social sobre las diferencias causadas y la indemnización moratoria del articulo 65 del CST y los intereses moratorios a partir del mes 25 teniendo en cuenta la tasa máxima vigente para los créditos de libre asignación certificados por la Superintendencia Financiera.

Por otra parte, declaró parcialmente probada la excepción de prescripción respecto de las acreencias causadas con anterioridad al 5 de septiembre de 2016; decisión que fue apelada por la parte demandada y confirmada en segunda instancia por esta Corporación.

[1] Al respecto de tiempo atrás la Corte Suprema de Justicia ha manifestado y reiterado: "*la cuantía del interés para recurrir está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada que, tratándose del demandado, se traduce en la cuantía de las resoluciones que económicamente lo perjudiquen y, respecto del demandante, que es el caso en estudio, en el monto de las pretensiones que hubiesen sido denegadas por la sentencia que se intenta impugnar, en ambos casos, teniendo en cuenta la conformidad o inconformidad del interesado respecto del fallo de primer grado*" Auto AL1445-2022 del 30 de marzo de 2022, Sala de Casación Laboral. M.P. LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ.

Condenas Impuestas	**Valor**
Reliquidación Cesantías	$ 1.586.118,00
Reliquidación Intereses Cesantías	$ 319.463,00
Reliquidación Prima de Servicios	$ 1.586.118,00
Reliquidación Vacaciones	$ 793.059,00
Indemnización Moratoria	$ 361.262.880,00
Total Condenas	**$ 365.547.638,00**

Por lo anterior, una vez realizadas las operaciones aritméticas correspondientes, se observa que la condena impuesta asciende a la suma **$ 365.547.638,00** valor que supera los 120 salarios mínimos exigidos para recurrir en casación, los aportes al sistema de seguridad social no se liquidan en razón a que no se hace necesario.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala de Decisión Laboral,

RESUELVE

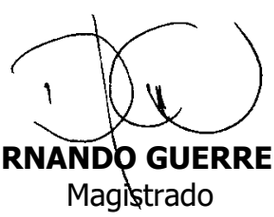
PRIMERO: CONCEDER el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandada.

SEGUNDO: En firme el presente proveído, prosígase con el trámite correspondiente.

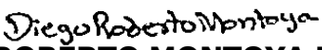
Notifíquese y Cúmplase,



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCIA
Magistrada



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN
Magistrado

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

LPJR

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA LABORAL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022).

La apoderada de la **parte demandada ADMNISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL EN SALUD ADRES**, interpuso recurso extraordinario de casación, dentro del término de ejecutoria, contra el fallo proferido en esta instancia el veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiuno (2021), dado el resultado desfavorable.

Para resolver la viabilidad del recurso de casación interpuesto se considera

El Artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establece que: "*sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente*."

Tal cuantía se determina bajo el concepto de "*interés jurídico para recurrir*", que de forma clara la H. Corte Suprema de Justicia lo ha interpretado como el perjuicio que sufre la parte afectada con la sentencia impugnada[1], definiéndose para el demandante, las pretensiones que no hubieran sido acogidas en segunda instancia y para la demandada las condenas impuestas, en ambos casos teniendo en cuenta los recursos de apelación que hubieran sido interpuestos.

En el presente asunto la sentencia de primera instancia condenó a la demandada Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social al reconocimiento y pago de $242.536.927 debidamente indexados, por los servicios médicos asistenciales prestados, que no estaban incluidos dentro del Plan Obligatorio de Salud POS a favor de la demandante junto con las costas del proceso, y absolvió de las demás pretensiones incoadas en su contra; decisión que fue apelada por las partes, modificada y revocada parcialmente en segunda instancia por esta Corporación.

En consecuencia, el interés jurídico para acudir en casación por parte de la demandada ADMNISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL EN SALUD ADRES recae sobre las condenas que le fueron impuestas con las resultas del proceso, es decir el pago de **$232.404.036** por concepto de 429 ítems por servicios prestados a los pacientes de la demandante, tal como se explico en la sentencia de segunda instancia

[1] Al respecto de tiempo atrás la Corte Suprema de Justicia ha manifestado y reiterado: "*la cuantía del interés para recurrir está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada que, tratándose del demandado, se traduce en la cuantía de las resoluciones que económicamente lo perjudiquen y, respecto del demandante, que es el caso en estudio, en el monto de las pretensiones que hubiesen sido denegadas por la sentencia que se intenta impugnar, en ambos casos, teniendo en cuenta la conformidad o inconformidad del interesado respecto del fallo de primer grado*" Auto AL1445-2022 del 30 de marzo de 2022, Sala de Casación Laboral. M.P. LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ.

proferida por esta Corporación, suma que supera los 120 salarios mínimos exigidos para recurrir en casación.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala de Decisión Laboral,

RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER el recurso de casación impetrado por la parte demandada **ADMNISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL EN SALUD ADRES.**

SEGUNDO: En firme el presente proveído, prosígase con el trámite correspondiente.

Notifíquese y Cúmplase,



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCIA
Magistrada



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN
Magistrado

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

LPJR

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA LABORAL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022).

La apoderada de la parte demandada interpuso en término, recurso de reposición y apelación [1] contra el auto proferido por esta Corporación el siete (7) de marzo de dos mil veintidós (2022), mediante el cual se negó el recurso de casación interpuesto por la misma parte, por cuanto las condenas impuestas con las resultas de proceso no superaban el mínimo establecido para acceder en casación.

Estima que la condena impuesta como la indemnización moratoria supera ampliamente los 120 salarios mínimos establecidos por la H. Corte Suprema de Justicia para que se le conceda el recurso interpuesto, además que dada la situación económica de dicha institución tales condenas solo podrán ser canceladas hasta el año 2026.

Acto seguido la Sala procede a decidir previas las siguientes,

CONSIDERACIONES

De acuerdo con lo manifestado por la recurrente, su inconformidad radica básicamente, en que la Sala al momento de liquidar las condenas impuestas, no liquidó la indemnización moratoria hasta el año 2026, año en el cual la demandada estima puede dar cumplimiento a la sentencia.

Al respecto encuentra la Sala que en la decisión se mantienen los fundamentos facticos y jurídicos que condujeron a la corporación a negar el recurso extraordinario de Casación interpuesto por la parte demandada consignados en la parte motiva del proveído cuya reposición se solicita, pues correspondía a la sala liquidar las condenas que le fueron impuestas a la demandada, tales como: los salarios adeudados, el auxilio de cesantía, intereses a las cesantías, prima de servicios, vacaciones, cotizaciones a la AFP Porvenir S.A., indemnización moratoria del articulo 65 del CST tal como fue ordenado en la sentencia de primera instancia por los primeros 24 meses y los intereses moratorios a partir del mes 25 hasta la fecha del fallo de segunda instancia, pues no puede la Sala calcular intereses e incidencias futuras dado que no tiene competencia para ello.

Ahora, en lo que solicita la parte demandada, que se liquide la indemnización moratoria hasta el año 2026 no es posible acceder a dicha solicitud, pues la sentencia no condenó a eso, razón por la cual no es procedente acceder a dicho pedimento.

En efecto con arreglo del artículo 86 del CPTSS, serán susceptibles del recurso de casación, los procesos cuya cuantía excusan de 120 veces el salario mínimo legal mensual vigente, limite que alcanza a superar las prensiones solicitadas por la parte demandante, como se estableció en la providencia recurrida.

Al respecto, la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia ha reiterado que para que proceda el recurso de casación se deben reunir los siguientes requisitos: 1) Que el recurso haya sido interpuesto dentro del término legal; b) que

[1] Fl 21

se trate de una sentencia proferida en un proceso ordinario en segunda instancia, y, c) que se acredite el interés jurídico económico para recurrir[2].

De lo expuesto se sigue, que no resulta viable acceder al pedimento de reponer la decisión inicialmente acogida, en consecuencia, no se repone el auto de fecha siete (7) de marzo de dos mil veintidós (2022).

Por otra parte, respecto al recurso de apelación interpuesto respecto del auto por medio del cual se resolvió el recurso extraordinario de casación, no es procedente acceder a dicho pedimento, pues sobre este proveído solo era procedente el recurso de reposición y en subsidio el de queja, razón por la cual se niega por improcedente.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala de Decisión Laboral,

RESUELVE

PRIMERO: NO REPONER el auto del siete (7) de marzo de dos mil veintidós (2022), por las razones anteriormente expuestas.

SEGUNDO: **NEGAR** el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante por improcedente.

TERCERO: Por Secretaría de la Sala continúese con el trámite correspondiente.

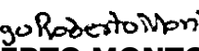
Notifíquese y Cúmplase,



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCIA
Magistrada



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN
Magistrado

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

LPJR

[2] Auto AL 1340-2014. Radicación No. 60674

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTA D.C. SALA LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Proceso Ordinario Laboral No. 110013105 029 2019 00552 01

Demandante:	**JOHN FREDY ROMERO CAICEDO**
Demandada:	**EMPRESA DE TELECOMUNICACIONES DE BOGOTA – ETB S.A E.S.P.**

En Bogotá D.C en la fecha, con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto, la Sala Cuarta de Decisión Laboral previa la deliberación correspondiente al proyecto sometido a su consideración por la Magistrada Sustanciadora, dicta la siguiente

PROVIDENCIA

En los términos y para los fines previstos en el artículo 15 del Decreto 806 del 04 de junio de 2020, en concordancia con el Acuerdo PCSJA20-11632 del 30 de septiembre de 2020, procede la Sala decisión a resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte demandante en contra de la decisión adoptada por el Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá, proferida el dos (02) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), mediante la cual se negó el decreto de una prueba.

I. ANTECEDENTES

John Fredy Romero Caicedo llamó a Juicio a la Empresa de Telecomunicaciones de Bogota – ETB S.A E.S.P., con la finalidad de que se declarara principalmente: la existencia de un contrato trabajo a término indefinido con la demandada, desde el 26 de noviembre de 1997 hasta el 27 de junio de dos mil dieciocho 2018; que se dio por terminado el contrato en forma unilateral y sin justa causa y que el despido fue ineficaz y no produjo efectos, todo ello, por no haberse dado cumplimiento al procedimiento establecido en la Sentencia T-764/2005 previo al despido unilateral e injusto y dada su condición de afiliado a SINTRATELEFONOS.

Como consecuencia de lo anterior, se condenara al Reintegro al mismo cargo o a uno igual o superior al que venía desempeñando, con el pago de los salarios dejados de percibir y las prestaciones sociales de orden legal y extra legal dejados de percibir, a las cotizaciones al sistema integral de seguridad social integral en salud, pensión y riesgos profesionales. De igual modo, se condene al pago de las costas procesales y agendas en derecho que se causen en el juicio.

Subsidiariamente, solicitó se ordenara el pago por concepto de indemnización de perjuicios materiales y morales ocasionados por la terminación ilegal e injusta de su contrato de trabajo, indemnización adicional a la establecida en la Convención Colectiva de Trabajo; a la reliquidación de salarios, prestaciones sociales legales y extralegales causadas a la finalización del contrato de trabajo; la indexación de las condenas, costas y agencias en derecho.

Como fundamento de sus pretensiones, índico que, ingreso a laborar al servicio de la ETB S.A E.S.P., mediante contrato de

trabajo a término indefinido a partir del 26 de Noviembre de 1997, siendo su último cargo desempeñado, el de «*Empalmador*», lo cual realizó en forma personal y bajo la continuada subordinación y dependencia de la entidad accionada; que el último sueldo básico devengado fue $2.500.000.

Señaló, que el 27 de junio de 2018, la ETB S.A E.S.P. dio por terminado el contrato laboral de forma unilateral y sin justa causa; que al momento de la terminación del contrato John Fredy Romero Caicedo se encontraba afiliado al Sindicato SINTRATELEFONOS; que en el 2016 inicia el proceso de privatización de la ETB S.A E.S.P. por parte de la Alcaldia Mayor de Bogotá y el sindicado manifiesta su oposición a dicho proceso; que para el día veintisiete (27) de junio del año dos mil dieciocho (2018) la ETB S.A E.S.P. se dispuso al despido de cuarenta y dos (42) trabajadores sindicalizados entre los que se encontraba John Fredy Romero Caicedo, junto con el pago de una indemnización.

Que la ETB S.A E.S.P. contaba con más de 1000 empleados, procedió al despido colectivo de trabajadores sin la respectiva autorización del Ministerio de Trabajo y sin el cumplimiento del requisito establecido en la sentencia T-764/2055, de informar al sindicato el propósito; que este despido se efectuó en un periodo menor a 6 meses y con fundamento en la Ley 50 de 1990 no podía proceder al despido de trabajadores equivalente al 5% sin la autorización del Ministerio de Trabajo; que además del incumplimiento Constitucional, los despidos se efectuaron como consecuencia del rechazo del sindicato y sus miembros a la privatización de la ETB S.A E.S.P.; además dispuso la militarización de los centros de trabajo donde realizaría la notificación masiva de despidos.

Agregó, que en la actualidad subsisten las causas que dieron origen a su vinculación con la ETB S.A E.S.P., la cual, no ha sido objeto de procesos de reestructuración, ni fusión y, con su desvinculación, se causó un agravio injustificado, irrogándole perjuicios de orden material y moral, pues desde la fecha del despido no percibe ingresos en la proporción devengada al interior de ETB S.A E.S.P. que le permitan procurarse una subsistencia digna. Que tuvo que acudir a tratamientos médicos derivados del decaimiento en su salud.

Además de lo anterior, expuso que no cuenta con los requisitos para obtener su derecho pensional, por lo cual, la decisión de ETB E.S.P. interrumpió abruptamente su posibilidad de obtener su reconocimiento pensional; sumado al hecho que él con su núcleo familiar, derivaban su sustento del ingreso salarial mensual devengado, núcleo familiar que ahora ha resultado afectado con la decisión intempestiva y abrupta de terminación del contrato de trabajo y sus hijos dependen económicamente de él.

Finalmente, señaló que a la finalización del vínculo laboral no se le han cancelado los salarios y prestaciones sociales conforme lo establecido en la Convención Colectiva de Trabajo suscrita entre SINTRATELEFONOS y ETB S.A E.S.P.; que las prestaciones sociales de carácter extralegal no fueron liquidadas conforme al salario devengado (Exp. Digital: «001ExpedienteaFolio162». Págs. 46 a 61, 64 a 83 y 126).

CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

Al dar respuesta a la demanda, la Empresa de Telecomunicaciones de Bogotá S.A. E.S.P, se opuso a las pretensiones y, en cuanto a los hechos, aceptó los referentes a la existencia contrato de trabajo con el actor, el cargo desempeñado, sus extremos, la forma en que se terminó el vínculo contractual, el agotamiento de la reclamación administrativa, que la empresa no ha sido objeto de reestructuración, los demás supuestos los consideró como no ciertos o que no le constaban.

En su defensa, explicó que el despido del demandante no obedece a una conducta retardativa por parte de la ETB S.A E.S.P. y que esta simplemente ejerció un derecho legítimo otorgado por el Código Sustantivo del Trabajo, de dar por terminado el contrato de trabajo de uno de sus colaboradores, en virtud de lo cual canceló debidamente la totalidad de la liquidación que le correspondía al trabajador; lo cual se hizo conforme lo establece la Convención Colectiva de Trabajo, precisando que en todo caso, corresponde al trabajador demostrar qué aspectos no fueron incluidos o tenidos en cuenta.

Señaló, que no existió despido colectivo alguno, pues en el periodo cobijado entre el 27 de diciembre de 2017 y el 27 de junio de 2018, inclusive se terminaron sin justa causa 55 contratos de trabajo lo cual representa menos del 2% de los contratos vigentes, con corte al 27 de diciembre de 2017, teniendo en cuenta que para fecha estaban contratados 2713 trabajadores. que en virtud de lo anterior a John Fredy Romero Caicedo se le cancelo la totalidad de la liquidación que le correspondía; que conforme al artículo sesenta y cuatro (64) de la ley 50 de 1990 dentro del periodo cobijado desde el veintiséis (26) de noviembre de 1997 hasta el veintisiete (27) de junio de dos mil dieciocho

(2018) se terminaron incluso cincuenta y cinco (55) contrato de trabajo lo cual representa el dos por ciento (2%) de los contratos vigentes por lo tanto no se puede considerar como un despido colectivo y además que para la fecha la entidad contaba con dos mil setecientos trece (2713) trabajadores.

Propuso como excepciones de mérito las de «*Inexistencia* de la obligación», «*Compensación*» «*Actuación de buena fe por parte de la demandada*», «*Prescripción*» y «*Genérica*» (Págs. 169 a 180, ib.).

DEL AUTO APELADO

El Juzgado 29 Laboral del Circuito de Bogotá, en el transcurso de la audiencia de que trata el artículo 77 del CPTSS celebrada el dos (02) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), decidió no decretar el dictamen pericial solicitado en el acápite de pruebas de la demanda.

Como fundamento, de lo anterior, consideró en síntesis que, si se llega a probar dentro del proceso que efectivamente se le causaron perjuicios materiales y morales, el Juzgado para la sentencia efectuara el cálculo correspondiente; de modo que no veía la necesidad de que se aporte, porque en el evento que se pruebe que se causaron la cuantificación de dichos perjuicios, la realiza el juzgado (Exp. Digital: «004ActaAudienciaArt77del20211202» y «003VideoAudiencia11001310502920190055200s2021082959212_02_2021 02_33 PM UTC»).

II. RECURSO DE APELACIÓN

La apoderada judicial de la parte demandante, apeló la anterior decisión, al considerar que dentro del proceso, las pretensiones

indemnizatorias están orientadas a la posibilidad de cuantificación de un perjuicio de orden moral y material; que desde la demanda se predijo su causación al demandante con la desvinculación unilateral e injusta; que dentro del cuerpo de la demanda se establecen los aspectos facticos sobre los cuales se basa la pretensión indemnizatoria, pues es un trabajador que estuvo vinculado desde el año 1997 y adicionalmente fue despedido en el año 2004 y por lo cual, hubo un reintegro mediante la sentencia T-764 de 2005, que estableció que no podía haber despido si no había notificación o información a la organización sindical, de la cual el trabajador fue parte; y luego fue nuevamente despedido, violando los considerandos y la parte resolutiva de la sentencia.

Asimismo, explicó que el demandante ha debido luchar contra despidos injustificados, situación que lo ha puesto en un contexto aminorado, que ha mermado no solo su capacidad física, sino moral; hoy se ve enfrentado a una desvinculación y un desempleo.

SEGUNDA INSTANCIA

Surtido el término de traslado previsto por el numeral 1° del artículo 15 del Decreto 806 de 2020, en concordancia con el artículo 82 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, las partes guardaron silencio.

PROBLEMA JURÍDICO

Reunidos los presupuestos procesales y no encontrando causal de nulidad que invalide lo actuado, corresponde a ésta Colegiatura determinar si hay lugar a decretar el dictamen pericial solicitado por la parte actora.

III. CONSIDERACIONES

El auto apelado es susceptible del recurso de apelación, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 4º del artículo 65 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, por cuanto con el mismo se negó el decreto de una prueba.

Ahora bien, respecto de la negativa de la práctica y el decreto del dictamen pericial, de entrada, considera la Sala de Decisión que el mismo no es procedente en el presente asunto, ello en atención a que el artículo 226 del CGP permite la práctica de la prueba en mención para verificar hechos que interesen al proceso y requieran especiales conocimientos científicos, técnicos o artísticos, es decir, que la misma solo es viable cuando se requieran condiciones especiales para determinar un hecho de la Litis, empero, al momento de calcular los eventuales perjuicios materiales y morales adicionales a los establecidos en el artículo 64 del CST, dicha cuantificación no requiere de los citados conocimientos especializados, por cuanto el A quo cuenta con la capacidad para su determinación conforme a las pruebas aportadas al proceso.

Aunado a lo anterior, se debe recordar a la parte actora que previo a la cuantificación de los perjuicios materiales y morales, los mismos deben ser demostrados al Juez a través de los diferentes medios de prueba establecidos en la legislación que permitan demostrar la ocurrencia de los mismos y su relación directa con la terminación del contrato de trabajo, situación que permite inferir que el dictamen pericial no es el medio conducente para demostrar la ocurrencia de los mismos en el presente asunto.

De igual manera, se debe recordar lo dicho por la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia en sentencia CSJ SL1911-2019, donde asentó:

> Para ello, es pertinente referir lo expuesto por esta Corte en sentencia CSJ SL 32720, 15 oct. 2008, que se reiteró en el fallo CSJ SL4665-2018, en cuanto a que la tasación del *pretium doloris* o precio del dolor, queda a discreción del juzgador, teniendo en cuenta el principio de dignidad humana consagrado en los artículos 1.º y 5.º de la Constitución Política, ya que según lo ha sostenido esta Corporación, «*para ello deberán evaluarse las consecuencias sicológicas y personales, así como las posibles angustias o trastornos emocionales que las personas sufran como consecuencia del daño*».

En este orden de ideas, considera la Sala que la decisión del Juez de primer grado, se encuentra acertada, pues se fundamenta en el estricto cumplimiento de las normas procesales, sin que se corra el riesgo de, verbigracia, sacrificar el derecho sustancial, tal como lo establece el artículo 228 de la Constitución Nacional, por acudirse a un excesivo rigorismo formal que pueda atentar contra el derecho sustancial pretendido.

Asimismo, se debe precisar que la decisión aquí adoptada no se opone a la facultad que le asiste al juez para decretar pruebas de oficio en el momento que lo considere necesario, a fin de esclarecer los hechos objeto de litigio, tal y como lo establece el artículo 54 del CPT y de la SS.

En tales circunstancias, habrá de confirmarse el auto objeto de estudio. Sin costas en esta instancia, por considerar que no se causaron.

IV. DECISIÓN

Con fundamento en las anteriores consideraciones la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá,

RESUELVE

PRIMERO: **CONFIRMAR** el proveído del dos (02) de diciembre de dos mil veintiuno (2021), proferido por el Juzgado Veintinueve Laboral del Circuito de Bogotá, por las razones expuestas en la motiva de la providencia.

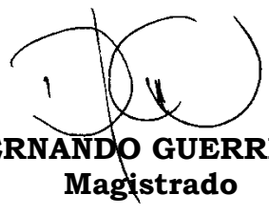
SEGUNDO: Sin costas en esta instancia ante su no causación.

TERCERO: Surtido el trámite en esta instancia en oportunidad devuélvase el expediente al Juzgado de origen.

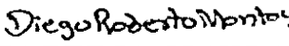
NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLÁN
Magistrado

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA LABORAL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022).

El apoderado de la **parte demandante** interpuso dentro del término de ejecutoria, recurso extraordinario de casación, contra el fallo proferido en esta instancia el veintinueve (29) de octubre de dos mil veintiuno (2021), dado el resultado desfavorable.

Para resolver la viabilidad del recurso de casación interpuesto se considera

El Artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establece que: "*sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente*."

Tal cuantía se determina bajo el concepto de "*interés jurídico para recurrir*", que de forma clara la H. Corte Suprema de Justicia lo ha interpretado como el perjuicio que sufre la parte afectada con la sentencia impugnada[1], definiéndose para el demandante, las pretensiones que no hubieran sido acogidas en segunda instancia y para la demandada las condenas impuestas, en ambos casos teniendo en cuenta los recursos de apelación que hubieran sido interpuestos.

En el presente asunto la sentencia de primera instancia absolvió a la demandada de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra y declaró probadas las excepciones de inexistencia de las obligaciones reclamadas, cobro de lo no debido, pago, buena fe y compensación formuladas por la demandada; decisión que fue apelada por la parte demandante y confirmada en segunda instancia por esta Corporación.

Para cuantificar el interés jurídico del recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandante, debemos decir que estas recaen sobre las pretensiones de la demanda que no le fueron reconocidas, es decir:

Concepto	**Valor**
Salarios dejados de percibir desde el despido	$ 325.274.220,00
Cesantías dejadas de Percibir	$ 33.009.309,73
Intereses Cesantías	$ 2.631.107,02
Vacaciones dejadas de percibir	$ 10.962.945,93
Primas de servicio	$ 21.925.891,87
Total	**$ 393.803.474,56**

Teniendo en cuenta el cálculo anterior lo que debió pagársele al demandante en caso de una eventual condena a la demandada asciende a la suma de **$ 393.803.474,56** suma que supera los 120 salarios mínimos exigidos para recurrir en casación.

[1] Al respecto de tiempo atrás la Corte Suprema de Justicia ha manifestado y reiterado: "*la cuantía del interés para recurrir está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada que, tratándose del demandado, se traduce en la cuantía de las resoluciones que económicamente lo perjudiquen y, respecto del demandante, que es el caso en estudio, en el monto de las pretensiones que hubiesen sido denegadas por la sentencia que se intenta impugnar, en ambos casos, teniendo en cuenta la conformidad o inconformidad del interesado respecto del fallo de primer grado*" Auto AL1445-2022 del 30 de marzo de 2022, Sala de Casación Laboral. M.P. LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala de Decisión Laboral,

RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER el recurso de casación interpuesto por la parte demandante.

SEGUNDO: En firme el presente proveído, prosígase con el trámite correspondiente.

Notifíquese y Cúmplase,



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCIA
Magistrada



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN
Magistrado

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

LPJR

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA LABORAL

Bogotá D.C., veintiséis (26) de mayo de dos mil veintidós (2022).

El apoderado de la **parte demandante** interpuso dentro del término de ejecutoria, recurso extraordinario de casación, contra el fallo proferido en esta instancia el treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), dado el resultado desfavorable.

Para resolver la viabilidad del recurso de casación interpuesto se considera

El Artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establece que: "*sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente*."

Tal cuantía se determina bajo el concepto de "*interés jurídico para recurrir*", que de forma clara la H. Corte Suprema de Justicia lo ha interpretado como el perjuicio que sufre la parte afectada con la sentencia impugnada[1], definiéndose para el demandante, las pretensiones que no hubieran sido acogidas en segunda instancia y para la demandada las condenas impuestas, en ambos casos teniendo en cuenta los recursos de apelación que hubieran sido interpuestos.

En el presente asunto la sentencia de primera instancia declaró probada la excepción de cobro de lo no debido por inexistencia de la causa y de la obligación y no probadas las demás excepciones formuladas por la demandada.

Por otra parte condenó a la demandada al pago de $3.931.223 por concepto de indemnización moratoria de que trata el articulo 65 del CST, y absolvió a la demandada de las demás pretensiones incoadas en su contra; decisión que fue apelada por las partes y revocada en segunda instancia por esta Corporación.

Para cuantificar el interés jurídico del recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandante, debemos decir que estas recaen sobre las pretensiones de la demanda que no le fueron reconocidas, es decir:

Concepto	**Valor**
Cesantias dejas de percibir desde el despido	$10.182.400,00
Intereses Cesantias	$1.221.888,00
Vacaciones	$5.091.200,00
Primas de servicio	$10.182.400,00
Aportes SS Salud y Pensión	$29.721.600,00
Reintegro	$56.399.488,00
Total	**$112.798.976,00**

[1] Al respecto de tiempo atrás la Corte Suprema de Justicia ha manifestado y reiterado: "*la cuantía del interés para recurrir está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada que, tratándose del demandado, se traduce en la cuantía de las resoluciones que económicamente lo perjudiquen y, respecto del demandante, que es el caso en estudio, en el monto de las pretensiones que hubiesen sido denegadas por la sentencia que se intenta impugnar, en ambos casos, teniendo en cuenta la conformidad o inconformidad del interesado respecto del fallo de primer grado*" Auto AL1445-2022 del 30 de marzo de 2022, Sala de Casación Laboral. M.P. LUIS BENEDICTO HERRERA DÍAZ.

Teniendo en cuenta el cálculo anterior lo que debió pagársele al demandante en caso de una eventual condena a la demandada asciende a la suma de **$112.798.976,00** suma que supera los 120 salarios mínimos exigidos para recurrir en casación.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala de Decisión Laboral,

RESUELVE

PRIMERO: CONCEDER el recurso de casación interpuesto por la parte demandante.

SEGUNDO: En firme el presente proveído, prosígase con el trámite correspondiente.

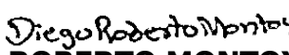
Notifíquese y Cúmplase,



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCIA
Magistrada



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN
Magistrado

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

LPJR

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL
DE BOGOTA D.C. – SALA LABORAL

MAGISTRADA PONENTE: ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Proceso de Ordinario Laboral: 110013105-034-2019-00135-01

Demandante:	**SANITAS E.P.S.**
Demandada:	**ADMINISTRADORA DE LOS RECURSOS DEL SISTEMA GENERAL DE SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD –ADRES.**

Con la finalidad de resolver el recurso de apelación interpuesto por la accionada, la Sala Cuarta de Decisión Laboral, previa deliberación al proyecto sometido a su consideración por la Magistrada Sustanciadora, procede a dictar la siguiente

I. PROVIDENCIA

Sería del caso resolver el recurso de apelación interpuesto por la parte accionada, si no es porque esta Sala de Decisión, se percata de la incursión en este trámite judicial de una causal de nulidad insaneable que impide asumir el conocimiento de la causa como lo es la falta de jurisdicción, por lo siguiente:

La EPS Sanitas promovió demanda ordinaria laboral para que se declarara la responsabilidad de la administradora de los recursos del sistema general de seguridad social en Salud-ADRES, en la causación de los perjuicios ocasionados en la modalidad de daño emergente, irrogados a la EPS Sanitas SAS, con ocasión del rechazo infundado de ochocientos (800) ítems, contenidos en 707 recobros, cuyo costo asciende a la suma de $36.673.463,24.

En consecuencia, se condenara a la accionada al pago de dicha suma, correspondiente a 800 ítems, contenidos en los 707 recobros; a la indemnización de daño emergente en la suma de $3.667.346,24, más los intereses moratorios. En subsidio pidió la indexación, costas y agencias en derecho.

Como fundamento a sus peticiones, sostuvo que autorizó y cubrió la prestación de 800 tecnologías en salud excluidas del POS, hoy plan de beneficios, a diferentes usuarios, con ocasión de: la orden judicial adoptada en el trámite de una acción de tutela y de autorizaciones emitidas por el Comité Técnico Científico -CTC-, servicios que fueron prestados por las instituciones prestadoras de salud -IPS-, quienes radicaron ante la EPS Sanitas SAS las correspondientes facturas de venta, acompañadas de los soportes que acreditaban la efectiva prestación de la tecnología, por estas razones se efectuó el pago de cada una de las facturas descritas a las IPS reclamantes.

Afirmó que: como los servicios no se encontraban incluidos en el POS (hoy Plan de Beneficios), procedió a presentar su recobro ante el administrador del encargo fiduciario del FOSYGA (ahora ADRES), cumpliendo la totalidad de los requisitos exigidos en el ordenamiento jurídico para el agotamiento de este procedimiento especial; los 18 ítems de los 800 pretendidos, fueron presentados por primera vez, mediante el diligenciamiento y radicación de los formatos establecidos para el efecto, esto es, el MYT0l (formato de solicitud de recobro para autorizaciones de CTC) y el MYT 02 (formato de solicitud de recobro para órdenes por fallo de tutela), sin embargo el Ministerio de Salud y Protección Social, representado por el Consorcio Administrador del Fosyga (hoy ADRES), glosó los recobros reclamados.

Discurrió que con ocasión de la convocatoria para realizar radicaciones especiales definidas por el Ministerio de Salud y Protección Social, consistente en la posibilidad de tramitar solicitudes de recobro que ya habían sido radicadas y glosadas, presentó por segunda vez la reclamación de los recobros asociados a los servicios y efectuó por primera vez la reclamación de 783 ítems más.

Siendo glosados 707 recobros de manera infundada, por tanto, través del formato MYT04 objetó algunas de las mismas realizando las aclaraciones o correcciones correspondientes, respecto a las presuntas fallas detectadas por la auditoría, sin embargo, el Consorcio Administrador del Fosyga (hoy ADRES), no tuvo en cuenta las citadas objeciones y ratificó las mismas.

Precisó que los 800 ítems contenidos en 707 recobros que son objeto de la demanda, representan un derecho económico que asciende a $36'673.463,24; que con la negativa de cancelar los recobros materia de la presente demanda se puso fin a la actuación administrativa correspondiente, se agotó el requisito de procedibilidad y el 21 de diciembre de 2018 se efectuó la reclamación contentiva de estas pretensiones con destino a ADRES.

Agregó, que el suministro de los servicios enunciados le ha significado un desgaste económico relacionado con la gestión de los mismos, debiendo contar con una estructura administrativa superior, para efectos de lograr su atención y oportuna prestación, gastos que no fueron previstos por la EPS ni costeados a través de la Unidad de Pago por Capitación -UPC- generando un perjuicio, pues los gastos se materializaron en todo el despliegue de personal, locativo, logístico y técnico-científico que permitiera a la EPS, poder cumplir las órdenes contenidas en los fallos de tutela y las actas del Comité Técnico Científico, que desbordaban financieramente las estimaciones actuariales de la UPC (fls. 9 a 81).

II. TRÁMITE PROCESAL

La anterior demanda, correspondió por reparto al Juzgado 34 Laboral del Circuito de Bogotá (fl. 185), el cual admitió la demanda y ordenó su notificación a la demandada (fl. 187).

Una vez agotado lo anterior, se dio contestación al libelo inicial, sin embargo, mediante auto del 04 de octubre de 2019 se inadmitió la contestación de la demanda, e igualmente, negó el llamamiento en garantía propuesto por la ADRES. Seguidamente, a través de auto del 03 de febrero de 2022, ante la subsanación presentada, se tuvo por contestada la demanda, pero se mantuvo la decisión de no acceder al llamamiento en

garantía planteado, decisión que fue recurrida en apelación (Archivo Digital: *«02. 2019 135 RECUR. REPOS. (fls. 279 a 281)»*).

III. CONSIDERACIONES

Demarcado el sustrato fáctico y petitorio de la presente causa, así como el acontecer procesal desde su génesis, observa la Sala que hay lugar a declarar la nulidad de lo actuado y remitir las actuaciones a la Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo, de acuerdo con los lineamientos trazados en reciente pronunciamiento proferido por la Corte Constitucional en Auto 389 del 22 de julio de 2021, en el que en un asunto de idénticos contornos fácticos a los que aquí se ventilan, se dirimió un conflicto de competencia que se había suscitado entre el Juzgado 6º Laboral del Circuito de Bogotá y el Juzgado 61 Administrativo del Circuito de la misma ciudad, en donde concluyó que el asunto no correspondía a la jurisdicción ordinaria en su especialidad civil ni laboral, sino que se debía remitir el conocimiento del asunto al mencionado Juzgado Administrativo del Circuito.

Para arribar a tal conclusión, consideró que el numeral 4º del artículo 2º del CPTSS (en la forma como fue modificado por el artículo 622 del CGP) no es aplicable a las controversias relacionadas con el pago de recobros judiciales al Estado por prestaciones no incluidas en el PBS y por las devoluciones o glosas a las facturas, que se susciten entre las EPS y la ADRES, en la medida que no corresponden a litigios que, en estricto sentido, giren en torno a la prestación de servicios de la seguridad social y porque se trata de controversias presentadas únicamente entre entidades administradoras relativas a la financiación de un servicio que ya se prestó. Para arribar a esta conclusión consideró lo siguiente:

> «20. Resulta importante hacer referencia a la Sentencia C-1027 de 2002, en la que la Corte estudió una demanda presentada en contra del numeral 4º del artículo 2 de Ley 712 de 2001, en su versión original. En esa ocasión la Corporación concluyó que "en el artículo 2 de la ley en mención se regula la **competencia general de la jurisdicción ordinaria 'en sus especialidades laboral y de seguridad social'**" (negrillas fuera de texto), siendo enfática al señalar que la unidad conceptual de la seguridad social integral, sumada a las características propias de la conflictividad que gira en torno a la materia, demandan la existencia de un proceso especial y de una jurisdicción también especializada que pueda dirimir tales controversias. En ese orden, dijo que "no cabe duda de que el legislador es el llamado a diseñar el régimen jurídico de la seguridad social con sujeción a los principios superiores de eficiencia, universalidad y solidaridad, facultad que implica también la asignación de las

competencias jurisdiccionales para el conocimiento de las controversias sobre esta materia". Cuestión última que dio lugar a la conclusión de que la especialización de la justicia ordinaria laboral "corresponde al sentido unificado del sistema de seguridad social integral querido por el constituyente. Unidad del sistema que se proyecta en la unidad de la jurisdicción"[1].

21. Una lectura armónica de los artículos 15[2] y 622[3] de la Ley 1564 de 2012, de los numerales 4º[4] y 5º[5] del artículo 2 de la Ley 712 de 2001 y del artículo 12 de la Ley 270 de 1996[6], permite reiterar que corresponde a la jurisdicción ordinaria, en su especialidad laboral y de seguridad social, la competencia general para dirimir las **controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social**. Exceptuándose de dicho marco los asuntos, (i) de responsabilidad médica y los relacionados con contratos, y (ii) aquellos que por disposición expresa del legislador le sean asignados a otras autoridades judiciales. Así, en atención a la cláusula general de competencia, son los jueces laborales los competentes para conocer de las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social y de la ejecución de obligaciones emanadas del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad.

22. Dicha competencia en cabeza de los jueces laborales tiene importancia para la Corte Constitucional, pues la remisión de los asuntos de la seguridad social a dichos juzgados supone que "el nuevo estatuto procesal del trabajo reconoce expresamente la autonomía conceptual que al tenor de lo dispuesto en el artículo 48 Fundamental ha adquirido la disciplina de la seguridad social, asignándole a la jurisdicción ordinaria laboral el conocimiento de los asuntos relacionados con el sistema de seguridad social integral en los términos señalados en el numeral 4° del artículo 2° de la Ley 712 de 2001"[7].

23. Entonces, de acuerdo con el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012, que modificó el numeral 4º del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, es claro que en los jueces laborales recae la competencia general para dirimir las **controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social** que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras. Así, es necesario examinar, en el caso que estudia la Sala, primero, si las controversias referidas a los recobros corresponden a la prestación de servicios de la seguridad social, y, segundo, si se trata de una controversia entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras.

24. La Sala encuentra, en primer lugar, **que el proceso judicial de recobro no corresponde, en estricto sentido, a una controversia relativa a la prestación de servicios de la seguridad social.** Dicho procedimiento se adelanta cuando ya la entidad prestó el servicio (el tratamiento o el suministro del insumo excluido del PBS), en virtud de la orden proferida por un comité técnico científico –en su momento– o por un juez de tutela; es decir, **no tiene por objeto decidir sobre la prestación del servicio sino sobre su financiación**. En este sentido, el recobro busca resolver un desequilibrio económico entre el Estado y una EPS, de manera que esta última lo que pretende es recuperar los recursos que debió destinar para cubrir asistencias a las que no se considera obligada por estimar que no hacen parte de la cobertura del Plan de Beneficios en Salud. En ese orden, el recobro no pretende garantizar en forma directa que el servicio o la tecnología en salud efectivamente sean prestados.

---

[1] Corte Constitucional, Sentencia C-1027 de 2002.
[2] El artículo 15 de la Ley 1564 de 2012 señala: "Corresponde a la jurisdicción ordinaria, el conocimiento de todo asunto que no esté atribuido expresamente por la ley a otra jurisdicción".
[3] El artículo 622 de la Ley 1564 de 2012, que modificó el numeral 4º del artículo 2 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establece: "4. Las controversias relativas a la prestación de los servicios de la seguridad social que se susciten entre los afiliados, beneficiarios o usuarios, los empleadores y las entidades administradoras o prestadoras, salvo los de responsabilidad médica y los relacionados con contratos".
[4] Modificado por el artículo 622 de la Ley 1564 de 2012.
[5] El numeral 5º del artículo 2 de la Ley 712 de 2001 dispone que la jurisdicción ordinaria, en sus especialidades laboral y de seguridad social, conoce de: "La ejecución de obligaciones emanadas de la relación de trabajo y del sistema de seguridad social integral que no correspondan a otra autoridad".
[6] El artículo 12 de la Ley 270 de 1996, modificado por el artículo 5 de la Ley 1285 de 2009, señala que la función jurisdiccional "[…] se ejerce por la jurisdicción constitucional, el Consejo Superior de la Judicatura, la jurisdicción de lo contencioso administrativo, las jurisdicciones especiales tales como: la penal militar, la indígena y la justicia de paz, y **la jurisdicción ordinaria que conocerá de todos los asuntos que no estén atribuidos por la Constitución o la ley a otra jurisdicción**" (negrillas fuera de texto).
[7] Corte Constitucional, Sentencia C-1027 de 2012.

No se debe olvidar que los recobros tienen la virtualidad de permitir que los recursos del sistema fluyan adecuadamente y que, de esta forma, tienen repercusiones en el Sistema General de Seguridad Social en Salud[8]. Sin embargo, esta relación es meramente indirecta y condicional (circunstancial), pues materialmente el procedimiento de recobro constituye una controversia económica, no de salud en estricto sentido, que formula la EPS ante el Estado por haber asumido obligaciones que considera ajenas a lo que estaba legal y reglamentariamente obligada a cumplir.

25. En segundo lugar, las controversias relacionadas con el pago de recobros judiciales al Estado por prestaciones no incluidas en el PBS y por las devoluciones o glosas a las facturas entre entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud vinculan, en principio, a las Entidades Promotoras de Salud (EPS) y a la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, ADRES. **En este tipo de controversias, en consecuencia, no intervienen afiliados, beneficiarios, usuarios ni empleadores**.

26. La ADRES es una entidad con una naturaleza jurídica específica. El legislador, mediante el artículo 66 de la Ley 1753 de 2015[9], con el fin de garantizar el adecuado flujo y los respectivos controles de recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud, creó la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud (SGSSS), ADRES, como una entidad de naturaleza especial del sector descentralizado del orden nacional asimilada a una empresa industrial y comercial del Estado, con lo que adquiere la categoría de entidad pública. Adicionalmente, dispuso que la ADRES hará parte del SGSSS y estará adscrita al Ministerio de Salud y Protección Social, con personería jurídica, autonomía administrativa y financiera y patrimonio independiente, y estará encargada de administrar los recursos que hacen parte del Fondo de Solidaridad y Garantías (Fosyga), los del Fondo de Salvamento y Garantías para el Sector Salud (Fonsaet), los que financien el aseguramiento en salud, los copagos por concepto de prestaciones no incluidas en el plan de beneficios del Régimen Contributivo, y los recursos que se recauden como consecuencia de las gestiones que realiza la Unidad Administrativa Especial de Gestión Pensional y Contribuciones Parafiscales de la Protección Social (UGPP)[10].

Entre sus funciones se encuentran: "c) Efectuar el reconocimiento y pago de las Unidades de Pago por Capitación y demás recursos del aseguramiento obligatorio en salud"; "d) Realizar los pagos, efectuar giros directos, a los prestadores de servicios de salud y proveedores de tecnologías en salud, de acuerdo con lo autorizado por el beneficiario de los recursos y adelantar las transferencias que correspondan a los diferentes agentes del Sistema, que en todo caso optimice el flujo de recursos", y "e) Adelantar las verificaciones para el reconocimiento y pago por los distintos conceptos, que promueva la eficiencia en la gestión de los recursos" (art. 66, Ley 1753 de 2015)[11]. Al respecto, también puede verse el artículo 3 del Decreto 1429 de 2016[12].

27. Es necesario precisar que la ADRES no es una entidad administradora de los planes de beneficios en salud. De acuerdo con el artículo 121.1 de la Ley 1438 de 2011[13] se entiende por administradoras de Planes de Beneficios en Salud (EAPBS): "Las Entidades Promotoras de Salud del Régimen Contributivo y Subsidiado, las Empresas Solidarias, las Asociaciones Mutuales en sus actividades de Salud, las Cajas de Compensación Familiar en sus actividades

[8] La Corte ha considerado que, dada la complejidad de los procedimientos implementados para el recobro y la asignación de los dineros de la salud, se han ocasionado graves problemas de iliquidez en las entidades promotoras y prestadoras de servicios de salud. En la sentencia C-383 de 2020, esta Corporación indicó que el flujo de recursos "ha comportado una falla estructural del sistema de salud que data de hace varios años, (incluso antes de proferida la sentencia T-760 de 2008 en la que se hizo más evidente), lo que dificulta gravemente la situación financiera de los actores del sistema de salud y perjudica directamente el goce efectivo del derecho fundamental a la salud".
[9] Por la cual se expide el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 "Todos por un nuevo país".
[10] Corte Constitucional, Sentencia C-162 de 2021, en la que se hace alusión explícita al artículo 66 de la Ley 1753 de 2015.
[11] Es oportuno señalar que en medio del conversatorio sobre la ADRES llevado a cabo en la Comisión Séptima del Senado de la República el 11 de septiembre de 2018, el cual tuvo lugar con el objeto de que los legisladores conocieran el contexto de las propuestas para lograr el saneamiento definitivo de los recobros por concepto de servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC del régimen contributivo, el director de la ADRES expuso que dicha entidad fue creada, entre otras cosas, con el objeto de subsanar las problemáticas generadas en razón a los procesos de recobros. En rigor, lo que se buscaba era que una entidad de naturaleza pública adelantara las verificaciones respectivas a efectos de lograr mayor eficiencia en la gestión de los recursos. Gaceta del Congreso No. 746, p. 4.
[12] Por el cual se modifica la estructura de la Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud –ADRES– y se dictan otras disposiciones.
[13] Por medio de la cual se reforma el Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.

de salud, las actividades de salud que realizan las aseguradoras, las Entidades que administren planes adicionales de salud, las entidades obligadas a compensar, las entidades adaptadas de Salud, las administradoras de riesgos profesionales en sus actividades de salud. Las entidades pertenecientes al régimen de excepción de salud y las universidades en sus actividades de salud […]"[14].

28. Por otra parte, **la ADRES tampoco es una entidad prestadora –no es EPS ni IPS–.** En efecto, el artículo 177 de la Ley 100 de 1993 determina que las Entidades Promotoras de Salud son las responsables de la afiliación, el registro de los afiliados y del recaudo de sus cotizaciones, por delegación del fondo de solidaridad y garantía. Su función primordial es organizar y garantizar, directa o indirectamente, la prestación del plan de salud obligatorio a los afiliados[15]. Por otra parte, de acuerdo con el artículo 185 de la misma ley, las Instituciones Prestadoras de Servicios de salud (IPS), como su nombre lo indica, son aquellas encargadas de prestar directamente los diferentes servicios de salud a los usuarios.

29. Ahora, **aunque el artículo 622 del CGP, que modificó el numeral 4º del artículo 2 del CPTSS, fue expedido cuando la ADRES aún no se había creado**, no puede desconocerse que se trata de una entidad administradora de los recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y que hace parte del mismo».

En ese orden, una vez se descartó la competencia de la justicia ordinaria laboral y con el ánimo de establecer la competencia para este tipo de procesos, señaló:

«[…] es necesario acudir a la cláusula que trae el inciso primero del artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 que indica que "[l]a Jurisdicción de lo Contencioso Administrativo está instituida para conocer, además de lo dispuesto en la Constitución Política y en leyes especiales, de las ***controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo****, en los que estén involucradas las entidades públicas, o los particulares cuando ejerzan función administrativa" (negrillas fuera de texto).*

32. En este punto es necesario precisar que el procedimiento de recobro constituye una garantía a favor de las EPS, con la finalidad de que estas puedan reclamar el reembolso de los servicios y tecnologías prestados en virtud de una orden judicial en el marco de una acción de tutela, o de una orden proferida por los comités técnicos científicos[16]; siendo que su prestación se ordenó a pesar de que, en principio, no podía ser cubierta por la EPS pues, estas tienen la obligación de "[…] suministrar, dentro de los límites establecidos en el numeral 5 del artículo 180, a cualquier persona que desee afiliarse y pague la cotización o tenga el subsidio correspondiente, el Plan Obligatorio de Salud […]"[17].

33. Mediante la Ley 1608 de 2013[18] el legislador adoptó una serie de medidas tendientes a mejorar la liquidez y el uso de algunos recursos del sector salud. Con miras a lograr tal objetivo, en su artículo 11, dispuso que "en el caso de los recobros y reclamaciones que se realizan al Fosyga cuya glosa de carácter administrativo hubiese sido notificada con anterioridad a la expedición de la presente Ley, y sobre los cuales no haya operado el término de caducidad de la acción contenciosa administrativa correspondiente, solo se exigirán para su reconocimiento y pago los requisitos esenciales que demuestren la existencia de la respectiva obligación". A su turno, este artículo fue reglamentado por el Decreto

[14] En consonancia con el artículo 6.17 del Decreto 1765 de 2019.
[15] Incluso, es importante resaltar que el artículo 66 de Ley 1753 de 2015 prohíbe a la entidad asumir las funciones asignadas a las Entidades Promotoras de Salud.
[16] El artículo 3.13 de la Resolución 1885 de 2018 del Ministerio de Salud y Protección Social, indica que el recobro es una "solicitud presentada por una entidad recobrante ante la ADRES con el fin de obtener el pago de cuentas por concepto de tecnologías en salud no financiadas con recursos de la UPC o servicios complementarios, según corresponda, cuyo suministro fue garantizado a sus afiliados y prescrito por el profesional de la salud u ordenados por fallos de tutela".
[17] Artículo 156, literal e, de la Ley 100 de 1993.
[18] Por medio de la cual se adoptan medidas para mejorar la liquidez y el uso de algunos recursos del Sector Salud.

347 de 2013[19], el cual, en su artículo 4, enunció los elementos esenciales que debían ser tenidos en cuenta por las entidades recobrantes a fin de demostrar la existencia de la obligación.

34. Posteriormente, una vez creada la ADRES, mediante el Decreto 2265 de 2017[20] se establecieron las condiciones generales de operación de la entidad. Así, en la subsección 1 de la sección 5, se establecieron normas relativas al reconocimiento de servicios y tecnologías en salud no financiadas con cargo a la UPC, entre las que destacan aquellas que definen (i) el término para presentar las solicitudes; (ii) los requisitos para el pago; (iii) el proceso de verificación, control y pago; y, (iv) el término para resolver, reconocer y pagar las solicitudes presentadas.

35. Actualmente, los artículos 35 a 71 de la Resolución 1885 de 2018[21], permiten confirmar que ***el recobro es un procedimiento administrativo*** *que se surte en las etapas de presentación[22], pre radicación, radicación, verificación, pre auditoria, auditoría integral[23] y pago. En el marco de dicho procedimiento o trámite, la ADRES puede adoptar una de las siguientes decisiones: (i) aprobar totalmente los ítems del recobro, (ii) aprobar con reliquidación o (iii) aprobar parcialmente (art. 53, Resolución 1885 de 2018).*

La determinación adoptada en virtud del trámite se recogerá en una comunicación que contiene, entre otros datos: a) la fecha de expedición, b) el resumen de la información de cantidad y valor de recobros, c) las causales de glosa (si hubo lugar a ello), d) el resultado de la auditoría integral, e) la relación de los ítems aprobados parcialmente y e) las causales de no aprobación, cuando fuere el caso (art. 55, Resolución 1885 de 2018). Contra la decisión de la entidad es posible presentar una objeción dentro de los dos meses siguientes al recibo de la comunicación, precisando las razones de la inconformidad por cada uno de los ítems del recobro (art. 56, Resolución 1885 de 2018). En el término indicado, igualmente se podrán enmendar las glosas aplicadas.

Finalmente, la ADRES dará respuesta al mecanismo de objeción o subsanación dentro de los dos meses siguientes a la radicación del documento y el pronunciamiento que efectúe será definitivo (art. 59, Resolución 1885 de 2018).

36. La normativa descrita permite concluir que ***el recobro no es una simple presentación de facturas, sino que constituye un verdadero trámite administrativo*** *que busca garantizar el propósito de la ADRES consistente en administrar las fuentes y el uso de los recursos que financian el Sistema General de Seguridad Social en Salud, bajo los principios de eficiencia, transparencia y calidad.*

37. Adicionalmente, es posible considerar que en el trámite descrito para la presentación, verificación y pago de las solicitudes de recobro, la ADRES profiere actos administrativos que logran consolidar o negar la existencia de la obligación.

Siendo el acto administrativo una declaración de voluntad de la administración dirigida a producir efectos jurídicos[24], al proferir la comunicación referida (supra 36), la entidad crea una situación jurídica concreta para la EPS, en el sentido de aceptar o rechazar el pago de los servicios y tecnologías en salud que dispensó y que no hacían parte del PBS. Dicha declaración de voluntad de la ADRES, pese a que no tiene la denominación formal de resolución o decreto, materialmente presenta las características de un acto administrativo, pues produce efectos jurídicos, en la medida en que : (i) es expedida por la autoridad competente; (ii)

---

[19] Por el cual se reglamenta el inciso 4° del artículo 11 de la Ley 1608 de 2013.
[20] Por el cual se modifica el Decreto 780 de 2016, Único Reglamentario del Sector Salud y Protección Social adicionando el artículo 1.2.1.10, y el Título 4 a la Parte 6 del Libro 2 en relación con las condiciones generales de operación de la ADRES - Administradora de los Recursos del Sistema General de Seguridad Social en Salud y se dictan otras disposiciones.
[21] Por la cual se establece el procedimiento de acceso, reporte de prescripción, suministro, verificación, control, pago y análisis de la información de tecnologías en salud no financiadas con recursos de la UPC, de servicios complementarios y se dictan otras disposiciones.
[22] La ADRES estableció el Manual Operativo de Recobros 458 que pretende dar a conocer las funcionalidades y modo de uso de la Aplicación MYT458 (Sistema de recobros web), así como los requisitos generales para la radicación del recobro y la pre-auditoría, entre otros. Ver el siguiente enlace: https://www.adres.gov.co/Portals/0/Recobros/MANUAL%20DE%20USUARIO%20RECOBROS%20458%20.pdf?ver=2017-08-18-170857-023.
[23] La ADRES estableció el Manual Operativo de Auditoria que describe las etapas y pasos que deberán efectuarse para organizar, presentar, revisar y verificar, validar, reconocer y pagar las facturas o documentos equivalentes relacionadas con los servicios y tecnologías en salud no financiadas con la UPC. Ver el siguiente enlace: https://www.adres.gov.co/Portals/0/MYT/Manuales/VALR-MA04_Manual%20Operativo%20y%20de%20auditor%C3%ADa%20Recobros_V04.pdf?ver=2021-02-28-110709-700.
[24] Rodríguez Rodríguez, L. (2005). *Derecho Administrativo General y Colombiano*. Editorial Temis S.A.

cuenta con una motivación respecto a la información de cantidad y valor de los recobros, las causales de la glosa, el resultado de la auditoría integral, la relación de los ítems aprobados parcialmente y las causales de no aprobación; (iii) respeta el principio de publicidad pues debe ser puesto en conocimiento de la EPS autorizada, a través de una notificación, y (iv) puede ser impugnada a través del trámite de objeción. Aunque la objeción tiene un término especial para su presentación (dos meses), ello no excluye necesariamente la posibilidad de entender la comunicación como un acto administrativo[25]*.*

38. En ese orden, vale la pena anotar que en Sentencia del 3 de abril de 2020[26]*, la Sección Tercera del Consejo de Estado destacó que el procedimiento de recobro persigue un fin legítimo amparado en la Constitución, esto es, la defensa del patrimonio público, el cual se logra "**mediante la adopción de procedimientos administrativos que permitan verificar que los cobros con cargo al Fosyga** [hoy a la Adres], **correspondan a verdaderas deudas de la administración**" (negrillas fuera de texto). Así las cosas, el procedimiento de recobro, señaló el alto tribunal, se caracteriza por ser un procedimiento administrativo reglamentado que involucra la presentación de las respectivas facturas, de suerte que, con posterioridad a su radicación, la administración realice la respectiva verificación en un plazo razonable; verificación que consiste en una revisión jurídica, médica, administrativa y financiera de los soportes.*

39. Todo lo anterior demuestra que la ADRES no solamente se rige por normas de derecho público, sino que la decisión de reconocer o no el pago de obligaciones por concepto de prestación de servicios y tecnologías en salud subyace a un conjunto de actuaciones administrativas regladas. Esto último no es gratuito. La creación de la Administradora de los Recursos del SGSSS, como se expuso en líneas anteriores (supra 27), tuvo como orientación primordial que el Estado jugara un papel más protagónico en la gestión y veeduría de los recursos, de suerte que se pudiera lograr el saneamiento definitivo de los recobros por concepto de servicios y tecnologías de salud no financiados con cargo a la UPC.

*40. Así las cosas, comoquiera que los procedimientos de recobro son la expresión de actuaciones administrativas regladas en cabeza de una entidad pública, es razonable que su control deba estar a cargo de la jurisdicción contencioso administrativa, especialmente si se tiene en cuenta que el artículo 104 de la Ley 1437 de 2011 dispone expresamente que dicha jurisdicción "está instituida para conocer […] de **las controversias y litigios originados en actos, contratos, hechos, omisiones y operaciones, sujetos al derecho administrativo**, en los que estén involucradas las entidades públicas" (negrillas fuera de texto).*

Planteamiento que se refuerza en el hecho de que, por medio de la demanda, también se busca el pago de perjuicios y las reparaciones de daños causados por el hecho y la omisión de una entidad pública, en las modalidades de daño emergente y lucro cesante (supra 1)».

Conforme a lo anterior, concluyó que la competencia judicial para conocer asuntos relacionados con el pago de recobros judiciales al Estado por prestaciones no incluidas en el POS, hoy PBS, y por las devoluciones o glosas a las facturas entre entidades del Sistema General de Seguridad Social en Salud corresponde a la jurisdicción de lo contencioso administrativo. Vale precisar así, que este es el criterio sostenido por esta Sala de Decisión, vertido entre otras, en la sentencia proferidas dentro el

[25] Se debe recordar que la Corte ha considerado que las comunicaciones de las autoridades pueden ser demandadas ante la jurisdicción contenciosa administrativa, cuando con su emisión se integre o se complete la actuación creadora o modificadora de situaciones jurídicas. Ver Sentencia SU-055 de 2018.
[26] Consejo de Estado, Sección Tercera, radicado 25000-23-26-000-2010-00281-01(45650). C.P. Alberto Montaña Plata.

proceso con radicación 110013105 015 2020 00276 01 (30 de noviembre de 2021).

Definida de esta forma la falta de jurisdicción, se debe acudir a lo dispuesto por el artículo 16 del CGP, aplicable a los ritos del trabajo en virtud de lo dispuesto en el artículo 145 del CPTSS, que proclama la improrrogabilidad de la jurisdicción, al establecer que: «*la jurisdicción y la competencia por los factores subjetivo y funcional son improrrogables. Cuando se declare, de oficio o a petición de parte, la falta de jurisdicción o la falta de competencia por los factores subjetivo o funcional, lo actuado conservará validez, salvo la sentencia que se hubiere proferido que será nula, y el proceso se enviará de inmediato al juez competente. Lo actuado con posterioridad a la declaratoria de falta de jurisdicción o de competencia será nulo*».

En ese orden de ideas, la falta de jurisdicción tal y como lo habilitan las normas instrumentales que regulan la materia, al no poder ser prorrogada o saneada, puede ser declarada *aun de oficio en cualquier momento,* conservando validez de lo actuado.

En consecuencia, atendiendo este perentorio mandato legal, se deberá declarar oficiosamente la falta de jurisdicción, y con ella la nulidad de todo lo actuado incluido el auto proferido el 3 de febrero de 2022 por el Juzgado 34 Laboral del Circuito Bogotá, conservando en todo lo demás validez lo actuado en primera instancia, por lo que se deberán remitir las diligencias al reparto de los Jueces Administrativos del Circuito de Bogotá.

IV. DECISIÓN

Con fundamento en las anteriores consideraciones la Sala de Decisión Laboral del **TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ**,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLARAR DE OFICIO LA FALTA DE JURISDICCIÓN para asumir el conocimiento de la presente causa, conforme a lo expuesto en la parte motiva de esta providencia y lo dispuesto en los artículos 104 del CPACA y 16 del CGP.

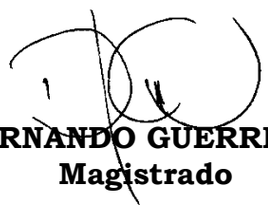
SEGUNDO: DECLARAR LA NULIDAD de todo lo actuado, inclusive, la decisión proferida en primera instancia el día 3 de febrero de 2022, por el Juzgado 34 Laboral del Circuito Bogotá.

TERCERO: REMITIR, las presentes diligencias al reparto de los Jueces Administrativos del Circuito de Bogotá.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada



DIEGO FERNANDO GUERRERO OSEJO
Magistrado



DIEGO ROBERTO MONTOYA MILLAN
Magistrado

Firmas escaneadas según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

H. MAGISTRADA ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Me permito pasar a su Despacho el expediente N°**11001-31-05-004-2018-00195-01** informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sala de Descongestión, donde **CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 26 de febrero de 2019.

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de mayo de 2022.

MERLY CATERINE PRADA OCAMPO
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada Ponente

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

H. MAGISTRADA ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Me permito pasar a su Despacho el expediente N°**11001-31-05-005-2017-00012-01** informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sala de Descongestión, donde **NO CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 06 de diciembre de 2018.

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de mayo de 2022.

MERLY CATERINE PRADA OCAMPO
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada Ponente

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

H. MAGISTRADA ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Me permito pasar a su Despacho el expediente N°**11001-31-05-012-2015-00914-01** informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sala de Descongestión, donde **NO CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 06 de diciembre de 2017.

Bogotá D.C., venticuatro (24) de mayo de 2022.

MERLY CATERINE PRADA OCAMPO
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada Ponente

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

H. MAGISTRADA ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Me permito pasar a su Despacho el expediente N°**11001-31-05-013-2018-00364-01** informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sala de Descongestión, donde **NO CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 19 de marzo de 2019.

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de mayo de 2022.

MERLY CATERINE PRADA OCAMPO
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada Ponente

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

H. MAGISTRADA ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Me permito pasar a su Despacho el expediente N°**11001-31-05-017-2018-00154-01** informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sala de Descongestión, donde **CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 27 de agosto de 2019.

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de mayo de 2022.

MERLY CATERINE PRADA OCAMPO
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada Ponente

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

H. MAGISTRADA ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Me permito pasar a su Despacho el expediente N°**11001-31-05-019-2015-00355-01** informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sala de Descongestión, donde **NO CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 26 de abril de 2018.

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de mayo de 2022.

MERLY CATERINE PRADA OCAMPO
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

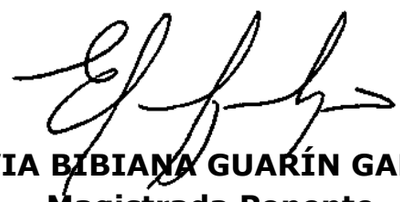
Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada Ponente

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

H. MAGISTRADA ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Me permito pasar a su Despacho el expediente N°**11001-31-05-028-2016-00064-01** informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sala de Descongestión, donde **NO CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 23 de noviembre de 2017.

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de mayo de 2022.

MERLY CATERINE PRADA OCAMPO
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada Ponente

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

H. MAGISTRADA ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Me permito pasar a su Despacho el expediente N°**11001-31-05-028-2018-00500-01** informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sala de Descongestión, donde **NO CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 01 de octubre de 2019.

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de mayo de 2022.

MERLY CATERINE PRADA OCAMPO
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada Ponente

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

H. MAGISTRADA ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Me permito pasar a su Despacho el expediente N°**11001-31-05-031-2017-00446-01** informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sala de Descongestión, donde **NO CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 06 de septiembre de 2018.

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de mayo de 2022.

MERLY CATERINE PRADA OCAMPO
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada Ponente

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

H. MAGISTRADA ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Me permito pasar a su Despacho el expediente N°**11001-31-05-037-2018-00231-01** informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sala de Descongestión, donde **NO CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 26 de marzo de 2019.

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de mayo de 2022.

MERLY CATERINE PRADA OCAMPO
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada Ponente

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

H. MAGISTRADA ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Me permito pasar a su Despacho el expediente N°**11001-31-05-024-2018-00072-01** informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sala de Descongestión, donde **CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 10 de septiembre de 2019.

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de mayo de 2022.

MERLY CATERINE PRADA OCAMPO
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.
2) Fijase como agencias en derecho la suma de UN (1) SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE en esta instancia, costas a cargo de las demandadas.
3) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada Ponente

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

H. MAGISTRADA ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Me permito pasar a su Despacho el expediente N°**11001-31-05-015-2018-00275-01** informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sala de Descongestión, donde **CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 13 de agosto de 2019.

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de mayo de 2022.

MERLY CATERINE PRADA OCAMPO
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.
2) Fijase como agencias en derecho la suma de UN (1) SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE en esta instancia, costas a cargo de las demandadas.
3) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada Ponente

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

H. MAGISTRADA ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Me permito pasar a su Despacho el expediente N°**11001-31-05-020-2018-00622-01** informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sala de Descongestión, donde **CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 08 de octubre de 2019.

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de mayo de 2022.

MERLY CATERINE PRADA OCAMPO
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.
2) Fijase como agencias en derecho la suma de UN (1) SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE en esta instancia, costas a cargo de las demandadas.
3) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada Ponente

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

H. MAGISTRADA ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Me permito pasar a su Despacho el expediente N°**11001-31-05-003-2017-00581-01** informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sala de Descongestión, donde **CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 28 de mayo de 2019.

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de mayo de 2022.

MERLY CATERINE PRADA OCAMPO
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

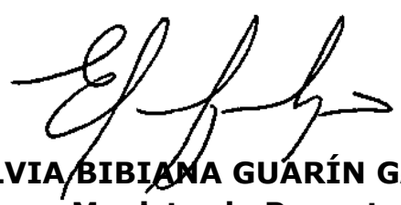
-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.
2) Fijase como agencias en derecho la suma de UN (1) SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE en esta instancia, costas a cargo de la demandada.
3) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada Ponente

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

H. MAGISTRADA ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Me permito pasar a su Despacho el expediente N°**11001-31-05-037-2016-01012-01** informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sala de Descongestión, donde **CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá de fecha 28 de junio de 2018 mediante providencia **SL1228-2021** - 07 de abril de 2021 y sentencia de instancia **SL1253-2022** de fecha 20 de abril del presente año que resolvió REVOCAR el ordinal primero de la primera instancia.

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de mayo de 2022.

MERLY CATERINE PRADA OCAMPO
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.
2) Fijase como agencias en derecho la suma de UN (1) SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE en esta instancia, costas a cargo de la demandada.
3) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada Ponente

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

H. MAGISTRADA ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Me permito pasar a su Despacho el expediente N°**11001-31-05-009-2018-00096-01** informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sala de Descongestión, donde **CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 01 de octubre de 2019.

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de mayo de 2022.

MERLY CATERINE PRADA OCAMPO
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.
2) Fijase como agencias en derecho la suma de UN (1) SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE en esta instancia, costas a cargo de las demandadas.

3) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada Ponente

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

H. MAGISTRADA ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Me permito pasar a su Despacho el expediente N°**11001-31-05-033-2016-00707-01** informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sala de Descongestión, donde **CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 08 de marzo de 2018.

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de mayo de 2022.

MERLY CATERINE PRADA OCAMPO
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

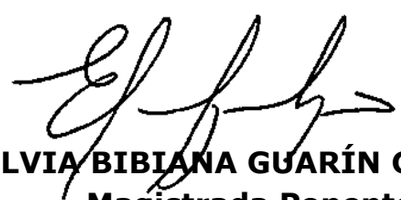
Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Fijase como agencias en derecho la suma de UN (1) SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE en esta instancia, costas a cargo de las demandadas.

3) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada Ponente

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

H. MAGISTRADA ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Me permito pasar a su Despacho el expediente N°**11001-31-05-038-2017-00783-01** informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sala de Descongestión, donde **CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 03 de septiembre de 2019.

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de mayo de 2022.

MERLY CATERINE PRADA OCAMPO
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Fijase como agencias en derecho la suma de UN (1) SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE en esta instancia, costas a cargo de las demandadas.

3) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada Ponente

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

H. MAGISTRADA ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA

Me permito pasar a su Despacho el expediente N°**11001-31-008-2016-00341-01** informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sala de Descongestión, donde **CASA** la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 03 de septiembre de 2018.

Bogotá D.C., veinticuatro (24) de mayo de 2022.

MERLY CATERINE PRADA OCAMPO
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., primero (1°) de junio dos mil veintidós (2022).

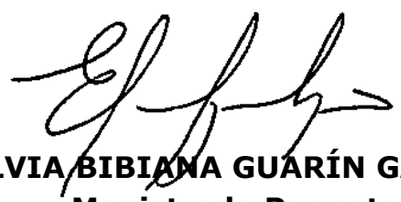
Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Fijase como agencias en derecho la suma de UN (1) SALARIO MÍNIMO LEGAL MENSUAL VIGENTE en esta instancia, las costas estarán a cargo de ambas demandadas y a favor de la demandante.

3) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



ELVIA BIBIANA GUARÍN GARCÍA
Magistrada Ponente

Firma escaneada según artículo 11 del Decreto 491 del 28 de marzo de 2020.

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
SALA LABORAL

Magistrado Ponente:	**ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO**
Clase de Proceso	ORDINARIO
Radicación No.	11001-31-05-039-2016-00320-02
Demandante:	**CARLOS DAVID RODRÍGUEZ VELÁSQUEZ**
Demandado:	**BIOENVASES SAS**

Bogotá, D.C., primero (1°) de junio de dos mil veintidós (2022).

Mediante oficio No. 320 del 22 de abril del año que avanza, el juzgado de conocimiento dispuso la devolución del presente asunto a esta Corporación, como quiera que *"no se encontró el monto de las costas ordenadas en la sentencia proferida el 31 de agosto de 2021 por la Sala Laboral del Tribunal Superior".*

Revisada la sentencia de primer grado, se observa que, efectivamente no se profirió auto señalando el monto de las agencias en derecho, teniendo en cuenta que la sentencia en mención condenó en costas a la parte demandada.

Por lo anteriormente indicado, atendiendo lo dispuesto en el numeral 2° del artículo 365 del CGP, se dispone:

Señalar como agencias en derecho la suma de un (1) salario mínimo mensual legal vigente a cargo de la parte demandada.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO
Magistrada

República de Colombia

Rama Judicial

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA D.C.
SALA LABORAL

Magistrado Ponente:	**ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO**
Clase de Proceso	ORDINARIO
Radicación No.	11001-31-05-038-2017-00630-02
Demandante:	**FLOR DEL CARMEN CASTELLANOS Y OTROS**
Demandado:	**COLEGIO CAMPESTRE SAN JOSÉ Y OTRO**

Bogotá, D.C., primero (1°) de junio de dos mil veintidós (2022).

Mediante auto de fecha 22 de marzo del 2022 el Dr. David A.J. Correa Steer manifestó su impedimento para conocer del asunto de la referencia, por las razones allí expuestas, por lo que el proceso fue remitido a este despacho el día 1° de abril del año que avanza, a efectos de resolver dicho impedimento, a lo que procede esta Magistrada en los siguientes términos.

Teniendo en cuenta que el Magistrado que declaró su impedimento para conocer del asunto de la referencia, ya no se encuentra fungiendo en tal cargo, las razones que dieron origen al mismo desaparecieron, razón por la cual, se ordena remitir el expediente al despacho de la H. Magistrada Dra. Luz Patricia Quintero Calle para que continúe con el conocimiento del mismo.

Por Secretaria procédase de conformidad, efectuándose las anotaciones pertinentes.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE



ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO
Magistrada

H. MAGISTRADA ALEJANDRA MARIA HENAO PALACIO

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001-31-05-031-2018-00390-01** informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral-, donde CASA la Sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá-, de fecha 03 de abril de 2019.

Bogotá D.C., 01 de abril de 2022.

GLORIA MARTINEZ
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., 01 de junio de 2022.

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Inclúyase la suma de $500.000 pesos, en que se estima el valor de las agencias en derecho, a cargo de cada una de las demandadas.

3) Regresen las diligencias al juzgado de origen, y continúese con el trámite correspondiente a la liquidación de las costas, conforme lo dispone el art. 366 del C.G.P.

Notifíquese y Cúmplase,



ALEJANDRA MARIA HENAO PALACIO
Magistrada Ponente

H. MAGISTRADA ALEJANDRA MARIA HENAO PALACIO

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001-31-05-021-2015-01024-01** informándole que fue devuelto del Juzgado de Origen, toda vez que las agencias en derecho fijadas en el fallo de fecha 28 de noviembre 2017 no correspondían a lo ordenado por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA en providencia de fecha 12 de mayo de 2021. Po lo cual se procede a fijar las agencias como corresponde.

Bogotá D.C., 04 de abril de 2022.

GLORIA MARTINEZ
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., 01 de junio de 2022.

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) Inclúyase la suma de dos (2) salarios mínimos mensuales legales vigentes, valor en que se estima el valor de las agencias en derecho, a cargo del demandado BANCO POLPULAR.

2) Regresen las diligencias al juzgado de origen, y continúese con el trámite correspondiente a la liquidación de las costas, conforme lo dispone el art. 366 del C.G.P.

Notifíquese y Cúmplase,



ALEJANDRA MARIA HENAO PALACIO
Magistrada Ponente

H. MAGISTRADA ALEJANDRA MARIA HENAO PALACIO

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001-31-05-017-2016-00574-02** informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral-, donde NO CASA la Sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá-, de fecha 05 de septiembre de 2014.

Bogotá D.C., 01 de abril de 2022.

GLORIA MARTINEZ
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., 01 de junio de 2022.

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Regresen las diligencias al juzgado de origen, y continúese con el trámite correspondiente a la liquidación de las costas, conforme lo dispone el art. 366 del C.G.P.

Notifíquese y Cúmplase,



ALEJANDRA MARIA HENAO PALACIO
Magistrada Ponente

H. MAGISTRADA ALEJANDRA MARIA HENAO PALACIO

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001-31-05-014-2016-00081-01** informándole que regresó que le proceso fue devuelto por el juzgado de origen para fijar agencias.

Bogotá D.C., 01 de abril de 2022.

GLORIA MARTINEZ
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., 01 de junio de 2022.

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) Inclúyase la suma de un (1) salario mínimo mensual legal vigente, en que se estima el valor de las agencias en derecho, a cargo de las demandadas, a razón de 80 % a cargo de Old Mutual Administradora de Pensiones y Cesantías S.A. y 20 % a cargo de Colpensiones.

2) Regresen las diligencias al juzgado de origen, y continúese con el trámite correspondiente a la liquidación de las costas, conforme lo dispone el art. 366 del C.G.P.

Notifíquese y Cúmplase,



ALEJANDRA MARIA HENAO PALACIO
Magistrada Ponente

TRIBUNAL SUPERIOR DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ, D. C.

SALA LABORAL

ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO.

Magistrada Ponente

Clase de Proceso	SUMARIO –Apelación sentencia
Radicación No.	11001-22-05-000-2022-00646-01
Demandante:	CONFECCIONES SALOME LTDA.
Demandado:	COOMEVA E.P.S.

Bogotá, D.C. treinta y uno (31) de mayo de dos mil veintidós (2022)

Discutido y Aprobado según Acta No 008.

El 30 de septiembre de 2021, la Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación profirió **sentencia condenatoria** en contra de la Entidad Promotora de salud **COOMEVA E.P.S.**, a fin de que se reconociera a favor de **CONFECCIONES SALOME LTDA.** la suma de $9'633.554, por concepto de incapacidades, así como sus correspondientes intereses moratorios (fls. 968 a 974).

La sentencia proferida por la Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación de Superintendencia Nacional de Salud, se notificó el 20 de octubre de 2021 (fls.976 a 978).

El 28 de octubre de 2021, **CONFECCIONES SALOME LTDA.** y **COOMEVA E.P.S.**, a través de sus apoderados judiciales interpusieron recurso de apelación (medios ópticos de folios 979 y 980).

Mediante auto del 24 de diciembre de 2021, la Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación de Superintendencia Nacional de Salud, concedió las impugnaciones y remitió el proceso al Tribunal Superior de Bogotá- Sala Laboral (fl.981).

Sería entonces la oportunidad de dar trámite al recurso de apelación interpuesto por los apoderados de **CONFECCIONES SALOME LTDA.** y **COOMEVA E.P.S.** contra la sentencia proferida por la Superintendencia Delegada para la Función Jurisdiccional y de Conciliación el 28 de octubre de 2021, si no fuera porque se observa que esta Sala carece de competencia territorial para su conocimiento.

Lo anterior, en la medida que el numeral 1° del artículo 30 del Decreto 2462 de 2013 dispone:

> "**Artículo 30.** Funciones del Despacho del Superintendente Delegado para la Función Jurisdiccional y de Conciliación. Son funciones del Despacho del Superintendente Delegado para la Función Jurisdiccional y de Conciliación, las siguientes:
>
> 1. Conocer a petición de parte y fallar en derecho, con carácter definitivo, en primera instancia y con las facultades propias de un juez, los asuntos contemplados en el artículo 41 de la Ley 1122 de 2007, modificado por el artículo 126 de la Ley 1438 de 2011 y en las demás normas que la reglamenten, modifiquen, adicionen o sustituyan. **En caso que sus decisiones sean apeladas, el competente para resolver el recurso conforme a la normativa vigente será el Tribunal Superior del Distrito Judicial -Sala Laboral-del domicilio del apelante**." (Subrayado y en negrillas por la Magistrada).

Así las cosas, y toda vez que conforme consta en el certificado de existencia y representación de CONFECCIONES SALOME LTDA., obrante a folios 955 a 959, así como en el de COOMEVA E.P.S. visible en el medio óptico de folio 987, ambas sociedades recurrentes tienen su domicilio en la ciudad de Cali-Valle del Cauca, por lo que, es claro que quien tiene la

competencia para conocer el presente asunto es la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali.

En consideración de lo brevemente expuesto la Sala Segunda Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D. C.,

R E S U E L V E:

PRIMERO: **DECLARAR** la falta de competencia territorial de este Tribunal para conocer la solicitud efectuada por CONFECCIONES SALOME LTDA. contra COOMEVA E.P.S., por tener ambas partes, en su calidad de recurrentes, su domicilio en Cali- Valle del Cauca.

SEGUNDO: **REMÍTASE** por Secretaría las presentes diligencias a la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Cali, para lo de su competencia.

NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE.

Los Magistrados,

ALEJANDRA MARÍA HENAO PALACIO

MARCELIANO CHÁVEZ ÁVILA **LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE**

340

H. MAGISTRADA LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001 31 05 003 2018 00587 02** informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, donde se aceptó el DESISTIMIENTO del Recurso Extraordinario de Casación, contra la Sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 03 de junio de 2020.

Bogotá D.C., 26 MAY 2022 2022

DANIELA CARREÑO RESTÁN
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., 26 MAY 2022 2022

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Magistrada Ponente

321

H. MAGISTRADA LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001 31 05 016 2017 00765 01** informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, donde se declaró DESIERTO el Recurso Extraordinario de Casación, contra la Sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 30 de junio de 2020.

Bogotá D.C., 26 MAY 2022 2022

DANIELA CARREÑO RESTÁN
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., 26 MAY 2022 2022

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Magistrada Ponente

H. MAGISTRADA LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001 31 05 017 2016 00684 01** informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sala de Descongestión, donde NO CASA la Sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 18 de julio de 2018.

Bogotá D.C., 26 MAY 2022 2022

DANIELA CARREÑO RESTÁN
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., 26 MAY 2022 2022

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Magistrada Ponente

150

H. MAGISTRADA LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001 31 05 018 2017 00792 01** informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sala de Descongestión, donde CASA la Sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 14 de agosto de 2019.

Bogotá D.C., 26 MAY 2022 2022

DANIELA CARREÑO RESTÁN
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., 26 MAY 2022 2022

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.
2) Fijase como agencias en derecho la suma de Trescientos Mil pesos ($300.000) en esta instancia.
3) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Magistrada Ponente

H. MAGISTRADA LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001 31 05 022 2013 00727 01** informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, donde CASA la Sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 20 de abril de 2015.

Bogotá D.C., 26 MAY 2022 2022

DANIELA CARREÑO RESTÁN
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., 26 MAY 2022 2022

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Magistrada Ponente

H. MAGISTRADA LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001 31 05 023 2017 00043 01** informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sala de Descongestión, donde CASA la Sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 23 de octubre de 2019.

Bogotá D.C., 26 MAY 2022 2022

DANIELA CARREÑO RESTÁN
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., 26 MAY 2022 2022

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.
2) Fijase como agencias en derecho la suma de Tres cientos Mil Pesos ($ 300.000) en esta instancia.
3) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Magistrada Ponente

H. MAGISTRADA LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001 31 05 023 2018 00413 01** informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sala de Descongestión, donde CASA la Sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 11 de diciembre de 2019.

Bogotá D.C., 26 MAY 2022 2022

DANIELA CARREÑO RESTÁN
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., 26 MAY 2022 2022

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Magistrada Ponente

H. MAGISTRADA LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001 31 05 027 2017 00572 01** informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sala de Descongestión, donde NO CASA la Sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 6 de febrero de 2019.

Bogotá D.C., 26 MAY 2022 2022

DANIELA CARREÑO RESTÁN
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., 26 MAY 2022 2022

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Magistrada Ponente

H. MAGISTRADA LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001 31 05 028 2017 00367 01** informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, donde NO CASA la Sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 11 de diciembre de 2019.

Bogotá D.C., 26 MAY 2022 2022

DANIELA CARREÑO RESTÁN
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., 26 MAY 2022 2022

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Magistrada Ponente

H. MAGISTRADA LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001 31 05 028 2018 00645 01** informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, donde se aceptó el DESISTIMIENTO del Recurso Extraordinario de Casación, contra la Sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 29 de septiembre de 2020.

Bogotá D.C., 26 MAY 2022 2022

DANIELA CARREÑO RESTÁN
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., 26 MAY 2022 2022

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Magistrada Ponente

H. MAGISTRADA LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001 31 05 031 2019 00068 01** informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sala de Descongestión, donde CASA la Sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 23 de octubre de 2019.

Bogotá D.C., 26 MAY 2022 2022

DANIELA CARREÑO RESTÁN
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., 26 MAY 2022 2022

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Magistrada Ponente

H. MAGISTRADA LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Me permito pasar a su Despacho el expediente No. **11001 31 05 034 2018 00189 01** informándole que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sala de Descongestión, donde NO CASA la Sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 6 de noviembre de 2019.

Bogotá D.C., 26 MAY 2022 2022

DANIELA CARREÑO RESTÁN
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C., 26 MAY 2022 2022

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el Superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por Secretaría, devuélvanse las presentes diligencias al Juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Magistrada Ponente

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA LABORAL
-SECRETARÍA-

Bogotá D.C., 01 de junio de dos mil veintidós (2022).

H. MAGISTRADA
LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE

Paso a su despacho el expediente No. **11001 31 05 015 2017 00043 01** que regresó de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala Laboral, Sala de Descongestión, donde CASA la Sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, de fecha 22 de noviembre de 2017, que mediante auto proferido el 28 de abril de 2022 se obedeció y se cumplió lo resuelto por el superior.

Que a través de correo electrónico de la Secretaría de la Sala Laboral del Tribunal Superior de Bogotá, en fecha 16 de mayo del año 2022, el apoderado de la parte demandante, solicita corrección aritmética de la sentencia proferida el 14 de febrero de 2022, y da alcance a la solicitud el 20 de mayo de la presente anualidad, en el que solicitó que se remita el expediente a la H. Corte Suprema de Justicia - Sala de Casación Laboral.

DANIELA CARREÑO RESTÁN
ESCRIBIENTE NOMINADO

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA LABORAL

Bogotá D.C., 01 de junio de dos mil veintidós (2022).

Visto el informe secretarial que antecede, se **ORDENA REMITIR EL EXPEDIENTE** a la Secretaría de la H. Corte Suprema de Justicia Sala de Casación Laboral – Sala de Descongestión, a fin de que dicha Corporación, resuelva la solicitud de corrección por error aritmético peticionada por la parte demandante.

En firme este proveído, por secretaría remítase el expediente para lo pertinente y déjense las constancias respectivas.

Notifíquese y Cúmplase,

LUZ PATRICIA QUINTERO CALLE
Magistrada

DANIELA CR

-TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTA-

-SALA LABORAL-

Magistrada Ponente: DRA MARLENY RUEDA OLARTE

Bogotá D.C. primero (01) de junio de dos mil veintidós (2022).

El apoderado de la **parte demandante**, interpuso recurso de reposición, contra el proveído del veintinueve (29) de abril de 2022, por medio del cual se negó el recurso de casación, en subsidio solicita que se conceda el recurso de queja.

Sostiene el recurrente que no fueron tenidas en cuenta la totalidad de las pretensiones, como quiera que en el escrito inaugural se debaten 2 relaciones laborales por lo que el saldo tenido en cuenta es errado, máxime cuando existen pretensiones que superan los 16 y los 25 millones, razón por la cual se debe revocar el auto y conceder el recurso.

Con lo anterior procede la Sala al estudio del recurso de reposición interpuesto, con base en las siguientes

CONSIDERACIONES

El artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establece que. "solo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente."

Tal cuantía se determina bajo el concepto de "interés jurídico para recurrir", que de forma clara la H. corte Suprema de Justicia lo ha interpretado como el perjuicio que sufre la parte afectada con la sentencia impugnada,

definiéndose para el demandante, las pretensiones que no hubieran sido acogidas en segunda instancia y para la demandada las condenas impuestas, en ambos casos teniendo en cuenta los recursos de apelación que hubieran sido interpuestos.

Así, revisado el auto objeto de reposición en el cual se analizó la viabilidad del recurso extraordinario de casación a la parte actora, la Sala advierte que en efecto, inicialmente se pretendió el reconocimiento de un nexo laboral, no obstante, posterior a ello, existe otra exigencia por un segundo contrato y por cada uno se exige el pago de los derechos derivados (fls. 6-7) quedando liquidado únicamente uno de ellos, razón por la cual, para efectos de establecer el valor de las pretensiones, el expediente fue remitido nuevamente al grupo liquidador de actuarios creado por el acuerdo PSAA 15- 10402 de 2015 del C.S.J., con el fin de realizar e integrar los cálculos correspondiente.[1]

Efectuada la sumatoria de los conceptos y valores respectivos, junto con los aportes pensionales y sus intereses, se estableció la suma de $ 60´100.960,38, para el primer contrato y la cuantía de $22´772.852,33, montos que acumulados (**$82´873.812.7**) no superan los 120 salarios mínimos establecidos en el artículo 43 de la Ley 712 de 2001, por lo que no se repondrá la decisión recurrida y se mantendrá indemne.

Por Secretaria de la Sala expídanse las copias digitales con las constancias y formalidades de ley, a efectos de surtir el recurso de queja.

En mérito de lo expuesto, la Sala de Decisión Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá D.C.,

[1] *Grupo liquidador de actuarios creado por el acuerdo PSAA 15- 10402 de 2015 liquidación fl 923.*

RESUELVE

PRIMERO: NO REPONER el auto del veintinueve (29) de abril de 2022, conforme a lo expuesto.

SEGUNDO: Como quiera que el recurso de queja resulta procedente en los términos de los artículos 352 y 353 del C.G.P, se concede. Por Secretaría de la Sala, para que se surta lo pertinente ante el Superior, remítase el expediente digitalizado.

Notifíquese y Cúmplase,

MARLENY RUEDA OLARTE
Magistrada

MANUEL EDUARDO SERRANO BAQUERO
Magistrado

LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado

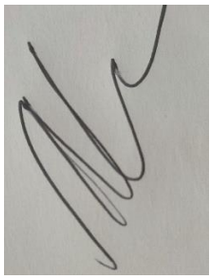
Proyectó: ALBERSON

H. MAGISTRADA DRA. **MARLENY RUEDA OLARTE**

Me permito pasar a su despacho el expediente de la referencia, informando que el apoderado del demandante interpuso recurso de reposición, contra el proveído del veintinueve (29) de abril de 2022, por medio del cual se negó el recurso de casación, en subsidio solicita que se conceda el recurso de queja.

Lo anterior para lo pertinente.

Bogotá D.C. primero (01) de junio de dos mil veintidós (2022).



ALBERSON DIAZ BERNAL
Oficial Mayor

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ
SALA LABORAL

Bogotá D.C. primero (01) de junio de dos mil veintidós (2022).

El apoderado de la **parte demandante** interpuso, dentro del término de ejecutoria recurso extraordinario de casación, contra el fallo proferido en esta instancia el treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno (2021), dado su resultado desfavorable.

Para resolver la viabilidad del recurso de casación interpuesto se considera

El Artículo 86 del Código Procesal del Trabajo y de la Seguridad Social, establece que: "*sólo serán susceptibles del recurso de casación los procesos cuya cuantía exceda de ciento veinte (120) veces el salario mínimo legal mensual vigente*."

Tal cuantía se determina bajo el concepto de "*interés jurídico para recurrir*", que de forma clara la Sala de Casación Laboral de la Corte Suprema de Justicia lo ha interpretado como el perjuicio que sufre la parte afectada con la sentencia impugnada[1], definiéndose para el demandante, las pretensiones que no hubieran sido acogidas en segunda instancia y para la demandada las condenas impuestas; en ambos casos, atendiendo los recursos de apelación que hubieran sido interpuestos.

En el presente asunto la sentencia de primera instancia declaró probada la excepción de cobro de lo no debido presentada por la demandada y absolvió a la misma de todas y cada una de las pretensiones incoadas en su contra; decisión que fue apelada por la parte demandante y confirmada en segunda instancia por esta corporación.

En consecuencia, el interés jurídico para acudir en casación por parte de la demandante debemos decir que esta recae sobre las pretensiones que no le fueron reconocidas con las resultas del proceso, esto es, sobre los siguientes conceptos y sumas de dinero que pretendió:

Concepto	**Valor**
Reliquidación de salarios Anuales	$ 93.957.607,06
Aportes a SS	$ 22.549.825,69
Indemnización Moratoria Art 65 CST	$ 384.479.880,00
Total	**$ 500.987.312,75**

[1] Al respecto de tiempo atrás la Corte Suprema de Justicia ha manifestado y reiterado: "*el interés jurídico para recurrir en casación está determinado por el agravio que sufre el impugnante con la sentencia acusada, que tratándose del demandado como el caso en estudio, se traduce en la cuantía de las resoluciones que económicamente lo perjudiquen y, respecto del demandante, el monto de las pretensiones que Radicación n.° 73011 4 hubiesen sido negadas por la sentencia que se intenta impugnar, teniendo en cuenta la conformidad o inconformidad del interesado respecto del fallo de primer grado"* Auto AL1514-2016 del 16 de marzo de 2016, Sala de Casación Laboral. M.P. CLARA CECILIA DUEÑAS QUEVEDO.

Teniendo en cuenta el cálculo anterior, lo que debió pagársele al demandante, en caso de una eventual condena a la demandada asciende a **$ 500.987.312,75** suma que supera los 120 salarios mínimos exigidos para recurrir en casación.

En mérito de lo expuesto, el Tribunal Superior del Distrito Judicial de Bogotá, D.C., Sala de Decisión Laboral,

RESUELVE

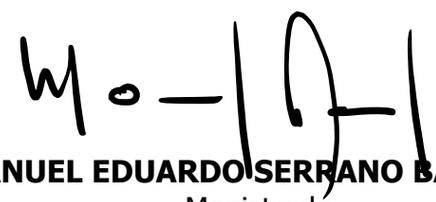
PRIMERO: CONCEDER el recurso extraordinario de casación interpuesto por la parte demandante.

SEGUNDO: En firme el presente proveído, prosígase con el trámite correspondiente.

Notifíquese y Cúmplase,



MARLENY RUEDA OLARTE
Magistrada



MANUEL EDUARDO SERRANO BAQUERO
Magistrado



LORENZO TORRES RUSSY
Magistrado

LPJR

H. MAGISTRADA DRA. **MARLENY RUEDA OLARTE**

Me permito pasar a su despacho el expediente No. **11001310503020190031601,** informándole que el apoderado de la **parte demandante,** dentro del término de ejecutoria interpuso recurso extraordinario de casación en contra del fallo de segunda instancia dictado por esta Corporación el treinta (30) de noviembre de dos mil veintiuno (2021).

Lo anterior para lo pertinente.

Bogotá D.C. primero (01) de junio de dos mil veintidós (2022).

LINA PAOLA JIMENEZ ROMERO
Oficial Mayor

H. MAGISTRADO (A), MARLENY RUEDA OLARTE

Me permito pasar a su despacho el expediente N-11001310503720170067401, Informándole que regreso de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral-Sala de Descongestión, donde se CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Bogotá, fecha de 08 de mayo de 2019.

Bogotá D.C.,01 de junio de 2022

CARMEN CECILIA ESTUPIÑAN ROZO
AUXILIAR DE S.G.3

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C.,01 de junio de 2022

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

1) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el superior.

2) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por secretaria devuélvanse las presentes diligencias al juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

MARLENY RUEDA OLARTE
Magistrado(a) Ponente

H. MAGISTRADO (A), MARLENY RUEDA OLARTE

Me permito pasar a su despacho el expediente N- 110013105035 2017 000376 01, Informándole que regreso de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral-Sala de Descongestión, donde se CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Bogotá, fecha de 14 de febrero de 2019.

Bogotá D.C.,01 de junio de 2022

CARMEN CECILIA ESTUPIÑAN ROZO
AUXILIAR DE S.G.3

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C.,01 de junio de 2022

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

3) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el superior.

4) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por secretaria devuélvanse las presentes diligencias al juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,

MARLENY RUEDA OLARTE

Magistrado(a) Ponente

H. MAGISTRADO (A), MARLENY RUEDA OLARTE

Me permito pasar a su despacho el expediente N-11001310503920170068901, Informándole que regreso de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral-Sala de Descongestión, donde se CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Bogotá, fecha de 20 de noviembre de 2019.

Bogotá D.C.,01 de junio de 2022

CARMEN CECILIA ESTUPIÑAN ROZO
AUXILIAR DE S.G.3

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C.,01 de junio de 2022

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

5) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el superior.

6) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por secretaria devuélvanse las presentes diligencias al juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



MARLENY RUEDA OLARTE

Magistrado(a) Ponente

H. MAGISTRADO (A), MARLENY RUEDA OLARTE

Me permito pasar a su despacho el expediente N-11001310503220160035101, Informándole que regreso de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral-Sala de Descongestión, donde se CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Bogotá, fecha de 30 de octubre de 2018.

Bogotá D.C.,01 de junio de 2022

CARMEN CECILIA ESTUPIÑAN ROZO
AUXILIAR DE S.G.3

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C.,01 de junio de 2022

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

7) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el superior.

8) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por secretaria devuélvanse las presentes diligencias al juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



MARLENY RUEDA OLARTE

Magistrado(a) Ponente

H. MAGISTRADO (A), MARLENY RUEDA OLARTE

Me permito pasar a su despacho el expediente N- 11001310500220170014401, Informándole que regreso de la H. Corte Suprema de Justicia, Sala de Casación Laboral-Sala de Descongestión, donde se NO CASA la sentencia proferida por la Sala Laboral del Tribunal Superior del Distrito Judicial Bogotá, fecha de 23 de mayo de 2019.

Bogotá D.C.,01 de junio de 2022

CARMEN CECILIA ESTUPIÑAN ROZO
AUXILIAR DE S.G.3

TRIBUNAL SUPERIOR DEL DISTRITO JUDICIAL DE BOGOTÁ

-SALA LABORAL-

Bogotá D.C.,01 de junio de 2022

Visto el informe secretarial que antecede, se resuelve:

9) **OBEDÉZCASE Y CÚMPLASE**, lo resuelto por el superior.

10) Como quiera que no existe actuación pendiente por resolver, por secretaria devuélvanse las presentes diligencias al juzgado de origen.

Notifíquese y Cúmplase,



MARLENY RUEDA OLARTE

Magistrado(a) Ponente